

Atilio Boron

MEMORIAS DEL CAPITALISMO SALVAJE ARGENTINA DE ALFONSÍN A MENEM



 CLÁSICOS
RECUPERADOS
CLACSO

 CLACSO

Memorias del capitalismo salvaje

Boron, Atilio Alberto

Memorias del capitalismo salvaje : Argentina de Alfonsín a Menem / Atilio Alberto Boron. - 2a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, 2021.

Libro digital, PDF - (Clásicos recuperados)

Archivo Digital: descarga

ISBN 978-987-722-913-4

1. Acción Política. 2. Análisis de Políticas. I. Título.
CDD 320.0982

Arte de tapa: Ana Uranga

Diseño interior: Ana Uranga

Edición: Rosario Sofía

Fotografía de tapa: Archivo de Presidencia de la Nación, 1989.

Memorias del capitalismo salvaje

Argentina de Alfonsín a Menem

Atilio Boron





CLACSO

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales

Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

CLACSO Secretaría Ejecutiva

Karina Batthyány - Secretaria Ejecutiva

Fernanda Pampín - Directora de Publicaciones

Equipo Editorial

Lucas Sablich - Coordinador Editorial

Solange Victory - Gestión Editorial

Nicolás Sticotti - Fondo Editorial

Memorias del capitalismo salvaje. Argentina de Alfonsín a Menem (Buenos Aires: CLACSO, mayo de 2021).
Primera edición, Buenos Aires: Imago Mundi, 1991.

ISBN 978-987-722-913-4



LIBRERÍA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE CIENCIAS SOCIALES

CONOCIMIENTO ABIERTO, CONOCIMIENTO LIBRE

Los libros de CLACSO pueden descargarse libremente en formato digital o adquirirse en versión impresa desde cualquier lugar del mundo ingresando a www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723.

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, sin el permiso previo del editor. La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

CLACSO

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Estados Unidos 1168 | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina

Tel [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875 | <clacso@clacsoinst.edu.ar> | <www.clacso.org>

Patrocinado por la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional  **Asdi**

Índice

| | |
|---|-----------|
| Prólogo a la presente edición..... | 11 |
| A modo de prólogo | 19 |
| I. DEMOCRACIA | 25 |
| Consolidando la democracia | 27 |
| ¿Antes estábamos mejor? | 29 |
| <i>Eppur si muove</i> | 31 |
| El tobogán de la censura..... | 35 |
| La ciudad y la democracia | 39 |
| Disparen sobre los políticos | 43 |
| Sonrisas en la plaza | 47 |
| Desafíos después de la plaza | 51 |
| Presidencialismo e ingobernabilidad | 55 |
| La trampa de la perspectiva | 59 |
| Más allá de toda sospecha..... | 63 |
| Maquiavelianas | 67 |
| La cuenta regresiva..... | 71 |
| II. ESTADO Y BURGUESÍA..... | 75 |
| El asalto al Estado democrático..... | 77 |
| ¿Se puede controlar la crisis?..... | 81 |
| Saqueadores de cuello blanco | 87 |
| Memoria de las privatizaciones..... | 91 |
| Desprivatizando al Estado | 95 |
| La burguesía y la tributación..... | 99 |

| | |
|---|------------|
| Los que gozan y los que mandan..... | 105 |
| El gato y el ratón | 109 |
| La burguesía y los golpes de mercado..... | 111 |
| Mercados rigurosamente vigilados..... | 115 |
| Bendiciendo al capital | 119 |
| Reestructuración económica, acumulación capitalista y consolidación democrática..... | 123 |
| Los <i>lobbies</i> contra la democracia | 129 |
| Contradicciones de la “revolución productiva” | 133 |
| Después del naufragio | 137 |
| III. NEOLIBERALISMO..... | 141 |
| Doña Rosa saqueadora, subversiva, guerrillera..... | 143 |
| Capitalismo <i>made in</i> Argentina | 147 |
| Un capitalismo salvaje..... | 149 |
| Las democracias ajustadas de América Latina..... | 153 |
| Un mundo feliz..... | 157 |
| Neoliberalismo y dictadura en Chile..... | 163 |
| La hechicería liberal | 169 |
| La pregunta de Rousseau..... | 173 |
| Seducidos y abandonados..... | 179 |
| El fracaso liberal | 183 |
| IV. FUERZAS ARMADAS | 187 |
| La derrota social de los carapintadas..... | 189 |
| La ideología militar y el régimen democrático | 195 |
| El talón de Aquiles de la democracia..... | 199 |
| Democracia y terrorismo | 203 |
| El perdón y las Malvinas | 207 |
| El indulto y la consolidación democrática | 211 |
| Sobre indultos y amnistías | 215 |
| Los usos de La Tablada..... | 219 |
| Dos lecciones de La Tablada..... | 223 |
| Cría cuervos | 225 |
| Indulto: responsable y víctimas | 229 |

| | |
|--|-----|
| V. PARTIDOS Y ELECCIONES | 233 |
| ¿Existe la renovación?..... | 235 |
| ¿Justicia social sin democracia?..... | 239 |
| Para comprender a los indecisos..... | 243 |
| ¿Qué capitalismo tendríamos?..... | 247 |
| Del frigorífico a la Sociedad Rural..... | 251 |
| El retorno del ser nacional..... | 255 |
| ¿Qué hacer?..... | 259 |
| Las claves de una derrota..... | 263 |
| Réquiem para el populismo..... | 267 |
| | |
| VI. UNIVERSIDAD | 271 |
| El legado igualitario de la reforma..... | 273 |
| El trueno en los claustros..... | 277 |
| ¿Ignorancia o mala fe?..... | 281 |
| La ecuación de la excelencia..... | 285 |
| | |
| VII. INTERNACIONALES | 289 |
| Funerales en Berlín..... | 291 |
| Eclipse en Nicaragua..... | 295 |
| Transición democrática en el socialismo..... | 299 |
| Confusos y desmemoriados..... | 303 |
| El filósofo y la guerra..... | 307 |
| <i>Surprise!</i> | 311 |
| La ruta del primer mundo..... | 313 |
| Ayudas que matan..... | 317 |
| | |
| VIII. NOTAS SUELTAS | 321 |
| La izquierda y el fin de siglo..... | 323 |
| Democratizando la izquierda..... | 327 |
| Inmoral, ineficaz y peligrosa..... | 331 |
| Pensar y cambiar a la Argentina..... | 335 |
| | |
| Bibliografía | 339 |

Prólogo a la presente edición

El libro que la lectora o el lector tiene en sus manos recoge, siguiendo un ordenamiento temático y no cronológico, los artículos escritos por su autor para el periódico *Página/12* en un período particularmente difícil de la historia argentina: el que transcurriera entre los años finales del gobierno de Raúl Alfonsín y los dos primeros de su sucesor, Carlos Saúl Menem. Aquí se recopila una larga serie de notas en las cuales se analizan la evolución de la coyuntura sociopolítica y económica de la Argentina y, en mucho menor medida, algunos aspectos de la complicadísima y enmarañada situación internacional de la época. Son textos escritos hace poco más de treinta años pero que, pese a ello, distan de ser extemporáneos por dos razones principales. Primero, porque recogen y ponen a disposición del público de hoy una mirada que tiene la virtud —aunque, ocasionalmente, también las limitaciones— de la inmediatez periodística, de haber sido producida al fragor de la intensa conflictividad de aquellos años en la cual el autor se hallaba fuertemente involucrado bajo una doble condición: como militante político de izquierda y, a partir de marzo de 1990, como vicerrector de la Universidad de Buenos Aires.

Debido a ello estas páginas aportan una radiografía viviente de la época; son un testimonio, un registro de lo ocurrido, una serie de retratos sociopolíticos cuyo conocimiento arroja lecciones de enorme

importancia para el presente. No se trata de un ejercicio arqueológico encaminado a rescatar productos intelectuales ya fosilizados sino a contribuir con un necesario debate sobre las vicisitudes del proyecto neoliberal en la Argentina. Quienes lean este libro encontrarán algunas reflexiones de sorprendente actualidad, que parecieran haber sido estimuladas por una mirada crítica sobre la Argentina de hoy, convulsionada por la pandemia y la crisis económica. Al re-leer estas páginas por momentos nos invadía el asombro ante la persistente actualidad de ciertas problemáticas, candentes a comienzos de los años noventa, y que treinta años más tarde conservan una lamentable vigencia.

Y esta es precisamente la segunda razón por la que decidimos dar a conocer estas páginas: en ellas se refleja de modo —sin duda— polémico y controversial el derrumbe de un intento lamentablemente frustrado de avanzar en la transición democrática por un sendero de gobernanza macroeconómica “heterodoxa” (la gestión de Bernardo Grinspun al frente del Ministerio de Economía en el primer tramo del gobierno de Alfonsín), su derrota a manos de las clases dominantes y sus representantes y, en el marco fragoroso de la hiperinflación y de graves enfrentamientos sociales, la gestación e implantación del segundo ensayo neoliberal en la Argentina durante el gobierno de Menem. La relevancia del experimento menemista es indiscutible por la rapidez y profundidad con que destruyó la herencia del nacionalismo popular: un Estado presente y activo unido a la expansión y consolidación de derechos sociales. Pero relevante también porque esos años del menemato fueron una bisagra articuladora entre el primer ensayo, el de la dictadura cívico-militar de 1976, inconcluso pese a haber sido impuesto a sangre y fuego, y el más reciente, el tercero que padece la Argentina en cuarenta años y que tuvo lugar bajo el gobierno de Mauricio Macri. De ahí la importancia de examinar lo acontecido en aquellos años cuando el modelo neoliberal, con su injusticia y desigualdades estructurales y con sus brutales exacciones, se impuso ya no por la violencia de una dictadura sino en un marco democrático, al menos desde el punto de vista de sus formalidades

y sus apariencias. En suma: si en 1976 la refundación reaccionaria del capitalismo argentino requería el protagonismo de una dictadura genocida, años más tarde los capitalistas lo intentaron en democracia con Menem y con Macri. Y si no se salieron con la suya fue porque en las tres ocasiones la resistencia popular tuvo —pese a su fragmentación y a su confusión ideológica— la fuerza suficiente como para impedir la completa realización del proyecto neoliberal. De ahí que la tesis del “empate social” entre las fuerzas conservadoras y los sujetos del cambio y la reforma social (para no abusar del lenguaje y hablar de “revolución”) haya sido refutada por el veredicto de la historia, habida cuenta de la fenomenal redistribución regresiva del ingreso y la riqueza apropiada por una minoría opulenta y del retroceso producido en el bienestar de las clases y capas populares y en el goce de derechos conquistados tras largas décadas de luchas. Pero ¡atención!: la historia sigue su curso y también emite un dictamen alentador: esta derrota no ha sido completa ni mucho menos definitiva y hay esperanzas de que más pronto que tarde el flagelo neoliberal pueda ser definitivamente erradicado de nuestros países.

En todo caso, no está de más llamar la atención sobre la importancia que reviste el cambio en el modo de dominación burgués. Es decir, el paso del neoliberalismo armado a otro presuntamente “desarmado” es trascendental y no puede ser subestimado. Sobre todo porque lo de “desarmado” es relativo ya que lo que ocurre es que se apela a las nuevas armas con las que el imperio y las clases dominantes locales preservan su predominio: la manipulación de las mentes y corazones de la población por la vía del *neuromarketing* político; las aplicaciones de la inteligencia artificial; la dictadura del “partido único de los medios” y, finalmente, la conversión del Poder Judicial en el árbitro final de los conflictos sociopolíticos mediante el *lawfare*.

Los escritos compilados en este libro abarcan un período que se extiende entre 1988 y 1992. Son “años interesantes”, como diría Eric Hobsbawm (2003), y desataron en el autor de estas páginas un impulso irresistible para compartir su lectura crítica de la realidad con un público más amplio que el de los esterilizados claustros académicos.

Público como el que día a día leía con fervor el nuevo diario aparecido a mediados de 1987 en la Argentina, *Página/12*, y que atraía a lectores que se mostraban particularmente interesados en acceder a análisis alternativos que desafiaran al pensamiento dominante que promovía la prensa hegemónica de la época, sobre todo a partir del gobierno de Menem.

Las continuas amenazas que acosaban a la transición democrática en la Argentina —aún inconclusa, como en el resto de los países de la región— eran expresión de las intensas tensiones cruzadas producto de los intereses e ideologías de las que eran portadores numerosos actores. Por una parte, por el rechazo de las Fuerzas Armadas al inédito juicio impulsado por el gobierno de Alfonsín contra las tres juntas militares que gobernaron el país entre 1976 y 1983 debido a la sistemática violación de los derechos humanos perpetrada por sus miembros. Pero también por la desconfianza, cuando no el abierto repudio, del empresariado nacional e internacional —recordar, entre otras cosas, los abucheos e insultos en la inauguración de la Exposición Rural en 1988— a un gobierno caracterizado como “estatista” o demasiado “intervencionista” y que planteaba, en el contexto de una agobiante deuda externa, la conformación de un “Club de Deudores”, iniciativa que cayó muerta por orden expresa del presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. No menos tenaz era la oposición de la Iglesia Católica ante las perspectivas, a la postre materializadas, de que Alfonsín enviara al Congreso una ley de divorcio que fue finalmente aprobada por ambas cámaras. Oposición frontal del Partido Justicialista [PJ], dominado hasta promediar el mandato de Alfonsín por una vertiente derechista que se había propuesto convalidar la autoamnistía dispuesta por las Fuerzas Armadas en los meses finales de la dictadura. De hecho, no hay que olvidar que el peronismo decidió no integrar la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas [CONADEP]. Súmese a lo anterior el rechazo sistemático de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina [CGT] que en los cinco años y medio que duró el mandato de Alfonsín convocó nada menos que a trece huelgas generales, es decir, poco más

de dos huelgas por año. No es un dato menor que en la larga década menemista (diez años y medio) esa misma organización convalidó las políticas del “capitalismo salvaje” que le dan título a este libro con su escandaloso sometimiento al imperialismo norteamericano y la implacable aplicación de las recetas del Consenso de Washington, convocando con indisimulable desgano y escaso eco popular a nueve huelgas generales, menos de una por año, en medio de un festival de corruptas privatizaciones y aumento imparable del desempleo y la pobreza.

Volviendo a Hobsbawm, la fase final del gobierno de Alfonsín fue pródiga en acontecimientos de una enorme gravedad, de esos que según el historiador inglés convierten a algunos tiempos en “interesantes”: desde las tres rebeliones de los militares carapintada (Semana Santa de 1987, repetidas en dos ocasiones en 1988) hasta el ataque de la guerrilla del Movimiento Todos por la Patria al Regimiento de La Tablada, en las inmediaciones de Buenos Aires, ocasionando la muerte treinta y dos guerrilleros, nueve militares y dos policías. La insurgencia del sector militar había precipitado la adopción de las leyes de punto final y obediencia debida. Un nuevo y final levantamiento se produjo ya con Menem en la presidencia, en diciembre de 1990 y en las vísperas de la visita del presidente George Herbert Walker Bush a la Argentina; la rebelión fue aplastada implacablemente y su cabecilla, Mohamed Alí Seineldín, tuvo que purgar una larga condena en la cárcel. Alfonsín no pudo domesticar las tendencias inflacionarias crónicas de la economía argentina y sucumbió ante un “golpe de mercado” que desató una hiperinflación que desencadenó violentas protestas de la población, incluyendo saqueos a supermercados e inclusive a almacenes barriales. La situación estaba fuera de control y Alfonsín tuvo que dejar la Casa Rosada cinco meses antes del período establecido por la Constitución.

Todo el drama que se desplegaba en la Argentina en la transición desde Alfonsín a Menem tenía lugar cuando en el ámbito internacional Mijail Gorbachov impulsaba las simultáneas —torpes y desastrosas, es preciso decirlo— tentativas soviéticas de reestructurar

la economía, la perestroika; y hacer lo propio con el *glasnost*, concebido para liberalizar el sistema político y mediático. Como era previsible, ambas iniciativas fracasaron estruendosamente: la caída del Muro de Berlín, pocos meses después de que Menem asumiera la presidencia, y, un par de años más tarde, la desintegración de la Unión Soviética, marcarían una suerte de “final wagneriano” de casi cincuenta años de un orden bipolar, dando a luz a una profunda modificación del sistema internacional. En Estados Unidos este verdadero terremoto geopolítico nutriría una peligrosa ilusión —precozmente advertida por Zbigniew Brzezinski (1998)— rápidamente confirmada por el veredicto inapelable de la historia: que el orden unipolar emergente, con aquel país como única superpotencia, regiría sin contrapesos en el “nuevo siglo americano”. La Guerra del Golfo (agosto 1990-febrero 1991, a la cual el gobierno de Menem se plegó con absoluta irresponsabilidad) fue un ensayo previo que a la postre terminó en un desastre humanitario y sembró las semillas que luego germinarían el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington. No hubo, ni habrá, tal «nuevo siglo americano».

Estos acontecimientos eran el telón de fondo sobre el cual se escribían los artículos recopilados en este libro.

El traspaso de mando de Alfonsín a Menem se produjo el 8 de julio de 1989. El peronista había triunfado con una consigna demagógica pero muy efectiva: “revolución productiva + salarizado”. Nada de ello ocurrió. Lo que sí tuvo lugar, y está muy bien reflejado en las páginas de este libro, fue una fenomenal malversación del contrato electoral porque, en lugar de lo prometido, la medicina administrada a la aturdida e indefensa población argentina fue el decálogo del Consenso de Washington. O, como lo asegurara José Martínez de Hoz en su libro *Quince años después* (Emecé, 1991), Menem hizo lo que la dictadura militar no pudo hacer. Como se asegura en el capítulo “Un capitalismo salvaje”, una de las notas incorporadas a este libro dice “la redefinición de las alianzas políticas urdidas por el riojano después de su victoria en las elecciones del 14 de mayo tuvo la virtud de

revelar el secreto profundo de la hasta entonces enigmática ‘revolución productiva’”.

Esta resultó ser no otra cosa que el acto de “entregar a las hábiles y rápidas manos de la gran burguesía argentina los negocios del país, encuadrando a los distintos sectores sociales en sus estructuras corporativas (es decir, la CGT y el PJ) que sirven como instancias de mediación, desmovilización y control desde arriba”. Esta inesperada coalición de neto corte neoconservador sintetiza dos elementos: “una base popular y una hegemonía burguesa” y cuyo desenlace no será otro que enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres, exasperando las contradicciones sociales y debilitando la legitimidad del orden democrático”.

En materia institucional, uno de los peores legados del menemato fue el indulto concedido a doscientos veinte militares —entre ellos los nueve miembros de las Juntas que gobernaron entre 1976 y 1983—, setenta civiles y a todos los participantes de las rebeliones militares carapintadas de Semana Santa y Monte Caseros en 1987 y de Villa Martelli en 1988. Otro, la aceleración y profundización del proceso de corrupción del Poder Judicial, cuyas terribles consecuencias las estamos viviendo en la actualidad.

Concluyo invitando a lectoras y lectores a reflexionar sobre el aluvión de acontecimientos trascendentales comprimidos en esos pocos años de “tiempos interesantes” que procuré analizar y reflejar en mis escritos de aquella época. Tengo la certeza que una lectura crítica de ellos servirá no solo para aportar alguna luz a lo ocurrido sino, sobre todo, para extraer lecciones útiles para comprender la dinámica que desatan los proyectos neoliberales y diseñar estrategias y tácticas apropiadas para frustrar su perpetuación o eventual reaparición, que tanto daño, sufrimiento y muerte han provocado en la vida política nacional.

Buenos Aires, 22 de febrero de 2021.

A modo de prólogo

Presentamos a la definitiva consideración del lector todos los artículos publicados por el autor en *Página/12* y *Página/30* y en donde —estimulados por la abrumadora vorágine de los acontecimientos nacionales e internacionales— se recogen algunos análisis destinados a revelar distintas facetas de la traumática imposición del capitalismo salvaje en nuestro país. Escritos en un lenguaje directo y depurados del pesado barroquismo que casi invariablemente exhiben los textos académicos —con su parafernalia de definiciones, distinciones y citas—, los trabajos publicados en este volumen representan una respuesta reflexiva, documentada e inmediata ante la variedad de problemas suscitados por el apogeo de la “economía popular de mercado”.

Como no podía ser de otro modo, la mayoría de estos artículos tienen un fuerte tono polémico. Constituyen un esfuerzo por cuestionar y tratar de refutar la multiplicidad de axiomas, propuestas y políticas que en la actualidad se articulan en el dogma neoconservador. La importancia de esta confrontación ideológica nos exime de demasiadas justificaciones: ante el agotamiento de los modelos “progresistas” —de raigambre claramente keynesiana— tolerados por el capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial; ante la franca capitulación de la socialdemocracia de toda pretensión de superar del capitalismo, asumiéndose como la administradora bondadosa de

un sistema que, salvo en un puñado de países centrales, ha fracasado por doquier; y ante el estremecedor derrumbe de las experiencias del así llamado “socialismo real” en la Unión Soviética y Europa Oriental, que bastardearon la gran tradición crítica, democrática y revolucionaria que brota de la tradición marxista, hemos visto surgir y consolidarse con fuerza un nuevo “sentido común” neoconservador que hoy domina sin contrapesos en todo el orbe.

El espectáculo entre grotesco y deprimente que ofrecen antiguos líderes del 68 europeo, convertidos en *yuppies* neoconservadores, solo puede equipararse a la lástima que produce el contemplar a los otrora líderes de la izquierda radicalizada de América Latina pagar humillante tributo —intelectual y político— a las supercherías más absurdas del “libre mercado”. El caso extremo lo ejemplifican los decrépitos “intelectuales-funcionarios” de la difunta Unión Soviética, antaño implacables inquisidores en nombre del “marxismo-leninismo”: si antes fulminaban como “reaccionario” o “imperialista” a todo pensamiento que se apartase de su *vulgata* pseudomarxista, hoy hacen lo propio con quienes tienen la osadía de cuestionar la dudosa sabiduría oculta en los escritos de Milton Friedman. Esta curiosa parábola ratifica la verdad contenida en un antiguo teorema sociológico: los dogmáticos y los inquisidores estarán siempre dispuestos a encender la hoguera purificadora, no importa en nombre de qué Dios. Quienes antes escarnecían con su fanatismo —alzando en sus crispados puños el manual de la Academia de Ciencias, el Libro Rojo de Mao o sucedáneos vernáculos de aún más dudosa prosapia— hoy pretenden vapulear con arrogancia a los espíritus sensatos que descreen de las enseñanzas del monetarismo. Ayer endiosaban al Estado y hoy hacen lo propio con el mercado: no se movieron un milímetro de su ignorancia.

Quienes no creemos que el mercado distribuya con equidad los ingresos y las oportunidades; ni que si tenemos paciencia el capitalismo nos llevará de Etiopía y Bangladesh a Suiza o Japón; ni que la sociedad burguesa puede resolver el problema de la justicia distributiva o que el socialismo ha muerto, hemos sido literalmente barridos

de la escena política, y por un tiempo corremos el riesgo de desaparecer de la cultural. La peste neoconservadora, como el sida, se ha apoderado de nuestra geografía y de nuestro tiempo. Sin embargo, hay una infinidad de buenas razones para oponerse a su avance arrollador. Me limitaré a enunciar apenas una: hay que rechazarla porque constituye una nueva manifestación del sustrato bárbaro y retrógrado que bulle por debajo de las edulcoradas capas superficiales de la cultura burguesa, y que recurrentemente nos abruma con sus excrescencias. Insostenible empíricamente, ofende a la inteligencia de los hombres y mujeres con engaños y falacias que tanto al sentido común como al espíritu científico no pueden sino rechazar. Abraham Lincoln decía que se puede engañar a algunas personas todo el tiempo, a todas las personas por algún tiempo, pero que no se puede engañar a todos todo el tiempo. La cosmovisión neoconservadora que legitima al capitalismo salvaje es una gigantesca estafa. Por eso es crucial contribuir a su desmitificación, desnudando sus errores, develando sus supuestos, descubriendo a quienes medran con su predominio e identificando a sus víctimas. No es la primera vez que una plaga semejante se apodera de Occidente, y que la razón se encuentra acosada por la sinrazón que —a veces disfrazada y otra con total descaro— se pasea de la mano de los triunfadores de ayer. Pero Hegel y Marx estaban en lo cierto cuando confiaban en que, tarde o temprano, la razón habrá de prevalecer en la historia. No me resigno a concebir el futuro del género humano como la triste eternización de la mediocridad que produce la sociedad burguesa. Creo que podemos aspirar a algo distinto; que debemos aspirar a algo mejor y que, mucho antes de lo que pensamos, esta pesadilla reaccionaria será derrotada. Estas páginas pretenden ser una pequeña contribución a esa lucha.

Quiero agradecer a *Página/12* y muy especialmente a su director, Jorge Lanata, por haberme invitado —en un ya lejano invierno de 1987— a escribir en el diario. Su primer ofrecimiento tropezó con las atormentadas vacilaciones de un académico más propenso a dilatar hasta el infinito las conclusiones de sus investigaciones que a

“jugarse” anticipadamente por las mismas, sometiéndolas al juicio del público. Con el correr de las semanas pude elaborar más racionalmente mis prejuicios y mis temores y cuando, en una segunda oportunidad, Lanata volvió a solicitarme que escribiera en *Página/12*, ya no tuve más dudas.

Desde ese momento no dejé de escribir mis columnas; es más, el periodismo despertó en mí una pasión hasta entonces desconocida, que al principio me atemorizó y luego me sedujo por completo. En efecto, la sola posibilidad de romper la torre de marfil en que suele realizarse el trabajo académico asusta de sobremanera a los intelectuales. Yo era un producto más de ese estilo universal de trabajo, y por mi historia y condiciones personales no podía ser la excepción. Pero, como algunos pocos entre ellos, por momentos también experimentaba una inquietante sensación: la torre me fascinaba, pero el vacío que se percibía desde su altura me atraía poderosamente. La ambigüedad era muy grande, y hay momentos en que la contradicción se vuelve intolerable: la torre protege, pero encierra; reasegura, pero aísla. La historia y las miserabilidades de la vida cotidiana no salpican a quienes la habitan. Desde sus pequeñas y elevadas troneras todo se observa en su majestuosidad, tanto lo noble y lo bello como las maldades y las infamias. La seducción del afuera era muy grande, y finalmente, gracias al diario, decidí ver que había más allá de sus paredes. Descubrí con satisfacción que a pesar de estar encerrado en una práctica académica el mundo real, ahora visto desde otra perspectiva, era bastante parecido a lo que indicaban mis categorías y proposiciones teóricas. Esto me permitió revalorizar mi trabajo académico, pero también reconocer que los estímulos que procedían del medio social constituían insumos demasiado enriquecedores como para, de ahora en más, poder prescindir de ellos.

Desde entonces comencé a vivir en los dos mundos, alternando momentos de enclaustramiento y encierro en la torre con períodos vividos a la intemperie. Al principio estaba extrañado; hoy encuentro que se trata de una experiencia fascinante. Creo que es una síntesis sumamente enriquecedora, y que no dejo de recomendar a mis

colegas y estudiantes. Sé que muchos de ellos ya han experimentado el placer de este desafío y la satisfacción que ofrece el saber que, del otro lado, hay un público que lee, critica, exige, corrige, impugna y —a veces— también aplaude. Sus respuestas, laudatorias o condenatorias, son siempre de un valor incalculable a la hora de verificar la precisión de nuestros conceptos y la verdad contenida en nuestras teorías, todo lo cual le otorga un sentido adicional al silencioso y paciente esfuerzo analítico que desarrolla el científico en su torre.

En el curso de esta metamorfosis tuve que cambiar hábitos de trabajo y estilos de comunicación. El periodismo es el reinado de la inmediatez, y el estilo comunicacional tiene que adaptarse a sus exigencias, máxime en un país como la Argentina en donde la sucesión interminable de acontecimientos significativos impide su sereno procesamiento. Hagamos memoria: en los últimos meses se han rematado a precio vil varias empresas del Estado; se indultó a los comandantes del Proceso; se produjo una sangrienta rebelión carapintada; se develó la tenebrosa trama de la corrupción que llega hasta las altas esferas oficiales; se enviaron naves de guerra al Golfo Pérsico; se baleó a un crítico público y notorio del gobierno; se intervino el feudo de los Saadi; se declaró la convertibilidad del austral; se descubrió la cuestión de los autos “truchos” y el lavado de narcodólares, etcétera, etcétera, etcétera. En países civilizados y estables estos acontecimientos ocurren a razón de uno o dos al año. Aquí se suceden en tropel, uno a la semana, y la prensa libre —animada por una vocación profundamente democrática como *Página/12*— debe informar y analizar de inmediato. Pero, además, hay que hacerlo en un lenguaje tal que evite los tecnicismos y el rebuscamiento que, lamentablemente, muchas veces caracterizan los escritos académicos. Estoy en deuda con Ernesto Tiffenberg y José María Pasquini Durán por los muy útiles consejos que me brindaron sobre esta materia. Quiero dejar pública constancia de mi agradecimiento por el precioso tiempo que me dedicaron en distintos momentos, y por haberme enseñado los imprescindibles “gajes del oficio”.

Un libro es siempre una empresa colectiva, y este no escapa a esa regla. En el proceso de su redacción son muchas las deudas que su autor contrae. Aparte de los ya mencionados quisiera destacar, también en *Página/12*, a Jorge Prim, con quien discutí este proyecto y quien me impulsó a que publicara estas columnas en forma de libro. También deseo manifestar mi gratitud para con Adriana Leiva, Margarita Peralta y Delia Díaz, que en medio de la vorágine cotidiana se hicieron cargo con invariable buen humor de la recepción de mis artículos y de su correcta distribución en la convulsionada redacción del diario. Lo mismo cabe decir en relación a Merchy Puga Marín y Gabriela Riveiro, de EURAL, que en incontables oportunidades se hicieron cargo del pronto despacho de mis notas. A mis colegas y amigos de EURAL les quiero expresar mi agradecimiento por las observaciones y sugerencias que permitieron mejorar varias de las notas que luego se publicaron en el diario. A la editorial Imago Mundi —y en especial a Alejandro Falco y Osvaldo Barsky— por el entusiasmo con que acometieron la empresa de publicar esta obra. Por último, y de modo muy especial, al anónimo lector de *Página/12* que, de una manera u otra, se las ingenia para hacerme llegar su opinión, para hacerme saber que está ahí, leyendo y pensando, y que por eso todavía quedan esperanzas.

Buenos Aires, 1 de julio de 1991.

I. Democracia

Consolidando la democracia

La próxima elección presidencial es un acontecimiento de singular importancia para nuestro país: por primera vez en sesenta años un presidente civil convoca a la sociedad a renovar la primera magistratura del Estado. Dos generaciones de argentinos habrán de enfrentarse a un hecho auspicioso y sin precedentes, frustrado durante seis décadas por las clases dominantes que hoy en democracia se lamentan cínicamente de la “decadencia” argentina. Pero el estancamiento económico es la otra cara de la moneda, que en su anverso inscribe su desprecio por la libertad y la democracia. La arraigada vocación autoritaria de nuestros grupos dirigentes se conjugó perversamente con su parasitismo especulativo para producir el atraso económico y la crisis política.

La continuidad institucional del régimen político es esencial para romper el círculo vicioso que nos agobia desde 1930 y para consolidar a la democracia. Pero conviene no pecar, una vez más, de triunfalistas e interrogarnos sobre otras condiciones. Una de ellas es que el “demos” sienta que la democracia es un régimen eficaz para reparar las injusticias endémicas de la sociedad capitalista y para corregir las crónicas inequidades generadas por la “magia del mercado”. En suma, que no es indiferente ante la pobreza, la explotación y la marginación social.

Esta condición, de extraordinaria importancia en la experiencia de otros países, está lejos de haber sido satisfecha en la Argentina. En los últimos cincuenta años las luchas populares lograron democratizar a los capitalismo metropolitanos, a pesar de la feroz oposición de las clases y grupos sociales que, en Europa, habían sostenido a los regímenes fascistas. Las principales fuerzas políticas percibieron que nada reforzaría más a las democracias surgidas de la postguerra que la confianza y la lealtad de las masas. La fórmula que utilizaron fue el “Estado de bienestar”, multiplicando los servicios sociales y atendiendo a las necesidades de las clases y capas populares. Demostrando, con hechos, que el Estado democrático ayudaba a resolver los problemas de los ciudadanos.

Por eso resulta decepcionante la supersticiosa fascinación de gran parte de nuestra clase política con las supuestas bondades del modelo neoliberal. El darwinismo social del mercado y su irresponsabilidad ante la suerte de los hombres y mujeres que constituyen una sociedad es incompatible con la democracia. Por eso en Europa esta se consolidó recortando las alas del mercado y promoviendo políticas racionales de intervención estatal en favor de los más necesitados y de una mejor asignación de los recursos. El mito de la “mano invisible” quedó archivado, reservado para consumo de ideólogos nostálgicos. ¿Cómo consolidaremos la democracia en la Argentina?

(6 de julio de 1988).

¿Antes estábamos mejor?

La semana pasada Mariano Grondona se interrogaba si transcurridos cinco años de vida democrática realmente estábamos mejor.¹ Este ejercicio, en realidad, una pregunta a su audiencia, lo repitió varias veces a lo largo de la edición de *Tiempo Nuevo* e, invariablemente, su rostro y sus palabras dejaban caer el veredicto inapelable: No. ¿Por qué no? Porque los teléfonos no funcionan, lo de SAS no prospera, no hay electricidad y el déficit fiscal no cede. Estamos peor que antes.

Si esta pregunta se hubiera formulado en el marco de una democracia consolidada no suscitaría demasiadas preocupaciones, porque solo se estaría confrontando el desempeño de un gobierno con el de otro. Pero lo que aquí en realidad se estaba implícitamente comparando, al calor de una ofensiva golpista, era algo mucho más profundo: el mérito de un régimen político, la democracia, en relación con otro, la dictadura militar. La gravedad del asunto exigía, en consecuencia, un tratamiento mucho más serio y responsable.

Para la mejor tradición liberal, desconocida en la Argentina dada la porfiada vocación autoritaria de sus epígonos locales, la valoración de un régimen político debe hacerse sobre la base de ciertos criterios fundamentales. El padre del liberalismo moderno, John Stuart Mill, decía que uno de los rasgos decisivos para juzgar los méritos

¹ Lo realizó en el programa *Tiempo Nuevo*, que conduce junto a Bernardo Neustadt.

de un gobierno es la calidad humana y moral de sus líderes; el otro era el imperio de la constitución y las leyes. Si hubiese seguido los consejos del teórico inglés, Grondona debería haber comparado las figuras de Videla, Massera y Galtieri, por ejemplo, con las de Alfonsín, Cafiero y el fiscal Molinas. O cotejado la institucionalidad que nos rige, amenazada por fanáticos sediciosos, con la ajuridicidad de la tiranía militar.

En lugar de proceder de ese modo, nuestro comentarista apeló a los lugares comunes acerca de la crónica ineficiencia de nuestro Estado. Si hubiera aplicado los criterios de Mill habría llegado a conclusiones diametralmente opuestas. Juzgar al régimen democrático por el funcionamiento de los teléfonos o los ferrocarriles es un clásico argumento fascista. Más que un juicio sereno y ponderado, el encuadre del problema trasunta la vigencia de un prejuicio autoritario muy arraigado en ciertos sectores y que erosiona la credibilidad en la legitimidad democrática. La realidad es que si vamos al fondo de la cuestión comprobaríamos que hoy estamos muchísimo mejor que ayer, a pesar de que ciertas cosas anden mal. Mill vería que tenemos mejores dirigentes, tanto en el gobierno como en la oposición, y que gozamos de un conjunto de libertades sin precedentes en nuestra historia. Por esto la democracia es mejor que la dictadura: tal vez antes los trenes anduvieran mejor, cosa que dudo, pero hoy vivimos en libertad y podemos luchar para construir una sociedad más justa. Lo demás es secundario.

(20 de diciembre de 1988).

Eppur si muove

El próximo sábado el régimen democrático conquistará uno de sus más caros objetivos: consumir pacífica y jurídicamente la sucesión presidencial. Un proceso rutinario en una democracia consolidada se convirtió en nuestro atribulado país en una verdadera película de suspense y terror, en donde, por momentos, se llegó a temer el retorno de personajes, proyectos y estilos políticos totalmente incompatibles con la opción definitiva e irrenunciable que hicimos por la democracia y la soberanía popular. La derecha, regocijada ante el espectáculo de una democracia débil y de un gobierno debilísimo, que ya no tenía fuerzas para gobernar, recurrió, una vez más, a las gastadas palabras del catecismo de los autoritarios: “caos”, “subversión”, “disolución nacional” y “anarquía”. Con su embrujo pretendía conjurar a los fantasmas que se agitan debajo de esas voces para lograr un triple propósito: quebrar, aunque sea efímeramente, la continuidad institucional; desacreditar al gobierno radical y, por último, magnificar la gravitación de los enemigos de la democracia a los efectos de inducir al nuevo elenco gobernante a ceder ante la demanda de las corporaciones. El reemplazo de Alfonsín por cualquier otro que no fuera Menem seguramente hubiera servido para intimidar a la sociedad civil, recordándole que los actores autoritarios aún conservaban intactos sus poderes y que el “juego” democrático no debía llevarse tan lejos. La táctica buscaba además desprestigiar al radicalismo con el objeto de neutralizarlo como una

eventual alternativa de poder en el futuro, transformando al gobierno de Menem en un rehén tutelado por los representantes corporativos del autoritarismo y la reacción.

Afortunadamente estos designios se vieron frustrados, y esta es una de las pocas buenas noticias que tenemos para contentarnos. En efecto, pese a la extraordinaria gravedad de la coyuntura —en la que se conjugaban con sorprendente virulencia la hiperinflación, la acostumbrada “inquietud” castrense, los saqueos y el alarmante “vacío de poder” que se abrió ante nuestros pies la noche del 14 de mayo— el régimen democrático demostró una sorpresiva capacidad para sortear la crisis y salvar la continuidad institucional de la república.

Ahora que el peligro ha pasado todo nos parece normal, hasta aburrido; tal vez por ello no valoremos adecuadamente el significado del recambio presidencial y sigamos pensando, melancólicamente, que todo sigue igual. ¿Cómo olvidar que una crisis tan aguda y multifacética como esta habría producido, hace apenas unos años, no solo la caída del gobierno, sino que el derrumbe mismo del régimen democrático? Por mucho menos cayeron Frondizi, Illia e Isabel Perón. Afortunadamente, en las circunstancias actuales, la abrumadora mayoría de la sociedad civil se alineó incondicionalmente en la defensa del régimen democrático, desmoralizando a los sibilinos portavoces del despotismo. La clase política, a su vez, supo controlar ciertas tendencias suicidas que la suelen embotar y pudo sellar un pacto de gobernabilidad, posibilitando la transición de un gobierno a otro. Es cierto que para ello fue necesario acortar en cinco meses el mandato de Alfonsín, pero esto fue provocado, en gran medida, por lo absurdamente prolongado del período que separaba la fecha de las elecciones del traspaso del poder. Lo esencial era garantizar la continuidad institucional, y eso requería que el presidente saliente entregara las insignias del mando al ganador de las elecciones. Lo del plazo era secundario, aun cuando pudiese generar, como de hecho ocurrió, un súbito agudizamiento de las luchas internas en los dos partidos principales y una inocultable sensación de bochorno ante la mezquindad —y el cinismo— de ciertas negociaciones. Pero,

como lo recuerda Rousseau (1762), solo si los hombres fueran dioses podríamos librarnos de estas cosas.

Haber preservado la continuidad institucional significa que en el terreno de la consolidación democrática hemos avanzado tal vez un poco más de lo que suponíamos. Se ha superado la primera etapa de la transición y el traspaso del poder a un partido opositor constituye, en cierta manera, una prueba tranquilizadora del relativo vigor de nuestra vida democrática. En un país con tan mala memoria como el nuestro, ninguna reiteración sobre el carácter inédito de lo que acontecerá el 8 de julio sería exagerada: desde la instauración del sufragio universal en 1912 nunca hubo un presidente popularmente electo que haya entregado las insignias a un opositor ungido por la mayoría ciudadana. Yrigoyen y Alvear se transfirieron recíprocamente la banda presidencial, pero eran miembros del mismo partido; Justo se la traspasó a Ortiz, pero eran las épocas del “fraude patriótico” y ambos pertenecían a la misma coalición de fuerzas conservadoras; por último, Perón se reeligió en 1951 de suerte que allí no hubo traspaso alguno. Recién ahora, setenta y siete años después de promulgada la Ley Saénz Peña, se consuma por vez primera una auténtica y pacífica alternancia en el poder, realizada en el marco de la institucionalidad política vigente y sin las conmociones que, usualmente, acompañaron a las “salidas” de diversos gobiernos.

A lo largo de estos años, difíciles y, por momentos, crispados, hemos avanzado. *Eppur si muove*, dijo una vez Galileo y su expresión vale también para describir lo que ocurrió en la Argentina. A pesar de todo hubo movimiento, nos hemos educado en la práctica de la democracia y afianzado una correlación de fuerzas sociales que repetidamente aisló a los golpistas. Queda muchísimo por hacer, y una de las primeras cosas será discutir seria y responsablemente lo ocurrido en esta primera etapa de la transición para evitar la reiteración de algunos deplorables errores. Claro está que debiéramos evitar que la tan necesaria autocrítica se transforme en un ejercicio de masoquismo autodestructivo. Hay algunas razones para pensar que no hemos extraviado el futuro.

(8 de julio de 1989).

El tobogán de la censura

Las recientes declaraciones del Secretario de Cultura² acerca de la película *Kindergarten* ponen de relieve la gravedad de la pesada herencia autoritaria dejada por largos años de dictaduras. Primero, porque un hombre de manifiesta vocación democrática como Julio Bárbaro no percibió ningún conflicto entre su condición de alto funcionario de un régimen surgido de la voluntad popular y su explícita defensa de la censura. Segundo, y esto es lo más importante, porque sus declaraciones no provocaron un vendaval político, confirmando lo que muchos temíamos: que la sensibilidad democrática de los argentinos es bajísima, lo que nos impide advertir la resurgencia del autoritarismo antes de que sea demasiado tarde. Vayamos por partes.

Interrogado acerca de su opinión en relación a la cuestionada película de Jorge Polaco (*Página/12*, sábado 28 de octubre de 1989, p. 16), el secretario sostuvo que “en algunos casos el arte tiene elementos

² Julio Bárbaro sostuvo “En algunos casos el arte tiene elementos que terminan siendo factores de provocación. [...] No vi la película, pero conozco la difusión y creo que en una situación complicada como la que vive el país, donde el objetivo central es la unidad nacional, en la medida en que determinadas expresiones artísticas dividan, prefiero soslayarlas” (*Página/12*, “Bárbaro contra la provocación”, sábado 28 de octubre de 1989, p. 16). La película abordaba ciertos escabrosos temas relacionados con la sexualidad de una pareja que se conoció en un jardín de infantes. Fue censurada por la justicia y sólo pudo exhibirse en el 2010, en el marco del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

que terminan siendo factores de provocación”. Dado que el país vive en una situación “complicada” que requiere lograr la “unidad nacional”, Bárbaro agregó que ante ello sería preferible soslayar las expresiones artísticas que dividen a la comunidad. Cerrando los ojos y repitiendo en voz alta estas palabras —o expresiones análogas que hemos escuchado con demasiada frecuencia en estos últimos años— los argentinos nos transportamos mentalmente a los años del Proceso, en donde el arte también fue considerado, junto con otras manifestaciones culturales, como un “factor de provocación”. Solo que entonces el lenguaje castrense lo fulminaba con un adjetivo siniestro: subversivo.

Es evidente que Bárbaro se espantaría ante el remate lógico de su razonamiento. Además, su trayectoria política durante el largo invierno de los comandantes lo colocó permanentemente en oposición a la dictadura. Sin embargo, su reacción y la de la sociedad civil —que permaneció impasible ante sus palabras— revela que nuestra larga historia de despotismo no ha pasado en vano y que hemos internalizado, de manera inconsciente, las formas de pensar de nuestros opresores. Queremos conscientemente la democracia, pero nuestros hábitos más elementales de razonamiento y nuestras reacciones espontáneas ante diversos acontecimientos desnudan la perdurabilidad de las heridas que la dictadura infligió a la sociedad. La desconfianza ante el arte es propia de las tiranías y, si bien vivimos en democracia, es preciso recordar que esta no es una entelequia sino una producción histórica, sustentada por una correlación de fuerzas sociales en donde los que la favorecen son conscientes de los valores que defienden y capaces de doblegar la resistencia de aquellos que prefieren otros métodos de gobierno. En las transiciones hacia la democracia, que es el recorrido en que se encuentra empuñada la Argentina, puede ocurrir que los demócratas no sean tantos como se supone porque existen desfases entre los avances registrados en el plano de las instituciones políticas y los que se verifican en el terreno de la conciencia. En estos casos, aquellos pueden seguir pensando con las categorías mentales de los autoritarios y, de esa

manera, sumar fuerzas a sus propios enemigos. Es por eso que un representante de la democracia argentina puede alabar cándidamente las virtudes de la censura sin percatarse de que está incurriendo en una flagrante contradicción. Y la opinión pública, por su parte, puede darse el lujo de no reaccionar ante esa clara señal de peligro para el futuro de la libertad. El atraso de nuestra conciencia democrática explica ambas aberraciones.

El tema es grave porque lo que hoy es una inocente recomendación de autocensurarnos puede transformarse mañana en la directiva de algún funcionario —que para “hacer méritos” se vuelve más papista que el papa— obsesionado por identificar los elementos perturbadores del tan ansiado espíritu de reconciliación nacional. Poco tiempo después aparecerá una ordenanza prohibiendo cierto tipo de manifestaciones culturales, corrientes científicas o a ciertos individuos, bajo la acusación de ser incompatibles con el espíritu de la “unidad nacional” que debe presidir nuestras vidas. La secuencia es hartamente conocida: no se inventó ayer ni es una contribución original del genio argentino a la civilización occidental. Es tan vieja como el mundo y en todas partes produjo efectos devastadores sobre la libertad, la democracia y la justicia. Es razonable esperar que expresiones similares reaparezcan en boca de otros funcionarios de modo mucho más contundente, sobre todo en cuanto se acabe la “luna de miel” existente entre el gobierno y la sociedad. Para ese entonces resurgirán las lúgubres voces que se anidan en todos los gobiernos recomendando “mano dura” en contra de una oposición que atiza la hoguera de la lucha de clases o del enfrentamiento entre argentinos. En esas circunstancias es muy probable que el actual secretario de Cultura sea relevado sin demasiados miramientos de su cargo —y hasta quizás sea acusado de complicidad con los “provocadores” culturales— y reemplazado por algún troglodita de esos que la Argentina produce en grandes cantidades y que diga “en serio” lo que Bárbaro dijo sin pensar.

Esta cultura política del autoritarismo ha corrompido a nuestra sociedad. Por eso también me parece grave que la tan mentada

“sociedad civil” no haya saltado como un solo hombre ante las desafortunadas declaraciones del secretario, exigiendo una inmediata rectificación. Este episodio ha sido un verdadero test sobre la solidez de nuestras creencias democráticas, y no nos ha ido nada bien. Suponer que porque el país está en una situación complicada se deben soslayar las producciones culturales que dividen a la sociedad configura una gravísima amenaza porque revela que las semillas del autoritarismo todavía están vivas en nosotros mismos. La cultura y la sociedad siempre estarán divididas, y el reconocimiento de esta realidad es la esencia misma de un sistema democrático y respetuoso de la libertad. Por eso es necesario reivindicar las virtudes de la pluralidad y la saludable costumbre de criticar a todo lo existente, requisitos necesarios del régimen democrático. No hay que olvidar que la cura de los males de la democracia no se logra censurando, prohibiendo o vigilando. Un régimen que adopta estas políticas se condena a un lento pero inexorable suicidio. La solución de los problemas de la democracia solo se obtiene con más democracia.

(4 de noviembre de 1989).

La ciudad y la democracia

La gran tradición de la teoría política occidental es incomprensible al margen del estímulo intelectual y el modelo práctico proporcionado por la ciudad. Por eso esta ocupó un lugar destacadísimo en las germinales reflexiones sobre la política realizadas en la Grecia clásica. Allí nació una línea de interpretación que, vigente hasta la actualidad, ha consagrado al espacio urbano —y su predominio sobre el campo— como la condición necesaria y el escenario natural de la democracia y la libertad. Es en la ciudad donde florecieron las ciencias y las artes, el saber y la técnica; es allí donde se encuentra la civilización, que contrasta con el atraso de la vida rural. Cabe notar que la palabra civilización tiene un sentido que solo se descifra en clave política: su raíz nos habla del *civis*, es decir, el ciudadano, y es el conjunto de estos lo que forma la *civitas*, o sea, la ciudad. Civilización, ciudad, ciudadano, civismo son palabras que remiten a un mismo núcleo de significados. Por eso Rousseau (1762) advertía, con razón, que la distinción entre una ciudad y un caserío no se deducía del número sino de la calidad de sus habitantes: una ciudad era el lugar donde vivían ciudadanos, es decir, hombres capaces de gobernarse a sí mismos; un caserío, en cambio, era una aglomeración —muchas veces mucho mayor— de individuos privados de soberanía y sojuzgados por el despotismo, la ignorancia o la manipulación. Por eso no eran ciudadanos sino simples súbditos del gobernante de turno.

La ciudad fue concebida, ya desde los griegos, como el hábitat imprescindible de la democracia. Sus instituciones y sus prácticas de autogobierno modelaron a las que habrían de reinventarse mucho después. Es imposible pensar la historia del parlamentarismo o del principio de la mayoría soslayando a las asambleas de aquellas ciudades-estado diseminadas por el Mediterráneo Oriental hace dos mil quinientos años. De su reflexión en torno a las ciudades los clásicos griegos extrajeron varias conclusiones; señalemos apenas dos. La primera es que la decadencia de la ciudad afecta estructuralmente a las posibilidades de preservar la democracia y la libertad; otra, no menos inquietante: que la calidad de los grupos dirigentes revela la excelencia de la vida política de la ciudad.

Este planteamiento ofrece un marco estimulante para tratar de comprender el significado de los bochornosos acontecimientos que el domingo pasado tuvieron lugar en el Concejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires.³ Los rasgos francamente delictivos que allí se pusieron en evidencia; el vandalismo de que hicieron gala algunos personajes cuya entrada al recinto fue autorizada por nuestros supuestos “representantes” y el escaso apego a la institucionalidad vigente que exhibieron sectores muy significativos de los dos partidos mayoritarios revelan la profundidad de la crisis política que está carcomiendo a nuestra sociedad y acentúa aún más el descrédito y la desilusión de los ciudadanos con la democracia y sus propios representantes. Convendría no olvidar que en un país como la Argentina no solo la moneda está sometida a continuas devaluaciones, también las palabras y los discursos se devalúan, y los efectos sociales de estas son tan perniciosos como los de aquellas.

Para nadie es un misterio que nuestra democracia es todavía sumamente imperfecta, porque contiene una contradicción que, de no resolverse, puede ser fatal: a medida que pasa el tiempo profundiza las tendencias hacia la exclusión y la pauperización de un número

³ Ver *Página/12*: “El PJ quiere otra sesión”, publicada el martes 12 de diciembre de 1989, p. 9.

creciente de ciudadanos. Los convierte en ciudadanos por un día para despojarlos después de esa condición por el resto del año. La ciudad de Buenos Aires, para colmo de males, se encuentra en tal Estado de deterioro material y administrativo que horrorizaría tanto a los clásicos de la filosofía política griega como hoy martiriza y humilla a sus habitantes. Además, el carácter esencialmente antidemocrático de la designación de su intendente —que tanto el gobierno pasado como el actual parecen considerar como normal y razonable— refuerza las tendencias hacia la alienación política de los ciudadanos, conscientes de que sus preferencias serán, a la corta o a la larga, olímpicamente ignoradas por las eventuales autoridades. Por último, el desprestigio de nuestro gobierno municipal se apoya también en la elemental constatación del abismo que separa las dietas de los concejales —mayores todavía que la de los miembros del Congreso Nacional— de los empleados de la comuna y del electorado que los elige; en las jubilaciones de privilegio existentes para funcionarios que con solo ocupar durante un día algunos de los innumerables cargos de dirección en el ámbito municipal les permiten disponer por el resto de sus vidas de una suculenta jubilación; en la forma poco cuidadosa y transparente con que se despachan las cuestiones presupuestarias, cosas, todas estas, sabidas por la ciudadanía y que alimentan su cinismo y resentimiento hacia la clase política y el régimen democrático.

Hechos como los ocurridos tendrían que haber sido inmediatamente condenados por las dirigencias del peronismo y el radicalismo. En su lugar encontramos declaraciones meramente retóricas —cuya ineficacia ya todos conocen— y exhortaciones a “arreglar” este escándalo de manera amistosa. No es esa la forma de consolidar nuestra frágil democracia: al igual que en el caso de las tres sediciones militares sufridas en años anteriores, estos comportamientos tampoco merecen el premio de la impunidad. La piadosa distracción con que nuestros principales líderes políticos se desentienden del asunto equivale a una nueva forma de indulto, aplicada ahora a quienes desnaturalizan profundamente el ejercicio de la democracia

y preparan el clima ideológico para el retorno de los autoritarios. La propaganda antidemocrática de los últimos consiste en decir que las instituciones representativas son antros de la delincuencia y la corrupción, y que deben ser suprimidos por el bien de la sociedad. Sorprenden por eso los muchos silencios del oficialismo, que retumban atronadoramente en las plazas cada vez más despobladas por nuestros frustrados ciudadanos y que transmiten un mensaje grave y clarísimo que sería suicida no registrar. La intervención recientemente decretada por el Ejecutivo —una decisión dudosamente justificable— se dirige a corregir los síntomas más escandalosos de la crisis, pero no resuelve la génesis estructural de la misma: la flaqueza de nuestra democracia. Asombran también los cánticos de la barra radical —respondiendo a la línea “bajada” seguramente por algunos de los arquitectos de la renuncia anticipada de Alfonsín— que descubre en los terrenos más cenagosos de la política municipal las virtudes del pueblo unido que jamás será vencido. Lástima que semejantes descubrimientos no hubieran sido efectuados en un momento más oportuno, como Semana Santa, por ejemplo; o para reclamar la realización de un plebiscito para decidir democráticamente qué debemos hacer con una deuda contraída por unos señores que usurparon el poder o para resolver el tema pendiente del servicio militar obligatorio. Estos acontecimientos revelan, en suma, la necesidad urgente de una reforma política que permita la recuperación del protagonismo ciudadano y el control popular efectivo sobre “representantes” cuya frágil memoria les hace olvidar que son simples servidores públicos y que se deben íntegramente a su ciudadanía. No será esta clase política, por cierto, la que logrará la proeza de salvaguardar la democracia en la Argentina.

(14 de diciembre de 1989).

Disparen sobre los políticos

A nadie le gusta la crisis: a las clases medias porque se pauperizan; a los pobres porque se convierten en indigentes y, en su desesperanza y desesperación, comienzan a invocar, cada vez con más vehemencia, al mesías que venga a redimirlos. A los ricos —que son los principales beneficiarios de la crisis— porque no pueden saborear con tranquilidad las superganancias que les reporta una situación de la cual son los principales responsables. Enceguecidos por los beneficios de la especulación solo razonan en el corto plazo: por eso la confianza que depositan en sus gobiernos es tan limitada como los tiempos en los que multiplican sus fortunas: siete días, catorce días, un mes como máximo. Después viene la decepción y —al igual que los pobres, pero por distintas razones— la febril búsqueda de nuevos “salvadores”.

Es precisamente por eso que a la sociedad civil —y no solo a la clase política— esta crisis les debería preocupar sobremanera. Además, los plazos que ricos y pobres les conceden a los gobiernos son cada vez más cortos. El chiste de dudosa comicidad que el presidente Menem le contó —ante asombrados periodistas de los dos países y corresponsales extranjeros— al futuro presidente de Brasil en el sentido de que él habría logrado en cinco meses lo que a Alfonsín le tomó cinco años es una confirmación, no demasiado académica pero igualmente efectiva, de lo que venimos diciendo.

Atemorizado por el poder de la burguesía —que el 6 de febrero de 1989 liquidó con un feroz “golpe de mercado” al tambaleante gobierno radical— el presidente Menem decidió aliarse a ella creyendo que de esa manera podría gobernar sin sobresaltos. Se equivocó, pues el costo que pagó por este viraje en pos de esa ilusión fue inmenso: repudiar el contrato electoral que lo había hecho presidente y desdecirse de cada una de sus promesas. A escasos seis meses, el presidente comprueba que, lejos de fortalecerse, el poder político se ha debilitado y sus ingratos aliados atizan la hoguera en la cual desean sacrificar a toda la clase política. Su gobierno ni “calma a los mercados” —que agitan con entusiasmo los ricos— ni mantiene la popularidad entre los pobres. Embelesado por los mitos liberales fue cediendo constantemente a las presiones de la burguesía, pero los mercados no se apaciguaron porque su inestabilidad e inquietud es el gran negocio de las clases dominantes. Es que a aquellos no se los calma sino que se los regula —así se hace en Japón, Estados Unidos o en Europa— y para eso se requiere un Estado *fuerte* como el que predomina en aquellos países.

El envilecimiento del austral tiene su reverso en la devaluación de la clase política y el deterioro de la institución presidencial. A medida que la crisis se desenvuelve arrecian las denuncias contra la primera, y el vapuleo a que fue sometido el presidente —hace poco más de dos semanas— en *Tiempo Nuevo* habla bien a las claras de los alcances que ha adquirido esta depreciación de los símbolos fundamentales del orden democrático. ¿Habrà sido coincidencia que, a la semana siguiente, el *prime time* de dicho programa haya sido ocupado con largueza por el exteniente coronel Aldo Rico? Tal vez, pero la profusa cobertura periodística que ciertos medios han asignado a las giras por el interior de los líderes carapintadas, ¿será también producto de la casualidad? No lo creo, sobre todo cuando vemos que todas sus declaraciones confluyen en la inapelable descalificación de la clase política como causante de la decadencia nacional.

Es imposible ignorar las falencias y las debilidades de nuestra clase política: su eterno “doble discurso”, su desdén por la voluntad de la

ciudadanía, su mediocre preparación intelectual, su vulnerabilidad ante las tentaciones de la corrupción y su falta de coraje para luchar por sus ideales son bien conocidos. Pero habría que hacer dos salvedades: primero, para reconocer que existen también importantes sectores —en distintos partidos— a los cuales esta caracterización les haría una tremenda injusticia y, por lo tanto, una descalificación generalizada solo puede entenderse en el marco de un proyecto de restauración autoritaria. Pero, además, convendría preguntarse otra cosa: ¿hasta qué punto una clase política así, con los claroscuros ya señalados, es una excrecencia ajena a la naturaleza sociológica de la Argentina moderna? La respuesta es terminante: esta clase política, con sus flaquezas y sus pequeñas grandezas, con su pobre *performance* y con su renovada promesa, *es lo que es porque representa muy bien lo que es este país*. Si no fuera así podríamos apuntar, sin ninguna duda, hacia otros liderazgos alternativos que no tuviesen el estigma de aquella. ¿Pero dónde están? ¿En el empresariado, que acusa de ineptitud y corrupción siendo a su vez —en buena parte— incompetente y corruptor de funcionarios? ¿En las Fuerzas Armadas, cuya ineptitud e inmoralidad son ciertamente no inferiores a la que caracteriza a las elites civiles? Creo que hay una adecuada —aunque infeliz— correspondencia entre la sociedad y la clase política: la medianía de la última es el espejo más luminoso que refleja la infinita mediocridad del capitalismo argentino y de sus clases dominantes.

Campañas como estas, contra la clase política de las atribuladas democracias, han sistemáticamente precedido diversas tentativas fascistas —algunas fallidas, pero otras no— de subvertir el orden constitucional. Su recrudecimiento en estas difíciles circunstancias predispone favorablemente a la sociedad civil a legitimar preventivamente un golpe de Estado. El “blanqueo” de los antiguos carapintadas y la manipulación de su imagen para presentarlos como austeros e ímpolutos custodios de la constitución y la moralidad republicana —Rico llegó a decir en el citado programa que “nosotros somos la única garantía en contra del golpe de Estado”— revela la osadía de esta maniobra y la irresponsabilidad cívica de sus cómplices.

Subestimar la importancia de estos procesos y reducirlos al rango de intrigas cortesanas que apenas alborotan a las sirvientas del palacio constituye una temeraria frivolidad. La crítica despiadada a la clase política se dirige no solo hacia sus hombres sino —ante todo, pero subliminalmente— hacia los mecanismos mediante los cuales estos fueron elegidos: es un cuestionamiento a la democracia como régimen político y como modo de vida. Tal vez por eso a Rico se le ocurrió citar a Wilfredo Pareto (designado senador vitalicio por Benito Mussolini ni bien conquistara el poder) quien escribió que la democracia era una despreciable quimera. ¿Qué hacemos, mientras tanto? Algo bien elemental: que atendiendo al bienestar colectivo el gobierno deje de ser un impávido mediador en las pujas sectoriales y se decida a gobernar. Y que nosotros, en la sociedad civil, recordemos la trayectoria de quienes hoy pretenden confundirnos con los cantos de sirena de una “nueva” clase dirigente que se presenta con la cara limpia.

(19 de febrero de 1990).

Sonrisas en la plaza

Público heterogéneo y transgresión de significados: he aquí las dos claves del acto del viernes.⁴ Junto a encumbrados vecinos de Recoleta y Barrio Norte se dieron cita los grupos más ferozmente castigados por la crisis del capitalismo argentino. *La Prensa* lo dijo con todas las letras: “Entre tacos y alpargatas se concentró una extensa franja de zapatillas y zapatos”. *La Nación* (7 de abril, 1990, p. 1) destacó la presencia de “algunas mujeres con fina vestimenta, cuidado maquillaje y tacos altos, portando banderas argentinas” que contrastaban con los “grupos de condición más humilde” que llegaron desde el Gran Buenos Aires.

Veamos los significados: unos pocos peronistas osaron venir con sus bombos, pero los tocaban sin fervor. La perplejidad que les producía la increíble metamorfosis de “su plaza” —personajes, palabras y símbolos ajenos— les hizo experimentar por primera vez un sentimiento extraño: no era la bronca, esa vieja compañera, sino el ridículo. Cien metros más allá exultantes conservadores se deleitaban con la confusión reinante en la “otra vereda”. Paladeaban con fruición cada minuto de esta histórica jornada: desde 1955, cuando celebraron alborozados la caída del “tirano prófugo”, no habían vuelto a la

⁴ Se trata la “Plaza del Sí”, convocada por el periodista Bernardo Neustadt el 6 de abril de 1990 en Plaza de Mayo para apoyar las políticas neoliberales impulsadas por el gobierno.

plaza. Regresaron para consumir el acto final de la Revolución Libertadora, y su alegría era infinita.

La plaza también exhibía estados de ánimo marcadamente dispares. La complacencia y la felicidad reflejada en los rostros sonrientes y atildados de los que se congregaron a lo largo de Rivadavia difería marcadamente de la amargura y las tremendas ganas de creer de quienes se agolpaban del otro lado. Taciturnos y desmoralizados, escucharon impávidos —¡nada menos que en esa plaza!— la densa rechifla de que fue objeto Rimoldi Fraga cuando le cantó a Evita. El pueblo hambreado presentía oscuramente que había sido convocado para apoyar un proyecto que eterniza su miseria, destruye su identidad y expropia su memoria. Fluctuando entre ambos grupos estaba la clase media, que miraba con disgusto y desconfianza a los pauperizados, mientras que contemplaba con una indisimulada mezcla de cholulismo y envidia a los célebres, ricos y elegantes que la flanqueaban.

La renovada oligarquía, los angustiados clasemedios y los crónicos perdedores en cada “ajuste” capitalista compartieron físicamente el lugar, pero no confraternizaron el momento. Los espacios que cada clase social ocupó tenían fronteras invisibles, pero infranqueables. No hubo mezclas: la segregación social del capitalismo y las asimetrías de la coalición conservadora popular se reprodujeron fielmente en la plaza. Enterrando una larga historia de igualdad social, cada clase parecía haber aprendido cuál era su lugar en el espacio y en la sociedad de esta nueva Argentina. Las masas aquí, las elites allá; obreros y empleados aquí, burgueses por allá. Cada cosa en su lugar y cuidado con protestar.

La marcha fue la ratificación multitudinaria de lo que todos sabíamos: el 8 de julio de 1989 se inició una nueva etapa en la historia argentina, cuando desde el poder se consumó una profunda y vertiginosa recomposición de las alianzas políticas que habían signado la política nacional desde 1945. La paradójal muerte y descomposición del peronismo abrió así el camino para la fundación —en cierta forma ya insinuada por el presidente— de un gran partido conservador,

moderno y con base de masas, con el que las nuevas elites económicas aspiran a reconstruir su hegemonía. Para esto tienen que satisfacer dos imperativos políticos; uno, ya plenamente logrado: contar con eficientes comunicadores sociales, capaces de manipular y “desinformar” a la opinión pública, a fin de garantizar el “conformismo automático” de la sociedad civil ante las exigencias de las clases dominantes. En este punto el trabajo ya ha sido hecho; desde la televisión los personeros de la burguesía fijaron la agenda de la campaña electoral de 1989 e impusieron su interesada —y errónea— visión sobre los males argentinos: toda la culpa es del Estado. Segundo, se necesita un nuevo partido para encuadrar a los sectores más atrasados y desesperados de las clases populares, que controle los desbordes sociales y el reivindicacionismo asalariado incompatible con el nuevo modelo de acumulación. Las consignas para el futuro partido son dos: desmovilizar y disciplinar. Esto requiere, obviamente, de nuevos aparatos que no lleven sobre sus espaldas la “molesta” historia movilizacionista del PJ o la CGT. Los medios llevaron la gente a la plaza; ahora falta que la burguesía encuentre la fórmula organizacional para encuadrarla.

(10 de abril de 1990).

Desafíos después de la plaza

Ningún país sobrevive a dos hiperinflaciones y una profunda recesión sin alterar profundamente sus estructuras tradicionales. A nadie sorprende, por lo tanto, el ocaso definitivo de una manera de acumular capital y un estilo de hacer política. La histeria “privatista” refleja la urgencia y la desesperación con que las clases dominantes quieren exorcizar al perverso demonio del estatismo. No obstante, el destino final de este proceso de recomposición es incierto: ¿podrá revertir el secular estancamiento de la economía argentina, provocando lo que Keynes (1936) denominara “la eutanasia del rentista” y abriendo los cauces para un improbable empresariado poseído por un renovado “espíritu capitalista”?

La escena política, por su parte, se ha transformado aceleradamente. En su discurso del primero de mayo el presidente ha extendido el certificado oficial de defunción al populismo. La vieja coalición sobre la cual reposaba la capacidad política del peronismo se ha desintegrado y las clases y grupos que la componían están a la búsqueda de nuevas inserciones que les permitan maximizar sus chances de sobrevivir en la crisis actual. La alianza que catapultó a Raúl Alfonsín a la Casa Rosada en 1983 se disgregó durante su gestión de gobierno, y buena parte de los votos cosechados por Eduardo Angeloz habrán de confluír en apoyo del proyecto neoconservador en gestación.

Las recientes declaraciones del gobernador cordobés en los Estados Unidos indican claramente ese camino.

Todo esto ha ocurrido en muy poco tiempo y no debiera de sorprendernos la extraordinaria volatilidad que exhiben tanto el sistema partidario como los alineamientos políticos de la sociedad civil. En relación con lo primero digamos que seguir pensando a la política argentina sobre la base de la antinomia tradicional peronismo-radicalismo constituye, a estas alturas, un peligroso anacronismo. Menem-Angeloz representan algo bien distinto de Cafiero-Alfonsín, y aquí se prefiguran las futuras alianzas sociales que habrán de cristalizarse en el sistema de partidos. Los gobiernos de Alfonsín y Menem produjeron, por distintas razones, un acelerado vaciamiento del “centro” político, y el crecimiento electoral se registra ahora por la izquierda y por la derecha. No es otro el significado de estas dos plazas, la del “sí” y la del “no”, que en estas últimas semanas fueron ocupadas por fuerzas políticas que jamás habían podido sentar sus reales en el baluarte simbólico del peronismo. A pesar de los malabarismos discursivos las veredas no son “la de aquí” y “la de enfrente”; ante la gravedad de la crisis ellas son la de “la derecha” y la de “la izquierda”, y estas se encuentran objetivamente enfrentadas. El “centro” cafierista-alfonsinista es para épocas de prosperidad y estabilidad; en tiempos convulsionados como estos se pulveriza, porque las políticas vacilantes y ambiguas son el camino seguro hacia el desastre.

El espacio político abierto por la izquierda puede, eventualmente, llegar a ser muy importante. Los datos de las encuestas reflejan su ascenso al —hasta ayer inalcanzable— rango de “tercer partido”. La gente que fue a la plaza no era la clásica militancia: había sectores sociales que por primera vez respondían a una interpelación de izquierda. Las enseñanzas de la crisis ponen en disponibilidad nuevos contingentes que hasta ayer rechazaban sus mensajes y la recomposición de los alineamientos políticos se verá claramente en las elecciones del próximo año. Mientras tanto, la izquierda tiene que evitar caer en el triunfalismo: esta posibilidad que se abre ahora puede desperdiciarse con la misma rapidez con que surgió. Después de

todo, los líderes argentinos son maestros consumados en el arte de dilapidar el capital político que les ofrecen las masas esperanzadas al inicio de su gestión. La izquierda se enfrenta pues con tres desafíos: en los próximos meses tendrá que demostrar la madurez de su dirigencia, la lucidez y viabilidad de sus propuestas para enfrentar seriamente la crisis y la adecuación de sus estructuras organizativas para canalizar la renovada demanda social generada por el ajuste neoconservador. Si los resuelve favorablemente su futuro —y el del país— podrá contemplarse con un cauteloso optimismo.

(6 de mayo de 1990).

Presidencialismo e ingobernabilidad

En las últimas semanas, diversas autoridades nacionales ratificaron la intención del gobierno de promover una reforma constitucional encaminada a acortar el mandato presidencial y permitir la inmediata reelección de su titular.⁵ La iniciativa es razonable, pero insuficiente. Razonable, porque desde el fatídico 6 de septiembre de 1930 hasta hoy hemos sido gobernados por casi una treintena de presidentes civiles y militares, lo que arroja un promedio efectivo de duración de poco más de dos años por incumbente. El sexenio previsto por la constitución no tiene nada que ver con nuestra realidad.

Pero la propuesta es insuficiente, porque los tiempos en que vivimos exigen una revisión más profunda de nuestra constitución. ¿Por qué? Porque las instituciones políticas con que contamos —creadas con anterioridad a la emergencia de la democracia de masas— son anacrónicas y requieren un urgente *aggiornamento*. Necesitamos diseñar canales que potencien el protagonismo popular, incorporando procedimientos tales como el referéndum, la iniciativa popular y la elección uninominal; también nos hace falta un parlamento más

⁵ Véanse las declaraciones de Carlos Menem y Eduardo Menem en *Página/12*: “Carlos Menem en continuado”, viernes 18 de mayo de 1990, pág. 2; el discurso del presidente en el cabildo de Luján con motivo de la firma del Pacto Federal en *Página/12*: “Con el Pacto Federal se inició la peregrinación hacia la reforma”, viernes 25 de mayo de 1990, p. 2; también las declaraciones de Mera Figueroa en *Página/12*: “La reforma del veranito”, domingo 20 de mayo de 1990, p. 3.

poderoso y eficaz, porque allí reside genuinamente la soberanía popular. Sin embargo, estos temas brillan por su ausencia en la agenda de la reforma que se viene.

Todas las democracias modernas —con la sola excepción de los Estados Unidos— funcionan sobre la base de regímenes parlamentarios, sean estos abiertos o encubiertos. En el caso argentino, ¿cómo ignorar que lo que está en crisis es el mismo régimen presidencialista y que sus males no radican en la duración de su mandato o en la prohibición de la reelección sino en su escasa eficacia como fórmula gubernativa, su volátil legitimidad popular y su inflexibilidad adaptativa para resolver situaciones críticas?

Este régimen gira en torno a la independencia recíproca del parlamento y el ejecutivo. Cada uno de estos dos poderes tiene cronogramas y mandatos fijos y diferentes, y su propia dinámica reduce la gobernabilidad general del sistema. Su rigidez dificulta la construcción del consenso y desalienta la cooperación de los opositores; en efecto, estos pueden “quedar pegados” a un gobierno impopular sin ganar nada a cambio, dado que el poder no se reparte desde el parlamento. El ejecutivo se enfrenta así ante un congreso hostil —o indiferente— y con la permanente rebeldía de sus propios parlamentarios. De ahí que para construir una mayoría legislativa que le permita gobernar tenga que urdir complicadísimas maniobras con los diputados y senadores del oficialismo, o bien apoyarse en pequeños partidos cuya gravitación en la política nacional es completamente desproporcionada con relación a su base electoral. Resultado: la democracia se paraliza o se vuelve ingobernable.

Por otra parte, el presidencialista es un régimen muy vulnerable por el lado de su legitimidad popular: la que rodea su origen se desdibuja muy rápidamente, y la que se requiere para el ejercicio continuado de las labores de gobierno en épocas como las actuales —con sus secuelas de “ajustes”, restricciones del gasto público y lucha antinflacionaria— suele ser muy baja. Por último, es particularmente inapropiado para enfrentar las emergencias políticas: al tener un mandato fijo (sexenal o cuatrienal) y al estar incapacitado para forjar nuevas

alianzas efectivas que le brinden mayoría parlamentaria, el presidencialismo hace que una crisis de gobierno se transforme en una crisis del Estado. En suma, es un régimen perverso porque incentiva que tanto el gobierno como la oposición ejerciten un viejo y funesto deporte nacional: “patear el tablero”. El primero, porque puede irresponsablemente amenazar a la oposición (y a la sociedad civil) con la continuación de sus políticas, aun cuando estas precipiten no solo su caída sino también la del Estado democrático; la oposición, porque ante la imposibilidad de acortar el mandato presidencial o modificar sus políticas optará por el obstruccionismo parlamentario y la protesta salvaje. Gobierno y oposición son así llevados por la lógica del presidencialismo a apostar a la parálisis institucional y al colapso del orden democrático a los efectos de lograr concesiones del otro. Lo que ocurre, en la abrumadora mayoría de los casos, es que tanto uno como la otra terminan barridos de la escena política por los sedicentes “salvadores de la patria” en uniforme, mientras que la sociedad civil se encarga de poner los desaparecidos, los muertos y los torturados.

Por esto necesitamos una reforma constitucional que establezca un régimen parlamentario. Primero, porque fortalecerá a la democracia representativa, haciendo que el gobierno surja de la voluntad popular soberana expresada en el parlamento. Segundo, porque su enorme flexibilidad nos evitará la recurrencia del bochornoso espectáculo cívico que presenciamos entre el 14 de mayo y el 8 de julio del año pasado. Tercero, porque en tiempos de tormenta el camino del justo medio es la ruta más segura hacia la ruina: ni el semipresidencialismo propuesto hace unos años ni la actual iniciativa de reforma constitucional atacan la raíz de nuestros problemas políticos. La historia reciente está saturada de ejemplos que demuestran la peligrosa obsolescencia del presidencialismo. ¿Tendremos la valentía de producir una verdadera reforma constitucional que nos saque de este círculo vicioso en que estamos sumidos desde hace tantos años?

(31 de mayo de 1990).

La trampa de la perspectiva

Uno de los momentos más conmovedores de *La Sociedad de los poetas muertos* es cuando el profesor invita a uno de los alumnos a subirse a su escritorio y mirar al aula desde esa altura a la vez insólita y elemental. Esa imagen bellísima y movilizadora condensa un teorema fundamental de la teoría política: el mundo se percibe y se siente de maneras muy diferentes, dependiendo de dónde se pare el observador. Quienes están arriba contemplan los sufrimientos cotidianos de la gran masa de la población como cuestiones intrascendentes y marginales; para los de abajo, por el contrario, la vida diaria es un furioso combate contra las acechanzas y las agresiones que los primeros apenas si logran tomar en cuenta luego de muchas elucubraciones. Desde tiempos inmemoriales esta metáfora ha sido utilizada para explicar las razones por las cuales los gobernantes son incapaces de observar lo obvio: el hambre, los llantos y la rabia no se ven ni se sienten desde lo alto.

La trampa de la perspectiva es una enfermedad crónica de los gobiernos, cualquiera que sea su signo ideológico: por eso, al convocar a elecciones se encuentran con “sorpresas” como las del domingo. Esos ciudadanos abstractos y volatilizados que se divisaban desde lo alto resultaron ser realidades encarnadas, cuyas carencias y miserabilidades los empujaron a votar desoyendo las exhortaciones del presidente, del vicepresidente, del gobernador y de los más importantes

políticos nacionales. Demostraron que los hombres definen el sentido de su voto en términos muy prosaicos, lo que a menudo irrita y desaira a sus dirigentes. La ideología democrático-liberal habla del ciudadano abstracto, al que se lo supone libre e igual. Pero en las sociedades “realmente existentes” solo hay hombres concretos: profundamente desiguales en lo económico y solo en parte libres, de donde resulta que su comportamiento se separa considerablemente del esperado en función de una concepción que los convierte en verdaderos espíritus hegelianos, desprovistos de todo sufrimiento y materialidad.

El gobierno invitó a estos hombres y mujeres a decirle que Sí a una reforma que nadie duda en calificar de urgente y necesaria. Pero como nunca son consultados; como les prometieron el salarizado y recibieron una sucesión de impuestazos; como según se supo un par de días antes del plebiscito el gobierno habría transferido en el último año —vía reducción de las retenciones agropecuarias— ochocientos millones de dólares a la clase más opulenta de la sociedad argentina, mientras que ellos no tienen hospitales, escuelas, vivienda, agua potable, alcantarillas, protección policial, justicia eficaz ni nada de lo que se necesita para una vida digna; como les pasaron todas esas cosas no tuvieron la suficiente serenidad intelectual para ponerse a estudiar los 98 artículos reformados de la nueva constitución, compararlos con los antiguos y ponderar con tranquilidad y sin molestas urgencias materiales las ventajas de la nueva pieza jurídica. Además, como pocos de ellos son sociólogos o politólogos ignoraron las diferencias existentes entre los niveles local, provincial y nacional del complejo sistema estatal, máxime cuando escucharon y vieron al presidente solicitándoles su voto por el Sí. Es que, también por una cuestión de perspectiva, los que están sumergidos en lo más profundo de un valle pantanoso e insalubre no discriminan demasiado entre los que habitan en las más altas cumbres. Las rencillas y disputas del Olimpo no se oyen ni se ven desde el llano.

El significado de este rotundo triunfo del NO es muy simple: la gente repudió las políticas de ajuste que han agravado sus

sufrimientos hasta lo indecible. Estas fueron las razones del NO; otra cosa es lo que pueda ocurrir luego de esta súbita debacle del sistema partidario. Solo los contumaces ideólogos del neoconservadurismo —eximios saltimbanquis de la política argentina— pueden escamotear una verdad tan elemental y decir que lo que se rechazó fue el nuevo articulado de la constitución o las desprolijidades del acuerdo entre la Unión Cívica Radical [UCR] y el PJ o el prestigio de la clase política y los partidos tradicionales. Algo de eso hubo, es cierto, pero lo esencial fue lo otro: que si la vida se ha convertido en un infierno es debido a las políticas que pretenden conducirnos al paraíso liberal. Conclusión: no hay ajuste capitalista que sea “democrático y popular” y el pueblo dio su veredicto. Por eso el plebiscito fue una gravísima advertencia para quienes piensan que se puede pauperizar a la sociedad y ganar elecciones al mismo tiempo.

(7 de agosto de 1990).

Más allá de toda sospecha

La caída de Luis Barrionuevo, por cuyas manos pasaban la mayor parte de los fondos de la seguridad social de nuestro país, es una alentadora noticia para nuestra democracia. Jactancioso, el creador del “hipermenemismo” saltó a una dudosa celebridad asegurando que su fortuna no la hizo trabajando sino gracias a otros artilugios. Como si esto no fuera grave dijo también que de esa manera había logrado aportar un millón de dólares a la campaña electoral del presidente Menem.

Es sabido que la democracia es un régimen fastidioso para los gobernantes: sus acciones deben ser transparentes, de suerte tal que los ciudadanos puedan conocer lo que hacen las autoridades y controlarlas. Por eso todos los gobiernos, aun los que hacen gala de un ardiente credo democrático, son irresistiblemente atraídos por el secreto, las intrigas y las sombras. Allí están los escándalos, espionajes, fraudes y negociados que periódicamente conmueven a la opinión pública mundial: Watergate, los “Pentagon Papers”, el *affaire* “Irán-contras” y las turbias conexiones de Noriega con la CIA son algunos de los ejemplos más destacados y vicios análogos carcomen crónicamente a casi todas las democracias europeas. Ni siquiera un principado eclesiástico como el Vaticano —que según observaba con sorna Maquiavelo (1513) no podía tener problemas porque de su prosperidad se ocupaba el propio Dios— está exento de estos escándalos:

recuérdese el caso del cardenal Marcinkus y su inescrupuloso manejo de las finanzas del obispo de Roma, más propio de los sombríos administradores de Al Capone que de un pío pastor de almas.

En muchos de estos casos los corruptos sufrieron duras sentencias. Otros quedaron en libertad, indultados: pero para eso Richard Nixon tuvo que renunciar a la presidencia de los Estados Unidos, por una falta que —por comparación a las habituales en la Argentina— es apenas una travesura de *kindergarten*. En síntesis, lo que distingue al caso argentino no es la comisión de actos reñidos con la moral pública y la legislación republicana —que ocurren en *todas* partes— sino el alarmante grado de impunidad que parecen gozar los individuos involucrados en tales hechos. Mareados por las traicioneras alturas del poder son muchos los que creen que aquélla no tiene límites. Muy pronto se darán cuenta de su error, pero ya será tarde.

Es obvio que la historia de la corrupción en la Argentina no comienza con la carta del embajador Todman ni con las revelaciones del exjefe del Administración Nacional del Seguro de Salud [ANSSAL]. Es tan vieja como nuestra historia, solo que en el marco de la decadencia nacional que nos agobia prolifera descontroladamente, afectando tanto al gobierno como a la sociedad civil. Fue Lord Acton quien dijo que “el poder corrompe, y que el poder absoluto corrompe absolutamente”. La historia de la corrupción es pues antiquísima, tanto como la del poder político. Un corolario inquietante para los regímenes presidencialistas como el nuestro: a mayor concentración del poder, mayor propensión a la corrupción. Por eso las autocracias son siempre más corruptas que las democracias. Por otra parte, tampoco se trata de que el exfuncionario haya revelado algo que todos ignoraran. ¿Quién no sabía que el “enriquecimiento inexplicable” de la mayoría de la dirigencia sindical y política —no de todos, porque hay honrosas y alentadoras excepciones— se explica por el uso discrecional que se hace de los fondos gremiales y públicos? Lo que causó asombro no fue la supuesta revelación de Barrionuevo sino el desparpajo con que este se burló de valores sociales fundamentales.

Por eso el sindicalista se sorprendió ante el revuelo causado por sus dichos: “¡Pero si todos hacen lo mismo!”, balbuceó una y otra vez, y hasta el propio presidente —y Monseñor Quarracino, siempre solícito con sus amigos— minimizaron el alcance de sus gravísimas declaraciones. Pero eran otros tiempos: ahora, conmovido por la vertiginosa descomposición de su gobierno —que parecía haber tocado el cielo con las manos en esos días, lejanísimos ya, del 3 de diciembre de 1990, y que hoy se encuentra a la deriva— Carlos Saúl Menem parece tardíamente dispuesto a desembarazarse de tan indeseables colaboradores.

¡Cómo cambiaron los tiempos! Unos cuantos meses atrás, en un memorable programa televisivo, el señor Barrionuevo paralizó a sus contertulios al dirigirse a la cámara y asegurar que “si dejáramos de robar durante dos años este país sale adelante”. Fue un “lapsus”, obviamente. Pero Freud decía que este es nada menos que la vía regia que revela los secretos que custodiamos más celosamente. En ese momento la sociedad no reaccionó ante tamaña afrenta. Hoy, afortunadamente, del estupor se ha pasado a la protesta y la discusión, lo que no es poco. Impulsado por las escandalosas revelaciones del Swiftgate y las amenazantes sombras que se proyectan sobre las privatizaciones comandadas por el ministro Dromi, Menem decidió remover al jefe del ANSSAL. Sin embargo, sus intentos parecen muy débiles y contradictorios, y en el caso que nos ocupa Barrionuevo se las ingenió para “atornillar” unos cuantos miembros del directorio y colocar a uno de los suyos como su sucesor. ¿Se habrá percatado el presidente que si no combate a fondo la corrupción nuestra democracia sucumbirá irremediabilmente?

(28 de enero de 1991).

Maquiavelianas

Al presentar su libro *Estados Unidos, la Argentina y Carlos Menem*, el presidente reivindicó la figura de Nicolás Maquiavelo. Dentro del torrente de infortunios que agobian a nuestro pobre país —desde militares levantiscos que masacran a civiles circulando en colectivo hasta la pobreza extrema fríamente programada por los artífices del ajuste neoconservador— la noticia de las buenas lecturas presidenciales no deja de ser alentadora.

En su alocución Carlos Menem se refirió a un pasaje del capítulo 6 de *El Príncipe*, en el cual se discuten las dificultades que acechan a los gobernantes que pretenden reformar a sus sociedades. Sin embargo, la genuina comprensión del argumento total de Maquiavelo requiere tomar en cuenta algunos otros pasajes de su libro. Veamos.

Maquiavelo es el primer gran teórico del moderno Estado nacional. Y si se preocupó por la preservación del Estado fue porque lo percibió como una condición necesaria para la supervivencia de la vida civilizada. Su destrucción precipitaría el retorno de la barbarie y el imperio de la violencia. La reflexión del teórico llega al siguiente resultado: el Estado fundado sobre el apoyo popular es más estable, seguro y poderoso que el que reposa sobre la calculada e incierta benevolencia de los magnates. En el capítulo 20, hablando del poder militar, nos dice que para un gobierno no hay mejor fortaleza que la confianza del pueblo, y que si este odia a su gobernante no habrá

nada que pueda salvarlo. Anteriormente, en el capítulo 12, había dicho que no podían existir buenas leyes donde no hubiera un buen ejército, y que allí donde este existiera la república tenía que sujetarlo y controlarlo mediante una sabia legislación. En los *Discursos* —el libro complementario de *El Príncipe*— Maquiavelo ahonda en algunas de estas cuestiones: la impunidad de quien ofende las leyes de la república es percibida por el pueblo como un acto de ignorancia o de cobardía de parte del gobierno (II.23); demuestra asimismo el nefasto error contenido en la creencia de que con paciencia y bondad se puede extinguir la maldad de quienes se sublevan contra la república y que distribuyendo recompensas entre ellos —indultándolos, por ejemplo— se pondría fin a su hostilidad (III.3). También se refiere a los efectos indeseables de castigar a algunos y beneficiar a otros con la impunidad, porque de este modo se alienta la repetición de las faltas (III.49) Por último: es más probable que las conspiraciones las encabecen aquellos a los cuales el príncipe les concedió excesivos favores que quienes fueron víctimas de su sobrado rigor (III.6).

Habida cuenta de la situación prevaeciente en Italia —una Iglesia sumida en el escándalo, un clero lascivo y licencioso, nobles sanguinarios y satrapías insaciables— no es de extrañar que el gran teórico florentino dedicara su atención al tema de la corrupción: así nos enteramos que pocas cosas pueden ser peores para la salud de la república que designar para un cargo público de importancia a quien haya procedido deshonestamente (III.17). Por otra parte, el gobernante debe prestar mucha atención a la elección de sus ministros y secretarios: el primer —y más perdurable— juicio sobre la calidad de la autoridad se construye a partir de las impresiones que proyectan quienes constituyen su entorno (*El Príncipe*, capítulo 22). En el capítulo siguiente recomienda a los gobernantes que se cuiden de los adulones: son una verdadera peste —que en la Argentina adquiere proporciones inquietantes— pues impiden que el gobierno se entere de la verdad, sin la cual es imposible garantizar la estabilidad del orden político.

Por último, conviene recordar que Maquiavelo abre sus *Discursos* con un luminoso análisis del papel que le cupo al conflicto social —y a la tumultuosa presencia de los plebeyos en las calles— en la gestación de la república romana. Fue el perpetuo desacuerdo entre estos y el Senado patricio lo que hizo de Roma una república “libre y poderosa” (I. 4). Vale la pena recordarlo, sobre todo cuando leemos que el ministro Mera Figueroa —en lo que sin duda constituye una inadmisibles confusión— acaba de declarar que “no hay ninguna distinción ética entre quienes hacen actos como los que han hecho ciertos sectores de las Fuerzas Armadas y los que, por medios pacíficos y a través de la movilización de cualquier hecho, pretenden derrocar al Gobierno” (*Clarín*, 8 de diciembre de 1990, p. 24). Haciendo gala de una sutileza nada envidiable el ministro compara lo incomparable: el cruento motín carapintada y las marchas del silencio que —sin agresiones, insultos ni provocaciones de ningún tipo— organiza la población de Catamarca ejerciendo su derecho constitucional de peticionar a las autoridades y exigir justicia ante un crimen monstruoso que nos ofende como comunidad civilizada. Tal vez la atenta lectura de Maquiavelo pueda servir para iluminar la inteligencia de nuestros gobernantes.

(11 de diciembre de 1990).

La cuenta regresiva

Y de golpe se rompió el hechizo. Se acabó la luna de miel, cuando cualquier cosa que hiciera el presidente —desde rematar empresas del Estado fundadas por Juan Domingo Perón hasta manejar como un bólido por una ruta congestionada de turistas— era festejada como una muestra más de esa incomparable picardía argentina. Los guiños cómplices de sus amigos —que lo igualaban a Gorbachov o a Bush— se transformaron en feas muecas de perplejidad y desazón. La “magia del carisma” se disipó de la noche a la mañana: roto el encanto, las acciones del gobierno pasaron a ser crecientemente repudiadas por una sociedad que parece haber agotado su paciencia. Lo que antes festejaba ahora la irrita, le parece de mal gusto o, a veces, francamente inmoral: la esperanza se ha transformado en hartazgo. ¿Qué ocurrió? Luego del 29 de diciembre —fecha aciaga si las hay— todos los demonios se soltaron y el gobierno comenzó el año a los tumbos y a la defensiva. Después de ese día maldito, gobernar se ha vuelto una pesadilla, con el agravante de que la víctima no puede despertarse sola. Necesita que el pueblo la despierte; pero este solo puede hacerlo con la voz de las urnas, lo cual constituye un remedio más grave que la enfermedad.

El indulto provocó una verdadera reacción en cadena, que rápidamente afectó a las relaciones del gobierno con la sociedad civil. La respuesta de la opinión pública y de la prensa de los países del

primer mundo no pudo ser más negativa: los principales diarios norteamericanos —encabezados por el *Washington Post* y el *New York Times*— y europeos fulminaron la decisión presidencial. En las encuestas una sólida mayoría de dos tercios de los argentinos se manifestó en contra. Además, tal como había sido reiteradamente anticipado por este diario, una vez liberados los excomandantes comenzaron a formular insolentes declaraciones: no solo quieren la libertad sino también la gloria. No les basta con el indulto: sádicamente nos exigen que los amemos y que les pidamos perdón por haberlos enviado a la cárcel. El gobierno se paralizó, sorprendido por la ingratitud de los beneficiarios del indulto y por la irritación de una población empobrecida que observa con rabia cómo ciertos amigos y estrechos colaboradores del presidente hacen alarde de su riqueza mal habida. La gente consideró inadmisibles ser obligada a soportar la reaparición de aquellos esperpentos, cuya legítima condena había constituido —según el siempre cauteloso *New York Times*— “el mayor logro del país en los últimos sesenta años” y que el “presidente Carlos Menem de Argentina ha tirado a la basura” (*New York Times*, 15 de enero 1991).

Atontado por las inesperadas reacciones, el gobierno intentó sin éxito conjurar las fuerzas mágicas que en el pasado lo habían salvado. Pero sus propias contradicciones lo devoraban: las temidas elecciones serán a fin de año; no: serán el 6 de octubre, dice Mera Figueroa; no: serán el 8 de septiembre, retrucan desde la presidencia. A poco andar estalla el Swiftgate, desencadenado por un serio y documentado artículo de Horacio Verbitsky (1991): un “incidente menor y sin importancia, obra de delincuentes periodísticos”, dicen sin demasiada sobriedad desde la Casa Rosada; un gravísimo episodio que revela que la corrupción alcanza los niveles superiores del gobierno, susurra diplomática pero mortíferamente el embajador Todman. ¿Acaso el presidente desde la Asociación de Bancos no había acuñado una odiosa palabreja, “cleptocracia”, para referirse a una práctica que, desde hace años, anida en nuestra administración? ¿Quién podía desconocer la existencia de un cáncer que hace mucho tiempo nos está matando?

Las consecuencias del indulto y del Swiftgate han sido demoledoras: las relaciones con los Estados Unidos —cuyo Departamento de Estado, en un gesto poco frecuente, respaldó inmediatamente y por escrito los reclamos de Todman— fueron irreparablemente dañadas por esta nueva “galteriada”, como acertadamente la calificara Martín Granovsky (Granovsky, Martín y Ciancaglini, 1986), que les resta credibilidad y previsibilidad a los gestos y concesiones del gobierno. Además, la liberación de Suárez Mason, “enjaulado” de verdad por la justicia norteamericana, es un trago amargo que en Washington todavía no terminan de pasar. Con la administración Bush doblemente irritada; con una opinión pública nacional que ha hecho del indulto y la corrupción dos temas centrales de su agenda; con varios ministros y asesores renunciados y con un Ministerio de Obras y Servicios Públicos que desaparece de un plumazo; con la frágil estabilidad del austral y las voraces clases dominantes afilando sus cuchillos para un nuevo “golpe de mercado”; con el PJ en ruinas y el sindicalismo en avanzado Estado de descomposición; con los jubilados a la ofensiva y los empleados públicos sin cobrar, ¿podrá el gobierno retomar la iniciativa política que tuvo hasta el fatídico 29 de diciembre? No: todo parece indicar que ya, antes del resultado electoral, ha comenzado su cuenta regresiva.

(17 de enero de 1991).

II. Estado y burguesía

El asalto al Estado democrático

El agravamiento de la crisis económica ha impedido apreciar la importancia del resurgimiento autoritario sufrido en estos quince días. Dos hechos lo resumen con claridad: primero, la prepotente reafirmación del poder de veto de la corporación militar, que resolvió que los argentinos no debíamos ver un documental reseñando la historia del último cuarto de siglo.⁶ Segundo, el frontal ataque a la institucionalidad democrática producido por la ofensiva de la clase dominante, que primero provocó la crisis del dólar para luego tratar de recomponer el juego político imponiendo sus proyectos, sus ideas y sus hombres.

El asalto perpetrado por las diferentes fracciones de la burguesía sobre el Estado democrático, ansiosas por consolidar sus poderes corporativos y sus “esferas de influencia” antes del recambio presidencial, configura una inédita tentativa de golpe de Estado de nuevo tipo. A diferencia de los anteriores no se han utilizado ni fusiles ni bayonetas sino las mesas de dinero y el dólar, pero sus resultados fueron igualmente devastadores. En efecto, la calculada especulación con la moneda norteamericana produjo una masiva transferencia de ingresos hacia la clase dominante, empujando al país al borde de la hiperinflación e intensificando la pauperización de los

⁶ Nos referimos al levantamiento del ciclo *El Galpón de la Memoria*. Ver *Página/12*: “Versiones sobre un mismo galpón”, 27 de octubre de 1989, p. 8.

asalariados. Además, reforzó el predominio de los monopolios y las fracciones más concentradas de la burguesía mediante dos procesos combinados: primero, realizando una gigantesca “eutanasia” de pequeños y medianos capitalistas, quebrados por la fiebre especulativa desatada por el gran capital; segundo, expropiando las poquísimas divisas que todavía obraban en poder del Estado y privándolo así de los recursos materiales que lo capacitarían para desbaratar a la voluntad avasalladora del capital. De esta forma, la clase dominante somete por completo a un Estado en bancarrota, desorganizado e impotente.

Las consecuencias políticas de este “golpismo de guante blanco” son gravísimas, puesto que los marcos institucionales que articulan y expresan la soberanía popular en el Estado democrático son mortalmente amenazados por la feroz embestida de las clases dominantes. En las democracias capitalistas la burguesía nunca domina directamente: siempre lo hace a través de mediaciones político-institucionales —creadas por las luchas democráticas— que al acotar su predominio también ocultan su dominación de clase; la ideología burguesa, con sus velos mistificadores, completa la tarea de las instancias estatales. Pero en coyunturas excepcionalmente críticas estas mediaciones democráticas son soslayadas, y entonces el dominio de la burguesía se transforma en dictadura de clase.

En estos últimos días los representantes corporativos de las distintas fracciones en que se divide nuestra burguesía se han puesto de acuerdo en un plan de “salvación nacional”.⁷ Primero desencadenaron la crisis; luego ofrecieron la “solución” más conveniente para sus intereses conjuntos y exigieron, con insolencia y desparpajo, su inmediata ejecución. De la noche a la mañana se cancelaron las mediaciones político-institucionales distintivas de las democracias capitalistas y la burguesía apostó a convertirse, directamente y sin intermediarios, en una nueva “clase dirigente”, asumiendo por sí

⁷ Se trata del Plan Bunge y Born, apoyado por las organizaciones empresariales más importantes del país.

misma la gestión política de su propio dominio y rescindiendo la institucionalidad que sostiene la soberanía popular. Esta iniciativa conlleva la desaparición de la autonomía relativa del Estado con relación a los dueños del capital, gracias a lo cual aquel puede velar por el interés de la comunidad y evitar que el darwinismo social del mercado condene a la sociedad a la indigencia. Desaparecen también, por superfluos, los complejos mecanismos de la representación política en el seno del Estado democrático, porque la fuerza concentrada de los grandes capitales somete fácilmente a la miríada de votos dispersos que aspiran a constituir, democrática y pluralísticamente, la voluntad nacional. Lo que el Estado haga o deje de hacer será el resultado exclusivo —y excluyente— de lo que decidan los poderes establecidos. La democracia, ultrajada por el despotismo del capital, se convierte en una vacía caricatura de sí misma.

Este es el peligro que nos acecha en la hora actual. Pese a ello, los representantes intelectuales y políticos de la burguesía arguyen que su propuesta de estabilización refleja un “democrático” espíritu de concertación. Sin embargo, ¿cómo olvidar que los que se han puesto de acuerdo son exclusivamente los dueños de la riqueza? Una genuina concertación democrática supone que todos los ciudadanos, sin proscripciones, participen en el juego político mediante sus estructuras representativas, en un pie de igualdad. Nada de eso ha ocurrido aquí: los jefes de las corporaciones plutocráticas se confabularon para proscribir a la sociedad civil, extorsionar al gobierno e imponer sus programas y sus hombres. Si esta iniciativa llegase a triunfar, la democracia argentina se enfrentaría ante la perspectiva cierta de una inexorable derrota.

(3 de mayo de 1989).

¿Se puede controlar la crisis?

La gravedad de la actual coyuntura económica y política difícilmente puede ser exagerada. El impacto económico del golpe de Estado asestado por la coalición de las fracciones más concentradas de la burguesía ha sido tremendo. Los datos actuales son tímidos atisbos de lo que realmente nos tocará padecer en el momento en que la hiperinflación se desate en serio: ruptura de los mecanismos de crédito y pago, incumplimiento de contratos privados y públicos, desaparición de los precios, destrucción de la moneda y febril atesoramiento de divisas. Frente a esto, ¿qué podemos hacer?

En primer lugar, es necesario proceder a un diagnóstico correcto de las raíces estructurales de la crisis y de los intereses fundamentales de las diversas fuerzas sociales enfrentadas en esta coyuntura. A continuación, obrar con la máxima energía y la mayor celeridad posibles, en el convencimiento de que el tiempo solo servirá para agravar irremediabilmente la situación.

Veamos un ejemplo histórico: el de la Alemania de la segunda postguerra. Nuestros liberales han difundido historias fantásticas acerca del milagro alemán, ocultando maliciosamente lo que realmente aconteció. Nos hablan del mercado libre y de la magia de la “mano invisible” que convirtió a una nación devastada por la guerra en la gran potencia industrial de Europa. La conclusión que extraen es que saldremos de nuestra crisis liberando a los mercados,

fortaleciendo a los grandes grupos económicos y dejando que las sabias leyes de la economía capitalista se encarguen de reproducir el milagro. Sin embargo, lo que ocurrió fue bastante diferente: hacia principios de 1948 la situación era parecida a la que hoy nos agobia, con una economía caótica y desquiciada, un agudo desabastecimiento de alimentos y otros productos esenciales, mercado negro, desplome de los salarios reales e inflación descontrolada. ¿Qué hizo el gobierno, de un día para otro y sin previo aviso? El 20 de junio impuso una drástica reforma monetaria que, en realidad, fue una verdadera expropiación masiva que afectó antes que nadie a los grandes capitalistas alemanes. Cada habitante, institución o empresa fue obligado a blanquear sus activos dinerarios en efectivo o depositados en cuentas bancarias. Luego, esos viejos *Reichmarks* fueron transformados en los flamantes *Deutschmarks* [DM], a razón de 6,5 DM por cada 100 *Reichmarks*. Además, a cada adulto se le entregó 60 DM, con un valor aproximado de 5 libras esterlinas, en dos cuotas y que equivalían a un salario semanal. A cada empresario se le asignó 60 DM por cada trabajador empleado en su firma. En suma, una gigantesca expropiación de capitales, en donde aquellos que mucho tenían vieron reducido su patrimonio al 6,50 % de lo que poseían antes de la reforma, mientras que la gran mayoría de la población, que se debatía en la indigencia y la pobreza extrema causadas por la guerra, fue favorecida por esta masiva transferencia de ingresos. La “deuda interna” del fisco, que había adquirido colosales dimensiones, fue simplemente desconocida unilateralmente sin ningún tipo de compensación, en el entendido de que los desórdenes de los mercados y la orgía especulativa que se había abatido sobre Alemania ya habían retribuido con creces a los voraces prestamistas del Estado. Al mismo tiempo, y en concordancia con la política establecida en relación con las obligaciones del fisco, las deudas privadas fueron reducidas a la décima parte de su valor produciendo la práctica cancelación de todas ellas. Simultáneamente se establecieron rígidos controles de precios en los productos y servicios de primera necesidad (alimentos, transporte, alquileres, electricidad y gas), liberando a todos los

demás. A diferencia de los consabidos “congelamientos salariales” que patrocinan nuestros liberales, los sueldos y salarios también fueron liberados pocas semanas después de la reforma monetaria. Junto con todas estas medidas se puso en marcha una política tributaria progresiva, gravando fuertemente al capital y los ingresos de los grandes contribuyentes. En síntesis: un programa de reconstrucción económica que no guarda ningún parecido con la ortodoxia neoliberal que se ha entronizado en nuestra vida política.

¿Cuál fue el resultado de estas medidas? El estancamiento de la producción industrial, que se arrastraba desde los finales de la guerra fue superado por un espectacular aumento del 50 % al cabo de un año de reforma económica. El desabastecimiento fue rápidamente controlado, el mercado negro desapareció y la crisis fiscal del Estado fue conjugada. Al cabo de un par de años —turbulentos y conflictivos— la economía alemana comenzaba a transitar por el sendero de una asombrosa recuperación. Todas estas medidas, tomadas por un gobierno demócrata cristiano en un país ocupado por los Aliados, no tuvieron nada de milagroso: simplemente destruyeron el poder económico del gran capital, es decir, de los acreedores del Estado y de los responsables principales de la inflación descontrolada, que luego tuvieron que adaptarse a las nuevas reglas del juego en donde los intereses de la comunidad estarían mejor preservados. No se nos escapa que la situación de Alemania en 1948 no es estrictamente comparable a la nuestra: su economía no estaba dolarizada como la Argentina y en aquellos años el comercio internacional prácticamente no existía. Además, el país europeo era un baluarte crucial en el equilibrio político mundial, y por eso mismo recibió una importante ayuda norteamericana. Pero no hay reforma que triunfe sin enfrentar a los intereses creados, y la de Alemania tuvo que doblegar la voluntad de los Aliados y, sobre todo, de los Estados Unidos, que la aceptaron como un hecho consumado a pesar del profundo disgusto que les causaba. Esto demuestra que, si un gobierno tiene la voluntad política para llevar adelante las reformas estructurales y, condición esencial, se apoya en el campo popular para viabilizar políticamente

sus proyectos, las resistencias domésticas e internacionales pueden ser neutralizadas.

La Argentina se encuentra ante una encrucijada absolutamente crítica de su historia: nuestro futuro depende de algunas pocas grandes decisiones que tienen que tomarse de inmediato. Reiteradamente se ha señalado la enorme responsabilidad que la llamada “patria financiera” y los grandes conglomerados empresariales tienen en el estallido de la crisis que hoy nos abruma. Hace ya muchos años que estamos ante una economía de guerra y el gobierno, que en 1985 lanzara la frase, pero sin demasiada convicción, parece haber despertado y estar dispuesto a actuar. Si ahora cree que estamos en una economía de guerra tiene que adoptar medidas drásticas y estructurales contra los enemigos. No hay guerra sin enemigo, y si el gobierno fracasa en derrotarlos la crisis nos puede sumergir, de ahora a diciembre, en la más horrenda de las pesadillas. Por eso ni vale la pena intentar algo que sea apenas un retoque superficial: hace falta una operación de cirugía mayor si queremos extirpar, de una vez por todas, el cáncer de la especulación, la inflación y el déficit fiscal que está amenazando mortalmente las posibilidades de consolidar nuestra democracia y nuestra convivencia civilizada. Esa es la lección de Alemania: no se trata de repetir la misma receta, porque las condiciones son diferentes, sino de emular la valentía para encarar una transformación profunda sabiendo que ella, inevitablemente, provocará la reacción de los intereses afectados. Pero también habrá reacción si se decide por el curso aparentemente menos conflictivo de “no hacer nada que moleste a nadie”. Si se optara por este “facilismo político”, y vale la pena recordar las nutridas críticas de los funcionarios gubernamentales en contra del “facilismo” económico, podemos pronosticar sin temor a equivocarnos que la crisis desembocará en un final catastrófico. Es hora de grandes decisiones, donde los cálculos mezquinos van a ser desbaratados como hojas en la tempestad. O la democracia controla y supedita a los dueños oligopólicos del mercado, responsables del caos actual, o aquellos terminan con la democracia. Es una simple cuestión de supervivencia, y la historia enseña

que la opción es durísima e inexorable. Si el gobierno retrocede atemorizado o actúa tibiamente, el triunfo total del mercado habrá de cancelar, por muchos años, nuestra vida democrática.

(26 de mayo de 1989).

Saqueadores de cuello blanco

El proyecto neoconservador adoptado por las nuevas autoridades ha comenzado a exhibir algunos de sus rasgos más crueles y clasistas: allí están los tarifazos y las remarcaciones carcomiendo, día a día, las esperanzas y los ingresos de las clases populares. Sin embargo, conspicuos voceros gubernativos han señalado que este es el precio que hay que pagar para reconstruir al capitalismo argentino sobre nuevas bases que aseguren su crecimiento y estabilidad en el largo plazo. Para que esta propuesta “cierre” hace falta no solo reconcentrar el ingreso sino también dismantelar al conjunto de mediaciones estatales que atenúan el despotismo del mercado; también es preciso sanear al Estado para que vuelva a ser funcional al proceso de acumulación. Una vez que la sociedad se encuentre indefensa frente a los dinosaurios del mercado, los oligopolios pueden hacer sus negocios a voluntad transfiriendo, sin plebeyas interferencias, los gigantes costos del reajuste económico a las clases y capas subalternas.

Esto es lo que ha venido ocurriendo en la Argentina desde el momento en que las fracciones más concentradas de la burguesía tomaron por asalto al Estado el 6 de febrero y legitimaron su dominio instalando a sus hombres en algunos puestos clave del aparato estatal a partir del 8 de julio. La vertiginosa escalada de los precios no guarda ninguna proporción con los aumentos reales experimentados por sus diversos insumos y los acuerdos sobre ellos son violados con total

irresponsabilidad ni bien son dados a conocer. Por otro lado, las tarifas de los bienes y servicios producidos por el Estado han registrado alzas espectaculares e inéditas en nuestra historia mientras que los salarios —y las jubilaciones y las pensiones de la clase pasiva— son reajustados con cuentagotas. Como en las fases más primitivas del desarrollo capitalista, el pueblo es doblemente explotado: por una burguesía que lo expropia con sus precios y por un Estado que lo pauperiza con sus tarifas e impuestos regresivos. La tributación de los grandes propietarios de capital, por el contrario, se ha mantenido en los ridículos niveles que hacen de nuestra burguesía la clase que menos impuestos paga en el mundo. Fue por eso que Jeffrey Sachs, artífice del programa antinflacionario boliviano y personaje insospechado de ser portador de ideas contrarias a nuestro “ser nacional”, dijo que lo primero que había que hacer en este país para acabar con la hiperinflación era disminuir radicalmente los gastos del Estado y, al mismo tiempo, lograr que nuestros capitalistas se tomaran la molestia de pagar los impuestos que corresponden a la magnitud de su riqueza. Dada la tradicional sordera que aqueja a la clase dominante su consejo fue escuchado solo a medias: por eso aquí se disminuirán los gastos del Estado y se tratará de poner en marcha la privatización forzada de sus principales empresas sin que hasta ahora nada sepamos acerca de una reforma impositiva que grave en serio a los que más tienen y redistribuya la riqueza social hacia los sectores más carenciados. Es por eso que el necesario saneamiento fiscal del Estado, crucial para el éxito de los negocios de la burguesía, habrá de ser enteramente financiado por la violenta exacción a la cual se encuentran sometidas las clases populares por la vía de los precios, los salarios y las tarifas.

Es importante comprender que este verdadero saqueo, en donde pulcros y almidonados caballeros de saco y corbata despojan a una sociedad atónita e indefensa, no es producto de “errores o excesos” de funcionarios que no saben lo que están haciendo. Muy por el contrario, estamos en presencia de un proyecto coherente e integral de refundación del capitalismo argentino —bajo la hegemonía de una

nueva fracción burguesa— que conscientemente ha seleccionado a sus víctimas y a sus ganadores. Las primeras se reclutan en el conjunto de clases y capas populares, incluidos nuestros pauperizados sectores medios; los triunfadores son la pequeña minoría que detenta el control del gran capital, los grupos sociales aliados a su hegemonía de clase y aquellos sectores empresariales que de una u otra manera puedan quedar “enganchados” en este nuevo bloque histórico. Uno de los resultados de este proyecto será la transformación de los pobres en indigentes, quebrados no solo económicamente sino también política y culturalmente, neutralizando toda capacidad contestataria desde la base para permitir, de este modo, el tranquilo dominio de la burguesía sobre el conjunto de la sociedad. El reverso de esta moneda es, naturalmente, la consolidación de una clase dominante extraordinariamente poderosa tanto en términos económicos como políticos, aun a costa de la destrucción de las fracciones menos concentradas del pequeño y mediano capital.

Las consecuencias de esta “contrarrevolución burguesa” —cuyos contenidos reaccionarios son insoslayables— son múltiples e inquietantes. La aplicación de proyectos similares en Gran Bretaña y los Estados Unidos agudizó las desigualdades sociales y económicas preexistentes, haciendo que la opulencia de algunos repose sobre la pobreza extrema de muchos. En segundo lugar, el neoconservadurismo hizo mucho más problemática la ya de por sí difícil coexistencia entre democracia y capitalismo. No por nada estos proyectos fueron acompañados por una serie de medidas tendientes a recortar los “excesos democráticos” que la burguesía percibía como causantes de la inflación y el estancamiento de los años setenta. Sus principales ideólogos no vacilaron en abogar por el sacrificio de ciertas conquistas democráticas a fin de preservar la estabilidad de la tasa de ganancia. El neoconservadurismo ha producido más injusticia, más desigualdad y menos democracia, todo lo cual exacerba los antagonismos sociales y predispone a la sociedad civil a responder a la feroz agresión económica de que es objeto con otras formas de violencia

individual y colectiva que en los últimos tiempos han ensombrecido nuestra convivencia civilizada ¿Es esto lo que quieren los argentinos?

(28 de julio de 1989).

Memoria de las privatizaciones

Uno de los temas que asombraba a Jorge Luis Borges era la tortuosa relación que los argentinos tienen con la historia. En sus laberintos se desgastaba nuestra memoria colectiva hasta alcanzar la extraordinaria fragilidad que la caracteriza. Somos, por eso mismo, un pueblo que recuerda poco y mal. El llamativo consenso “privatizador” que se ha instalado en la Argentina actualiza, una vez más, la vigencia de las preocupaciones borgeanas. Si se repasan, aunque sea someramente, los términos del debate nacional, daría la impresión de que en este país jamás se privatizó nada. Por eso uno puede escuchar a algunos políticos, funcionarios y publicistas hablar como si fueran hombres que cavilan sesudamente el primer día de la creación del mundo: discuten y se entusiasman como si no tuvieran una historia por detrás y el resto de la sociedad no existiera o estuviera compuesta por desmemoriados incurables.

Veamos un poco. No hace mucho que se privatizaron dos canales de TV que sirven a Buenos Aires y alrededores. Desde entonces la cultura y la civilización se derraman a raudales sobre los hogares de esta afortunada ciudad, colaborando eficazmente en la ímproba tarea de “educar al soberano” y regenerar los destrozados tejidos de la solidaridad social. Pero no solo eso: además los porteños nos hemos beneficiado con un abundante flujo de información de alta calidad sobre temas fundamentales de nuestra vida cotidiana. Un ejemplo es

suficiente para abonar nuestro argumento: la cabalística caída de un perro desde un piso trece y la macabra carambola que culminó con tres muertes en el barrio de Flores fue cubierta prolija y profusamente por los canales privados de televisión, en un alarde de profesionalismo y rigor informativo que nos hizo recordar las hazañas de los audaces periodistas que descubrieron el *affaire* Watergate y provocaron nada menos que la caída de Nixon. Noticias intrascendentes, en cambio, como la crisis de Semana Santa de 1987, recibieron mercedamente escasa atención en dichos medios. Recién el sábado por la tarde, impulsados por el alto *rating* de los canales oficiales, decidieron otorgar una cierta cobertura a esas nimiedades. De esta manera los argentinos nos ahorramos, gracias a la responsabilidad social y la seriedad de la TV privada, tres días de injustificada zozobra. Los canales estatales, por el contrario, empeñados en una pérfida campaña sensacionalista destinada a alterar el orden público —y que tanto desánimo y confusión siembra en los hogares argentinos— se regocijaron propalando “malas ondas” desde el miércoles.

Si miramos a la educación superior también comprobaremos que ella fue parcialmente privatizada, en 1958, durante el gobierno de Arturo Frondizi. Gracias a esta sabia decisión el país se ha beneficiado con una verdadera avalancha de Houssays, Leloirs y Millsteins⁸ surgidos de nuestras universidades privadas y que desarrollaron la investigación y la docencia al más alto nivel mundial. Si fuéramos un país con memoria deberíamos agradecer a la labor pionera y comprometida de las empresas privadas dedicadas a la educación universitaria que hicieron posible el progreso de nuestras ciencias. Esto a pesar de que algunos estatistas recalitrantes mascullen que a treinta años de sancionada la privatización de las universidades el esfuerzo fundamental en la formación superior y en la investigación básica ha seguido cayendo sobre las maltratadas universidades públicas.

⁸ Bernardo Houssay, Luis F. Leloir y César Millstein son los tres premios Nobel de ciencia de la Argentina, todos egresados de la Universidad de Buenos Aires.

En los años del Proceso también hemos tenido la suerte de haber privatizado la atención médica. Después de haber desangrado presupuestariamente a los organismos encargados de la salud pública cada argentino puede finalmente elegir la empresa que se hará cargo de vigilar la suya propia, desembolsando en algunos casos una módica suma que oscila entre los veinte y treinta mil australes mensuales, cifra que, como es público y notorio, está al alcance de cualquier bolsillo por más modesto que sea. La favorable evolución de los indicadores nacionales de salud y atención médica son hoy motivo de admiración en el mundo entero.

Otro ejemplo, para concluir, es la privatización de la vieja Corporación de Transportes de Buenos Aires, mérito que recientemente reclamara para sí el Ingeniero Alsogaray, y que originara la densa red de colectivos urbanos en los cuales centenares de miles de porteños viajan cómoda y seguramente día y noche, en vehículos modernos, con aire acondicionado, especialmente adaptados para el transporte de niños y ancianos, conducidos por choferes que manejan con la delicadeza de una institutriz suiza, estacionando prolijamente sobre el cordón de la vereda y controlando obsesivamente la emisión de gases tóxicos que podrían poner en peligro la salud de los habitantes de la urbe.

Los ejemplos mencionados son apenas pálidas pruebas de los enormes progresos realizados en las cuatro áreas en las cuales han funcionado diversos esquemas de privatización. La superioridad de los canales privados sobre los estatales es inapelable, lo mismo que la de las universidades privadas sobre las públicas. Los planes prepagos de salud son mucho mejores que la arcaica cobertura estatal, aun cuando todavía subsistan algunas insignificantes distorsiones en lo relativo al acceso a la salud para algunas minorías que, por su indolencia, carecen de los recursos necesarios para pagar estos servicios. Tampoco puede discutirse la superioridad de los colectivos sobre los subterráneos municipales. Es por eso que el pueblo, que por suerte recuerda todas estas cosas, espera confiado y optimista que la actual fiebre privatizadora liquide todo lo que aún permanece en manos públicas, seguro de que así estará mejor informado, educado, curado y transportado. O, tal vez, espera que se inicie, de una buena vez, una

discusión en serio sobre este asunto dejando de lado los simplismos y los prejuicios interesados.

(4 de agosto de 1989).

Desprivatizando el Estado

La doctrina neoconservadora —actualmente elevada al rango de dogma oficial— se constituye a partir de dos ejes: un ataque frontal al Estado y una empedernida idealización del mercado. Con el maniqueísmo típico de las grandes mistificaciones se sataniza y diviniza a dos productos de una misma sociedad: el Estado pasa a ser todo lo malo, ineficiente y desagradable mientras que el mercado se convierte en el representante de todo lo bueno, eficiente y agradable que existe en esta vida. Es innecesario insistir en el carácter insanablemente falaz de esta antinomia, que deforma la realidad de las cosas y nos impide encontrar el rumbo que necesitamos para salir de la crisis actual.

Que el Estado argentino requiere de urgentes y drásticas reformas es algo que nadie en su sano juicio puede objetar: todos padecemos su ineficiencia, su gigantismo y el gravoso costo que la sociedad debe asumir para financiar su funcionamiento. Por otra parte, ¿quién no se indigna ante la impunidad con que ese Estado —supuesto representante de la soberanía popular— castiga a los pequeños ciudadanos mientras se arrastra obsecuentemente ante los poderosos? A los primeros los agrede con tarifazos fenomenales, pésimos servicios y, para colmo, responde con maltratos y humillaciones a los pobres usuarios que se acercan a sus oficinas a reclamar por una factura mal calculada, un pago no registrado o un servicio que no fue

ofrecido satisfactoriamente. A la clase dominante, por el contrario, la subsidia, la protege y la premia: le ofrece toda clase de incentivos, prebendas y contratos para que invierta sus capitales y promueva sus negocios. Como si lo anterior fuera poco, le ha servido en bandeja de plata los puestos clave de la conducción económica para que gobierne a su antojo, como si el país fuese una de sus tantas empresas.

Aun cuando subsistan empresas públicas no es exagerado afirmar que, en lo esencial, el Estado argentino ya ha sido privatizado: ¿no son acaso los grandes oligopolios privados quienes lo dirigen? Ahora solo resta la prolija aplicación de este bálsamo milagroso por todo el cuerpo estatal. Pero, ¿hasta qué punto la reducción del tema de la reforma del Estado a la privatización del sector público no constituye un ardid retórico por el cual la burguesía legitima su acrecentado dominio sobre la sociedad? En realidad, la reforma del Estado tendría que contemplar tanto la conveniencia de adoptar ciertos esquemas de privatización —no necesariamente equivalentes a un traspaso de la propiedad estatal a empresas oligopólicas, como sugieren los neoconservadores— como la necesidad de introducir algunas modificaciones en el sistema político que permitan profundizar el protagonismo de los sectores populares y reforzar la democratización de las instituciones políticas.

La actual fiebre privatizadora puede ser una buena ocasión para discutir algo que nuestros liberales —en realidad, conservadores vergonzantes— se empeñan en ocultar: la cuestión de “responsabilidad pública” que los gobernantes tienen frente a los gobernados. Este es un principio fundamental en la tradición del liberalismo democrático porque establece la necesidad de que los gobiernos se sometan al contralor de la ciudadanía, planteando serias limitaciones a las ambiciones de independencia que los poderosos anhelan en relación con la sociedad civil. A esta le corresponde refrendar las decisiones que adopte la autoridad, lo cual trasciende los pactos corporativos forjados entre las élites que toman resoluciones fundamentales —como la liquidación del sector público— en nombre del pueblo, pero sin su previa consulta ni autorización. Para temas

tan cruciales existen mecanismos decisionales que confieren una incuestionable legitimidad a la resolución que finalmente se adopte: el plebiscito —que en la Roma antigua designaba a la deliberación del pueblo convocado por el tribuno— es la fórmula óptima para resolver democráticamente estos asuntos, Claro está que ello requiere *aggiornar* algunas de las premisas del pensamiento conservador del siglo XIX presentes en nuestra constitución y que, explícitamente, sostienen que “el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes”. El avance de la democracia en el mundo ha hecho de esta una regla obsoleta, como lo evidencia el uso permanente de los plebiscitos en los principales países del mundo capitalista.

Una política democrática de reforma estatal, por consiguiente, no debiera detenerse en las privatizaciones si es que quiere consolidar este régimen político y reforzar las instancias del control popular sobre el gobierno y la burocracia. En ese sentido lo que hace falta es “desprivatizar” el Estado; hay que “repolitizarlo” mediante la reconstitución de su raíz pública, a fin de que pueda funcionar como expresión de la soberanía popular —esencia no-negociable de la democracia— y no como instrumento corporativo de los intereses privados que hoy lo han colonizado. Por eso es hora de abrir una discusión sobre nuestro arcaico régimen político y revisar cuestiones tales como el presidencialismo, el papel del congreso, el sistema electoral y los partidos políticos, el financiamiento de las campañas electorales y las efectivas garantías a la libertad de prensa, para mencionar algunas “asignaturas pendientes” de nuestra democracia. Cerrar los ojos ante estos problemas y concentrarnos exclusivamente sobre las privatizaciones sería una nueva señal de inmadurez política.

(11 de agosto de 1989).

La burguesía y la tributación

A nadie se le escapa que, hasta ahora, el peso de la crisis se ha descargado sobre los hombros de las clases y capas populares: ellas fueron quienes han absorbido los costos del reajuste puesto en marcha desde el 6 de febrero pasado cuando, “dolarazo” mediante, la clase capitalista puso en marcha una estrategia encaminada a producir un rédito por partida doble. Por una parte, decidió liquidar la experiencia gubernativa del alfonsinismo una vez que las señales enviadas por la administración Bush demostraron claramente que el nuevo presidente norteamericano no iría a relajar las duras condiciones impuestas a la Argentina por la renegociación de su deuda externa. Los grandes tenedores de dólares, los formadores de precios y los acreedores de la deuda interna dejaron al gobierno sin instrumentos de intervención y control en materia de política económica, y tres ministros se sucedieron en el corto plazo de cinco meses sin que ninguno de ellos hubiera podido hacer nada.⁹ Había posibilidades, claro está, en la medida en que alguno se propusiera tomar al toro por sus astas, pero faltó la voluntad política para poner en su lugar a un empresariado que ya había tomado la decisión de asumir el control directo de la economía en el próximo gobierno que iba a surgir de las elecciones del 14 de mayo.

⁹ Ellos fueron los ministros de Economía Juan Vital Sourrouille, Jesús Rodríguez y Juan Carlos Pugliese.

El otro objetivo que se buscaba era no menos ambicioso: mediante esta demostración de fuerza la burguesía creaba un terreno extraordinariamente favorable para condicionar decisivamente al nuevo elenco gobernante. No importa quién resultara electo en el día de los comicios: de hecho, la política que iría a implementar un Estado puesto de rodillas ante la burguesía era la que habrían de dictar los dueños del capital. La propuesta de Angeloz recogía con mucha prolijidad los contenidos esenciales de este programa de la burguesía argentina; la que levantaba el candidato a la postre triunfante se ubicaba en sus exactas antípodas, toda vez que el programa del Frente Justicialista de Unidad Popular [FREJUPO], otro ilustre cadáver de la política argentina, planteaba un programa tan audaz como ilusorio de moratoria de la deuda externa, redistribución de ingresos, nacionalizaciones, etcétera, que solo respondía a las necesidades impuestas por el *marketing* electoral, pero que para nada se compadecía con las realidades del capitalismo argentino a finales de la década de los ochenta.

La caída de los ingresos reales de los sectores populares fue, desde febrero, espectacular. Posteriormente, con el advenimiento del nuevo gobierno, las capas medias y algunos grupos del universo proletario fueron salvajemente castigados con los “tarifazos” cuya magnitud fue de tal grado que dio lugar a fenómenos inéditos en la historia universal: por ejemplo, que los sufridos usuarios de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires [SEGBA], Gas del Estado o Empresa Nacional de Telecomunicaciones [ENTEL] fuesen autorizados a pagar su cuentas en dos mensualidades, como si estuvieran adquiriendo un valioso artículo de consumo con facilidades. Si alguna prueba adicional hacía falta para comprobar lo bajo que habíamos llegado, la experiencia del tarifazo y la incapacidad de la población para pagar una boleta de consumo eléctrico, de gas o de teléfonos son de una elocuencia sin par.

Mientras los pobres contribuyeran a la resolución de la crisis las clases dominantes permanecerían tranquilas y serenas. Ni bien se comenzó a agitar la posibilidad de una reforma tributaria que afectaría

marginalmente sus intereses aquellas comenzaron a manifestar sus primeros síntomas de descontento y a poner en marcha sus eficaces aparatos de propaganda para abortar la tentativa. Es bien sabido que la nuestra es una burguesía extraordinariamente mezquina y cuya resistencia a pagar impuestos la coloca en un lugar casi sin parangón en el sistema capitalista internacional.

Mientras que la burguesía inglesa, desde los albores del capitalismo, se unificaba bajo la consigna de “no tributación sin representación” para evitar que los soberanos impusiesen gravámenes sin su consentimiento, su contraparte argentina parece inspirarse en un lema exactamente opuesto, elevado a la categoría de primer mandamiento: “no tributarás”. Fiel a esta disposición, nuestros empresarios, salvo algunas honrosas excepciones, han eludido y evadido sistemáticamente el pago de los impuestos. Esta es una situación archiconocida por todos, expuesta una y otra vez por ministros de economía, secretarios de hacienda y otros funcionarios del área económica, pese a lo cual la situación nunca pudo normalizarse. Que esta situación constituye un verdadero escándalo lo prueba la insistencia con que voceros de organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional [FMI] o el Banco Mundial, han reclamado en la necesidad de impulsar una reforma que ponga término a esta bochornosa situación.

Como es bien sabido, la abrumadora mayoría de los ingresos del Estado argentino se originan en impuestos indirectos, es decir, en aquellos que gravan al consumo de cierta clase de artículos. Una estructura impositiva centrada en la percepción de impuestos indirectos introduce un elemento de flagrante injusticia en la comunidad, toda vez que aquellos son indiferentes ante las irritantes distinciones sociales que separan el universo de los ricos del de los pobres. El impuesto indirecto grava a todos por igual en el momento en que, como consumidores, compran cigarrillos, naftas, alcoholes o cualquiera de los artículos sometidos al régimen del IVA y que en la próxima reforma tributaria será generalizado aplicándose una cuota del 13% sobre prácticamente la totalidad de los bienes que se

transan en el mercado. Por contraposición, los impuestos al patrimonio y a las ganancias casi no cuentan; en otras palabras, los ricos no pagan y los pobres son contribuyentes cautivos que no tienen como evadir el pago de impuestos que, para ellos, vienen incorporados en los precios de las mercancías que consumen.

Como se comprenderá, una situación de este tipo plantea graves problemas de tipo ético y político. Ético, porque desde el punto de vista de la justicia el Estado refuerza las desigualdades sociales pre-valetientes, sancionando al pobre y premiando al rico. Huelga acotar que en los Estados capitalistas desarrollados esta situación ha sido enérgicamente enfrentada por los sectores populares y sus partidos representativos, que introdujeron cambios en la legislación tendientes a asegurar la progresividad de la estructura impositiva de suerte tal que contribuye más quien más gana o tiene. En la Argentina la situación es exactamente la inversa y, en términos proporcionales, contribuye más el más pobre que el rico.

Pero también hablábamos de problemas de tipo político, porque la legitimidad de un régimen democrático está asociada a dos cosas: por una parte, lo que el Estado haga en provecho de las grandes mayorías nacionales, de su capacidad de efectiva intervención para paliar o solucionar los graves problemas que las afectan. En ese sentido es preciso comprender que la legitimidad del Estado moderno es una batalla permanente que debe revalidarse día a día, produciendo factores que evidencian, concretamente, que ese Estado representa eficazmente los intereses generales de la comunidad y que, naturalmente, siente una especial inclinación por aquellos grupos desfavorecidos y postergados. Además, la legitimidad tiene que ver con la equidad existente en el financiamiento del Estado. Si en una sociedad dada este se mantiene, como ocurre en la Argentina, con los aportes producidos por las clases y capas populares y no como producto de los gravámenes al capital y a la renta (o patrimonio y ganancias) será imposible impedir la propagación de un sentimiento de alienación y de injusticia. La idea del “despojo” se hará carne muy rápidamente, pues no solo es evidente —e indignante— comprobar

que el Estado favorece a los ricos, cosa que todos saben, sino que, además, ese favoritismo se hace con dinero extraído de los bolsillos populares. Es fácil comprender que un cuadro semejante es poco favorable a la consolidación de la democracia.

(22 de octubre de 1989).

Los que gozan y los que mandan

La llegada del recaudador de impuestos a una paupérrima aldea campesina, escoltado por los soldados de la guardia real, es una de las imágenes clásicas que el cine y la literatura han empleado para retratar la naturaleza opresiva de los estados despóticos y la sorda mezcla de temor y odio que la periódica visita del funcionario provocaba entre los aldeanos. A medida que un largo rosario de revueltas y revoluciones burguesas transformaron la naturaleza de esos regímenes y afianzaron ciertos principios democráticos, el sistema impositivo de los estados también cambió. La tributación adquirió rasgos más equitativos y racionales y dejó de estar sometida al arbitrio y capricho de las autoridades. La presión impositiva sobre las grandes masas de la población fue disminuyendo y, si bien subsistieron privilegios e inequidades —que resultaban de la exención o la liviandad con que se gravaban los patrimonios y ganancias de las clases dominantes—, aquellos no llegaban ni por asomo a parecerse a los del viejo sistema imperial. A medida que el Estado se iba democratizando se imponían nuevos principios e instituciones tendientes a garantizar el control popular sobre los recursos que el gobierno extraía de la sociedad y sobre la forma en que los gastaba. El afianzamiento de la libertad, del pluralismo y de las instituciones representativas tuvo como contrapartida profundas modificaciones en la estructura social y, sobre todo, en la distribución del ingreso. Por eso

en los capitalismo desarrollados se produjo una llamativa correspondencia entre progreso democrático, el espectacular aumento de los impuestos a las clases adineradas y el sostenido incremento de los gastos sociales del Estado destinados a favorecer a los grupos de menores ingresos.

La lucha por la democracia amalgamó dos conjuntos de reivindicaciones: por una parte, las llamadas a asegurar la autonomía, organización y representación de los grupos subalternos y el establecimiento de la regla de “un hombre = un voto” en la constitución de la autoridad pública; por la otra, aquellas encaminadas a construir una sociedad más justa e igualitaria, para lo cual era —y sigue siendo— esencial garantizar la progresividad del sistema impositivo (es decir, que aporten más aquellos que tienen más) y la adecuada confección del presupuesto de gastos del Estado. La democracia no es tan solo un atributo del régimen político sino una condición de la sociedad caracterizada por el primado del principio de la igualdad. Por lo tanto, un Estado democrático cuyas autoridades son periódicamente elegidas por sus ciudadanos está condenado a perecer si estos son sumidos en la indigencia o si su estructura impositiva es profundamente injusta y regresiva. En un plazo relativamente breve esta contradicción se resuelve en favor de uno de sus términos: o bien la democracia logra imponerse también en el terreno de lo económico y social, mejorando la condición de las grandes masas y produciendo una reforma tributaria que grave a los ricos, o bien estos son capaces de vetar esas iniciativas y entonces el futuro de la democracia tendrá sus días contados.

Es por eso que la Argentina se encuentra ante una peligrosa encrucijada: nuestra dirigencia se empeñó en ignorar la escandalosa situación impositiva que prevalece en un país en el que, según es público y notorio, los ricos pagan por sus impuestos —cuando desean cumplir con la ley— sumas irrisorias. De ahí que los técnicos de las diversas misiones que la banca privada y los organismos como el FMI o el Banco Mundial enviaron profusamente a la Argentina en los últimos años —para nada sospechosos de tener simpatías

marxistizantes— no salían de su asombro al verificar que, en términos proporcionales, nuestra burguesía tributa menos aquí que en Haití, de lejos el país más pobre de América Latina. En la Argentina el grueso del presupuesto fiscal es financiado como en los antiguos estados despóticos: gravando brutalmente a las grandes mayorías populares. Lo que ha cambiado es el método, pero no la sustancia: el odiado recaudador ya no aparece con la guardia pretoriana del palacio a exigir su tributo sino que la expropiación se efectúa mediante procedimientos más sutiles y perversos: los impuestos “indirectos”, que castigan por igual a ricos y pobres en su calidad de consumidores: la inflación, que beneficia a los primeros mientras convierte a los pobres en miserables; los subsidios a las empresas privadas, pagadas con los mismos fondos extraídos de los bolsillos populares, y así sucesivamente.

El gobierno nacional acaba de enviar al Congreso un proyecto de reforma impositiva que, si bien trata de corregir algunos de los viejos vicios, está lejos de conformar un sistema tributario progresivo que descansa, como ocurre en los países avanzados, en la capacidad de percibir impuestos “directos” que graven a la propiedad y la renta. Esta propuesta es insuficiente para soldar el hiato entre igualdad política y desigualdad económica que desgarró nuestra democracia. Pero lo más grave es que sus objetivos son inconsistentes con otros enunciados recientemente por el presidente, quien al referirse a los alcances y el sentido de la “revolución productiva” actualmente en curso aseguró a los empresarios reunidos en Las Leñas que: “ustedes, principalmente ustedes serán los beneficiarios de un nuevo sistema económico”. Se podrá criticar a Carlos Saúl Menem por sus gravísimos errores en algunas decisiones fundamentales, como por ejemplo el indulto; no por su falta de sinceridad, pues ha venido explicitando el proyecto neoconservador de su gobierno paso a paso. El regocijo de la gran burguesía —una clase que, si hemos de creer a Carlos Pellegrini, ya desde finales de siglo no se distinguía precisamente por su talento político— es un indicador poco confiable de la sabiduría contenida en la revelación presidencial. Los aplausos y

la entusiasta ovación con que fueron recibidas sus palabras reflejan la satisfacción de quienes recibieron la certificación oficial de algo que ya sabían: que serían los grandes “ganadores” en este durísimo ajuste económico, y que los perdedores serán los millones que no estuvieron representados en Las Leñas. El halago del *establishment* suele reconfortar a los gobernantes, pero obnubila su razón y les impide comprender que la estabilidad del orden democrático —valor supremo y no negociable— solo se asegura en un marco de justicia y equidad. La historia demuestra que la democracia jamás se consolidó en los países en los cuales una pequeña fracción monopolizó los beneficios del sistema económico. Ni la propuesta de reforma tributaria ni el discurso ante los empresarios parecen haber tomado nota de estas enseñanzas.

(27 de octubre de 1989).

El gato y el ratón

El colapso del plan económico del gobierno revela ciertos datos esenciales que caracterizan la actual relación entre el Estado y las clases dominantes. Por una parte, lo ocurrido demuestra lo que le puede pasar a una sociedad que se desentiende de la necesidad de contar con un Estado fuerte, dotado de los recursos suficientes para velar por el interés general. Todos sabemos que el Estado capitalista siempre procura la reproducción de las condiciones que hacen posible la dominación de la burguesía. Sin embargo, cuando las presiones populares hacen que ese Estado adopte una organización democrática existen mecanismos y dispositivos que tienden a contrabalancear, al menos en parte, el predominio de los intereses dominantes. Esto requiere, tal como ocurre en los capitalismo avanzados, de un Estado democrático y poderoso, capaz de mediatizar y, eventualmente, resistir a las presiones de los grandes oligopolios. Apoyado en la legitimidad popular puede adoptar políticas tributarias progresivas, gravando fuerte y proporcionalmente el ingreso de los sectores adinerados y destinando parte de esos recursos a financiar la reforma del capitalismo y el progreso de la justicia social. Nada de eso ha ocurrido en la Argentina, en donde como producto de largos años de dictadura burguesa (¿qué otra cosa fueron, si no, los Onganía, Videla y compañía?) nuestro Estado se ha ido desangrando, transfiriendo sus recursos al sector privado al tiempo que sus proporciones crecían

desmesuradamente. Este crecimiento lo tornó más ineficiente y corrupto y, por consiguiente, incapaz de transformarse en un efectivo contrapeso del despotismo del capital. El resultado: un Estado sin capacidad para disciplinar a los sectores empresariales. Estos juegan con aquél “como el gato maula con el mísero ratón”.

La segunda lección que deberíamos extraer de la crisis actual es que la burguesía carece de un proyecto de acumulación y desarrollo capitalista. Se trata de una clase viciosa y corrupta, y lo menos que se le podría exigir, desde una perspectiva socialista, es que tratase de desarrollar el capitalismo. Como clase parasitaria se encuentra, por el contrario, involucrada en todo tipo de actividades especulativas. Sus iniciativas no configuran un plan sino apenas actos de saqueo y rapiña, en donde ante la inacción de las autoridades se procede a expropiar —metódica y cotidianamente— a los trabajadores de sus magros ingresos. Este nuevo ajuste, el enésimo que sufrimos en estos últimos años, es una reiteración más de la gravedad estructural de nuestra crisis y de la completa ausencia de ideas para enfrentarla de que hacen gala los economistas cuya “sabiduría” consiste en rumiar monótonamente los prejuicios de sus patronos.

(12 de diciembre de 1989).

La burguesía y los “golpes de mercado”

El viernes pasado un editorial de *Ámbito Financiero* (15 de diciembre de 1989, p. 1) certificaba con alborozo que la Argentina había entrado “en la era de los golpes de mercado”, incorporándose así a la galería luminosa de naciones que, según el editorialista, han instituido el golpismo mercantil como forma suprema de expresión de la soberanía popular. Los golpes militares —degradados al rango de arcaicas antiguallas— fueron desplazados por la “magia” del mercado. Pero las ambiciones doctrinarias del diario de la *city* no terminan ahí, porque el editorialista se lanza con audacia a fulminar con un golpe de su talentosa pluma no solo la apasionada teorización de Rousseau sobre la democracia sino también las reflexiones de Marx sobre este asunto. Mediante la alquimia de la retórica transforma a las Revoluciones francesa y rusa —que han impreso un sello indeleble al mundo en que vivimos— en episodios de opereta, condenadas al fracaso por contradecir la verdad elementalísima pero demoledora contenida en su novísima teoría: que la verdadera democracia es el mercado.

Los “datos” sobre los cuales se apoya este planteo doctrinario son tan antojadizos como originales. Allí nos enteramos, por ejemplo, de los errores insanables contenidos en los numerosos estudios realizados sobre la pobreza extrema en nuestro país, empecinados en “no querer ver” lo que nuestro editorialista percibe con meridiana

claridad. Por ejemplo, que “el argentino medio vive como ‘un turista’ en su propia tierra, donde se mueve con una moneda marginal que es el austral”. Por eso es que “cuando le aumentan mucho los precios, o el valor del taxi en australes, mentalmente saca la cuenta de lo poco que representa eso en dólares y se conforma”. El remate de este razonamiento es el siguiente: “la tenencia de dólares se ha generalizado a niveles insospechadamente bajos de la población” [sic]. Por eso en la última hiperinflación no hubo suicidios, “por lo generalizado entre la gente de la cobertura en dólares”. Por eso mismo, este originalísimo “turista-ciudadano” argentino vota todos los días, en el mercado. Allí decide si compra o si vende, “si se queda en dólares o no”.

Este revolucionario diagnóstico de la realidad social argentina derrumba definitivamente todos los mitos alentados por innumerables investigaciones que, con malsana pasión, se deleitaron proyectando una imagen miserable y pauperizada de nuestra sociedad. Los tumultos ocurridos este año en algunos supermercados del Gran Buenos Aires y Rosario no fueron en realidad saqueos sino simples aglomeraciones, provocadas por la vehemencia y el entusiasmo con que el pueblo decidía si pasaba sus ahorros al dólar o si invertía en azúcar, leche y fideos en australes. Las huelgas que crónicamente han paralizado a diversas ramas del aparato estatal no expresan la insatisfacción de los servidores públicos ante sus salarios sino la natural parálisis colectiva que sobreviene cuando varios millones de personas tienen que sacar cuentas sobre el precio en dólares del taxi y otros servicios suntuarios, como la electricidad, el gas y el agua potable. Los miles de argentinos que tratan de salir al extranjero no lo hacen empujados por la desocupación y los bajos salarios, como una pérfida prensa de izquierda se obstina en divulgar, sino porque como buenos turistas que son no pueden quedarse quietos en ninguna parte y arden en deseos de recorrer el mundo. Estas realidades son vistas por *Ámbito Financiero* desde una perspectiva madura y reconfortante, que refuta el pesimismo y las “malas ondas” de la izquierda.

Pero las innovaciones doctrinarias de nuestro articulista parecieran tener, además, reminiscencias platonianas: el filósofo decía que

en toda ciudad debía existir una clase, la de los guardianes, que en virtud de su sabiduría estaba destinada a guiar la nave del Estado hacia el anhelado puerto de la bondad y la justicia. También agregaba que, dado que la riqueza enturbia la visión de los hombres y altera su razón, era necesario que esa clase estuviese completamente despojada de propiedades y riquezas. Solo así, viviendo en el comunismo más absoluto, podía garantizarse que los gobernantes hicieran posible la felicidad del conjunto. Así, el editorialista pretende enterrar definitivamente la inmerecida fama ganada por Platón con una propuesta que, conservando la necesidad de los guardianes, le atribuye ese papel a una clase distinta: los especuladores. Son estos quienes toman la iniciativa de asestar el benévolo “golpe de mercado”, porque “son los primeros en ver que se pierden reservas, que se está emitiendo moneda en exceso sin respaldo, que se están tomando más empleados públicos, si hay o no corrupción, si no se reducen los gastos del Estado” (Platón, 1986). Del “rey-filósofo” de Platón llegamos al ojo de lince del especulador de la *city*: la decadencia intelectual, política y moral de la burguesía argentina difícilmente podría quedar mejor retratada que en este mamarracho ideológico.

Otro aporte teórico que realiza el articulista es el siguiente: hasta ahora habíamos creído, inducidos al error por los agitadores de siempre, que el pueblo votaba cada dos años. En realidad, lo hacemos todos los días, y varias veces al día. ¿Qué cómo es esto? Es muy sencillo: votamos en el mercado, así de simple. Este, el mercado, es en realidad lo que en un lenguaje un poco menos sofisticado se llamaría “el grueso de la gente”. Y ahí votamos permanentemente: si queremos andar en Mercedes-Benz o viajar en los superconfortables colectivos porteños; si queremos pasar un mes de vacaciones en el mar Caribe o votamos por quedarnos en La Salada; si queremos cenar en la Recoleta o nos satisface plenamente comernos un choripán. Tan democrática era nuestra vida cotidiana que ni nos habíamos dado cuenta que nos pasábamos la vida votando. Solo mentes perversas y caprichosas pudieron haber provocado la reapertura democrática, porque total, ¿para qué empecinarse en querer votar una vez más

—¡cada dos años!— pudiendo votar todos los días en el mercado? En todo caso, lo que nuestro articulista nos enseña es que los “golpes de mercado” se producen cuando la gente imita lo que hacen sus “especuladores-guardianes”, arrasando en pocas horas con los funcionarios que violan las sagradas leyes del mercado. Así se achicó el mandato constitucional de Alfonsín; por eso cayeron Sourrouille, Pugliese, Rodríguez, Rapanelli, y así seguirán cayendo.

Octavio Paz (1978) dice que hay que saber distinguir las ideas de las meras ocurrencias. Las primeras son producto de una elaboración racional y reflejan un esfuerzo de permanente contrastación con la realidad. Las ocurrencias, por el contrario, son construcciones completamente disparatadas, carentes de todo refinamiento intelectual y sin ningún referente externo que las corrobore. El drama del editorial de *Ámbito Financiero* no consiste en la larga sucesión de desatinos, lo absurdo del razonamiento o la endeblez de la fundamentación. Radica en dos cosas: el desprecio por la inteligencia de buena parte de sus lectores y en la credibilidad que la derecha más cavernaria de la Argentina pudiera concederles a las elucubraciones de su editorialista. Que semejantes despropósitos sean publicados en la primera página de un diario como artículo de fondo revela la profundidad de la crisis ideológica de la burguesía, su distanciamiento insalvable con los datos más elementales de la realidad y las razones por las cuales —tanto bajo el autoritarismo como bajo la democracia— sus hombres fueron incapaces de lograr que el capitalismo argentino funcionara como algo distinto a un sistema de rapiña. Además, al exaltar supersticiosamente al mercado, el libelo desnuda también su desprecio por la institucionalidad democrática y el significado del sufragio universal. Y no por azar, la burguesía argentina ha consagrado la imagen del especulador como síntesis sublimada de sus proyectos de clase. Antes, en otras épocas y en otros países, elegían al empresario industrial. Esto también nos da la medida de su decadencia.

(21 de diciembre de 1989).

Mercados rigurosamente vigilados

Triste destino el de nuestros conservadores: su desencuentro con las grandes mayorías nacionales los ha obligado a cultivar con tesón el arte del simulacro. Repudiados por el pueblo —que desde que conquistó el sufragio universal, en 1912, jamás eligió a un presidente de ese partido— para sobrevivir tuvieron que recurrir a tinturas y disfraces, a gestos y a discursos ajenos esperando de este modo poder convocar a una sociedad que los mortifica con su indiferencia. Por eso una de sus más destacadas figuras, la diputada Adelina D’Alessio de Viola, se empecina en remedar el lenguaje soez y los modales arrabaleros característicos de las heroínas del sainete: si el populismo supo —una vez, hace casi medio siglo— captar el sentir de las masas, sus bisoños asesores parecen haberla convencido de que transformándose en una caricatura de la rubia Mireya podrá irrumpir en la alicaída escena política argentina como la Evita televisiva de los noventa. Este ejercicio de travestismo político de la derecha solo sirve para agregar un ingrediente cómico a su decadencia como “clase dirigente”, ya que si el populismo pudo interpretar la sociabilidad profunda de las clases populares fue porque hizo algo más que imitar los modales y el habla de los bajos fondos. Una cabriola igualmente divertida se ve forzado a efectuar el Ingeniero Alsogaray, que se desvive por tratar de aparecer como un dirigente liberal y democrático a pesar de su conocida y reiterada participación en los

sucesivos golpes de Estado que nos postraron como nación. En cualquier país del mundo un señor con sus ideas —y su trayectoria— es inequívocamente identificado con la derecha conservadora. Gracias a nuestro atraso ideológico, a la utilización a mansalva de la televisión y al imperio de la “política-espectáculo”, el líder de la Unión del Centro Democrático [UCD] ha consolidado una imagen “liberal”; no obstante, este verdadero *lifting* de su fisonomía político-ideológica no le ha reportado grandes progresos en el terreno electoral.

Pero dejemos de lado los disfraces y los simulacros; veamos, en cambio, a la mitología fabricada por la derecha. Hay que reconocer que en este terreno ha tenido mucho mejor suerte: sus ficciones se han difundido como verdades sacrosantas ante las cuales hemos visto inclinarse a políticos y líderes sociales, logrando asimismo un enorme impacto en la opinión pública. La “libertad de los mercados”, uno de los mitos con el cual los conservadores nos han abrumado con su prédica tan insistente como equivocada, asegura que el progreso de los capitalismo desarrollados se explica porque allí impera una irrestricta libertad mercantil. Arguyen, por ejemplo, que la libertad cambiaría, no perturbada por la presencia estatal, debería conducir a una baja en la cotización del dólar. Si este se “dispara” hacia las nubes es por efecto de los controles fiscales que alimentan la desconfianza y la especulación de los agentes económicos. De hecho, la historia reciente demuestra exactamente lo contrario: el ministro Pugliese “liberó” el mercado cambiarlo en abril de 1989 y desde entonces la estampida del dólar —y, en general, de todos los precios— fue sencillamente incontrolable.

Cualquier observador medianamente informado sabe muy bien que en ninguna parte del mundo el precio del dólar se fija por el inocente entrecruzamiento de la oferta y la demanda. ¿Por qué? Porque la perfecta flexibilidad cambiaría es una pura construcción mental que no existe en la realidad: es un típico mito liberal, igual que la “mano invisible” y el “gobierno mínimo”, que podría ser útil para plantear —desde su idealidad— algunas hipótesis sobre el comportamiento de los mercados (sobre todo de sus crónicas “desviaciones”

oligopólicas), pero que de ningún modo puede ser utilizado como una descripción del funcionamiento de la economía “realmente existente”. Según el Fondo Monetario Internacional —celosísimo Vaticano cuyos salmos entonan con unción los liberales de todo el mundo— solo 18 de los 152 países que lo componen (además de Suiza, que no pertenece al Fondo) se caracterizan por tener un régimen de flexibilidad cambiaria, algo relativamente próximo —aunque no idéntico— a la libertad cambiaria que reclama la derecha. ¿Quiénes integran este club? Australia, Bolivia, Canadá, Estados Unidos, Filipinas, Gambia, Ghana, Japón, Líbano, Maldivas, Nigeria, Nueva Zelanda, Paraguay, Reino Unido, Sudáfrica, Uruguay, Venezuela, Zaire y Suiza. Dejando de lado el hecho —nada anecdótico, por cierto— de que muchos de los miembros de esta selecta lista difícilmente podrían exhibirse como luminosos modelos de desarrollo capitalista, la verdad es que, tal como el FMI lo reconoce, los países desarrollados de este grupo se caracterizan por los extraordinarios poderes regulatorios de que están investidas sus autoridades monetarias (llámese la Reserva Federal en los Estados Unidos, el Banco de Inglaterra en Gran Bretaña o su contraparte en Japón). La excepcional fortaleza del Estado en los capitalismo superdesarrollados impide, como lo informa a diario la prensa especializada, que la cotización de sus respectivas monedas sufra fluctuaciones significativas. En otras palabras, el precio del dólar o del yen lo fija el mercado, pero siempre dentro de parámetros establecidos por los gobiernos a los efectos de favorecer a sus propias economías. Es por eso que periódicamente las autoridades niponas y norteamericanas se enzarzan en ásperas controversias acerca de cuánto debe valer el dólar y cuánto el yen. Un yen devaluado favorece las exportaciones a los Estados Unidos y debilita la balanza comercial norteamericana; un yen sobrevaluado equivale a una protección que aumenta la competitividad internacional de la industria estadounidense y alivia las presiones sobre su sector externo. Se trata de cuestiones sumamente importantes y ninguno de estos gobiernos —por más que proclamen a los cuatro vientos las virtudes balsámicas del librecambismo— es tan insensato

como para dejarlas al arbitrio de la “mano invisible” del mercado, como nuestros conservadores quieren hacernos creer.

¿Y los restantes países? Según el FMI se caracterizan por sistemas de “flotación dirigida”, es decir, “sucía”, en donde la intervención de los poderes públicos es aún mayor que en los casos anteriores. Entre los que se incluyen en esta categoría sobresalen los casos de Corea y Chile —tan ensalzados como brillantes ejemplos de liberalismo— además de México, Singapur, Brasil. También se incluyen los países de la Comunidad Europea —encabezados por Alemania Federal y Francia y seguidos por Italia, Holanda, España y todos los demás— que diseñaron el Sistema Monetario Europeo precisamente para regular mediante un acuerdo político de sus bancos centrales las oscilaciones de las tasas de cambio e impedir los descalabros como los que en la Argentina produce a diario la irracionalidad de las fuerzas del mercado. En la Europa comunitaria tanto como en los Estados Unidos y Japón los bancos centrales establecen acuerdos para vigilar permanentemente, hora tras hora, la relación existente entre el dólar y las otras monedas. Su precio, por lo tanto, obedece en buena medida a una regulación estatal —nacional y supranacional— que, en los capitalismo desarrollados, establece los niveles dentro de los cuales el Estado permite “el libre juego” de los operadores económicos. Huelga señalar que para esto se precisa un Estado fuerte y poderoso —no necesariamente grande—, porque de lo contrario carecería de las capacidades financieras requeridas para disciplinar a las erráticas fluctuaciones del mercado y la ilimitada voracidad de los especuladores. ¿Qué tiene que ver este funcionamiento de los “capitalismos realmente existentes” con los mitos que divulgan nuestros conservadores? Nada: su discurso es, apenas, una interesada fabulación.

(18 de marzo de 1990).

Bendiciendo al capital

El deterioro social ocasionado por el capitalismo salvaje ha puesto al mismísimo episcopado argentino al borde de un ataque de nervios. La flema imperturbable de la gran mayoría de sus integrantes —todos sabemos que hay un puñado de valiosas excepciones— ha sido recurrente motivo de escándalo: ¿cómo olvidar que este cuerpo demoró nada menos que cinco años en emitir un documento tibia y oblicuamente condenatorio de los horrores del Proceso, al revés de la conducta adoptada por las Iglesias de Brasil, Chile, Perú y El Salvador? Pese a estos sombríos antecedentes, los efectos devastadores del experimento neoconservador hicieron que los obispos dejaran de lado su servicial pasividad. Alarmados, nos advierten que la crisis actual es “grave”, y que menoscaba “la consistencia social de nuestra Patria”.

Fiel a su tradición, el documento del episcopado es heterogéneo;¹⁰ por eso mismo es ambiguo y, en el fondo, decepcionante. Hubo muchas manos en su redacción, y sus huellas aún se notan coexistiendo enojosamente en el texto definitivo. El resultado es un compromiso deslavado, en donde los perfiles más hirientes y concretos de la crisis —denunciados con insistencia por los pocos obispos comprometidos

¹⁰ Se trata del documento “Cambiemos el corazón” difundido el 21 de marzo de 1990 por la Comisión Permanente del Episcopado. Ver *El Cronista Comercial*: “Apremiante llamado de la Iglesia a fortalecer el tejido social”, 22 de marzo de 1990, p. 5.

con los pobres que nos quedan— fueron meticulosamente sublimados y volatilizados. Se concluye, previsiblemente, con una condena moral tan difusa y generalizada como anodina y que, además, se parece demasiado a la complacencia.

El documento dice que “la crisis es fundamentalmente moral”: “la deshonestidad, la mentira, la injusticia, la ambición pública y privada y otras múltiples formas de corrupción” afectan a los hombres y mujeres de la Argentina y expresa la “irresponsabilidad de personas y de sectores con poder, de antes y de ahora, que no acaban de poner el interés de la Nación por encima de todo otro interés”. Y poco más adelante se reparten las culpas: “La mayoría de los argentinos tenemos algún grado de responsabilidad por los males que nos afectan. Sin embargo, creemos que esta es sobre todo una crisis de dirigencia”.

La jerarquía nos invita a desechar las falsas explicaciones y a buscar las claves de la crisis actual en las profundidades más insondables: “la raíz de los males está en el alma del hombre”. Mediante este razonamiento, los argentinos concretos, de carne y hueso, se transmutan en una excelsa colectividad de arcángeles y querubines, y el sórdido materialismo de la sociedad civil se desvanece entre vahos de incienso y magníficos cánticos gregorianos. Claro está que este arrebató místico nada tiene de inocente: al desplazar nuestra mirada hacia la esencia del hombre, su alma, la Iglesia procura que nos olvidemos de su apariencia: el capitalismo. Empeñada en conducirnos al paraíso, nos pide que cerremos los ojos ante el infierno liberal; que no critiquemos a las estructuras sino a los hombres; que no cuestionemos a la sociedad actual —con su injusticia irreparable— sino que penetremos en la hondura de los corazones para allí descubrir el origen de nuestras desgracias. No hace falta ser muy suspicaz para comprender la satisfacción con que —en el fragor de esta crisis— este mensaje fue recibido por las clases dominantes y sus representantes políticos; tampoco para descubrir ciertas reminiscencias de la campaña carapintada contra la clase política.

Si el problema es moral, la solución también. El subtexto del mensaje absuelve plenamente al capitalismo salvaje: la recesión, el

desempleo, la miseria, la decadencia y descomposición de la sociedad civil son desórdenes del corazón, esa víscera glacial que cuando fue interpelada por Juan Carlos Pugliese hace menos de un año respondió con una voz metálica que seguramente no oyeron nuestros pastores. En vez de reformar a la sociedad hay que enmendar nuestras almas: el documento acusa a “los sectores con poder” —¿quiénes serán, qué hacen?— y a la clase dirigente por su avaricia y ambiciones desmedidas; pero también amonesta al resto, cuando denuncia su “falta de laboriosidad”: ¿tal vez la desocupación sea tan alta porque la gente no tiene ganas de trabajar?

Una vez que las estructuras de la sociedad burguesa fueron puestas a buen recaudo los obispos nos dicen que “debemos cambiar el corazón”. Esta metodología —de dudosa efectividad para enfrentar a la crisis capitalista— desemboca en tres exhortaciones: al gobierno y la dirigencia política, para que “se esfuercen por crear un clima de mayor credibilidad y confianza que permita revalorizar el trabajo y la producción”; a “quienes posean bienes” (incierto grupo que incluye desde el dueño de un par de zapatillas hasta la propietaria de Loma Negra) y a los empresarios, para que multipliquen la riqueza y eviten despidos “aun a costa de reservas”; en cambio, a los pobres condenados que apenas “sobrepasan un nivel modesto de vida” se les exige que sean eficaces en el asistencialismo y que se preparen para hacer “grandes sacrificios”. En otras palabras: el episcopado le dice al gobierno que se limite a inspirar la confianza de los grandes grupos económicos y a los empresarios que multipliquen la riqueza sin temor, porque la justicia distributiva es algo que esta Iglesia no reclama ni de uno ni de otros. En cambio, a la declinante masa que todavía se encuentra por encima de la mera sobrevivencia se le advierte que deberá aprontarse para nuevas y más gravosas privaciones. En el documento se recuerda que otras naciones resolvieron exitosamente crisis análogas a la nuestra; olvida agregar que en esos países el Estado tuvo la fortaleza necesaria para disciplinar a la burguesía, redistribuir inmediatamente la riqueza y obligar a los grandes grupos económicos a pagar sus impuestos. Es decir, exactamente

lo contrario a lo que está ocurriendo en la Argentina con la bendición de la jerarquía. Cuando se descifra el documento sus celestiales reflexiones sobre los desórdenes del alma se reducen —seguramente que por obra y gracia de Lucifer— a una reformulación de las patrañas neoconservadoras del Capitán Ingeniero y sus discípulos. Lamentable.

(26 de marzo de 1990).

Reestructuración económica, acumulación capitalista y consolidación democrática

Nadie discute el papel crucial que los procesos de reconversión industrial han jugado en la determinación del grado de éxito con que se han visto coronadas distintas tentativas nacionales de reinserción en la economía mundial. La internacionalización de los mercados y la agudización de la competencia económica han obligado, tanto a los países metropolitanos como a los de la periferia, a efectuar costosos —y casi siempre traumáticos— reajustes en su estructura productiva. Estos son un resultado ineluctable del progreso técnico en el modo de producción capitalista; también de la situación de una economía mundial integrada a escala planetaria y acosada por tendencias recesivas, crecientes desequilibrios financieros y comerciales, una incierta marcha de la productividad y el problema estructural del desempleo. Las consecuencias de estos procesos de recomposición industrial han sido decisivas tanto para las unidades individuales del capital como para ramas enteras de la producción, regiones y los propios sistemas económicos nacionales. De ahí que la centralidad de la reconversión industrial difícilmente puede ser cuestionada: haya ocurrido de forma planeada o espontánea, este proceso altera profundamente tanto los mecanismos de acumulación capitalista

como las formas del dominio clasista que se estructuran en el Estado nacional.

Con todo, los efectos desestructurantes de la reconversión industrial han sido mucho más graves en la periferia, debido a las tensiones y anfractuosidades que caracterizan a estructuras capitalistas, “imperfectamente” integradas como las sociedades latinoamericanas. Sobre ese terreno, ya de por sí conflictivo, se llevan a cabo rápidas —y muchas veces fundamentales— modificaciones técnico-productivas que exacerban las tradicionales contradicciones generadas por el atraso, la dependencia y el subdesarrollo. Sin abundar en mayores detalles pensemos simplemente que esas transformaciones en el paradigma productivo dan lugar a mutaciones sustanciales en las formas de inserción de las distintas clases sociales en la economía, la sociedad y el Estado; precipitan la redefinición acerca del papel de este y del conjunto de las instituciones políticas en consonancia con los requerimientos del nuevo modelo de acumulación y hegemonía y, por último, promueven actitudes, valores, discursos e ideologías que se superponen a los clivajes sociales tradicionales modificando las formas que asumen los enfrentamientos sociales.

Desde el punto de vista más específico de la política y los sujetos sociales habría que insistir sobre el hecho de que la reconversión industrial también modifica el “pacto de dominación” y la estructura de la distribución del ingreso. En otras palabras, reorienta el patrón de desarrollo capitalista, incorporando y excluyendo nuevos grupos y categorías sociales a la economía y al Estado y decreta, en síntesis, quiénes habrán de ser los nuevos —pocos y previsibles— ganadores del ajuste y quiénes los muchos y habituales perdedores de la transformación económica puesta en marcha. Hay que recordar que en capitalismo salvajes como los de América Latina la explotación clasista conserva todavía una fisonomía primitiva, producto de una fusión perversa entre el atraso secular de nuestras relaciones sociales y la refinada explotación típica de un patrón de “modernidad” que es indiferente —cuando no abiertamente hostil— a los reclamos de justicia social. Las clases subalternas se encuentran así doblemente

oprimidas: por un lado, por los imperativos del proceso de trabajo “posfordista” y la acentuación de las tendencias marginalizantes derivadas de la aplicación de nuevas tecnologías “ahorradoras” de mano de obra —precisamente en sociedades caracterizadas por el incesante crecimiento del ejército industrial de reserva—; por la otra, las clases populares son agobiadas por la tenaz persistencia de los mecanismos clasistas tradicionales, legados históricos de la prolongada etapa oligárquica, que las marginan y excluyen de los beneficios del desarrollo.

Por lo tanto, ante las implicaciones de estos reajustes y la contundencia del impacto pauperizador de la deuda externa es razonable esperar aumentos sustanciales en la conflictividad de nuestros capitalismo, todo lo cual arroja una espesa sombra de duda acerca de las posibilidades de afianzar compromisos políticos que viabilicen una ordenada consolidación democrática. Los notorios incrementos en los niveles de movilización y protesta social y, consecuentemente, el infrecuente activismo político al que se han visto volcados grandes sectores de la sociedad civil agredidos por el peso del reajuste capitalista se encuentran en la base de los violentos estallidos sociales, saqueos y disturbios que asolaron Caracas, Rosario y algunas localidades del Gran Buenos Aires hace escasamente un año. Ellos también fueron terribles recordatorios del enorme costo social generado por estos procesos y la fragilidad de nuestras sociedades para absorberlos sin despeñarse por el barranco del autoritarismo político.

Estos desbordes de la protesta popular, justa y legítima hasta la médula si se recuerdan, aunque sea someramente, el despojo masivo de grandes sectores de nuestras sociedades, el fenomenal aumento de la marginalidad social y los drásticos recortes en los ingresos reales del universo asalariado, están llamados a introducir una alta dosis de inestabilidad política, la cual es de importancia crítica en los marcos de la actual reconstrucción democrática en que se encuentra comprometida buena parte de la América del Sur. Estos esfuerzos por arraigar a la democracia política en la región se encuentran gravemente amenazados por la crisis de la deuda, la reorganización

excluyente del capitalismo y el colapso de los servicios sociales debido a la crisis fiscal del Estado. De todas maneras, es preciso abandonar las expectativas un tanto ilusorias de que la movilización, el activismo y la protesta de los grupos sociales castigados por la crisis capitalista necesariamente abrirían las puertas de una “salida progresista” en la coyuntura actual. La desorganización y desmoralización de la izquierda —tanto europea como latinoamericana—, sus dificultades objetivas para formular proyectos concretos de recambio y el desplome de los “socialismos realmente existentes” hacen que —ante una situación que coloca objetivamente en disponibilidad a grandes masas de la población— las respuestas progresistas a la crisis brillen por su ausencia. Por el contrario, la experiencia ha demostrado la definida posibilidad de que —amenazados por el endurecimiento de la situación económica y social y temerosos ante los resultados del “desorden político” resultante— las clases y grupos más reaccionarios de la sociedad construyan una alianza social que articule en su apoyo a los descontentos y a la legión de víctimas del reajuste burgués, poniendo seriamente en entredicho la continuidad del proceso de transición democrática. La indudable “derechización” de diversos proyectos democratizadores ensayados en la región ha producido un desencanto generalizado y una peligrosa frustración de las ilusiones y de las legítimas expectativas que la restauración de la democracia había despertado durante el derrumbe de los regímenes autoritarios. No es necesario ser un erudito para reconocer que este lamentable Termidor de las jóvenes democracias latinoamericanas no es demasiado venturoso para el futuro de estos regímenes, especialmente en un suelo tan poco propicio como el nuestro. La “puesta en disponibilidad” de vastos segmentos de las capas subalternas —de origen pequeño burgués y campesino— ha sido unánimemente señalada como una de las condiciones fundamentales que favoreció el ascenso del fascismo en Europa, puesto que le otorgó a la reacción de la gran burguesía una base de masas de la cual carecía por completo en los momentos iniciales de su desarrollo. Sin llegar tan lejos, la metamorfosis del populismo en neoconservadurismo es

un resultado solo en apariencia paradójico, y que comprueba provisoriamente al menos nuestra hipótesis de trabajo. Son varios los países de la región en los cuales un fuerte apoyo popular se estaría encolumnando detrás de propuestas que, al menos en el plano económico, son plenamente favorables a los intereses de las fracciones más concentradas de las burguesías locales y sus aliados internacionales. Una variante del neoconservadurismo comienza a aparecer, recubierto con los ropajes discursivos del “realismo” y del “posibilismo”, como el saldo provisorio de los sueños latinoamericanos con una democracia reformista e igualitaria que fueran brutalmente disipados por los rigores del reajuste capitalista de los años ochenta.

Vale la pena recordar que la recomposición de la estructura productiva del capitalismo en los setenta y los ochenta provocó no pocas conmociones en Europa y los Estados Unidos: en algunos casos se logró instaurar un resignado consenso, posibilitado por la aceptación de la clase obrera de significativas pérdidas en relación a las políticas sociales conquistadas e implementadas en la fase keynesiana. Esto fue posible, entre otras cosas, por la derrota experimentada por el proletariado europeo en las jornadas iniciadas en mayo de 1968 en París y ratificadas un par de años más tarde por el revés sufrido durante el Otoño Caliente en Italia. Pero aún en estos casos la reconversión desencadenó un activismo popular que desentonaba estridentemente con la “paz social” de los años de oro de postguerra y las fantasías acerca del “fin de las ideologías” y el agotamiento de las luchas de clases. Las huelgas de los trabajadores metalúrgicos alemanes sirvieron para demostrar las dificultades existentes para la materialización del consenso reestructurador cuando la reconversión industrial se hizo presente exigiendo sus primeras víctimas. En otros casos no fue posible ni siquiera un consenso tan poco atractivo como este: la experiencia de Inglaterra es muy ilustrativa al respecto. Allí se produjo una agudización de las luchas sociales y una polarización política desconocida desde los años de la segunda postguerra y que se encuentran en la base de la experiencia neoconservadora de la primera ministra Margaret Thatcher. En este sentido la huelga de

los mineros y la actitud del gobierno británico es casi paradigmática del tipo de situaciones que se configuran cuando la reconversión industrial se impone despóticamente mediante la alianza del Estado con el capital. En otras palabras, tanto en los casos en que se logró forjar un consenso como en aquellos en que esto no fue posible la reconversión industrial implicó una virulenta resurgencia de los conflictos industriales y de las contradicciones de clase. Si esto ocurrió en los capitalismo avanzados es prácticamente impensable que una transformación económica de esta envergadura pueda transcurrir pacíficamente en nuestras latitudes. Sería recomendable, por lo tanto, evitar que el ajuste salvaje tire al bebe junto con el agua sucia, al modelo decadente de industrialización junto con la democracia.

(Junio de 1990).

Los *lobbies* contra la democracia

Uno de los problemas más graves que acosan a las democracias modernas es la proliferación de los así llamados *lobbies*. La densa red de “grupos de interés” que se ha incrustado sobre las instituciones centrales del Estado —el gobierno, la administración pública, el parlamento, la justicia— se ha convertido en una estructura de poder alternativa, invisible ante los ojos del pueblo soberano e incapaz de ser controlada por él. Por si esto fuera poco, procura la maximización de mezquinas ventajas sectoriales utilizando —no siempre, pero sí con mucha frecuencia— procedimientos que podemos calificar como corruptos.

Por su estructura y operación los *lobbies* constituyen un principio de organización del poder social profundamente antagónico a la democracia política: representan, precisamente, la penetración autoritaria de la sociedad civil en un Estado que proclama al mundo su condición democrática. ¿Por qué? Porque la estructura y el funcionamiento de los *lobbies* están diseñados para imponer sus preferencias políticas al margen de las instancias democráticas de participación y control de la ciudadanía. Su misión no es tan solo la de trasladar al terreno del Estado las aspiraciones e inquietudes de la sociedad civil. Su propósito propósito va mucho más allá: reproducir en el universo idealmente igualitario de la democracia capitalista la concentración de poder social que impera en la economía y la sociedad. La paridad

fetichizada de influencias que se coagula en un instante mágico —el día de los comicios— es volatilizada por la gestión cotidiana de la política impulsada por los *lobbies*. Es por eso que en la teoría democrática de inspiración liberal los grupos de interés fueron tradicionalmente considerados como lamentables interferencias en el proceso de formación de la voluntad pública, concebido como el resultado aditivo de preferencias individuales equivalentes. En la tradición teórica socialista el rechazo a esta combinaciones de intereses privados ha sido mucho más categórico: los *lobbies* son a la democracia lo que los monopolios al mercado, es decir, configuraciones perversas que en uno y otro caso conspiran contra el interés general y la justicia. Su simple presencia ejemplifica la insanable parcialidad de la democracia capitalista.

Hay tres cuestiones que permiten calibrar muy bien el perjudicial papel que estos grupos desempeñan en un orden democrático. Primero: no todos los sectores de la sociedad civil pueden, en la práctica, organizarse como *lobbies*. Las clases subalternas e inclusive los consumidores tienen grandes dificultades para satisfacer los imperativos organizacionales que se requieren para competir en el despiadado mundo de la política burocrática. No hace falta ser demasiado perspicaz para advertir que solo la burguesía y sus clases y grupos aliados detentan la posibilidad real de jugar ese juego; los demás tendrán que contentarse con hacer oír su voz una vez cada seis años, cuando se elija presidente. Pero aun suponiendo que los sectores populares puedan resolver esta dificultad inicial queda pendiente un segundo problema: ¿quién garantiza que los que tienen voz van a ser escuchados en las “alturas” del Estado? No basta con organizarse: es preciso también tener recursos para influir con eficacia en el complejo laberinto decisional del Estado moderno. Esto exige dinero, cuadros administrativos, información, tecnología, experiencia y contactos personales, variables todas estas que no se distribuyen igualitariamente en el seno de la sociedad burguesa. Por último, en el hipotético caso de que muchos grupos sociales puedan organizarse e influir en el proceso decisional, el desenlace sería no menos

deplorable: cada *lobby* se convertiría en un “grupo de veto”, incapaz de proponer una política positiva y solo equipado para impedir que otros hagan prevalecer la suya, transfiriéndoles el costo de este fracaso a sus representados. La política degenera así en un *collage* de negatividades en donde los intereses específicos en conflicto impiden la formación de una voluntad auténticamente colectiva y “nacional”. La neutralización de la influencia autoritaria de los *lobbies* requiere tres condiciones: el efectivo protagonismo de la ciudadanía, que asuma conscientemente su papel de soberano; la existencia de partidos políticos modernos —democráticos, representativos e innovadores— que canalicen las demandas populares; y, por último, un régimen político flexible y eficaz, que supere el asfixiante lastre del presidencialismo y que cuente con un sistema de partidos capacitado para elaborar e implementar las decisiones democráticamente acordadas en el ámbito parlamentario.

(Septiembre de 1990).

Contradicciones de la “revolución productiva”

Una gigantesca revolución científico-técnica ha trastocado profundamente los paradigmas productivos tradicionales. Su arrollador impulso está lejos de haberse aplacado, pero tal como lo demostrara Peter Drucker, sus efectos ya han cambiado de manera irreversible la anatomía y el funcionamiento de la economía internacional. Veamos dos de los rasgos que tipifican a la “tercera revolución industrial”: la creciente irrelevancia de las materias primas y el decisivo protagonismo que el conocimiento ha adquirido en las ramas industriales de punta.

¿Qué significa todo esto? Que las ramas industriales más dinámicas sustituyen crecientemente las materias primas naturales por otras de origen sintético. Estudios efectuados por el FMI demuestran que, en la actualidad, la cantidad de materias primas necesarias por cada unidad de producción industrial no alcanza siquiera al cuarenta por ciento de lo que se demandaba a comienzos de siglo. Las nuevas materias primas, creadas en los laboratorios de los países desarrollados, están desplazando aceleradamente a las naturales en las principales ramas de la producción industrial: en la estratégica industria de semiconductores, las últimas escasamente superan el tres por ciento del costo de producción, contra cerca del sesenta por ciento en las ramas metalúrgicas tradicionales. En resumen: materias

primas naturales —y los países que las producen— a un dilema de hierro: o se reconvierten en consonancia con los nuevos imperativos económicos o se resignan a una inescapable decadencia.

Por otro lado, estas transformaciones han puesto de relieve el carácter crucial de las industrias “cerebro-intensivas”. Las actividades económicas hoy se dividen entre aquellas que exigen una utilización intensiva de conocimientos —investigación, desarrollo de procesos y modelos de experimentación— y las que descansan en supuestas “ventajas comparativas” estáticamente consideradas: abundancia de recursos naturales o bajo costo de la mano de obra. El futuro se encuentra en las primeras: por eso en la industria de semiconductores el factor “conocimiento” absorbe cerca del setenta por ciento del costo de producción, mientras que en las ramas tradicionales estas proporciones descienden abruptamente. En las primeras el conocimiento científico ocupa un papel esencial e insustituible: por lo tanto, no hay otro camino para la modernización económica que no sea el de multiplicar nuestra inversión en conocimientos, es decir, en educación y en investigación básica.

¿Qué se desprende de lo anterior? Que la estrategia neoconservadora de recomposición capitalista —adoptada con tanto entusiasmo por el gobierno nacional— es incompatible con las nuevas realidades de la economía internacional. Suponer que habremos de salir de esta crisis estimulando la exportación de productos agropecuarios y minerales, incluyendo el petróleo y sus derivados, es una peligrosa ilusión. Revela, además, que nuestros dirigentes todavía creen que el mercado mundial se organiza en función de la división internacional del trabajo prevaleciente hasta 1929.

Desafortunadamente para ellos, y también para los millones de víctimas que ocasionará una estrategia económica insanablemente equivocada, las cosas ya no son más así.

La confianza decimonónica en las virtudes de la producción agraria y minera trasunta una desinformación que es inadmisibile en quienes tienen en sus manos las grandes decisiones nacionales. Estas arcaicas creencias son, sin duda, muy convenientes para los

intereses de los exportadores agropecuarios y del puñado de empresas petroleras que operan en la Argentina, pero las consecuencias de un diagnóstico tan erróneo habrán de ser fatales para el país. La actitud del gobierno al penalizar durísimamente a la investigación científica y técnica y a las universidades que forman a los hombres de ciencia —evidenciada en los ridículos salarios y subsidios con que se pretende “financiar” sus actividades— ratifica nuestra decadencia al colocarnos en la retaguardia de la escena contemporánea. Los intrépidos modernizadores nos devuelven así a fines del siglo XIX, con una política no solo equivocada sino también contradictoria con su profesada intención de propiciar una “revolución productiva” que saque a la Argentina de su postración. Para ser verosímil esta requiere de nuevas materias primas y una masiva inversión en cerebros, exactamente lo contrario de lo que se está haciendo en nuestro país. La asfixia financiera de las universidades y de la investigación básica —emblemática en estos días en el corte del suministro de gas al rectorado de la Universidad de Buenos Aires [UBA], o en los irrisorios salarios pagados por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas [CONICET]— nos habla del extravío de la razón neoconservadora. Por eso, parafraseando a los ideólogos oficiales, podemos decir que “estamos mal y vamos peor”.

(18 de agosto de 1990).

Después del naufragio

Las privatizaciones encaradas por el gobierno han generado una mezcla de perplejidad e indignación. Lo primero porque se trata de una política, de neta inspiración neoconservadora, que no fue votada por el pueblo, y quienes la propiciaban fueron repudiados por el electorado. Pero también indignación, porque a lo anterior se agregan las “desprolijidades” que han rodeado a los procesos de liquidación de los activos públicos: su insólita rapidez, los precios irrisorios, la ausencia de una discusión seria de alternativas, el descuido de ciertas “formalidades” y el soslayamiento del debate parlamentario arrojan espesas sombras sobre su legalidad, constitucionalidad y sobre algunos aspectos fundamentales de la ética republicana. Pero la historia —y, eventualmente, la justicia— dirán su última palabra con relación a la implementación del programa privatizador.

Nos interesa, en cambio, proponer una reflexión acerca de lo que puede ocurrirle al Estado después de consumado este proyecto. Esta no es una preocupación marginal, porque de su suerte dependen decisivamente nuestras probabilidades de consolidar un orden democrático estable, legítimo y eficaz. Sabemos que por el camino que estamos siguiendo vamos a tener “más mercado y menos Estado”. Pero también sabemos que el mercado es un espacio “darwiniano” —despótico y arbitrario— en donde sobreviven los más fuertes y sucumben los más débiles, los que no pueden organizarse, los que

apenas tienen lo necesario para sobrevivir. Esperar “justicia y equidad” del mercado equivale a pedirle peras al olmo. Allí podemos encontrar otras cosas: una ardiente pasión por la ganancia, egoísmos desenfrenados, codicias engeguecedoras, competencias despiadadas y la mercantilización de los productos más excelsos creados por el hombre, todo lo cual configura la “ética capitalista” de nuestro tiempo. Les guste o no a los publicistas neoconservadores la justicia, la equidad, la democracia y la libertad que tanto necesitamos para construir una sociedad mejor las podemos hallar en el Estado y no en el mercado. Conviene preguntarse, entonces: ¿qué le puede pasar al Estado con estas privatizaciones?

La respuesta es bien clara: tenemos un Estado paupérrimo, desorganizado y exangüe y que con las privatizaciones se debilita cada vez más. Fue el ministro Dromi quien, en un raptó de sinceridad, dijo que el gobierno se encuentra “de rodillas” ante los grandes intereses económicos del país y del exterior. Por eso debe liquidar su patrimonio, con lo cual se desangra todavía más. Como ha sido reducido a la impotencia debe renunciar a cualquier forma de control sobre los monopolios que se adueñaron de sus despojos. Por el contrario, en las privatizaciones realizadas por el gobierno de la señora Thatcher —y exhibidas reiteradamente como ejemplo— el control público y parlamentario sobre las nuevas empresas quedó firmemente establecido. En ese sentido, el “thatcherismo” argentino se sitúa claramente a la derecha de su mentor británico, lo que, sin duda alguna, constituye una tragicómica aberración.

Un Estado puede ser pequeño, como el japonés, o grande, como el sueco: pero lo que cuenta no es su tamaño sino su eficacia para disciplinar a las fieras que habitan en la jungla del mercado. Lo que importa es la capacidad del aparato estatal para extraer recursos y reasignarlos equitativa y responsablemente con vistas al interés general de la sociedad; también, su efectividad para imponer las reglas del juego que eviten que, en su voracidad insaciable, los egoísmos sectoriales destruyan a la sociedad con tal de salvarse a sí mismos.

¿Cómo se rompe este círculo vicioso del Estado débil que cada día se desintegra más? La respuesta ya la dio, hace casi quinientos años, un florentino brillante y consternado por la decadencia política de Italia: Nicolás Maquiavelo. Su fórmula, tan simple como contundente, ha sido permanentemente refrendada por la historia: para robustecer al Estado es preciso que éste se apoye en la voluntad popular, lo cual requiere la profundización de su vida democrática. Para esto hace falta ejecutar una política que se ubica en las antípodas de la actual. La dictadura del Proceso gobernó con el terror, pero el Estado fue lastimosamente débil. Los gobiernos democráticos que le siguieron temieron apoyarse genuinamente en el pueblo: prefirieron marginarlo y buscar, mientras tanto, distintas estrategias de alianza con las clases dominantes. A esta actitud suicida se le dio diversos nombres: “posibilismo” o “pragmatismo”, según los casos. El “golpe de mercado” de la burguesía le mostró al gobierno de Alfonsín que quien desmoviliza a la sociedad civil se transforma en prisionero de los grandes grupos económicos. El menemismo prefirió curarse en salud y antes de recibir el mandoble de la burguesía decidió encarcelarse a sí mismo, esperando de rodillas que la panacea de las privatizaciones y la súbita conversión al “ultrathatcherismo” obrase el milagro de aplacar a las fieras. El resultado fue el crítico y progresivo debilitamiento del Estado, vaciado económicamente, sin instancias de control y supervisión y divorciado de una base popular frustrada, escéptica y cada vez más cínica. Después de las privatizaciones, en síntesis, el espacio estatal para la democracia y la libertad, para la justicia y la equidad, será más endeble, recortado y vulnerable. Queda, sin embargo, una carta: en menos de un año el pueblo tendrá que votar y, si lo hace a conciencia, las cosas podrían comenzar a cambiar.

(13 de noviembre de 1990).

III. Neoliberalismo

Doña Rosa: Saqueadora, Subversiva, Guerrillera...

La emisión de *Tiempo Nuevo* del martes pasado fue un verdadero festival de la cultura autoritaria y un triste recordatorio del arraigo que las actitudes, valores y prácticas despóticas conservan en algunos sectores de nuestra sociedad. Durante dos horas y media fuimos bombardeados con un alegato grosero y desembozado mediante el cual sus tres conductores (los dos periodistas más el representante de turno de la familia Alsogaray en el programa) con la cooperación más discreta y mesurada de algunos invitados, exhortaban reiteradamente a las Fuerzas Armadas a ocupar militarmente, “con sus tanques”, nuestras ciudades para poner fin a este caos y al desorden social. El Dr. Mariano Grondona, que en la calculada división de tareas prevista en el programa aparece como la imagen serena y reflexiva del profesor universitario —que desde el Olimpo de su cátedra mira con indisimulado disgusto y reprobación los zafarranchos que los hombres producen al hacer la historia— se ciñó estrictamente al libreto. Trató de encubrir la irremediable levedad de sus dislates con referencias descontextualizadas y totalmente antojadizas a la obra de dos de las más grandes cabezas políticas de todos los tiempos: Nicolás Maquiavelo y Tomás Hobbes, que esa noche desde sus tumbas certificaron, con la sonrisa burlona que los caracterizaba, la necedad de los humanos.

Como es habitual, su colega, don Bernardo Neustadt, había abierto el programa con una crítica frontal y despojada de todo academicismo. Dirigida hacia esa entelequia, doña Rosa, que Grondona y Neustadt conjuraron durante años sin mayor suceso a juzgar por la fenomenal paliza recibida por sus pupilos el 14 de mayo,¹¹ su verba encendida se preocupó exclusivamente por lograr un toque efectista y se desentendió por completo de la sustancia de sus afirmaciones. Como en la mentalidad de los conductores del programa tanto doña Rosa como sus maridos, hijas e hijos, madres, padres y amigos están afectados por un incurable cretinismo mental que les impide separar la paja del trigo y, por consiguiente, compran cualquier cosa que les venda la pantalla chica (hasta los candidatos a cargos públicos), los periodistas trataron de demostrar, de mil maneras, que: (a) lo ocurrido en La Tablada ratificaba que la subversión está instalada el país; (b) que los saqueos que se habían producido confirmaban el carácter de masas de la subversión; (c) que ante ello corría peligro la estabilidad del orden social, ya que la propiedad privada, santuario final de nuestras libertades, era jaqueada por hordas de doñas Rosas, que como nuevos “chicos del Brasil” aparecían por miles para asaltar supermercados y (d) el remate “cantado” de este raciocinio: las Fuerzas Armadas debían volver a ocupar el centro de nuestra vida política y restaurar violentamente el orden.

No tiene sentido rebatir, uno por uno, los pasos de este falaz razonamiento. Basta con releer los diarios de estos días o, simplemente, mirar las fotografías de nuestras sufridas doñas Rosas transformadas, en la febril imaginación de los nostálgicos de las dictaduras, en torvas guerrilleras dispuestas a todo, para darse cuenta de que este fue un típico estallido social producido por la hambruna generalizada y sin precedentes a que está siendo sometido el pueblo argentino por un conjunto de grandes empresas oligopólicas, “a las que les interesa este país” (y vaya si les interesa, que se han apoderado de él),

¹¹ La Unión de Centro Democrático obtuvo el 6 % de los votos en las últimas elecciones para presidente y vicepresidente.

con la impotente anuencia del gobierno que se va y el guiño, entre pícaro y suicida, del gobierno que viene. Episodios de este tipo ha habido recurrentemente en la historia europea desde la Revolución Industrial hasta aquí y, sin ir tan lejos, se han visto regularmente en los últimos años en el Brasil. En todos estos casos, y la Argentina no podía ser la excepción, en la momentánea confusión que se crea en esas circunstancias se mezclan los más diferentes tipos sociales; las desesperadas amas de casa con sus hijos, sus maridos cesantes y los jubilados hambreados con los activistas y los agitadores deseosos de “hacer méritos” ante sus jefes políticos, los delincuentes comunes, los diligentes “servicios” a la espera de un ascenso además de los trasnochados vanguardistas de la ultraizquierda y los impacientes cuadros sediciosos de la ultraderecha. Esto siempre es así, pero a nadie razonablemente cuerdo y respetuoso de la legalidad institucional de un país se le puede ocurrir por eso la necesidad de adoptar una medida extrema cuyos efectos serían, a muy corto plazo, peor que la enfermedad que se pretendía curar de raíz.

La crisis profunda del liberalismo argentino es incomprensible al margen de la inveterada adicción por el autoritarismo que exhiben sus personeros. No comprendieron ni a Locke ni a Montesquieu: solo así se puede entender que el Dr. Grondona haya rogado a sus exalumnos militares que se abstuviesen de disfrutar el dulce sabor de la venganza contra quienes los habían acusado y encarcelado, o que un abogado pueda acusar a las cámaras federales y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de haber violado la legalidad al condenar, ante pruebas irrefutables, a la cúpula del Proceso. Es en virtud de ese completo desprecio por los valores que el liberalismo legó a la sociedad moderna, el derecho a la vida y al debido proceso legal, que se le desconoce la condición humana a un activista (algo que también llegó a decir el futuro presidente, en lo que quiero creer fue apenas un *lapsus linguae*) en un país donde los conductores de *Tiempo Nuevo* saben que eso significaba el exterminio del imputado sin los beneficios del proceso legal. Por eso, ante la crisis desatada por la ambición sin límites de la clase dominante, suspiran por la restauración

de una dictadura que reasegure sus privilegios. Quieren a un liberalismo económico salvaje, pero sacrificando los derechos, garantías e inmunidades que contiene el liberalismo político. Paul Samuelson, Premio Nobel de economía, definió muy bien esta ideología: es el “fascismo de mercado”. Porque, ¿quién es el subversivo: doña Rosa que, impulsada por años de privaciones, participa de una episódica *jacquerie* o aquel que propone la violación de la constitución y las leyes y convierte a las Fuerzas Armadas, necesarias para la defensa territorial de nuestra soberanía, en un poder político represivo *de facto*? En Inglaterra, cuna de ese liberalismo que ilumina los ojos de los conductores de *Tiempo Nuevo*, hubo muchas explosiones de ira popular motivadas por el hambre y la escasez, pero a ningún liberal inglés se le ocurrió por eso implorar histéricamente que “los militares saquen los tanques a la calle” como lo hizo Grondona el martes pasado. Su sabiduría histórica les había enseñado que los incendios no se apagan arrojando nafta a las llamas.

(2 de junio de 1989).

Capitalismo *made* in Argentina

Para comprender las causas profundas de los saqueos tenemos que apartar la vista de lo anecdótico y examinar las novedades producidas en el capitalismo argentino en los últimos años. Dos sobresalen con nitidez: la agudización de la concentración oligopólica y su reverso, la creciente pauperización de vastos sectores sociales.

En relación con lo primero, un grupo de grandes conglomerados empresariales —con inversiones diversificadas en los más distintos ámbitos de la producción, la intermediación financiera y la comercialización— se ha apoderado de los resortes fundamentales de la economía nacional. En los años del Proceso promovieron activamente el descomunal endeudamiento externo del Estado. Con el advenimiento de la democracia profundizaron su inserción en el perverso circuito financiero a la vez que también aparecían como miembros de la “patria contratista” y la “patria exportadora”. Asociados al Estado en el “festival de bonos”, ahora que aquel se encuentra en total bancarrota aparecen con los ropajes del acreedor impaciente, que le exige grotescamente que se comporte seriamente cuando nuestra burguesía es la causante principal de su envilecimiento y de su poca seriedad. Ante la insolvencia fiscal mañana reclamarán la capitalización de la “deuda interna” mediante la privatización de las empresas públicas potencialmente más rentables. Un Estado anémico y desangrado y una sociedad civil anonadada la contemplan

exigiendo medidas enérgicas para conjurar la crisis que ella misma ha desatado. Por eso impone sus hombres y sus ideas, que ya pueden pasar de la empresa al Estado sin la mediación del partido. El desquicio fiscal, el colapso económico y el desprestigio de la vieja tradición nacional-populista le han otorgado una hegemonía política indisputada.

El reverso de la medalla es un proceso de pauperización desconocido en nuestra historia. El grueso de las clases medias se ha empobrecido: sus ropas ajadas, su dieta raquítica, sus patrones de consumo esfumados como viejos sueños son visibles aun para el visitante más distraído. Las clases populares, especialmente los sectores más inestructurados y marginales, que en el pasado podían aspirar a comer un asado y tomar unos mates han sido violentamente expropiados de esas ilusiones: su dieta actual es la de los pueblos pobres del Asia o África y sus condiciones generales de existencia se han degradado hasta límites inconcebibles para cualquier argentino hace una generación.

Estas transformaciones del capitalismo argentino coincidieron, como si fuera poco, con una nueva tentativa de fundar un orden democrático estable y legítimo, en donde los conflictos sociales pueden expresarse sin temores. Por eso, esta vieja pobreza sumergida que flagela a nuestro pueblo desde mediados de los años setenta solo podía ser percibida ante el estallido elemental y espontáneo de su protesta. Ahora todos saben que existe. No sé cuántos querrán saber que la causa profunda de los saqueos se encuentra en el desenfreno de la clase dominante, que sumió al país en la pobreza, y no en la rebeldía de los condenados. Lo sorprendente es que estos estallidos sociales no se hayan producido mucho antes.

(4 de junio de 1989).

Un capitalismo salvaje

Las declaraciones de Antonio Cafiero acerca de la “identidad histórica” del peronismo (*Página/12*, 27 de junio de 1989, p. 9)¹² traen a colación un tema sobre el cual es preciso reflexionar muy seriamente, porque la mutación experimentada por el justicialismo triunfante se ha convertido en uno de los ejes fundamentales del debate nacional. En nuestro artículo anterior¹³ afirmamos que el populismo había muerto; ahora es necesario que las fuerzas políticas progresistas piensen en lo nuevo que está naciendo, si es que se quiere retener la posibilidad de intervenir, con cierta eficacia, en la coyuntura política actual.

Las pocas semanas transcurridas desde las elecciones del 14 de mayo han contemplado un drástico realineamiento en el esquema de alianzas sociales prevalecientes en la arena política. La vieja coalición defensiva “nacional-populista” tuvo su canto de cisne en la jornada electoral y junto con su triunfo exhaló, ante el estupor de sus partidarios, su último suspiro. La fiesta se transformó, así de repente, en un velorio. Todo lo que es sólido se desvanece en el aire, dijo una vez el filósofo de Tréveris, y la dialéctica de la historia demostró, una

¹² El gobernador de Buenos Aires, Antonio Cafiero, aceptó la inclusión de figuras provenientes del liberalismo en el futuro gabinete de Carlos Menem “en la medida en que no desvirtúen la identidad histórica del justicialismo”.

¹³ Ver “Réquiem para el populismo” en este mismo volumen.

vez más, su reconocida capacidad para hacer de los hombres, partidos y movimientos sociales dóciles juguetes de sus caprichos. A poco más de un mes los “26 puntos” de la CGT y el FREJUPO suenan tan anacrónicos como la libertad de vientres decretada por la Asamblea del Año XIII. Ubaldini, junto con el Partido Intransigente [PI] y la Democracia Cristiana [DC] contemplan azorados, del brazo de los renovadores caferistas del peronismo, como se formó un gobierno que entronizó a hombres (...y mujeres), ideas y políticas que eran patrimonio exclusivo de la derecha y que representan intereses económicos y sociales objetivamente contradictorios con los que identifican al campo popular. Por eso en los rostros largos y melancólicos de los perdidosos dirigentes de la UCD se fueron dibujando radiantes sonrisas, mientras que una legión de enfervorizados “creyentes” y “seguidores” sentía que su noche triunfal se disipaba vertiginosamente.

¿Qué fue lo que ocurrió? Simplemente que el presidente electo reveló el secreto de la “revolución productiva”. Esta consiste, en buenas cuentas, en entregar a las hábiles y rápidas manos de la gran burguesía argentina los negocios del país, encuadrando a los distintos sectores sociales en sus estructuras corporativas —que sirven como instancias de mediación, desmovilización y control “desde arriba”— y apostando ciegamente a que este modelo madure en un plazo de dos o tres años. Luego vendrán los expertos que tratarán de mejorar, con cuentagotas, la situación del ochenta o noventa por ciento de la población que queda excluida de los beneficios del nuevo ordenamiento económico y político. Un proyecto de esta naturaleza requería, naturalmente, una redefinición de las alianzas de clase sobre las cuales asentar la gestión del futuro gobierno. Por eso varios de sus más encumbrados funcionarios saludaron alborozados la emergencia del “nuevo bloque” de poder social y económico que ha surgido en la Argentina contemporánea. Ahora el próximo elenco gobernante podía elegir entre los exponentes de la vieja industrialización de los años cuarenta y cincuenta, aliados a una dirigencia obrera ansiosa de ejercer el cogobierno, o los voraces *managers* del nuevo poder económico y sus amigos en los sindicatos. Con los primeros solo existía

la esperanza de obtener una débil reanimación del mercado interno, pero sin generar recursos suficientes como para pagar las deudas externa e interna o para sentar, sobre renovadas y sólidas bases, el crecimiento económico de la Argentina. Con los segundos, en cambio, se puede lanzar una formidable ofensiva exportadora cuyos previsibles excedentes comerciales tranquilizan a los acreedores internos y externos y robustecen a las fracciones más concentradas del capital nacional e internacional. En una palabra, se desarrolla el capitalismo aun cuando se congelen, por mucho tiempo, las fenomenales desigualdades sociales producidas en los últimos años. Puesto ante la disyuntiva: fidelidad a la alianza “histórica” del peronismo, esa que le confería su “identidad clásica”, o articulación de un novísimo “bloque histórico”, hegemonizado por los capitanes de la industria, los exportadores y los banqueros, Menem optó por el segundo. Eligió de este modo a las fracciones del capital que tienen en sus manos los contactos, las posibilidades y los recursos para impulsar, previo pago de un altísimo costo social que ya los pobres están abonando, un acelerado desarrollo capitalista. En consonancia con esa decisión se eligieron los hombres, las ideas y las políticas más adecuadas para implementar una “revolución burguesa” que, a no dudarlo, cambiará el rostro de la Argentina.

Lo que se nos viene es un capitalismo salvaje, impulsado por una nueva alianza social de neto corte neoconservador en la que se sintetizan dos elementos: una base popular y una hegemonía burguesa. Esa es la fórmula política utilizada por la señora Margaret Thatcher en Gran Bretaña y la misma que instalara a Ronald Reagan en la presidencia de los Estados Unidos. Ante el agotamiento de las propuestas político-económicas más tradicionales, grandes sectores de las clases subalternas apoyaron, en su desilusión, a regímenes que enriquecieron a los más ricos y empobrecieron a los más pobres. La popularidad de los gobiernos de Thatcher y Reagan es indiscutible; la del nuevo presidente electo de la Argentina también. Los beneficiarios aparecen asimismo con prístina nitidez: son los grandes empresarios, los “yuppies” y su séquito de intelectuales, expertos,

funcionarios y manipuladores de la opinión pública. El cogobierno peronista-conservador representa una “salida” a la crisis que en los países del capitalismo avanzado profundizó las desigualdades existentes y debilitó las bases de su consenso democrático. En nuestro país asumirá las características de una verdadera “acumulación primitiva”, que habrá de exasperar las contradicciones sociales y tomar más problemático el afianzamiento de nuestra acosada democracia. Claro está que en los capitalismo centrales la estructura social y los avances del “Estado benefactor” permitieron amortiguar, al menos en parte, el impacto pauperizador que se descargó sobre las capas populares. En la Argentina la transformación del populismo en neo-conservadurismo no cuenta con esa tranquilizante “red de seguridad”, y el espectro de los saqueos se yergue amenazante ante este nuevo proyecto. ¿Se podrá implementar en democracia?

(28 de junio de 1989).

Las democracias ajustadas de América Latina

La victoria del Frente Amplio en Montevideo, la de la alianza de la democracia cristiana con los partidos de la Unidad Popular en Chile y el casi seguro triunfo de Lula en las elecciones que hoy se están llevando a cabo en Brasil son episodios que hablan claramente del reflujo de la hegemonía neoliberal en la política latinoamericana. En efecto, la década de los ochenta quedó marcada, desde sus inicios, por el ascenso de Ronald Reagan a la presidencia de los Estados Unidos y por la consolidación del gobierno de Margaret Thatcher en el Reino Unido, empresa para la cual contó con la gratuita e inestimable colaboración de los generales del Proceso.

A raíz de ese predominio, el “clima ideológico” de Occidente se tornó progresivamente irrespirable a medida que transcurrían los años ochenta: la ortodoxia neoliberal en lo económico —y neoconservadora en lo político— lo invadía todo, y las renacientes democracias latinoamericanas no pudieron abstraerse del influjo de las ideas dominantes en el sistema mundial. Su impacto sobre nuestras sociedades y sobre la cultura de la región fue inmenso, justo en el momento en que lográbamos quitarnos de encima la bota opresiva del régimen militar. Lo menos que se puede decir es que la oleada neoconservadora contribuyó decisivamente a enturbiar nuestra visión en el momento en que las fuerzas sociales progresistas tenían que ser muy

claras en la identificación del camino que nos sacaría del laberinto de la pobreza, el atraso y el despotismo político. Deslumbrados por los luminosos destellos procedentes de los Estados Unidos y Europa nuestros intelectuales y parte de la clase política se entretuvieron en discutir el más o menos tardío acceso de Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay a la posmodernidad y la sociedad posindustrial, desechando la elocuencia demoledora de nuestras estadísticas de mortalidad infantil, de analfabetismo, de provisión de agua potable y servicios de alcantarillado; o las que hablan de las increíbles regresiones en la distribución del ingreso en todos nuestros países o de la caída de los salarios reales o, para ser más “positivos” y no ver tan solo los aspectos más desagradables del capitalismo latinoamericano, de aquellas cifras que prolijamente compilan nuestros acreedores externos y que dan cuenta de las superganancias amasadas —mediante la especulación financiera alentada por el “festival de bonos” organizado por varios gobiernos de la región— por una nueva capa plutocrática. Entendámonos: el problema no está en discutir sobre la posmodernidad o la sociedad posindustrial, sino en hacerlo instalados en un limbo academicista que nos impide tener contacto con la realidad.

El fracaso del programa neoliberal en los capitalismo avanzados tenía que incidir fuertemente en América Latina. A pesar de lo que sostienen —reconozcamos que cada vez con menor apasionamiento— los publicistas de la derecha, la evolución económica de los Estados Unidos y el Reino Unido está lejos de satisfacer las expectativas menos exigentes. Será tal vez por eso que los apóstoles del liberalismo argentino, otrora tan entusiasmados con la “Reaganomics”, se muestran ahora muy reticentes a hablar de los éxitos del programa neoliberal. Es que, siendo justos, hay que admitir que ni siquiera las reconocidas habilidades dialécticas del ingeniero Alsogaray alcanzan para explicar las maravillas producidas por el liberalismo económico en la tierra de Mark Twain. En efecto, ¿cómo explicar a sus fieles seguidores y propagandistas televisivos que cuando Reagan asume el gobierno, a inicios de la década, Estados Unidos era el mayor acreedor mundial y que cuando lo deja, ocho años más tarde,

lo hace convertido en el mayor deudor mundial? Sabemos que para “fundir” a la Argentina no hace falta demasiado; pero para hacer lo mismo con los Estados Unidos se requiere de un proyecto económico realmente muy deficiente y dogmático. De otro modo no se podría haber producido este verdadero “milagro al revés” del neoliberalismo reaganiano. Otro ejemplo: el gasto público, que nuestros liberales dicen querer recortar drásticamente para poder “agrandar” la nación. Sin embargo, las estadísticas del Banco Mundial muestran cómo nada de eso ocurrió en los Estados Unidos o el Reino Unido, lugares en donde los presupuestos estatales siguieron siendo muy altos a pesar de la retórica neoliberal que nos aturdió con sus exhortaciones. Por otra parte, el país a quien mejor le fue en la década de los ochenta, Italia, fue precisamente el que más aumentó su gasto público. En fin, son apenas unas pocas de las tantísimas evidencias que explican porque hoy el neoliberalismo no se grita sino que se susurra, casi como con vergüenza.

La aplicación de diversas fórmulas de inspiración neoliberal no tuvo mejores resultados en tierras latinoamericanas. Impulsados a los empujones por sus acreedores externos, organizados como un auténtico club que coordinaba con eficiencia las presiones políticas y económicas sobre nuestros debilitados gobiernos, los países de la región pusieron en marcha una serie de durísimos ajustes que recortaron los ingresos de los trabajadores, redistribuyeron la renta entre diferentes fracciones del capital y favorecieron la generación de excedentes para pagar la deuda externa. El resultado fue catastrófico, tanto para aquellos que siguieron al pie de la letra las directivas del FMI y los bancos acreedores, como México, como para los más díscolos: Argentina, Brasil, Perú y Venezuela. El caso de Chile —que tanto admira el líder de la UCD— también se inscribe en las generales de la ley, porque a pesar de haber practicado un cruento y costoso reajuste que configura una pesada herencia para la nueva democracia (por la inédita reconcentración del ingreso en las clases propietarias y por la verdadera subasta del patrimonio público efectuada para pagar a sus acreedores) sigue siendo, en términos per cápita, uno de los países más endeudados

de América Latina. En otras palabras, todos estos reajustes, desde los más ortodoxos hasta los más heterodoxos, no sirvieron para nada. Estamos peor que antes y somos más vulnerables que antes: así lo expresaba el economista del MIT Rudiger Dornbusch (De la Torre, 1990) ante una consternada audiencia de expertos mexicanos y latinoamericanos hace apenas unas pocas semanas. México “hizo todos los deberes”: redujo el déficit fiscal, privatizó con rapidez y seriedad, controló efectivamente la inflación, redujo sustancialmente los salarios y, sin embargo, el ahorro interno se sigue fugando, las inversiones no llegan y la senda del crecimiento económico aún no se encuentra. Los pocos argentinos que escuchábamos su presentación no pudimos dejar de pensar también en la futilidad de tantos sacrificios exigidos a nuestra gente, a quien poco tiempo antes se le había dicho que con la democracia se comía, se educaba y se sanaba.

Todo lo anterior, unido a los resultados de las recientes elecciones en varios países hermanos y a los trascendentes procesos que han derrumbado las así llamadas “democracias populares” en Europa Oriental —y que abren la puerta, por primera vez en la historia, a la posibilidad de un socialismo democrático, pluralista y libertario— nos permite vaticinar que con esta década que está por concluir también se producirá el crepúsculo del dogma neoliberal y la creencia supersticiosa en la magia del mercado. Los noventa se inician bajo promisorios auspicios: fuertes vientos de renovación política e ideológica barren la escena del sistema internacional y en América Latina hemos comenzado a comprender que el remedio que nos obligaron a tomar durante todos estos años no sirve. La auténtica solución de nuestra crisis requerirá de crecientes dosis de socialismo y democracia participativa. Esta parece ser, afortunadamente, la agenda de la década que está a punto de comenzar.¹⁴

(17 de diciembre de 1989).

¹⁴ Nota del autor: Desgraciadamente hubo que esperar diez años más para que esta agenda comenzara a implementarse con la asunción de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela el 2 de Febrero de 1999.

Un mundo feliz

Especular sobre el porvenir del capitalismo como sistema histórico-universal es un ejercicio tan riesgoso como necesario. Por eso vale la pena intentarlo, porque si el hombre renunciara a su capacidad de anticipar imaginariamente el futuro estaría autocondenándose a desempeñar un deprimente papel de mero funcionario de la historia. Su aptitud para pensar mundos posibles —distintos del que lo abrumba— y para inventar utopías es lo que le ha permitido salir de las cavernas, dominar la naturaleza y fundar civilizaciones. Las actitudes “realistas” y “posibilistas” reflejan algo más que una actitud de sana prudencia: en la mayoría de los casos encubren una vergonzante complacencia con el *statu quo*.

¿Qué nos reserva la próxima década? La industria cultural del capitalismo ha vuelto a exhumar, en sus centros más desarrollados, las conocidas tesis sobre el fin de la historia, de las ideologías y de la lucha de clases. Con tozuda obstinación sus ideólogos se desviven por hacernos creer que la dialéctica incesante de la historia ha llegado a su culminación. Este mundo, el que ahora tenemos, es el que habremos de disfrutar eternamente. Mediante el embrujo de la palabra se disuelven las contradicciones sociales que surcan a las sociedades capitalistas y los hombres se aprestan a entrar en un nuevo y luminoso estadio de su existencia, en donde todo es tierno y apacible. ¿Será verdad?

Veamos un poco las tendencias reales y objetivas que actualmente están en curso en el capitalismo internacional. Hace un par de años Peter Drucker, profesor de Ciencias Sociales y Dirección de Empresas en la célebre Claremont Graduate School de California, publicó en la revista norteamericana *Foreign Affairs* (1986) un artículo en el cual analizaba los grandes cambios que, a su juicio, transformaron radicalmente el funcionamiento de la economía mundial. En síntesis, ellos son los siguientes: (a) el progresivo “desenganche” de las economías industrializadas en relación con aquellas especializadas en la producción de materias primas y alimentos; (b) la desvinculación entre la producción y el empleo en el sector industrial, y (c) la sustitución del comercio de bienes y servicios por el movimiento internacional de capitales como la “fuerza motriz” de la economía mundial. El resultado combinado de estas mutaciones en la modalidad de funcionamiento del sistema capitalista lo vuelve altamente inestable e impredecible y —contrariamente a las expectativas optimistas de sus ideólogos— sumamente propenso a generar situaciones que el autor no titubea en caracterizar como “aterrizajes violentos”.

El creciente desacople de la moderna producción industrial de las economías primarias es un resultado del desarrollo de las nuevas tecnologías, que no solo modificaron la naturaleza del proceso productivo sino que “inventaron” nuevas materias primas que están desplazando rápidamente a las naturales. Para nadie es un misterio que los países subdesarrollados son productores de materias primas, que las tecnologías de punta utilizan cada vez en menor proporción. Hasta no hace muchos años la industria de las telecomunicaciones requería 1 000 kilogramos del cobre, producido por Chile, Perú y Zambia, para transmitir un cierto número de mensajes telefónicos; hoy lo puede hacer utilizando entre 30 y 50 kilogramos de fibra óptica, producida en las plantas supermodernas de los países desarrollados. Además, para lograr esa pequeña cantidad se emplea apenas el 5 % de la energía —abundante en la periferia— exigida para la elaboración de una tonelada de cobre. No sorprende por lo tanto comprobar la correlación inversa existente entre “modernidad productiva”

y empleo de materias primas naturales: en la vieja industria de hojalata estas representan un 60 % del costo total del producto; en la automovilística el 40 %, y solo entre el 1 y el 3 % en la industria de la microelectrónica (microchips y semiconductores).

Es cierto que las “industrias de punta” no constituyen la totalidad del sector industrial de los capitalismo avanzados, pero la tendencia es muy clara: la moderna producción industrial será cada vez menos “material-intensiva” y cada vez más “conocimiento-intensiva”, y las naciones de la periferia no cuentan con un parque científico y tecnológico como para hacer frente a la enorme acumulación de recursos existentes en los centros. En la Argentina, la obra de destrucción cultural iniciada por la dictadura militar de Juan Carlos Onganía en 1966 ha dejado huellas muy profundas que la crisis actual impide por completo revertir. Al igual que los demás países subdesarrollados ofrecemos productos crecientemente prescindibles para las economías industrializadas. Por eso nuestra inserción en el comercio mundial es débil, inclusive en el caso de Brasil, que es el ejemplo más exitoso en esta materia. De ahí que la estrategia de desarrollo alentada por nuestro gobierno —basada en la exportación de alimentos e hidrocarburos— esté condenada al fracaso, independientemente de la seriedad y rigurosidad con que se implemente, porque ignora estos datos fundamentales. Los precios de las materias primas y los alimentos tienen una tendencia secular a la baja por comparación con los de los servicios y los productos manufacturados. A mediados de la década de los ochentas aquellas habían llegado, salvo el caso del petróleo, al punto más bajo de su historia. Dado que los países desarrollados se han convertido también en exportadores de alimentos —¿no compite, acaso, la Comunidad Europea con Argentina, Brasil y Uruguay en este terreno?— y teniendo en cuenta que sus industrias tienden a usar cada vez menos nuestras materias primas, ¿qué sentido tiene fundar una estrategia de desarrollo sobre dos pilares tan endeblés?

Estas tendencias, objetivamente marginalizantes de los países de la periferia, se acentúan cuando se observan los otros dos

componentes de la “gran transformación” que cambió el rostro de la economía capitalista internacional. En efecto, resulta que el éxito y la competitividad en el sector industrial demandan la aplicación intensiva de conocimientos y tecnologías especializadas. América Latina tiene una arrolladora dinámica demográfica, que hace que millones de personas cada año traten de obtener empleos. Durante muchos años nuestras industrias incorporaron a esos trabajadores, y no faltaron quienes aducían que los bajos salarios que aquí se pagaban formaban parte de nuestras “ventajas comparativas”, pero hoy en día la clave para sobrevivir en el enrarecido mundo del comercio internacional la proporciona la robótica, la informatización de la planta y la automatización de los procesos productivos, y no la baratura del salario. Como el mercado mundial se ha unificado hasta límites inconcebibles hace apenas diez o quince años, los productores nacionales que no se encuadren dentro del nuevo paradigma tecnológico “ahorrador” de mano de obra serán desplazados del mercado. La crónica desocupación que afecta a los países europeos es una buena muestra de lo que estamos diciendo; para América Latina, sin las “redes protectoras” del *Welfare State* europeo, el panorama se vuelve sombrío. Nuestra capacidad de sobrevivencia en el mundo industrial requiere de la aplicación intensiva de la ciencia y la tecnología, algo que los capitalistas nunca se interesaron en promover en América Latina. Además, si no queremos agravar los problemas del desempleo estructural, será necesario que nuestros empobrecidos estados impulsen una activa política de entrenamiento y reorientación de la fuerza de trabajo hacia otros sectores de la economía. Pero, ¿con qué dinero?

Por último, el tercer componente del cambio global, la supremacía del movimiento internacional de capitales, revela la resolución en favor de la fracción financiera del capital de las pujas que, durante los setentas, se libró entre esta y la fracción industrial. Este predominio mundial del capital financiero tiene enormes implicaciones para los países de la periferia, y en la Argentina ha estimulado los aberrantes comportamientos especulativos que hemos padecido

desde hace quince años. Para nuestra desgracia, la hegemonía del capital financiero nos sitúa en el lugar más incómodo de la economía internacional: el de los deudores “insolventes e irresponsables”, que deben ser “disciplinados” por las duras directivas emanadas de los organismos financieros internacionales y la banca acreedora. Si antes éramos productores de alimentos y materias primas para los países desarrollados que las demandaban, ahora hemos sido reducidos a la calidad de deudores morosos de un puñado de oligopolios internacionales que no necesitan lo que producimos y que solo quieren perpetuar nuestra situación de subordinación estructural. Antes de que paguemos la deuda les interesa que sigamos siendo deudores, eternizando la transferencia de nuestros “excedentes” hacia los centros.

Como puede observarse, el futuro del capitalismo no podría ser más promisorio para nuestros países. Progresivamente excluidos del comercio mundial, sometidos a la voracidad insaciable de los monopolios y de la nueva plutocracia financiera, desgarrados por contradicciones sociales cada vez más intensas, ¿podemos seriamente creer que este es el fin de la historia y que en la década que comienza nada habrá de conmover este maravilloso triunfo del capitalismo? Como reza la canción de Rubén Blades: “la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida”.

(31 de diciembre de 1989).

Neoliberalismo y dictadura en Chile

Cuando el próximo 11 de marzo Patricio Aylwin preste juramento como nuevo presidente de Chile los latinoamericanos tendremos por lo menos dos buenas razones para celebrarlo. Primero, porque habrá llegado el fin de una siniestra tiranía; segundo, porque de no producirse algún imprevisto golpe de Estado será la primera vez en que todas las naciones de América del Sur estarán gobernadas por regímenes democráticos.

La tarea que tiene por delante la futura democracia chilena es enorme. Veamos tan solo los problemas legados a la prolongada aplicación del modelo económico neoliberal, el mismo que —con el fanatismo propio de los conversos— ha adoptado nuestro gobierno. Son muchos los que aquí han proclamado su admiración por el “modelo chileno”. No por casualidad Álvaro Alsogaray anunció públicamente que habría votado en favor de Pinochet en el decisivo plebiscito de 1988. Al exaltar los éxitos del modelo en Chile se legitima a la “economía social de mercado”, que aquí el presidente Menem ha bautizado como “economía popular de mercado” pero que el locuaz asesor-comunicador-vocero dice —para engatusar a los más desconfiados— “que son la misma cosa”. El entusiasmo del ideólogo se justifica: el dictador chileno es un arquetipo que sintetiza la fórmula ideal de gobierno de todo el liberalismo latinoamericano: libertad en el mercado y “mano dura” en el Estado.

Sin embargo, el “milagro” económico de Pinochet tiene pies de barro. Salvo la notable expansión de las exportaciones primarias, el resto es, en realidad, un espejismo generado por la tardía recuperación del bajón de casi un veinte por ciento del PBI en 1982. Recién a partir de 1985 vino el crecimiento, estimulado por una coyuntura excepcionalmente favorable para el cobre y los productos frutihortícolas chilenos. La nueva subida de la cuesta fue inmediatamente calificada como milagrosa por el disciplinado coro neoliberal. Pero la verdad es que, en términos de producto per cápita, Chile termina la década de los ochenta aproximadamente en el mismo punto en que se encontraba hace diez años, y con los salarios, ingresos y consumos de la amplia mayoría de su población todavía por debajo del que disponían en los días de Salvador Allende.

Pensemos fríamente: si el “modelo neoliberal” hubiera funcionado tan bien, ¿por qué sigue habiendo un número tan grande de chilenos que emigran a la Argentina? No será precisamente porque nuestra economía funcione a las mil maravillas, después de soportar el “dirigismo, estatismo e intervencionismo” de los más diversos gobiernos durante casi medio siglo. ¿Cómo explicar que centenares de miles de trasandinos parecen preferir el estancamiento, las incertidumbres y el frenesí de la Argentina al paraíso terrenal que nuestros profetas televisivos perciben del otro lado de la cordillera? Si el modelo fuese tan exitoso los migrantes ya habrían regresado, literalmente atropellados por una verdadera estampida de argentinos ávidos también de deleitarse con los dulces frutos del neoliberalismo. Además, si la situación fuera tan auspiciosa como lo señala la derecha argentina, ¿cómo explicar que Hernán Büchi, el ministro de economía que produjo el famoso “milagro”, no obtuviese nada más que el veintiocho por ciento de los votos? ¿Será la ingratitud propia de pueblos ahítos y satisfechos? Como explicación parece un tanto rebuscada.

Las razones son otras. Las propias encuestas gubernamentales señalaban, durante la campaña electoral, una verdad elemental: la gran mayoría de la población opinaba que económicamente estaba

peor que antes. Drásticas reducciones en el consumo y un salario mínimo que oscila en torno a los setenta dólares mensuales —que no todos los que encuentran trabajo tienen la suerte de percibir— en un país cuyo costo de vida duplica al nuestro. Para beneplácito de nuestros liberales la atención médica ha sido completamente privatizada, y si alguien se enferma ya no es un problema público sino individual, sobre el cual solo Dios o la Fortuna tienen la última palabra; con la educación ha pasado algo parecido, y los esquemas de previsión y seguridad social también cayeron bajo la guadaña privatizadora. Las gélidas leyes del mercado deciden en Chile si alguien puede curarse, educarse y comer, ¿no habrá sido por eso que la gente en las urnas repudió a la dictadura neoliberal?

En relación al tan mentado éxito exportador de Chile sería bueno que los admiradores argentinos de Pinochet dijeran también que el cobre equivale a poco más de la mitad de las exportaciones chilenas, y que los yacimientos de ese mineral fueron estatizados por el gobierno de Salvador Allende. Esto entra en flagrante contradicción con las aburridas letanías en favor del mercado libre y las críticas al “dirigismo intervencionista”, porque Pinochet se cuidó muy bien de revertir la decisión adoptada por el presidente socialista. Este había dicho que “el cobre es el sueldo de Chile”, y el dictador le concedió en los hechos la razón y lo mantuvo bajo control estatal. De paso: si la derecha argentina fuera coherente con su exaltación del modelo chileno tendría que proponer la inmediata estatización de las fuentes generadoras de la mayor parte de nuestros ingresos de exportación, expropiando lisa y llanamente a la burguesía agroexportadora. Pero la tradicional hipocresía política y deshonestidad intelectual de sus representantes hace que estos prefieran tergiversar los hechos para así poder medrar con la confusión reinante.

En síntesis: este modelo económico, que ahora se quiere imponer en la Argentina, es impensable sin la superexplotación de la fuerza de trabajo. Por eso los sindicatos fueron sistemáticamente perseguidos, desmantelados e ilegalizados y sus dirigentes conocieron la cárcel, la tortura y el exilio. Muchos fueron asesinados. Se comprende que el

Chile de Pinochet sea un verdadero paraíso para nuestros liberales, porque allí el despotismo del capital no conoce límites. Un joven empresario se refería —en Santiago, la semana pasada— a las virtudes de este ordenamiento económico y la ilustra con la siguiente historia. En su finca forestal trabajaban, antes del golpe de 1973, cerca de quinientos trabajadores que vivían en el establecimiento y habían organizado un sindicato. Con el golpe de 1973 todo eso se acabó: en la finca quedaron cincuenta peones, y solo en ciertas épocas se subcontrata personal a empresas que proveen mano de obra ambulante. Se trata de obreros sin residencia fija, separados de sus familias y que son contratados precariamente para una obra determinada. Una vez concluida, los trabajadores se marchan, sin perturbar el merecido descanso de nuestro exitoso empresario con minucias tales como la seguridad social, vacaciones pagas, aguinaldos, sobresueldos por trabajo insalubre y otros productos de la demagogia populachera. La “racionalidad y eficiencia” de la política neoliberal quedaban demostradas, según este relato, “por un hecho desgraciado y lamentable, pero inevitable en este tipo de faenas. Mientras talaban un árbol dos peones se despeñaron por un escarpado barranco. Gravemente heridos quedaron en el lugar durante tres días, hasta que finalmente los encontraron, pero ya era tarde porque habían muerto. Ante una situación como esta en el pasado se habrían paralizado las labores y cuadrillas de trabajadores habrían interrumpido todo para salir a buscar a sus compañeros: luego, seguramente se habría ido a la huelga acusando a la empresa de no tomar las medidas mínimas de seguridad. Ahora la tarea continuó su ritmo porque el barco que estaba esperando los rollizos para exportarlos a Japón no podía esperar: el subcontratista se encargó del asunto, se arregló con las viudas, les pagó la indemnización y organizó el traslado de los cadáveres para que recibieran cristiana sepultura”.

La historia es de una contundencia ejemplar. ¿Es posible conciliar un régimen económico como el neoliberal con la democracia política? La clave secreta del “milagro” chileno no está en la agresividad exportadora, la baja de los aranceles o la “magia del mercado”.

Es mucho más prosaica y se encuentra en la superexplotación de la clase obrera y de los sectores subalternos, eso que Marx denominó “intensificación de la plusvalía absoluta”. A la larga, esta estrategia de expropiación de los trabajadores es insostenible en un régimen democrático, en donde los sindicatos puedan negociar con los patronos el precio y las condiciones de la venta de la fuerza de trabajo, y en donde estos no cuenten con la ayuda de un gobierno que no vacile en degollar periodistas, dinamitar opositores políticos y líderes sindicales, arrojar ácido en el rostro de estudiantes y torturar y encarcelar a mansalva cada vez que se le vino en gana. La democracia es incompatible con estos métodos terroristas de disciplinamiento de las clases y capas populares. También lo es con el mantenimiento de un sistema económico que distribuye los frutos del progreso de una manera extraordinariamente desigual e inequitativa. En Chile, la reconstrucción democrática será imposible sin el desmantelamiento del modelo neoliberal; en la Argentina, la supervivencia de la democracia se verá seriamente comprometida si se intenta aplicar la misma receta.

(10 de enero de 1990).

La hechicería liberal

El martes a la noche, en una de sus rutinarias apariciones en *Tiempo Nuevo*, Álvaro Alsogaray reveló el carácter de las diversas oposiciones con que se enfrenta el gobierno. Están en primer lugar los “lefebvristas”, es decir, los ultraliberales impacientes que por ser más papistas que el papa son más liberales que el propio Adam Smith; luego vienen los “especuladores políticos”, que retacean su apoyo o que solo lo brindan a cuenta de las ventajas que piensan obtener cuando la “solución liberal” produzca sus primeros frutos y, por último, están los “reaccionarios”, categoría en la cual incluyó a toda la izquierda, a los radicales, a la mayoría del peronismo, a los gremios y a las corporaciones empresarias. En una palabra, a casi todo el país.

Dejemos de lado los aspectos humorísticos del asunto, por más desopilante que sea contemplar al severo y venerable patriarca de la derecha argentina utilizando el lenguaje inflamado de la juvenilia revolucionaria, tipo *Trinchera Proletaria* o *Aurora Roja*. Si la pasión de la ideología sigue ofuscando su inteligencia, la próxima aparición del líder de la UCD en el programa de Bernardo Neustadt seguramente culminará con una arenga —tan encendida como cómica— en contra de los “imperialistas y fascistas” que nos permitimos disentir con sus ideas. La política nacional ha sido tan pródiga en anécdotas como esta que de no ser por las dramáticas condiciones que atraviesa el país solo merecerían un comentario en las revistas de

la farándula. Pero tratándose de uno de los más importantes e influyentes asesores presidenciales y de un hombre que durante toda su vida se ha presentado como el campeón del liberalismo vale la pena reflexionar sobre sus palabras.

Antes que nada, digamos que la peligrosa simplicidad de su análisis es inquietante, sobre todo si esta visión es compartida en las esferas superiores del gobierno. Es cierto que el liberalismo argentino se ha distinguido por su mediocre capacidad para articular discursos y propuestas que representen los intereses generales de la sociedad. Lo suyo ha sido siempre una grosera apología de los regímenes *de facto*, solo para decirnos —después de su fracaso— que estos ¡jamás tuvieron nada que ver con el liberalismo! Con sus rebuscados razonamientos, tratan de convencernos de que la política de Martínez de Hoz no fue liberal; una copa más y la embriaguez ideológica los hará proclamar que en realidad el superministro del Proceso fue un marxista-leninista contumaz, al cual nuestros siempre tan activos servicios de inteligencia no descubrieron durante los cinco años de su perversa gestión. Si esto lo dijera una persona cualquiera no pasaría de ser un disparate risueño e inofensivo, como las estupideces racistas que, en las tabernas del bajo fondo de Múnich a comienzos de la década del veinte, profería Hitler ante sus ebrios parroquianos. Pero cuando esas expresiones salen de la boca de un altísimo funcionario del gobierno —y de un país en crisis como el nuestro— son sumamente preocupantes.

En la noche teórica del Capitán Ingeniero todos los gatos son pardos y “reaccionarios”. Antes, los militares del Proceso —no más sutiles que el susodicho— veían “subversivos” por todas partes. Estas caracterizaciones tan burdas de la oposición son claros síntomas del aislamiento del grupo gobernante. Lo malo es que este autoextrañamiento en relación con la sociedad estimula tendencias paranoides, maniqueas y totalitarias que socavan la coherencia y racionalidad del gobierno y que casi invariablemente terminan desatando una “caza de brujas” en contra de los opositores. ¿Por qué? Porque cuando los ensimismados dirigentes perciben que sus políticas ofenden al

sentir y al entendimiento de la abrumadora mayoría de la población tienden a pensar que eso ocurre porque “la sociedad no los entiende”, o bien porque hay “villanos al acecho” dispuestos a frustrar una vez más el destino de grandeza que Dios, en su infinita sabiduría, les ha deparado a los argentinos. Por eso lo que se hace es descalificar a los adversarios y colocarlos “fuera” de la sociedad y la historia. Durante el Proceso lo que se hizo fue negarles la mismísima condición humana: el que resistía era tildado de “subversivo” y esto bastaba para quitarle sus atributos humanos. Una vez satanizado, el adversario político se transformaba en un demonio al cual se lo podía secuestrar, torturar, matar y desaparecer sin sentir ningún remordimiento. ¿Acaso los teólogos de la conquista no pasaron casi un siglo discutiendo si los indios eran hombres o bestias? La actitud de Alsogaray todavía no llega tan lejos, pero ha dado un primer e importante paso en esa dirección: los que nos permitimos disentir con el gobierno somos “reaccionarios” —que en su peculiarísima jerga quiere decir seres excéntricos que entorpecemos la marcha triunfal de la historia— y que, tarde o temprano, tendremos que ser extirpados, confinados o aplastados por ella. La vocación autoritaria es un estigma imborrable de nuestros liberales.

La dialéctica empobrecedora del dogmatismo invariablemente degenera en un “fundamentalismo” que, tarde o temprano, reclama su cuota de sangre. No estoy diciendo que este desenlace sea inevitable, pero la precoz respuesta de las fuerzas democráticas tiene que hacerse oír de inmediato para impedir que este curso de acción llegue hasta sus últimas consecuencias. La vida democrática requiere que aprendamos a convivir con la diversidad y el pluralismo; también que aceptemos la incertidumbre inherente a este régimen político. La simplicidad del análisis remata inexorablemente en la política del totalitarismo. El pensamiento dogmático es por definición simplista y por vocación totalitario, porque tiene que hacer encajar el verde árbol de la vida en las grises categorías de la abstracción doctrinaria. Al ser simple es fatalmente erróneo. Recordemos si no la calidad teórica de los argumentos de nuestros liberales: hay inflación

porque se emite moneda (lo cual, para decirlo suavemente, es una torpe tautología); o se emite moneda porque el Estado tiene déficits (ocultando aviesamente que gran parte de ese déficit se origina en las transferencias y subsidios a las empresas oligopólicas y en el pago de la deuda externa privada que el Proceso “socializó” entre todos nosotros). Al igual que en el caso de los pueblos primitivos, cuando las danzas y los ritos simplones del hechicero no surten efecto y las lluvias no se producen es necesario un sacrificio humano que purifique con la destrucción de su cuerpo todo lo malo que tiene la comunidad. Entonces llega la hora de la sangre. En los Estados Unidos el programa liberal que con tanto ahínco defiende nuestro gobierno terminó en un rotundo fracaso. Ese país era el primer acreedor mundial a fines de la década del setenta. Gracias a diez años de neoliberalismo se ha transformado en el mayor deudor del planeta. El FMI —que no creo que en la peculiar teorización del asesor gubernamental pueda ser calificado de institución “reaccionaria”— estimó que la deuda externa norteamericana podría llegar a la suma estratosférica de 1 billón 600 000 millones de dólares en 1991. El Morgan Guaranty Trust, más optimista, cree en cambio que ésta apenas oscilaría en torno a 1 billón 330 000 millones en 1993, es decir, por lo menos igual a tres veces el total de la deuda externa latinoamericana. Si la simplicidad de la receta neoliberal fracasó en los Estados Unidos, al igual que en el resto de América Latina, ¿por qué habría de servir para que la Argentina pague su deuda externa o reinicie su crecimiento económico? Y en ese caso, cuando las recetas de los hechiceros liberales se estrellen ante su ineluctable fracaso, ¿quiénes entre los “reaccionarios” serán los llamados a servir de “chivos expiatorios”? Por eso preocupa el discurso de Alsogaray.

(1 de febrero de 1990).

La pregunta de Rousseau

En una época como la actual, en que tanto se insiste en denunciar la “muerte del marxismo”, la celebridad adquirida por el ensayo de Francis Fukuyama (1989) brinda una excelente ocasión para reflexionar acerca de la grave crisis por la que atraviesa el pensamiento liberal. Porque, ¿cómo cerrar los ojos ante el fenomenal desnivel intelectual que separa la obra del exfuncionario del Departamento de Estado con la de sus predecesores? Bastaría mirar, aunque sea superficialmente, las complejas argumentaciones y la sólida evidencia empírica esgrimidas por Daniel Bell en *El fin de la ideología* —publicado hacia finales de la década de los cincuenta— para comprobar la progresiva decadencia del pensamiento teórico de la burguesía. En efecto: las polémicas tesis del profesor de Harvard —que sacralizaban, como intenta ahora hacerlo Fukuyama, a la sociedad norteamericana como el futuro definitivamente coagulado de la humanidad— reposaban sobre un sofisticado dispositivo teórico que otorgaban a sus erróneas conclusiones una cierta respetabilidad. Se podía disentir con ellas, pero a nadie que yo sepa se le ocurrió pensar que Bell —antiguo marxista “converso” al liberalismo— era un dilettante. Su estatura intelectual y la profundidad de sus indagaciones no estaban en cuestión. Sus resultados eran controvertibles, la calidad de su trabajo no.

En el caso de Fukuyama pasa exactamente lo contrario: las conclusiones de sus “ocurrencias” —algo que, ¡por favor!, es preciso distinguir de las ideas— no generan demasiado debate, y la excelencia intelectual de su defensa del capitalismo liberal suscita graves desacuerdos incluso entre sus mismos camaradas. Hay un consenso casi unánime —en la derecha, izquierda y centro— de que sus tesis son equivocadas o irrelevantes; también, de que la calidad del argumento es bastante pobre. Para evitar que mis comentarios puedan ser descalificados por una supuesta falta de objetividad vale la pena reproducir lo que el propio Fukuyama acaba de declarar: “me he dado cuenta de que mi verdadero logro fue dar lugar a un extraordinario consenso universal, no sobre el Estado actual del liberalismo sino sobre el hecho de que estoy en un error y que, en realidad, la historia no ha terminado”.

Sin embargo, a pesar de esta constatación, el trabajo de Fukuyama ha merecido la entusiasta aprobación de los poderes establecidos y encontrado una extraordinaria repercusión mundial a través de los medios de comunicación de masas. Siendo banales, fue coronado por la fama. ¿Por qué? Dos hipótesis: primera, porque predica al mundo la buena nueva —con el triunfo del capitalismo en el siglo XX se cierra el capítulo “histórico” de la humanidad y, de aquí en más, ese régimen social perdurará incólume hasta el fin de los tiempos—. Segundo, porque el liberalismo está ideológicamente exhausto y no tiene nada más que ofrecer. Su decadencia es irreversible y se comprueba allá tanto como aquí, aunque entre nosotros sea más pronunciada: de Thomas Jefferson y Woodrow Wilson a Francis Fukuyama; de Bartolomé Mitre y Juan Bautista Alberdi a Bernardo Neustadt. El derrumbe es silencioso, casi furtivo, pero es tan significativo como el colapso del muro de Berlín.

Proclamas “finistas” como las de Fukuyama han aparecido periódicamente en la historia del capitalismo. A fines del siglo pasado se confiaba ciegamente en la eternización de la *Belle Époque*, pero las matanzas de la primera guerra mundial destruyeron violentamente esas ilusiones. Un rebrote tardío de esos sueños apareció en los

años veinte, pero el *crack* de 1929 puso al desnudo la naturaleza meramente imaginaria de sus esperanzas. Luego, consumada la recuperación de la segunda postguerra proliferaron las mismas tesis. Entonces también se postulaba que la historia se había detenido; el punto de llegada lo constituían los Estados Unidos, la primera nación que según el sociólogo Seymour Lipset (1963) había puesto fin al tránsito desde las penumbras de la tradición y el atraso hacia las luminosas cumbres de la nueva sociedad. El “modelo” americano se proyectó con fuerza irresistible sobre el pensamiento teórico de la época: pragmatismo; fin de las ideologías; desaparición de las clases sociales; consenso social y político; mercados irrestrictos, etcétera. Ese sería nuestro futuro, en caso de que nos desarrolláramos y nos modernizáramos. Pero después vinieron los heroicos sesenta y los absurdos mitos creados por el pensamiento liberal se derrumbaron de la noche a la mañana. Los Estados Unidos —que se vanagloriaban de su estabilidad política— vieron como su gobierno comenzaba a parecerse cada vez más al de las tan despreciadas *banana republics*. En los aciagos años de la década del sesenta se suceden nada menos que cuatro presidentes (Eisenhower, Kennedy, Johnson y Nixon), un promedio que colocaba a los Estados Unidos en el polvoriento pelotón de las naciones más atrasadas de África, Asia y América Latina en lo concerniente a la estabilidad política. Luego vendrían Watergate, la derrota de Vietnam, la destitución disfrazada de Nixon, el interregno insípido de Ford, la frustración de Carter y el repliegue reaccionario de Reagan. A estas alturas el discurso triunfalista yacía bajo los escombros de los suburbios negros incendiados en Detroit y Los Ángeles, de los muertos en las junglas del sudeste asiático y de los indiscutibles indicios de la descomposición política que evidenciaba la nación erigida como el modelo del futuro. Lo poco que quedaba en pie de esos arrebatos “finistas” sucumbió en mayo del 68 en París, derribando los pronósticos optimistas con el resurgimiento de las luchas obreras y el endurecimiento del conflicto de clases en los capitalismo avanzados. ¿Qué es lo que ha cambiado que nos autorice a pensar que esta vez será diferente? Si hasta Juan Pablo II dijo en

México que la caída de los “socialismos reales” no significa el triunfo del capitalismo liberal, ¿tendremos que ser, en verdad, más papistas que el papa y asignarle a Fukuyama el don de la infalibilidad?

Fukuyama, preocupado por fundamentar en profundidad el triunfo del liberalismo, acude nada menos que a Hegel en auxilio de sus nebulosas elucubraciones. ¿Cómo justificar este disparate mayúsculo? Hegel, el filósofo que reintrodujo la dialéctica en el pensamiento político y que definió al Estado como “la marcha de Dios en el mundo”, es convocado para fundamentar el triunfo del liberalismo; del mercado en contra del Estado jibarizado y colonizado por las clases dominantes. Una decisión que en el plano de la teoría política es análoga a arrojar un salvavidas de plomo a las víctimas de un naufragio. El filósofo alemán se caracterizó por su enérgico rechazo a todo el planteamiento de los teóricos liberales con relación a la cuestión de la libertad. En su contra sostenía que esta se fundamenta y ejerce en el Estado —que constituye su verdadero hogar al ser el genuino representante de los intereses universales de la sociedad— y no en el mercado, esfera a la cual despreciaba impiadosamente por ser la cuna del egoísmo universal. Concebir a la libertad como algo que se defiende en contra del Estado resultaba un ridículo contrasentido para Hegel, para quien no pasaba desapercibido que el instrumentalismo egoísta de la sociedad civil exacerbaba las contradicciones sociales a tal grado que inexorablemente desembocaban en el despotismo político que cercenaría, una a una, todas las libertades. El cuestionamiento del autor de *La Filosofía del Derecho* hacia el liberalismo era tan profundo que, cuando se refería a un Estado que funcionaba en provecho de una minoría adinerada y de espaldas a los intereses altruistas inherentes al verdadero Estado, lo consideraba “una sociedad civil disfrazada de Estado” (Hegel, párrafo 324), es decir, un engaño.

Para Fukuyama: la rueda de la historia se ha detenido. Lo que giraba desde tiempos inmemoriales cesó de moverse, justo cuando el capitalismo se regodea en la apariencia de su victoria. Para defender a la libertad mercantil se hizo preciso invocar a Hegel; para ponerle

punto final a la historia tuvo que recurrir al mismo filósofo. Este gigantesco travesti ideológico solo puede ser producto de la desesperación, de la impotencia que surge al comprobar que ya no hay nada más cuerdo por decir. Rousseau se preguntaba “Si Esparta y Roma perecieron, ¿qué Estado puede esperar durar para siempre?”. No creo que la tesis de Fukuyama sirva para ofrecer una respuesta tranquilizadora ante la inquietante pregunta del teórico ginebrino.

(8 de julio de 1990).

Seducidos y abandonados

Para justificar la aplicación de los durísimos programas de ajuste puestos en práctica en América Latina luego del estallido de la crisis de la deuda, en agosto de 1982, se dijo que esta política serviría para seducir y atraer a los capitales externos que tanto necesitaba nuestra región. Transcurridos algo más de ocho años, las míticas inversiones tantas veces prometidas todavía brillan por su ausencia. ¿Qué fue lo que ocurrió?

Los publicistas neoliberales dicen que el “riesgo argentino” ahuyenta al inversor extranjero de nuestras tierras y que hay que tener paciencia y profundizar el ajuste. Pero lo cierto es que los capitalistas tampoco han sido magnánimos con otros países como Brasil y México, dos casos dignos de ser observados muy atentamente y por distintas razones. Por su tamaño la economía brasileña es la octava a nivel mundial; aparte de esto, es internacionalmente competitiva y contiene en su seno al mayor mercado potencial de la región. El interés de los inversionistas por Brasil parecería más que justificado si nos atenemos a esos indicadores. Lo mismo vale en el caso de México, porque además de su dinamismo y de su reconocida presencia en los mercados exportadores mundiales constituye la experiencia más rigurosa y coherente de aplicación del “ajuste ortodoxo” recomendado por la comunidad financiera internacional.

Sin embargo, en todos estos casos los resultados han sido decepcionantes. A pesar de los ajustes —y de sus inmensos costos sociales— los países latinoamericanos se han convertido, en la década de los ochenta, en exportadores netos de capitales y nada autoriza a pensar que, en el corto plazo, las cosas vayan a cambiar. Según el Banco Mundial en el decenio pasado estas economías sufrieron una sangría del orden de los 203 000 millones de dólares, tan solo como pago parcial de los servicios de la deuda. La transferencia neta de recursos al exterior realizada por la Argentina entre 1983 y 1988 fue de 21 529 millones de dólares, pese a lo cual nuestra deuda externa total se incrementó entre esos años de 45 920 a 58 936 millones de dólares. Brasil remitió, en igual período, 43 861 millones de dólares, y su deuda ascendió de 97 496 a 114 592 millones de dólares. México, por último, transfirió una suma casi idéntica a la brasileña: 43 909 millones de dólares, y el monto de lo adeudado creció de 92 964 a 101 566 millones de dólares. Conclusión: se pagaron sumas fabulosas, equivalentes a varios años de nuestras exportaciones, para terminar más endeudados que antes. El círculo vicioso de la “bicicleta” financiera internacional —semejante a aquel que instituyera la tristemente célebre “Circular 1050” de la época de Martínez de Hoz y que ocasionara la ruina de tantos ahorristas— acelera la descapitalización de los países de América Latina. El grueso de ese dinero acude a recomponer las arcas de quien, gracias al dogma neoliberal, se ha transformado en el mayor deudor del planeta: los Estados Unidos.

Pero esto no es todo: a las cifras correspondientes al pago de los servicios de la deuda es preciso añadir los datos relativos a la fuga “legal” de capitales, tan celosamente combatida en Europa como ardorosamente defendida por los neoconservadores vernáculos como símbolo de la soberanía del inversor. A fines del año pasado el *Journal of Commerce* informaba que a lo largo de la década de los ochenta se habían fugado de la Argentina unos 46 000 millones de dólares: 31 000 millones de la misma moneda habían salido del Brasil; 84 000 millones de México, y 58 000 millones de Venezuela. Si sumamos las remesas a la banca acreedora y la fuga de capitales comprobamos

que, en nuestro caso, a lo largo de la década nos hemos descapitalizado en unos 67 000 millones de dólares. A esto habría que agregarle las enormes pérdidas ocasionadas por el remate de las empresas públicas y las políticas de privatizaciones tan en boga en estos días.

El resultado es a la vez indignante y desolador. El despojo se ha enseñoreado de una región rica pero empobrecida, que es sometida a un verdadero “tributo imperial” que condena a la postración —y, eventualmente, a irreversibles procesos de disolución nacional— a países con grandes mercados potenciales como Brasil, a los buenos pagadores como México y a quienes, como la Argentina, no son ni lo uno ni lo otro. Estas cifras revelan el carácter ilusorio de las expectativas acerca de la afluencia de los capitales extranjeros; también nos hablan de su superfluidad. En efecto, ¿qué sentido tiene abdicar de nuestra soberanía nacional —cantando himnos a las virtudes del mercado y las privatizaciones y desmantelando irresponsablemente el sector público— a fin de atraer dos o tres mil millones de dólares en inversiones externas cuando nuestra economía generó en la “década perdida” un excedente de 67 000 millones que transferimos graciosamente al exterior?

(8 de noviembre de 1990).

El fracaso liberal

El sábado 2 de febrero el ingeniero Álvaro Alsogaray publicó un artículo en la página editorial de *La Nación* cuyo título equivale a una confesión: “Ante un nuevo fracaso”. El pope del liberalismo argentino calificó impiadosamente el súbito derrumbe del tercer ministro de Economía del menemismo. Siguiendo una inveterada costumbre, Alsogaray se las ingenió para disociarse oportunamente de su asesorado: pronunció un breve sermón fúnebre y despachó sin demasiada compasión los restos de Erman González al turbulento limbo del ministerio de Defensa. En su artículo exhuma una retórica tan añeja como irrisoria: el plan puesto en marcha por el contador riojano fracasó porque no era liberal sino un “híbrido plagado de regulaciones, vacilaciones, enfoques monopólicos y otras intervenciones tecnocráticas ‘no conformes’”. Lo suyo, al igual que lo de Martínez de Hoz, no fue liberalismo sino dirigismo. Si esto es así, si la liberación y desregulación de los mercados y si el remate vil de las empresas públicas no es el liberalismo, entonces: ¿dónde queda esa maravillosa tierra prometida que con tanta obstinación señala el profeta y que jamás pudimos alcanzar?

En ninguna parte: el liberalismo proclamado por el líder de la UCD no existe, es una quimera. Los “liberalismos realmente existentes” están plagados de regulaciones, monopolios y tecnocracia. Cualquier lector mínimamente informado sabe que, en Europa, los

Estados Unidos y Japón la maraña de reglamentaciones y especificaciones gubernamentales es de una apabullante densidad. Solo el espeluznante atraso ideológico de nuestros liberales —y su séquito de populistas arrepentidos— puede llevarlos a sostener que las regulaciones son incompatibles con el liberalismo: ¿qué otra cosa si no son las famosas “reglas del juego claras” que permanentemente reclaman los capitales y sus voceros —entre ellos el propio Alsogaray— para no matarse entre sí y poder esquilmanos con más eficiencia?

Por lo tanto: el gobierno aplicó un programa liberal y fracasó estrepitosamente. El verdadero quid de la cuestión —que Alsogaray ni siquiera puede percibir— es que el liberalismo ya no funciona. Como fórmula de gobernabilidad económico-política falleció después de la primera guerra mundial, al punto tal que un distinguidísimo liberal como Lord John Maynard Keynes certificó su defunción en un notable artículo publicado en 1926 (“El fin del *laissez-faire*”). Es probable que dado el retardo de nuestros liberales esa pieza del economista de Cambridge sea demasiado reciente y que desconozcan su contenido. Sería bueno que hicieran un esfuerzo por actualizarse. El reiterado fracaso del liberalismo confirma el carácter falaz de sus propuestas. “Estamos mal, pero vamos bien”, se repetía una y otra vez ante la sonrisa complaciente de Bernardo. Ahora ya nadie duda de que estamos mal pero que fuimos de mal en peor. El nuevo y durísimo ajuste agravará aún más la escandalosa injusticia de la sociedad argentina: el ministro Cavallo lo reconoció sin ambages y nadie puede hacerse ilusiones al respecto. Nos seguirán administrando más de la misma medicina, la que nos está matando día a día: recesión, tarifazos, impuestazos y reducción de los ingresos reales de la abrumadora mayoría de la población. Este nuevo *apartheid* liberal —iniciado con el Rodrigazo, ratificado por el Proceso, tolerado y fomentado con su característica ambigüedad por el alfonsinismo y profundizado hasta el paroxismo por la alianza peronista-conservadora— ha construido una sociedad que se sitúa en las antípodas de nuestro registro histórico y que, en cuanto tal, cuestiona las raíces mismas de nuestra identidad nacional: una sociedad cada vez más

fracturada, con líneas de clase hondamente marcadas, con sus expectativas igualitarias y de bienestar sistemáticamente frustradas y en donde una minoría cada vez más opulenta —enriquecida con la especulación y la corrupción— celebra su festín ante la vista de millones cada vez más empobrecidos y rabiosos. Alberdi y Sarmiento se escandalizarían al contemplar este espectáculo: durante un siglo esta sociedad recibió millones de inmigrantes; ahora, el fracaso liberal nos transformó en un país de emigrantes.

Es una tragedia que haya sido nada menos que nuestra joven democracia la encargada de orquestar este proceso masivo de reestructuración social sobre bases tan inhumanas e injustas. Los sucesivos fracasos del liberalismo tuvieron un doble efecto: agigantar la brecha que separa el pueblo —cuya soberanía dura un instante: cuando deposita su voto— del gobierno. De ahí que, desoído y agobiado, solo atine a repudiar a las autoridades, mientras que estas se desviven imaginando artimañas —ley de lemas, elecciones indirectas, etc.— que mediaticen la voluntad popular. La crisis sin fin del liberalismo económico está construyendo, dada la alienación que provoca una democracia claudicante, la base social del acechante autoritarismo. La otra cara de la moneda ha sido la progresiva autonomización de las clases dominantes que, gracias a los “golpes de mercado”, tienen al Estado de rodillas —para usar la gráfica imagen del exministro Dromi— y dictan sus condiciones sin contrapesos. Por eso en medio de una feroz crisis fiscal como la actual ni se menciona la posibilidad de establecer un régimen tributario en serio. ¡Nótese la contradicción! En este terreno nuestro gobierno no quiere entrar al Primer Mundo. Prefiere ser un emirato o una república bananera y no cobrar impuestos a los que más tienen —progresivamente, como en Estados Unidos o Europa— sino seguir gravando consumos y salarios, picoteando furiosamente los cuerpos de las víctimas de quince años ininterrumpidos de liberalismo.

(6 de febrero de 1991).

IV. Fuerzas armadas

La derrota social de los carapintadas

La nueva sublevación militar¹⁵ actualizó los pronósticos pesimistas que formuláramos a raíz de la desafortunada forma en que se resolvió la crisis de Semana Santa de 1987. En efecto, después de haber convocado al pueblo a respaldar al régimen democrático, el gobierno y la abrumadora mayoría de los partidos políticos optaron por una estrategia defensiva que se asentaba sobre dos pilares: el apaciguamiento de los carapintadas y la desmovilización de la sociedad civil. Con la primera se pretendía aplacar la agresividad de los rebeldes satisfaciendo algunas de sus reivindicaciones y cediendo aceleradamente terreno ante sus demandas; mediante la segunda se procuraba controlar el inédito (e incómodo, en un país donde la degradación del oficio de ciudadano nos había llevado a aceptar resignadamente las aventuras golpistas) protagonismo popular que al salir resueltamente a las calles y plazas de la república frustró la intentona golpista, pero corría el riesgo de malograr la delicada filigrana negociadora urdida por la clase política. Se desecharon las enseñanzas de la historia que demuestran hasta la saciedad que las estrategias de apaciguamiento fracasan ante energúmenos que se creen llamados a cumplir una misión redentora. La experiencia de Hitler fue contundente, a pesar de la

¹⁵ Nos referimos al levantamiento militar comandado por Mohamed Alí Seineldín del 1° de diciembre de 1988 y que tuvo su epicentro en el Batallón de Logística del Ejército, localizado en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires.

cual nuestros grupos dirigentes no se dieron por enterados. Pensaron que el chantaje de los carapintadas iría a autolimitarse y que, a cambio de la “resolución” del conflicto, bien podrían resignarse algunos principios: por eso los subversivos fueron insólitamente sublimados convirtiéndose en “héroes de las Malvinas”, mientras que los estupefactos ciudadanos, que todavía no terminan de asombrarse ante la enfermiza vocación mágica de la clase política, fueron invitados a regresar a sus casas para celebrar felizmente las Pascuas de Resurrección. Tanto el gobierno como la oposición coincidieron, por distintas razones, en esta estrategia cuyo resultado, tan previsible como inevitable, habría de ser un nuevo retroceso del orden constitucional ante el “apriete” de los sediciosos: las Pascuas de 1987 fueron, en realidad, las de la resurrección del poder militar.

Dado que el problema crucial de la transición democrática argentina sigue siendo la cuestión militar no sorprende, por lo tanto, constatar que los frutos de estas actitudes ambiguas y contemporizadoras hayan sido bastante amargos. Es preciso reconocer, si queremos dejar alguna vez en el pasado espectáculos bochornosos y que nos avergüenzan ante el mundo como los que protagonizaron este fin de semana un grupúsculo de extraviados encabezados por un oficial embriagado por la retórica nazi, que desde los inicios de la democracia nuestra clase política no ha sabido manejar la cuestión militar. El gobierno, vacilando como Hamlet entre distintos tipos de políticas y atizando con su indefinición la revuelta de los sediciosos. El peronismo, atenazado por una contradicción desgarradora entre sus dos almas: una, la renovadora, que quiere y necesita la consolidación del orden democrático para mantener viva su esperanza de retornar legítimamente al poder y para lo cual hace falta la supeditación sin condicionamientos de los militares al orden civil. Pero su alma corporativa le impide disciplinar a los uniformados porque, tal como lo recordara Carlos Saúl Menem en el acto de River,¹⁶ “nosotros

¹⁶ Se trata del acto realizado el 17 de octubre de 1988 en el cual lanzó su campaña presidencial.

nacimos de las entrañas mismas de las Fuerzas Armadas”, y las fantasías mesiánicas de la reaparición de un general populista constituyen un límite ideológico prácticamente infranqueable al diseño de una correcta política militar. Si a ello se añade que la tercera fuerza electoral del país, por cierto que sin contar ni de lejos con la gravitación de los dos partidos mayoritarios, es liderada por un excapitán del ejército y que a lo largo de su dilatada trayectoria pública ha sido un fiel vocero de las inquietudes castrenses, se comprenderá que nuestra desdichada república no reúne las mejores condiciones como para enfrentar exitosamente los recurrentes exabruptos pretorianos.

Atemorizada ante la creciente intranquilidad militar ocasionada por el fallo condenatorio a los integrantes de las juntas militares, ratificado después por la Corte Suprema, nuestra clase política fue adoptando una posición cada vez más conciliadora. Se solidarizó con el suicida argumento del olvido y la impunidad exigido por los militares del Proceso: suicida porque conlleva la tácita aprobación de comportamientos que nuestras leyes definen como criminales y porque la impunidad instiga a ulteriores violaciones de los derechos humanos. El resultado fue la ley de Punto Final (aprobada en tres semanas por las dos cámaras del Congreso) y su lógico remate: la insurrección de Semana Santa. Esta, que evidenció una vez más la precaria inserción de nuestros militares en el régimen democrático, en el cual sinceramente muy pocos creen, y el equívoco fundamental de la estrategia de apaciguamiento ante un sector de la sociedad que se cree por encima de la constitución y las leyes. La sedición de abril de 1987 precipitó una aberrante e imprudente respuesta legal: la ley de Obediencia Debida, también sancionada con una celeridad que sorprende habida cuenta de la tradicional morosidad de nuestros procesos decisorios. Ante esta segunda capitulación de los poderes civiles emergió, incentivada por los avances logrados en las ocasiones anteriores, la nueva intentona reaccionaria liderada por el coronel Seineldín.

En el último año y medio la transición democrática argentina ha sido sometida a dos pruebas decisivas: en ambas oportunidades, Semana Santa y la actual, se verificó algo que nuestra clase política se empecina en desconocer: que la única garantía que tenemos para avanzar en la trabajosa construcción de un orden democrático es la legitimidad que el ciudadano le confiere al régimen político y su decisión de defenderlo, en su conciencia y en la calle. Lo demás es accesorio: cuando las instituciones desnudaban su impotencia; cuando altos oficiales afirmaban con desparpajo y soberbia que no apoyaban a los rebeldes, pero que tampoco los reprimirían; cuando todas las esperanzas se desvanecían ante un grupo de fanáticos que tomó como rehén a toda una nación apareció, una vez más, el protagonismo de nuestra sociedad que levantó una barrera formidable a los subversivos. El pueblo, único soberano del Estado democrático, dijo no a los golpistas, fue a hostigarlos a sus cuarteles y demostró que carecían de base social de apoyo. Ninguna clase o grupo social significativo de nuestra sociedad se asoció a la nueva tentativa golpista y, además, la solidaridad internacional demostró el repudio universal que concitaban los revoltosos. Más allá de las decepciones y los desencantamientos producidos por una democracia sorda a los reclamos populares, nuestra gente ratificó que no está dispuesta a aceptar, nunca más, la prepotencia castrense; demostró, de este modo, poseer una madurez política nada desdeñable.

Es muy difícil sacar conclusiones de acontecimientos que todavía no han agotado su curso. La desinformación existente sobre las condiciones de la rendición de los sediciosos nos obliga a ser muy cautelosos. Sin embargo, hay algo que ya puede decirse: la rebelión contra el orden institucional terminó con una capitulación poco honorable de los amotinados y la unificación de la sociedad en torno a los valores fundantes de la constitución y la democracia. Ante unas Fuerzas Armadas cuya lealtad a las autoridades apareció como incierta, y por momentos francamente condicionada, la derrota de los carapintadas no fue militar sino social: fue nuestra sociedad la que “votó”, larga y multitudinariamente en las calles, por la democracia,

enviando un mensaje claro en el sentido de que no habrá orden político posible sin el consenso popular.

Si nuestros grupos dirigentes toman nota de la situación y no transan a espaldas de la ciudadanía, entonces la crisis nos habrá fortalecido y las perspectivas de avanzar un paso más en esta difícil transición democrática es hoy mayor que hace una semana. Pero es preciso que la clase política se convenza de que dispone, potencialmente, de un poder espiritual mucho más fuerte que todos los arsenales: la creencia popular en la legitimidad del orden democrático, y que con él puede emprender, con serenidad, pero con mucha firmeza, la tarea histórica de encuadrar a las Fuerzas Armadas en el lugar que le asigna la constitución. Por lo tanto, es preciso aplicar un castigo ejemplar a los subversivos y ratificar lo actuado por los órganos de gobierno y de justicia emanados de la soberanía ciudadana, evitando la laxitud que estimuló los alzamientos de Monte Caseros y Campo de Mayo. Si esto ocurriera sería posible pensar en una efectiva subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, con lo cual la Argentina habría superado el escollo más grave de su transición democrática.

(7 de diciembre de 1988).

La ideología militar y el régimen democrático

El coronel Seineldín declaró días atrás que “ellos y nosotros pensamos lo mismo, y por eso no quisimos enfrentarnos” (*Página/12*, 11 de diciembre de 1988). Sus palabras merecen algunos comentarios. En primer lugar, notemos la incongruencia en que incurre un militar ultranacionalista católico: se negó a declarar ante la prensa argentina mientras accedió dócilmente a los requerimientos de la agencia inglesa Reuter. Inconsistencias de este tipo no han sido casuales en la trayectoria de la extrema derecha: su nacionalismo es meramente retórico, gestual, fetichista. Sometido al rigor de la praxis degenera en una mueca grotesca y vacía, preludio de la tragedia. Los oscuros años del Proceso ilustran elocuentemente el precio de esas actitudes: una sociedad fracturada, desangrada por la deuda y derrotada militarmente en las Malvinas. Un país, en suma, traumatizado por su historia y acosado por su memoria.

Su declaración apenas si revela lo obvio: luego de Semana Santa era ilusorio suponer que las Fuerzas Armadas hubiesen renunciado a su reivindicación histórica, a la amnistía o a la suspensión de los juicios; menos aún, a una mejora de su presupuesto. Lo interesante es comprobar, con todo, la desazón que la nueva aventura golpista ocasionó en vastos sectores sociales que confiaban en la reconciliación del ejército con el ideario democrático. Las deplorables expresiones

del teniente general Caridi ante un programa de videocable ensombrecieron aún más el panorama, profundizando el abismo que separa la conciencia civil del reclamo militar.

¿Por qué esa sorpresa? ¿No sabíamos acaso que las Fuerzas Armadas de nuestro país han sido sistemáticamente inductadas y socializadas en el autoritarismo durante más de cincuenta años? Formadas en la tradición prusiana, al promediar la década del veinte Lugones (1924) las consagra como la última aristocracia y les confiere la misión de salvar a la patria de las hordas plebeyas con las que Yri-goyen había liquidado el régimen oligárquico. El delirio reaccionario del poeta cayó en tierra fértil: admiradoras de Mussolini y Hitler, cuando en los años cuarenta los países latinoamericanos apoyaron a los aliados nuestro ejército, ya convertido en partido gobernante, mantuvo una aparente “neutralidad” que no alcanzaba a disimular sus simpatías con el eje. La “declaración de guerra” a Alemania, anunciada cuando el Ejército Rojo ya estaba en Berlín, fue producto de la irresistible presión norteamericana. Consecuentemente, el gobierno peronista, heredero ideológico de la “revolución nacional” del 4 de junio de 1943, brindó asilo y protección a cientos de militares y funcionarios nazis que huyeron del derrumbe del Tercer Reich. Hace apenas unos días los diarios informaban de la detención de otro exoficial de la Gestapo, acogido en esos años para aportar su sabiduría a la policía de Mendoza.¹⁷

A partir de 1955 nuestro ejército profundizó su extrañamiento en relación con el resto de la sociedad: una facción expresó su rabioso antiperonismo adhiriendo al liberalismo autoritario y exhibiendo un odio visceral hacia todo lo popular; el polo nacionalista, a su vez, iniciaba un agudo proceso de descomposición. Habiendo contado entre sus fundadores con militares de la estatura moral de Savio y Mosconi, fue degenerando hasta convertirse en un crisol en el cual se fundieron los detritos ideológicos del desarrollo histórico de Occidente. El racismo, la intolerancia, el fanatismo, el mesianismo y el

¹⁷ Se trata de Juan Hottentof Olyf. (*Página/12*, 9 de diciembre de 1988, p. 6).

irracionalismo fueron combinados en una simbiosis bárbara y pendenciera que amalgamó la religión y la guerra, la Iglesia y las Fuerzas Armadas.

Este fundamentalismo de crucifijos y escapularios no suscita la adhesión mayoritaria de las Fuerzas Armadas y la prédica de los fanáticos encuentra su límite en las complejidades burocráticas de la organización militar. Sin embargo, el sustrato básico de la socialización política de nuestras Fuerzas Armadas es profundamente autoritario, y en coyunturas críticas la corporación se repliega en torno a su discurso esencial. La desconfianza parroquial ante el pluralismo y la tolerancia, el desprecio por la política y, por último, el absurdo sentimiento estamental de superioridad mesiánica constituyen el “núcleo duro” de la ideología militar. Dado que su progresiva disolución es una tarea que insumiría largos años, ¿no podría inferirse que la integración de las Fuerzas Armadas a la sociedad civil es una empresa imposible?

Esta “reforma intelectual y moral” constituye un objetivo “de máxima”; afortunadamente, la consolidación del orden democrático no necesariamente requiere que las Fuerzas Armadas adhieran por completo al conjunto de valores y normas típicos de aquel régimen político. En las democracias modernas los militares no se distinguen por su fervor democrático: antes bien, actitudes fascizantes son las que predominan entre los numerosos “halcones” y “rambos” de varios tipos que pueblan sus filas y sería infantil pretender que de súbito se conviertan en inocentes palomas pacifistas. Lo que allá se les exige, y se obtiene, sin ninguna duda, es su incondicional subordinación a los poderes civiles. Lo que los uniformados piensen sobre la política nacional, en tanto sus acciones no atenten contra la institucionalidad vigente, les tiene sin mayor cuidado. Su obediencia y lealtad a la autoridad pública es independiente de sus actitudes y valoraciones personales.

La subordinación de las Fuerzas Armadas al régimen constitucional no puede depender de sus deliberaciones ni de la correspondencia de los actos del gobierno con los contenidos ideológicos

autoritarios que saturan su cultura estamental; por el contrario, descansa sobre la legalidad y legitimidad democráticas sostenidas por una correlación social de fuerzas que vuelve impensable la opción sediciosa del militarismo. El consenso social emanado de la soberanía popular ha clausurado ciertas alternativas: si en 1810 la nación optó por la república y archivó definitivamente a la monarquía como forma de gobierno, en 1983 lo hizo por la democracia y sepultó para siempre a la dictadura militar. Nuestro régimen democrático define para las Fuerzas Armadas una competencia limitada pero fundamental: ni salvadores de la patria ni intérpretes de la voluntad nacional, mitos tenebrosos que las han colocado al borde de su disolución, transformándolas en un archipiélago de destacamentos armados deliberativos y revoltosos. Su misión es otra, menos grandilocuente y retórica, pero más realista e importante: defender a la patria de la agresión armada extranjera. A los militares los necesitamos para el caso en que la vocación pacífica de nuestro pueblo pretenda ser avasallada por un enemigo externo. Esa es su misión: nada más, pero nada menos. La recuperación del honor militar habrá de producirse, espontáneamente, cuando la ciudadanía perciba claras señales del acatamiento de las Fuerzas Armadas al imperio de la constitución. No se recobra el honor a punta de bayoneta sino con una conducta digna y consecuente, luego de lo cual el reconocimiento de la sociedad sobreviene genuinamente.

(29 de diciembre de 1988).

El talón de Aquiles de la democracia

Después de tres rebeliones castrenses¹⁸ y ante los endémicos síntomas de indisciplina que afectan al Ejército, resulta evidente que el problema crucial de la transición democrática radica en las Fuerzas Armadas. Solo un necio puede negar que nuestra democracia es precaria e imperfecta; no obstante, es infinitamente mejor que la más benévola de las dictaduras militares que han asolado al país desde 1930.

Afortunadamente no existen las condiciones necesarias para un golpe de Estado al estilo tradicional; tampoco para procesos de “bordaberrización” como el que en Uruguay desembocara en la dictadura militar de 1973. No hay consenso en la sociedad civil para apoyar a un golpe militar. Todo lo contrario: la absurda pretensión castrense de situarse por encima de la constitución y las leyes ha generado un difuso y creciente sentimiento antimilitarista. Las condiciones internacionales también son altamente desfavorables. La inédita presencia de los embajadores de los más importantes países occidentales en la Asamblea Legislativa fue un mensaje clarísimo: la ruptura del régimen democrático retornaría a la Argentina a la condición de país “paria”. Por último, la tercera condición para el golpe militar, la coherencia orgánica de las Fuerzas Armadas, es aún mucho

¹⁸ Semana Santa, Monte Caseros y Villa Martelli.

más problemática. Su deplorable politización las ha llevado a una situación de anarquía y confusión que las impulsa hacia su propia disolución.

Sin embargo, hay un peligro: Platón advertía que la discordia de la clase dirigente era el talón de Aquiles de todos los regímenes políticos. Claro está que esto es una cuestión de grados: la unanimidad en las alturas es sinónimo de tiranía; el desacuerdo total remata en la guerra civil. Por lo tanto, una dosis muy importante de diversidad y pluralidad es prerequisite del gobierno libre. Maquiavelo percibió esta conexión con su acostumbrada lucidez: al abandonar las nociones tradicionales que sacralizaban cínicamente la armonía entre los hombres pudo descubrir, en el incesante conflicto entre patricios y plebeyos, los fundamentos de la grandeza y la sabiduría de la república romana.

Encaramada en la dinámica de la competencia electoral nuestra dirigencia podría, sin proponérselo, revertir las condiciones ya mencionadas y abrir el espacio para un nuevo golpe militar. Si actuara inconscientemente profundizaría la discordia hasta límites extremos, debilitando insanablemente el régimen democrático. Ese es nuestro posible talón de Aquiles y los riesgos habrán de acrecentarse en la campaña presidencial: pero si queremos la democracia tenemos que aceptar los riesgos de las periódicas confrontaciones electorales. Con todo, si las principales fuerzas políticas operan inteligentemente —adhiriendo sin condiciones a las reglas del juego democrático, aun para disentir en todo lo demás— la democracia no corre peligro. Esto nada tiene que ver con el apasionamiento del debate político o el encono de las rivalidades partidarias: la política —aquí y en los países más avanzados— siempre es pasión y lucha, “guerra de dioses contrapuestos”, como decía Max Weber (1919). Solo los autoritarios confunden a la política con la frialdad y el orden de los cementerios.

¿Qué papel queda para nosotros, los ciudadanos? Parafraseando a Foucault: vigilar y castigar. ¿Qué debemos vigilar? Que los políticos formulen propuestas concretas y no permitirles que rebajen el nivel del debate a trivialidades; que nos digan qué hicieron, qué quieren

hacer y cómo; y que nos presenten, ahora mismo, los nombres de aquellos con los cuales aspiran a gobernarnos. ¿Algo más? Sí, y muy importante: vigilar también para identificar de inmediato a los que demuestren su deslealtad para con el régimen democrático —es decir, con nosotros— haciendo “guiños” a los militares revoltosos o lanzando “dobles mensajes” que significan, en la práctica, una apuesta tácita a un posible golpe. Vigilar, en suma, a aquellos que olvidan que en política “la forma es el fondo” y que creen que el diálogo con los sediciosos o su abierto elogio no equivalen a una pérfida complicidad con la conjura de los autoritarios.

Algunos pequeños políticos creen que, obrando de esa manera, “se salvan”. Pero se equivocan: ni engañan al electorado ni suscitan la amistad de los carapintadas, para quienes todos ellos son excrecencias maléficas de una sociedad de infieles. Creo, sin embargo, que el grueso de nuestra clase política ya se “vacunó” contra esa tentación ridícula de esperar la aparición del mesías uniformado: este consenso en torno a las reglas del juego democrático nos permite mirar con cierta confianza el futuro y aventar el peligro de la dictadura. Además, nuestro talón de Aquiles está también resguardado por el protagonismo y la vigilancia popular. Los que pretendan hacer el doble juego saben que serán castigados inapelablemente por ciudadanos que se hartaron de ser súbditos.

(14 de enero de 1989).

Democracia y terrorismo

El episodio terrorista de La Tablada ha conmovido a todo el país. Desde el punto de vista ético se trata de un acto criminal, atroz y aberrante. Su condena tiene que ser total, porque no existe ninguna supesta “finalidad superior” que pueda justificarlo. Políticamente fue insensato, irresponsable y profundamente irracional: una verdadera puñalada por la espalda que favorece a los nostálgicos de la dictadura. Además, dado que varios de sus líderes aparecían como implacables custodios de la democracia, el cinismo de su conducta se parece demasiado a una estafa.

Lo preocupante es la forma en que la sociedad habrá de procesar esta sangrienta agresión sufrida a manos de unos delirantes. ¿Invocaremos, una vez más, a la “mano dura” o tendremos la madurez de enfrentar este desafío renovando nuestra confianza en la democracia? Luego del horror, los conductores de *Tiempo Nuevo* anunciaron, con mal disimulado entusiasmo, el advenimiento de una nueva etapa en la vida nacional: dictaminaron que “ahora la guerrilla está entre nosotros” y que para combatirla había que abandonar las políticas “persecutorias” que el gobierno habría aplicado en contra de los militares acusados de violar los derechos humanos. La primavera democrática había concluido y llegaba la hora de corregir sus “excesos”. No sorprende escuchar en espíritus atormentados por una enojosa relación con la democracia semejante reconvencción.

Pero para que el argumento parezca razonable se requiere confundir un acontecimiento puntual —como La Tablada— con una condición arraigada y generalizada de insurgencia guerrillera —como la vigente en la Argentina de los setenta— que ni remotamente existe hoy en el país. Esta confusión, propia de diletantes, lleva agua al sombrío molino de la involución autoritaria: el remate del sofisma es la reivindicación histórica de una metodología aberrante que solo unas Fuerzas Armadas animadas por una vocación suicida podrían hacer suya.

Pensemos un instante: ¿qué país está a salvo de eclosiones terroristas?; Aldo Moro, Olof Palme, John y Robert Kennedy, Martín Luther King, Anwar El Sadat e Indira Gandhi son tristes recordatorios de estos años. La locura violentista también puede presentarse bajo un ropaje colectivo: ahí tenemos los atentados indiscriminados en aviones, aeropuertos, trenes, estaciones y supermercados de Estados Unidos, España, Inglaterra, Irlanda. Francia. Italia y Alemania. Las democracias más sólidas del mundo sufren sus embates: habida cuenta de nuestra historia reciente, ¿podría la Argentina ser una excepción? Es evidente que no.

La adecuada contextualización de nuestros problemas permite también sacar otra conclusión: los países arriba mencionados, y que concitan tanta admiración en Grondona y Neustadt, combatieron la peste terrorista sin apartarse de los derechos y garantías establecidos por la constitución democrática. El remedio consistió en robustecer a la democracia y a la libertad, no en debilitarlas, porque sabían que solo la ley amparada en la legitimidad popular puede controlar eficazmente el delirio de los autoritarios, cualquiera sea su signo. Como antiguas civilizaciones sabían también que la violencia genera un círculo vicioso de destrucción y muerte. Recurrir a ella para enfrentar el terrorismo equivalía a tratar de apagar el incendio arrojando nafta a las llamas. Los argentinos también aprendimos que la violencia que nos ha enlutado por largos años surgió cuando nuestra vida política fue sofocada entre el mesianismo pretoriano y el revolucionarismo ultraizquierdista, precipitándonos por el escabroso

sendero del desprecio a la democracia. Hoy, aunque ella sea imperfecta, es suficiente para resolver las nuevas amenazas que se ciernen sobre el horizonte. Para ello es preciso más democracia, no menos democracia.

(31 de enero de 1989).

El perdón y las Malvinas

En las últimas semanas se ha insistido sobre la necesidad de tomar una decisión política que permita clausurar, de una vez por todas, la así llamada “cuestión militar”. En su discurso ante las colmadas —y jubilosas— tribunas de la Sociedad Rural, el presidente reiteró una vez más esta determinación, asegurando que estaba dispuesto a sacrificar su prestigio político en aras de un gesto que la república necesitaba (*Página/12*, 13 de agosto de 1989, pp. 2 y 3). El altruismo presidencial es digno de elogio; la prudencia de su actitud, sin embargo, merece algunas reservas.

Los años del Proceso hicieron de la Argentina un país con una imagen tétrica en el exterior. Audaces “expertos” cercanos al poder militar convencieron a algunos generales que esto podía revertirse con una buena campaña publicitaria, un triunfo en el mundial del 78 o un recital de Frank Sinatra para los nativos. No reparaban en que la infamia de la dictadura era tan grande que los politólogos e internacionalistas de Europa y los Estados Unidos se habían visto obligados a acuñar una nueva categoría teórica para dar cuenta de nuestra situación. Nace así el concepto de “estados paria”, verdaderos intocables que suscitaban la repugnancia de la conciencia universal. Allí fue a parar la Argentina del Proceso, junto a la Uganda de Idi Amin, el Paraguay de Stroessner, el Chile de Pinochet y un puñado de otras satrapías.

Es bueno recordar que los juicios a los excomandantes de las juntas —y a ciertos responsables de las violaciones de los derechos humanos— fueron un acontecimiento mundial que sorprendió gratamente a los pueblos civilizados. La Argentina se aferraba desesperadamente a un sustrato moral que no había sido destruido en aquella larga noche de espanto. La naciente democracia respondió a la violencia de la dictadura con el derecho y la constitución y dejó que fuesen las cámaras, los jueces y las leyes e instituciones de la república las encargadas de restaurar la justicia. El juicio, seguido con extraordinario interés por la opinión pública internacional fue ejemplar e incuestionable, más allá de nuestra discrepancia con la liviandad de ciertas sentencias. La Argentina fue readmitida, con respeto, en el concierto universal de las naciones.

El indulto en ciernes nos retrotrae a una situación que creíamos ya superada, pues habla a las claras de nuestras dificultades para sostener legítimas decisiones adoptadas por un poder independiente de la república, supervisado y controlado por los demás y por la opinión pública nacional e internacional. Dejemos para otra ocasión el análisis de los aspectos internos de la cuestión: con el indulto el gobierno no resuelve la “cuestión militar”, no “pacífica” a la sociedad ni conquista nuevos aliados. Por el contrario, dicha iniciativa servirá para aglutinar una amplia coalición de descontentos —dentro y fuera de la Argentina— y, como si lo anterior fuera poco, para erosionar sustancialmente la legitimidad del orden democrático.

Nos interesa resaltar las consecuencias internacionales del indulto. Si este fuera decretado nuestra credibilidad internacional se vería gravemente lesionada, precisamente en momentos en que la estrategia del presidente y su canciller acaba de cosechar un significativo éxito al hacer posible el inicio de una negociación directa con los británicos por el tema de las Malvinas. Digámoslo sin ambages: las palabras de los gobernantes argentinos —quienquiera que sea— están muy devaluadas en el sistema internacional. Los juicios a las juntas habían comenzado a probar que queríamos ser serios; un indulto —o cualquier otra argucia jurídica que produzca

idénticos efectos— acarrearía consecuencias catastróficas sobre la credibilidad que necesitamos, ahora más que nunca, para negociar con Londres. Porque, ¿cómo convencerlos de nuestra confiabilidad “hacia afuera” —es decir, de nuestra determinación para respetar los compromisos internacionales que podamos suscribir— cuando “hacia dentro” somos incapaces de aceptar las sentencias dictadas por nuestros jueces? ¿Cómo podríamos negociar un nuevo régimen internacional sobre las Malvinas si, al mismo tiempo, le decimos al mundo que en este país la vigencia de la ley está condicionada por las presiones de quienes pugnan por liberar a reos cuyas condenas fueron ratificadas por el más alto tribunal de la nación? ¿Cómo persuadirlos de que la liberación de los excomandantes no significa una recaída en el militarismo y que, en realidad, el gobierno argentino no habrá de encontrarse, en poco tiempo más, a merced de los sectores más recalcitrantes del ejército, deseosos de cobrarse la revancha por la guerra de 1982?

Estas interrogantes, suscitadas por lo que sería percibido como un debilísimo y errático apego del gobierno argentino a sus propias leyes, afectarán gravemente la actitud de los británicos. Los tomará mucho más cautelosos y desconfiados, con lo cual las incipientes negociaciones corren el riesgo de terminar en un nuevo fiasco. La credibilidad y la coherencia de las políticas gubernamentales constituyen el capital principal con el cual un país se inserta en la escena internacional. La Argentina es poco creíble y sus políticas han sido tradicionalmente bastante inconsistentes. Con la restauración de la democracia dimos los primeros pasos tendientes a reconstruir nuestra credibilidad y a tratar de ser coherentes. Un indulto vendría a echar todo por la borda: pondría en evidencia que por encima de la ley prevalecen los poderes *de facto*, con lo cual nuestros legítimos gobernantes se convierten en interlocutores poco confiables. La *realpolitik* que guía las relaciones internacionales aconsejaría a los británicos adoptar nuevamente una estrategia dilatoria, pues el indulto les revelaría la futilidad de una negociación, siempre costosa para

ambas partes, con señores que están incómodamente sentados sobre la punta de las bayonetas.

(19 de agosto de 1989).

El indulto y la consolidación democrática

A pocas semanas de que el gobierno anunciara su intención de decretar un indulto el repudio de la sociedad se hizo sentir de modo sutil, pero elocuente. Las encuestas muestran a una altísima proporción de los entrevistados, alrededor de un noventa por ciento, rechazando terminantemente el perdón presidencial para los excomandantes y el líder montonero. Los partidos mayoritarios se inscriben en la misma tendencia. Los sindicatos, inclusive los más incondicionales al gobierno, adoptaron una actitud cautelosa: no se atreven a irritar a sus bases con cándidos llamados a la “pacificación nacional”. Los empresarios casi ni han abierto la boca, salvo la pía exhortación de Jorge Born y los deplorables comentarios que al respecto formulara Guillermo Alchourrón.¹⁹ Claro que las extravagancias de este último tienen un atenuante, pues las expresó bajo los efectos de la fuerte emoción que le produjo el quebrantamiento de un hechizo que había persistido casi medio siglo: por primera vez un presidente peronista —ovacionado por la elegante tribuna oficial— inauguraba la exposición de la Sociedad Rural. Sin embargo, sus excesos de verbosidad no hallaron eco en el resto de las organizaciones patronales.

¹⁹ Alchourrón afirmó en el discurso de inauguración de la Rural, el sábado 12 de agosto, que “una sincera y generalizada reconciliación” era condición para “retomar el camino hacia la producción y el crecimiento”. Horacio Verbitsky: “La verdad nos hará libres”, en *Página/12*, domingo 20 de agosto de 1989, pp. 8 y 9.

La Iglesia también se llamó a un oportuno silencio, alentado por el fiasco de la famosa misa de la reconciliación nacional, y no ha habido reclamos en favor del indulto por parte de las organizaciones populares, juntas vecinales, cooperativas, sociedades de fomento, agrupaciones culturales y todo el abigarrado enjambre de asociaciones voluntarias mediante las cuales se expresa la sociedad civil.

La cuestión del indulto tiene dos aspectos principales: uno, relacionado con el problema de la justicia; otro, con la continuidad de nuestra renaciente democracia. Desde el punto de vista moral su concesión demostraría que hay ciertos individuos que están exceptuados del cumplimiento de las leyes de la república, a pesar de haber sido condenados por delitos atroces y aberrantes o por secuestros extorsivos y crímenes de diverso tipo. El paradójal mensaje que enviaría el régimen democrático sería, pues, el siguiente: hay ciudadanos de primera, que gozan de impunidad, y otros de segunda, sobre los cuales se descarga todo el peso de la ley. El resultado es una flagrante injusticia, la descalificación del debido proceso judicial y la violación del principio de equidad, base fundamental para la sobrevivencia de la democracia.

Desde el punto de vista político el gobierno debería saber que con el indulto no reconcilia a la sociedad ni soluciona la problemática militar. Los posibles beneficiarios de la gracia presidencial han hecho saber mediante distintos voceros —Sexton, Castro Madero y muchos otros— que dicha medida los ofende, pues ratifica su condición de reos y lo que ellos anhelan es que se premie su heroísmo. Al no estar arrepentidos por actos que nuestros jueces caracterizaron como “delitos atroces y aberrantes” el indulto es un verdadero agravio. Por eso han rechazado de plano las insinuaciones oficiales de llamarse a silencio en caso de ser puestos en libertad. Lejos de “cerrar las heridas”, la decisión del presidente Menem las reabrirá violentamente, poniéndose en una situación en la cual muy rápidamente perderá la iniciativa política, acosado por rencorosos excomandantes que se sienten víctimas de una afrenta y por una amplia variedad de fuerzas sociales que descubren en el repudio al indulto un común

denominador para canalizar su descontento. En síntesis: el gobierno precipita la conformación de una amplia coalición opositora y no conquista nuevos aliados; deteriora su imagen nacional e internacional y en lugar de resolver un problema lo convierte en algo prácticamente intratable. ¿Qué sentido tiene semejante disparate?

Desde las alturas se responde: se soluciona la cuestión militar. Falso: el desorden castrense poco tiene que ver con el tema del indulto. Las actitudes de los grupos más recalcitrantes son producto de la repugnancia que sienten por la democracia. Cualquier concesión solo servirá para envalentonarlos: el indulto, la suspensión de los juicios, la amnistía a los implicados en los alzamientos enfervorizará sus ánimos revoltosos. Dadas estas condiciones, lo único sensato que se puede hacer es cortar de raíz las semillas de la indisciplina. El problema de los rebeldes es con la democracia, no con las sentencias a los excomandantes; lo único que debe hacer el gobierno es reafirmar enérgicamente su autoridad y no negociar con quienes violaron las leyes de la nación y los reglamentos militares. Los desplantes de Massera y Rico pretenden demostrar que el gobierno es impotente; para demostrar lo contrario el presidente debe actuar con el máximo rigor.

No está de más recordar que, en su momento, el presidente norteamericano Gerald Ford concedió el perdón presidencial a Richard Nixon, acusado por delitos que por comparación a los cometidos por nuestros reos son juegos de niños. El resultado: una abrupta caída en la popularidad del nuevo presidente y en los niveles de confianza de la ciudadanía ante las instituciones de la democracia. La generalización de la suspicacia popular ante el funcionamiento de las instituciones políticas produjo graves lesiones en una democracia tan consolidada como la norteamericana y, poco tiempo después, Gerald Ford fue sepultado por una avalancha de votos que instaló en la Casa Blanca a James Carter. Es fácil imaginar lo que ocurriría en la Argentina, con una democracia débil, cuyas bases de legitimidad han sido corroídas por una política económica que margina, excluye y agrede a extensas franjas de la sociedad civil y en donde el cinismo

o la ineficacia de nuestras instituciones hacen que los ciudadanos sientan una natural desconfianza hacia las autoridades. En estas condiciones, el otorgamiento de un indulto disminuiría aún más la fundamental creencia en la legitimidad de la democracia y abonaría el terreno para la prédica destructiva de los autoritarios.

(31 de agosto de 1989).

Sobre indultos y amnistías

El presidente ha reiterado su decisión de conceder el indulto a los militares involucrados en graves violaciones a los derechos humanos. Su perdón incluiría asimismo a aquellos que tomaron parte de las tres sublevaciones castrenses que jalonaron el último tramo del gobierno radical. Tal como lo hemos sostenido en anteriores artículos, esta decisión afecta la credibilidad de nuestras instituciones políticas y ofende al sentido de justicia sobre el cual se asienta el Estado democrático. Hoy examinaremos otra de sus nefastas consecuencias: el indulto y la amnistía atentan contra la gobernabilidad de la democracia e incitan a nuevas revueltas militares que, tarde o temprano, ocasionarán su derrumbe.

Al examinar este tema no es necesario ir demasiado lejos ni internarnos en complejos laberintos teóricos: basta con observar lo ocurrido en nuestra historia reciente para sacar conclusiones aleccionadoras. Arturo Frondizi fue objeto de diversos “planteos castrenses” —para utilizar un eufemismo de aquella época— que lenta pero inexorablemente minaron su autonomía decisional y sus capacidades gubernativas. Las cada vez más frecuentes e intensas presiones militares comenzaron como tibias reivindicaciones profesionales. Pero a medida que pasaba el tiempo los reclamos se hacían más genéricos e insolentes, refiriéndose a las orientaciones de la política económica, la situación de la universidad, los problemas de la

infiltración “comunista” en la cultura y, por último, la política exterior argentina. Ante esta ofensiva, la actitud del presidente no pudo ser más desafortunada: intentó calmar los ánimos de los militares embravecidos mediante el empleo de una prosa tan grandilocuente como inefectiva y terminó siendo ignominiosamente destituido, devorado por las fieras a las que había pretendido domesticar con sus discursos. Confundido por los vapores de su propia retórica Frondizi pareció no darse cuenta de que al consentir los “planteos” y las repetidas insubordinaciones castrenses destruía a su propio gobierno. Más cerca de nosotros, la experiencia del presidente Alfonsín demuestra una vez más el resultado de las estrategias “apaciguadoras”: allí están las “instrucciones” a los fiscales, las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida y el caos imperante en las Fuerzas Armadas [FF. AA.]. Pero... no es solo eso: la blandura oficial frente al desafío de los carapintadas provocó un deterioro generalizado en la capacidad de gestión estatal, que le impidió enfrentar no solo a la cuestión militar sino también a la crisis económica y los problemas sociales que culminaron con los saqueos en Rosario y el Gran Buenos Aires. Frondizi fue destronado por los militares cuya ilegalidad había tolerado: Alfonsín no pudo concluir su mandato constitucional porque sus capacidades de “hacer política” —en cualquier campo, y no solo en el militar— se agotaron a partir de su inmenso error del Domingo de Pascua de 1987. Ambos fueron víctimas de una misma ilusión, y la venganza de la realidad fue terrible.

Historias como estas pueden repetirse hasta el hartazgo en las más diversas latitudes, desde Weimar hasta Indonesia, pasando por Chile. Historias tan antiguas que hace ya dos mil quinientos años Aristóteles observaba que la regla de oro para la preservación de un régimen democrático era la estricta observancia de la legalidad. En un párrafo que parece dedicado a los argentinos decía que había que evitar la falacia de pensar que las violaciones insignificantes de la legalidad podían ser perdonadas porque no amenazaban los fundamentos de la polis. Todo lo contrario: era preciso ser estricto en el castigo de esas infracciones marginales si se deseaba evitar el riesgo

de masivas violaciones a la legalidad después. La historia ratificó el valor de las enseñanzas del filósofo: cuando nuestros gobiernos consintieron que los hombres de armas atropellaran la ley estaban también autorizando la futura violación de la constitución y las leyes fundamentales de la república. El “pequeño” gesto de insubordinación de un grupo de guerreros no posee una naturaleza distinta a la de un golpe de Estado.

Olvidarse de estas enseñanzas de la historia en la Argentina de hoy significa premiar a los carapintadas por sus reiteradas rebeliones. Peor aún, equivale a castigar a los militares que no se plegaron a sus delirios mesiánicos, que de ahora en más habrán de ser considerados como “traidores” por los revoltosos y como dócil carne de cañón corporativa por parte de las autoridades del Estado. ¿Qué significa esto en términos de la gobernabilidad de la democracia? Que ante futuras rebeliones castrenses —¿o es que hay algún inocente que en verdad cree que ya son cosas del pasado?— los militares “leales” no tendrán demasiadas razones para defender a las autoridades constitucionales y oponerse a los “rebeldes”. En vez de lograr la pacificación lo que se obtiene con estas medidas es la completa anarquización del ejército, constituido en un poder autónomo que terminará asfixiando a la autoridad presidencial. Su sobrevivencia quedará supeditada a la buena voluntad de los conspiradores, quienes juzgarán por cuanto tiempo más estarán dispuestos a recibir órdenes de un gobierno al que no respetan, temen ni obedecen.

Max Weber decía que cuando la violencia legítima —monopolio exclusivo e irrenunciable del Estado— puede ser utilizada al margen de la constitución se está en presencia de un agudo proceso de disolución de la vida político-estatal. La amnistía y el indulto confirman el peligroso divorcio entre la autoridad y el poder en el Estado democrático. La primera, condensada en la figura del presidente como jefe del ejecutivo y comandante supremo de sus Fuerzas Armadas, confiesa su incapacidad para subordinar a su mando constitucional a un aparato represivo acostumbrado a prevalecer al margen de las leyes y que no se resigna a aceptar el fin de la impunidad. Por eso lo que los

jueces sancionan el ejecutivo indulta; y las quebras de la legalidad, aún no sometidas a proceso judicial, son prestamente cubiertas por el piadoso manto de la amnistía. La generosidad gubernamental, en coyunturas de disolución del orden estatal, se parece demasiado a una confesión de impotencia. Sin una enérgica reafirmación de la supremacía civil no solo se erosionarán las bases del actual gobierno sino las del mismo régimen democrático. Es preciso, en consecuencia, dejar de lado por ilusorias y autodestructivas las políticas de apaciguamiento que solo ceban a los futuros sediciosos. La situación es lo suficientemente delicada como para volver a transitar , una vez más, por los caminos que tanto nos apartaron de la consolidación democrática.

(3 de octubre de 1989).

Los usos de La Tablada

Se cumple ya un año del ataque del Movimiento Todos por la Patria [MTP] al cuartel de La Tablada, y vale la pena reflexionar sobre los usos de ese incidente. Si no lo hacemos corremos el riesgo de olvidar, y como sin memoria no hay sabiduría nuestra sociedad se estaría autocondenando a sufrir un nuevo escarmiento por su desaprensión. Todos sabemos que la memoria colectiva de los argentinos es de una fragilidad rayana en lo patológico. Pero esta propensión hacia el olvido y la negación se acentuó por la inseguridad y la angustia ocasionadas por un año como 1989 que, sin duda, fue el peor en lo que va del siglo. Comenzó cuando todavía no se había disipado la bronca por la rebelión carapintada de Villa Martelli, y en seguida vino La Tablada. Pero, además, en ese mismo año tuvimos dos experiencias hiperinflacionarias; el “golpe de mercado” de febrero (“el dolarazo”); el “vacío de poder” poselectoral y la renuncia de Alfonsín; la metamorfosis neoconservadora del peronismo; los saqueos populares; seis ministros de economía; cinco mil por ciento de inflación anual y, como broche de oro, el indulto presidencial. Es comprensible que un pueblo al que le ocurren tantas desgracias trate de fugarse cabalgando sobre el olvido. Pero hay que volver a la realidad.

¿Qué ocurrió hace un año en La Tablada? Una supuesta vanguardia mesiánica, iluminada, desvinculada por completo de las masas tomó por asalto uno de los cuarteles más poderosos del

ejército. Para ello utilizó no solo a sus cuadros dirigentes, sino que, mediante el engaño y la manipulación, convenció a un puñado de crédulos para ir a meterse en la boca del lobo. La aventura terrorista del MTP propiciada por tres rebeliones de los carapintadas, es cierto, fue tan reprensible éticamente como profundamente equivocada y retrógrada desde el punto de vista político. En lugar de consolidar la democracia, la debilitó; quería impedir un golpe carapintada y contribuyó a minar, aún más, el control civil sobre las Fuerzas Armadas. Su estupidez fue tan gigantesca que terminó facilitando el indulto a los militares que violaron nuestras leyes.

Pero veamos algunos otros interrogantes suscitados por La Tablada: ¿se podría haber desalojado el cuartel sin provocar las muertes y los destrozos ocasionados por un “enfrentamiento”, tan absurdamente prolongado, entre una veintena de improvisados y el ejército argentino? La autorizada opinión del excomisario general Juan Ángel Pirker era que sí. Inclusive llegó a decir, poco antes de su sorprendente deceso, que la Policía Federal podría haber sacado a los asaltantes del cuartel en cuestión de horas, apelando tan solo a la compañía de gases de la repartición. ¿Cómo comprender entonces la extraordinaria lentitud e ineficiencia de nuestras Fuerzas Armadas para reducir a los asaltantes? Debemos celebrar que gracias a la democracia las relaciones con nuestros vecinos han mejorado, porque a la luz de lo acontecido en La Tablada más vale ni pensar lo que podría ocurrir si el ejército paraguayo o el boliviano lanzaran sus efectivos sobre nuestras provincias limítrofes, o si los generales chilenos o brasileños decidieran algo semejante. No las recuperaríamos jamás. Ya aprendimos en 1982 que no podíamos desafiar al declinante colonialismo británico, pero luego de La Tablada las dudas acerca de la capacidad operativa de nuestro ejército parecen ser muchísimo más graves.

Claro está que también podrían construirse otras hipótesis para entender este fenómeno. La batalla de La Tablada fue transmitida a todo el país por radio y televisión, convirtiéndose inesperadamente en el “espectáculo” de más audiencia para los *mass-media*. La

reiterativa exhibición de las acciones represivas del ejército parecía perseguir objetivos distintos de los cuerpos de los guerrilleros. Tal vez la divulgación masiva de un castigo ejemplar e inapelable para disuadir a futuros revoltosos. Quizás demostrar que la amenaza de la guerrilla era muy seria, como se encargaron de expresarlo Bernardo Neustadt y Mariano Grondona en su habitual programa televisivo. Recordemos las apocalípticas palabras que pronunciaran en esa ocasión: “el ataque a La Tablada confirma que ahora la guerrilla está entre nosotros”. Este notable descubrimiento fue rotundamente refutado por la historia, pero, ¿quién se acuerda de eso ahora? En aquel momento, cuando nuestra vida política había sido reducida a una vacua e insípida “cultura del espectáculo”, decirlo por la TV y “probarlo” con las imágenes del noticiero transformaban un disparate en un discurso verosímil. Si la existencia de la guerrilla era tan incontrovertible como la ley de la gravedad, entonces la sociedad civil debía estrechar filas en torno a las Fuerzas Armadas. Tal vez se habían cometido “errores y excesos” en el pasado, pero ¿de qué otras formas se podían combatir a feroces enemigos, peores que estos que tienen en jaque durante dos días al ejército? Acabemos de una vez con esta insensata persecución a quienes libraron esa guerra ¿No están, acaso, los carapintadas brindando un ejemplo de heroica moralidad republicana cuando las cámaras los enfocan protegiendo, con sus propios cuerpos, al presidente Alfonsín de las balas de pérfidos francotiradores?

Este dispositivo discursivo, montado sobre la criminal estupidez del MTP y la explotación televisiva del evento, culminaba en una tan piadosa como previsible exhortación a la “reconciliación nacional”: los “héroes de las Malvinas” de Alfonsín ya habían hallado el camino que los convertiría en los indultados de Menem. Conviene recordarlo: los sucesos de La Tablada fueron usados para tratar de rehabilitar a quienes cometieron delitos que la justicia calificó de atroces y aberrantes, con el absurdo argumento de que un crimen puede redimir otro crimen. También para legitimar preventivamente la “salida de los tanques a la calle” que uno de los conductores de *Tiempo Nuevo*

iría a reclamar históricamente luego de los saqueos de mayo y para apoyar una creciente presencia de las Fuerzas Armadas en la vida política, asignándole un papel tutelar y policial incompatible con el que desempeñan en cualquier Estado democrático. Un año después, vemos con cierto alivio que la tentativa manipuladora de la derecha fracasó: sus vaticinios tremendistas fueron desmentidos por los hechos y la guerrilla no resucitó entre nosotros. Tampoco logró inducir a las autoridades a que reprimiesen los saqueos con tropas del ejército. Peor aún les fue a sus sueños de rehabilitar a los militares ante la sociedad civil. Para esto era preciso el reconocimiento de sus culpas, un sincero arrepentimiento y un genuino propósito de enmienda, algo que los habitantes del Penal de Magdalena y sus amigos ni remotamente piensan hacer. El indulto, claro, igual fue concedido, pero al ser una decisión contraria a los sentimientos abrumadoramente mayoritarios de la población quedó reducido a un mero gesto burocrático, privado de grandeza y políticamente estéril.

(23 de enero de 1990).

Dos lecciones de La Tablada

Nos parece que a un año de La Tablada debería ser posible extraer dos lecciones de aquellos sucesos y sus derivaciones. Una: las trampas que el voluntarismo tiende a sus cultores. Segunda: la lamentable comprobación de que en la Argentina existen tres justicias diferentes, y que esto puede ser fatal para el futuro de nuestra democracia.

En relación a lo primero digamos que las fronteras que separan la militancia disciplinada del voluntarismo mesiánico e irracional son muy tenues. Solo las fuerzas políticas maduras y conscientes tienen la capacidad necesaria como para percibir el peligro. El MTP no la tuvo, y por eso incurrió en una aventura terrorista repudiable desde el punto de vista ético y autodestructiva políticamente. Además, como si lo anterior fuera poco, debilitó extraordinariamente a la democracia al servir de pretexto para erosionar aún más la menguada supremacía civil sobre las Fuerzas Armadas.

Segundo: en los estados democráticos existe una única justicia que es independiente del sexo, raza, clase o condición social de los procesados. En nuestro caso esta cláusula elemental no se cumple: la justicia que entiende los casos ordinarios es extraordinariamente lenta, desproporcionada en las condenas y somete a los condenados a un régimen de reclusión que hace que el que delinquiró ocasionalmente se transforme en un peligroso criminal. Luego está la justicia que se aplica a los militares. En este caso también es lenta

pero insolentemente benigna con los acusados, pues la presunción latente es que, en realidad, están exentos de toda culpa. Si por algún infortunio llegan a ser condenados, las cárceles en donde purgan sus crímenes —infinitamente más graves que los que ventila la justicia ordinaria— son magníficos “*countries*”, y se requiere de una imaginación exuberante para entender que sus pensionistas fueron hallados reos de delitos atroces y aberrantes o de sucesivos alzamientos en contra del orden constitucional. Como si esto fuera poco, estos individuos gozan además de otros privilegios: si los jueces los condenan siempre vendrán atemorizados gobernantes a declarar “puntos finales”, “obediencias debidas” o generosos indultos para enmendar los errores cometidos por la judicatura. Pero hay también una tercera justicia, que es rápida, expeditiva e implacable: es la que conocieron los del MTP y los que fueron conducidos, mediante engaños varios, hacia la celada. Dejemos por un momento de lado ciertas “desprolijidades” ocurridas durante el proceso —como por ejemplo la ausencia de adecuadas explicaciones acerca de algunos detenidos que estaban vivos cuando se consumó la recuperación del cuartel y que luego aparecieron muertos— y lo absurdo de la pena para los individuos llevados como “relleno” en el operativo. Contrastando notablemente con el inmovilismo y las incoherencias de la justicia que se entiende con los uniformados, la que tomó en sus manos el juicio a los asaltantes de La Tablada “resolvió” el caso en poco más de seis meses e impuso condenas durísimas a la mayoría de los acusados.

La existencia de estos criterios distintos para juzgar los actos que quebrantan nuestras leyes es nefasta para la democracia. Carcome su necesaria legitimidad popular, construida sobre la comprobación mínima e indispensable de que todos somos iguales ante la ley. La justicia desigual equivale a ausencia de justicia y fabrica delincuentes comunes, militares subversivos y mesiánicos terroristas, tres tipos sociales con los cuales es muy difícil consolidar una democracia. A un año de La Tablada, ¿hemos hecho algo para revertir esta situación?

(26 de enero de 1990).

Cría cuervos

Es universalmente conocida nuestra propensión al triunfalismo. Eterno “país-jardín-de-infantes”, para usar la feliz expresión de María Elena Walsh, los argentinos hace mucho tiempo que estamos empantanados en un inconcluso tránsito entre dos condiciones anti-téticas: acostumbrados desde siempre a ser súbditos de autoridades arbitrarias y despóticas, nos cuesta un esfuerzo enorme adoptar el discernimiento y la prudencia exigidas por el papel protagónico del ciudadano en la vida democrática.

Como nación pagamos un precio muy caro por esta carencia: nuestra infantil credulidad nos convirtió en fáciles presas de los mitos triunfalistas y, sobre todo, de las manipulaciones gubernamentales. Por eso creímos, desafiando las leyes de la lógica más elemental, que la “plata dulce” era una bienhechora realidad y no una perversa burbuja especulativa, o que nuestras Fuerzas Armadas les estaban propinando una soberana paliza a los *gurkas* en las Malvinas, o que la Argentina tenía un “destino de grandeza” que le estaba celosamente reservado. Esta actitud también nos llevó a creer que, si cuatro individuos descendían de un falcon verde y secuestraban a una señora embarazada, a unas monjas o a un joven de barba, seguramente era porque “algo malo habrían hecho”. El drama de la decadencia argentina —de nuestra triste y dolorosa descomposición

como sociedad— no es ajeno a esta mentalidad profunda, pertinaz, sólidamente arraigada en nuestro imaginario colectivo.

Es importante no perder de vista estos antecedentes a la hora de analizar el triunfalismo que se ha instalado desde el lunes a la noche en las altas esferas del gobierno. ¿Tendremos que creer, una vez más, en “la historia oficial”? No me parece. La rebelión de los carapintadas es el lógico resultado de la pusilanimidad con la que los gobiernos democráticos enfrentaron el funesto legado de los “años de plomo” y la guerra de las Malvinas. La zigzagueante política radical terminó lamentablemente borrando con el codo casi todo lo que había escrito con temblorosa mano, produciendo la amnistía de muchísimos militares que habían cometido crímenes de lesa humanidad. Ante la gravedad de la “cuestión militar”, el presidente Menem optó por huir hacia adelante: propuso una política de “olvido y perdón” —que la mayoría de la sociedad rechaza— y trató de reconstituir la alianza histórica del peronismo con las Fuerzas Armadas. Para dotar a esta iniciativa de credibilidad el gobierno lanzó una inverosímil política de “reconciliación nacional”, indultó a algunos de los excomandantes, prometió el indulto para los demás y perdonó a los carapintadas que se habían sublevado —¡aparentemente en contra de Alfonsín y no del régimen democrático!— en Semana Santa, Monte Caseros y Villa Martelli.

Como resultado de esta política, Menem obtuvo lo que a Alfonsín le fuera vedado: la aquiescencia del ejército para reprimir a los revoltosos, cuyas continuas provocaciones cohesionaron reactivamente a la institución. Pero a nadie se le escapa que esta predisposición de los así llamados “leales” para utilizar la violencia en contra de los carapintadas no fue una consecuencia de la genuina subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil. La eficacia represiva exhibida el pasado lunes fue el oneroso resultado de la plena y absoluta reivindicación oficial de los militares que —junto a un episcopado expurgado de sus elementos más díscolos y un sindicalismo reconvertido en un desprestigiado apéndice del Estado— han resucitado el esqueleto corporativo de la vieja alianza del 45. Pero sabemos que

la historia solo se repite como comedia, y en lugar de los rumorosos obreros que produjeron aquellas jornadas de octubre —que sepultaron a la Argentina oligárquica— hoy nos encontramos con pulcros y adinerados dirigentes sindicales que manejan decrépitos cascarones desde los cuales, según nos acaba de informar uno de sus más connotados voceros, pueden enriquecerse sin trabajar. Entre el “cabecita negra” que se lavaba los pies en la fuente de Plaza de Mayo y el afanoso cacique gremial de hoy media la misma distancia que entre el viejo proyecto “nacional-populista” de aquellos años y el “thatcherismo” que hoy nos agobia.

En este proyecto se insertan ahora las Fuerzas Armadas y los hechos que estamos comentando fueron el bautismo de sangre con el cual sellaron su incorporación al pacto neoconservador. La fragilidad de todo este arreglo salta a la vista. El presidente cree, sinceramente, que indulto mediante se resolverá para siempre la “cuestión militar”. No repara en el hecho de que lo que hace el indulto es premiar a quienes —hoy como ayer— se colocan al margen de la ley, sea por la comisión de delitos comunes, de actos sediciosos o de crímenes de naturaleza atroz y aberrante. El “populismo penal” que parece haberse posesionado del corazón del Ejecutivo —que hace apenas unas semanas anunciaba su intención de indultar a cerca de dos mil acusados— y que la sublevación carapintada parece haber robustecido, no puede sino ser comprendido como un guiño complaciente que desde el poder se dirige hacia quienes violan nuestras leyes y las normas éticas de la vida civilizada. En resumen: hay leyes y normas, pero algunos están eximidos de acatarlas. ¿Se puede construir una sólida democracia sobre tan precarias bases? Es evidente que no.

Las dificultades que plantea la política del indulto son insuperables: en efecto, ¿cómo hacer para evitar que los revoltosos vuelvan a las andadas? El indulto es, en realidad, un incentivo para nuevas tropelías: ¿por qué abstenerse de cometerlas? Además, ¿cómo indultar a quienes nuestros jueces hallaron culpables de centenares de crímenes y simultáneamente exigir la pena capital para quienes mataron una veintena de personas? ¿Hasta qué punto puede el gobierno

desalentar nuevas rebeliones si todos saben que, a la corta o a la larga, la impunidad de los sediciosos está garantizada? ¿O es que hay una dualidad de criterios para juzgar los mismos actos? Por último, ¿cuál es el efecto que tiene el indulto sobre los ciudadanos honestos y decentes? ¿Qué puede pensar un laborioso padre de familia cuando observa que el gobierno pone en libertad a quienes los jueces han encarcelado o hace oídos sordos cuando se habla de la corrupción de ciertos funcionarios? ¿Qué efectos tiene todo esto sobre la moral ciudadana?

La política de “olvido y perdón” llega así a su remate lógico: perpetuar las tendencias sediciosas en el seno de las Fuerzas Armadas. El triunfalismo de hoy hace que el gobierno se olvide de que está acosado por graves problemas que no se resuelven con la visita del presidente Bush: ¿o acaso es que ya salimos de la recesión, se acabó la pobreza extrema, erradicamos la corrupción y las desmoronadas bases sindicales y electorales del gobierno fueron reconstituídas?

Llegó la hora de las definiciones. Es necesario un castigo ejemplar para los carapintadas, pero esto será tan solo una ilusión si, al mismo tiempo, el gobierno no rectifica su rumbo. Para ello debe archivar definitivamente su política de indultos y la mal llamada “reconciliación nacional”, porque esta solo es posible con la verdad y la justicia. De lo contrario corre el riesgo de ser devorado por los cuervos que con su displicencia contribuyó a criar.

(7 de diciembre de 1990).

Indulto: responsable y víctimas

El presidente cree que firmando el indulto el país dará vuelta a la página más triste de su historia y que seremos recibidos con alborozo por nuestros nuevos socios del primer mundo. Doble equivocación: su decisión nos aleja mucho más de la reconciliación nacional, porque esta solo puede fundarse sobre la verdad y la justicia. Y la opinión de los países desarrollados fue muy bien sintetizada por el *New York Times* hace unas pocas semanas: esta nueva claudicación demuestra que en la Argentina no hay justicia. No solo porque es lentísima e ineficiente sino porque cuando actúa sus sentencias duran lo que se le antoja al ejecutivo.

La nuestra es una democracia joven y frágil, abrumada por los legados de una acendrada tradición autoritaria. Por eso se habla del indulto como si fuera la prerrogativa arbitraria de una autocracia, olvidándose de que en un orden republicano las atribuciones presidenciales están atemperadas por la propia naturaleza de la legitimidad democrática. En el caso que nos ocupa es evidente que los constituyentes concibieron al indulto como una medida francamente excepcional y aplicable con la máxima prudencia solo cuando las circunstancias lo aconsejasen.

No es este nuestro caso. Hay un amplio consenso social en contra del indulto; sus principales partidarios son sus beneficiarios —directos e indirectos— y el entorno íntimo del presidente, que fiel a

la tradición nacional del verticalismo no se atreve a contrariar los deseos del jefe. Desde el punto de vista ético la decisión presidencial es insostenible. El perdón requiere, de parte de quien ha delinquido, tres cosas: el reconocimiento público de su falta, el arrepentimiento ante sus actos y un genuino propósito de enmienda. Si estos elementos están ausentes el indulto se transforma en licencia, confiriéndose a los beneficiarios de la gracia presidencial el aborrecible privilegio de poder delinquir con total impunidad. Es obvio que bajo el imperio de tales normas morales cualquier tentativa de establecer un orden civil estará irremisiblemente condenada al fracaso. Todos sabemos que quienes están a punto de recuperar la libertad por medio del indulto siguen creyendo que no hicieron nada malo, razón por la cual no manifiestan el menor arrepentimiento por sus actos y mucho menos se les pasa por la cabeza la idea de enmendarse. Al contrario: lo que desean es que la sociedad los colme de honores, que sea ella la que se arrepienta por su necia ingratitud y la que prometa corregirse para que cosas como estas —su humillante juzgamiento y la cárcel— no vuelvan a ocurrir.

En una conferencia memorable —“La política como vocación”— dictada en medio del vértigo de la Alemania imperial que se derrumbaba tras la derrota de la Primera Guerra Mundial, Max Weber advertía que “no hay más que dos pecados mortales en el terreno de la política: la ausencia de objetividad y la falta de responsabilidad”. Esta última refleja la inexistencia, o la extrema debilidad, de máximas de tipo moral que insten al gobernante —más allá de sus certidumbres morales— a ponderar las consecuencias previsibles de sus opciones valorativas. En estos casos, en lugar de una “ética de la responsabilidad” prevalece lo que Weber denomina la “ética de la convicción”, signo del fundamentalismo ideológico que hace que el político solo se preocupe por reafirmar sus creencias desentendiéndose de los resultados de su obrar. “Quiero la reconciliación de los argentinos y para eso indultaré a tirios y troyanos”, parece pensar el presidente. Si las consecuencias de tan bellos propósitos llegaran a frustrar sus aspiraciones originales —¿y cómo ignorar el ancho golfo que siempre

separa intenciones de resultados?— el presidente actuará tal como lo pronosticara Weber para estos casos y “responsabilizará al mundo, a la estupidez de los hombres o a la voluntad de Dios que los hizo así” por su fracaso. Por cierto, nadie habrá de creerle.

Carlos Menem ha proclamado que está dispuesto a asumir totalmente la responsabilidad por la firma del indulto; sin embargo, su actitud en nada modifica los gravísimos efectos de su decisión. Poco consuelo les traerá a las futuras generaciones saber que quien impulsó una política cuya consecuencia objetiva, independientemente de sus intenciones, fue la legitimación de prácticas atroces y aberrantes —y por eso insanablemente inmorales— manifestó repetidamente su voluntad de asumir los costos políticos de tal desatino. El hipotético altruismo del mandatario les tendrá sin cuidado: dirán, simplemente, que un buen gobernante no es aquel que se hace cargo de decisiones irracionales y moralmente objetables sino quien, con discreción y firmeza, actúa con prudencia para evitar la comisión de tales actos.

(27 de diciembre de 1990).

V. Partidos y elecciones

¿Existe la renovación?

Los resultados de la interna peronista²⁰ han desatado una serie de comentarios, muchos de ellos permeados con un fuerte tono apocalíptico, acerca del comportamiento de vastos sectores de la sociedad argentina. Estos análisis tienen un común denominador que se podría resumir de la siguiente manera: ante la frustración y la desesperación generadas por la insensibilidad de la política económica del actual gobierno, con su secuela de tarifazos, deterioros salariales y parasitismo especulativo, los sectores populares le “pasan la factura” a la clase política pateando el tablero de la racionalidad y apostando al mesianismo encarnado en la figura de Carlos Saúl Menem. El pronóstico que se desprende de estos análisis es ominoso: el retorno, en gloria y majestad, de los protagonistas y los “estilos de hacer política” que nos sumieron en el horror en la década de los setenta.

Es evidente que este argumento contiene muchos elementos de realidad que deben mover a la reflexión de los argentinos. Porque, es indudable, nuestra frágil transición democrática no ha sabido despejar de la escena política a los emisarios del pasado y sus gastadas consignas que hoy se reagrupan, caóticamente, en torno a la personalidad del caudillo riojano. Pero valdría la pena también sopesar otros elementos que permiten una lectura un poco más balanceada

²⁰ Nos referimos a las elecciones internas del PJ en las que se enfrentaron Antonio Cafiero y Carlos para elegir el candidato a las elecciones presidenciales de 1989.

de esta compleja realidad, a fin de contar con un diagnóstico más realista.

En primer lugar, conviene no olvidar que la victoria de Menem fue sumamente ajustada, a pesar de que algunos exagerados hayan hablado de una verdadera “paliza” electoral. En realidad, triunfó con poco más de la mitad de los votos, mientras que su rival obtuvo un poco menos de la mitad. Fue una elección reñida en donde importa tanto detectar el “espesor sociológico” de las bases sociales del menemismo como el de los grupos sociales que acompañaron la propuesta de Antonio Cafiero. Suponer que el cafierismo no representa nada, que es un mero artefacto de los “aparatos” es un error mayúsculo, porque lo mismo podría decirse del vencedor de la interna, que también contó con la tradicional, aunque menguada, eficacia de los aparatos sindicales. Pero este no es un problema de aparatos, gremiales o políticos, sino algo que tiene que ver con el Estado de ánimo de las masas, con su grado de conciencia y con sus ganas de rebelarse en contra de un candidato, Antonio Cafiero, que aparecía ante sus ojos con el estigma del “continuismo”.

En segundo lugar, no habría que perder de vista que sería sumamente riesgoso extrapolar mecánicamente, a partir de las tendencias registradas en la interna, el comportamiento de los millones de votantes que no participaron en ella pero que están dispuestos a votar por el peronismo en las próximas elecciones de presidente. Creo que hay razones para pensar que las propuestas del candidato Menem van a ser escrutadas con otros ojos por aquellos que, en un año más, deban elegir al nuevo partido gobernante. Y todos sabemos, aunque a veces se olvide, que en las elecciones nacionales el cálculo de la ciudadanía ocupa un papel bastante más importante que el que se pone en juego en las internas. Allí entran a jugar variables tales como la credibilidad del candidato, el realismo de sus propuestas y las credenciales de su “entorno”. Por su trayectoria, liderazgo y años de cárcel durante el proceso, Menem es un fenómeno diferente al herminismo. Sin embargo, es razonable conjeturar que la conquista de los nueve millones de votos adicionales que se requieren para

triunfar en 1989 es problemática para un peronismo que aparezca como el retorno de la ortodoxia y el regreso a la pureza ideológica esencial de sus tiempos primigenios.

Pienso que para un sector bien significativo del electorado peronista esa propuesta es insuficiente. Si aquellas banderas —y aquel entorno— pueden triunfar a nivel nacional es porque la renovación fue, hasta ahora, un espejismo carente de toda sustancia sociológica. Esto equivale a pensar que este proyecto fue, en realidad, el reflejo de una mera pugna de caudillos, en donde unos arrebataron el poder a los otros ante el desinterés de la masa peronista petrificada en su conciencia política e indiferente ante la calidad y el estilo de las propuestas que le eran ofrecidas. Concebir de este modo a la renovación es reducirla a unas dimensiones que no se compadecen con su verdadera contextura sociológica. Implica también adherir a una suerte de “esencialismo sociológico” que reniega de toda posibilidad de cambio y que cierra para nuestras clases populares la posibilidad de efectuar una revisión de su pasado y una corrección de sus orientaciones políticas. La historia argentina es un largo rosario de refutaciones a esa teoría.

Si todo esto es válido, aun admitiendo la provisionalidad de estos comentarios, queda entonces una última reflexión. La renovación del radicalismo fue una ardua empresa, que comenzó a finales de la década del sesenta y que recién logró coronarse con el éxito en 1983. Tardó unos quince años en cumplir su cometido y el resultado fue el triunfo de Raúl Alfonsín en las elecciones presidenciales de ese año. La renovación peronista comenzó en 1985 y recién está dando sus primeros pasos. El revés sufrido el sábado pasado no habrá de ser el último, pero eso no garantiza que sus ocasionales vencedores puedan llegar demasiado lejos. La tarea que tienen los renovadores es muy importante y necesaria para la consolidación de la democracia en la Argentina. Su impaciencia los puede conducir por el mal camino de arriar sus banderas y volver, como el hijo pródigo, vencido y exangüe, al hogar de la ortodoxia. Lo que el país necesita, en cambio, es profundizar esos esfuerzos para contribuir a una discusión

racional de las políticas que puedan sacarlo de la crisis. Recién entonces se podrá construir una alternativa genuinamente superadora de los males crónicos del capitalismo argentino: su estancamiento económico y su propensión autoritaria.

(15 de julio de 1988).

¿Justicia social sin democracia?

Cualquier observador de la política argentina sabe que uno de los obstáculos que se interponen al logro de la tan ansiada consolidación de la democracia es la supervivencia de una cultura política autoritaria y fascistizante. Esta es tan solo una parte de la pesada herencia dejada por los prolongados períodos de dictadura a los cuales fue sometido este país. En esos años, una coalición de fuerzas sociales reaccionarias llevó a cabo una implacable labor de adoctrinamiento ideológico tendiente a dotar al “ser nacional” de las suficientes defensas para evitar ser avasallado por obra de los perversos agentes difusores de ideologías “foráneas”. El nefasto resultado de este apostolado autoritario ha sido la debilidad de nuestras creencias democráticas: por eso, en sucesivas coyunturas críticas, grandes sectores de nuestra sociedad depositaron su esperanza en algún “hombre fuerte” que viniese a poner fin al aparente desorden producido por la vida democrática, terminando con lo que algunos se apresuraban a definir como anarquía o desgobierno y clamaban al cielo a la espera del redentor uniformado.

Es ocioso insistir sobre las consecuencias gravísimas que se desprenden de esa precaria legitimidad de las creencias democráticas. Basta con recordar que esto favorece los designios de las clases y grupos sociales interesados en perpetuar sus privilegios mediante el recurso del autoritarismo. Por eso resulta sorprendente la actitud de

Carlos Saúl Menem al afirmar, en ocasión del festejo del 17 de octubre, que el tema no era democracia o fascismo sino justicia social o injusticia social.²¹

El problema con este desafortunado planteamiento del candidato es que la justicia social se autonomiza de la democracia. Y esto ocurre porque en el laberinto discursivo del populismo la justicia social es una dádiva que procede “desde arriba”, desde las alturas del Estado, como producto del patriotismo o benevolencia de algún líder providencial. Así construido, el argumento tiene un remate político desmovilizador y autoritario, pues niega por completo el protagonismo de las clases populares que luchan, de modo inescindible, por conquistar la democracia y la justicia social.

¿No era acaso la lucha por la justicia y la democracia la que movilizó al proletariado fabril en octubre del 1945, hartos ya de las artimañas del régimen oligárquico y del “fraude patriótico”? Hartos también, y bueno es recordarlo, de las vanas promesas de la “revolución nacional” de 1943 y de sus sucesivos autócratas militares. Esos trabajadores concebían, con aguda intuición, que la injusticia que los oprimía era simplemente una cara de la medalla; la otra tenía grabada la efigie del autoritarismo oligárquico o militar. Sabían también que su lucha por una sociedad más justa tenía una inevitable mediación política y que el logro de la primera implicaba, simultáneamente, la construcción de un régimen democrático,

Ni los liberales ni los populistas han entendido esta dialéctica sorprendente del movimiento histórico y hoy, a casi medio siglo de distancia, las tres principales fuerzas políticas que aspiran a gobernar este país siguen apegadas a esa falsa dicotomía. Los primeros se escudaron en una institucionalidad completamente hueca y formal, en esa verdadera mueca grotesca de la democracia burguesa que fueron sus diversos gobiernos desde 1930. El pensamiento liberal,

²¹ Evocando el 17 de octubre de hace 43 años, el candidato señaló que en ese entonces el pueblo “dijo que la división no era entre democracia y fascismo sino entre justicia social e injusticia social” y agregó que “hoy se está dando la misma opción” (*Página/12*, 18 de octubre de 1988, p. 4).

en cualquiera de sus variantes, jamás logró trascender el horizonte de visibilidad —bien estrecho— de su clase y rechazó visceralmente el fenómeno esencialmente democrático de la incorporación de las masas a nuestra vida política. Los populistas, por su parte, hicieron de esta integración el único elemento válido y desecharon sin mayores miramientos la importancia de la movilización y la organización autónoma del campo popular. Tampoco se preocuparon por la construcción de una institucionalidad democrática y, menos aún, por fomentar la cosmovisión democrática en el conjunto de la sociedad. Este fue el precio pagado por la ascendencia que en la experiencia histórica del peronismo tuvieron dos grandes corporaciones autoritarias, las Fuerzas Armadas y la Iglesia.

Si los liberales creían en la posibilidad de una democracia sin justicia social, que, por eso, degeneraba rápidamente en una oligarquía vergonzante, los populistas ya creían, desde aquellas épocas, que una mejora en la justicia distributiva los eximía de la responsabilidad de cumplir el mandato histórico que les habían asignado las clases populares: la construcción de un régimen democrático que cristalizara sus sueños de justicia. El penoso resultado fue que el régimen surgido de las jornadas de octubre del 45 agotó el impulso democrático y ascendente de las masas, se burocratizó, se distanció de su base social y se derrumbó, en septiembre de 1955, ante la agria mezcla de bronca e indiferencia de aquellos a quienes decía representar. Su caída fue más que nada producto de su rechazo a la única alternativa que le quedaba para derrotar a los sediciosos: la movilización popular. Pero enfrentado a ese dilema el régimen prefirió capitular ante sus enemigos antes que confiar en el protagonismo popular. Ese mismo desprecio por la democracia habría de reaparecer, a la muerte de Juan Perón, para concluir en la trágica derrota del 24 de marzo de 1976.

El discurso actual del candidato justicialista reitera el mismo error de apreciación, separando ficticiamente lo que en la realidad está unido. Sin reglas del juego democráticas la clase obrera es víctima del despotismo del capital: sin democracia no puede consolidar sus conquistas sociales; sin un régimen democrático está atada de

pies y manos ante la clase dominante, sus aliados y sus perros guardianes. En suma, sin democracia no puede luchar por su autoemancipación, no puede enfrentarse a sus explotadores ni liberarse de sus falsos representantes. Además, siguiendo este razonamiento, cualquier dictador —Videla, Galtieri, Pinochet— que logre una mejoría en el ingreso de los trabajadores pasaría a convertirse en el artífice del bienestar obrero y abanderado de la justicia social.

Creo que esto es grave y merece ser muy seriamente discutido porque perpetúa la confusión en el seno de las clases y capas populares y porque, además, debilita la fuerza del consenso democrático en momentos en que nuestra transición se acerca al punto crítico del primer recambio presidencial. Lo que se impone en estas circunstancias no es una reducción economicista del problema de la justicia social sino la integración de esta temática con el problema de la democracia. De lo contrario la Argentina estará condenada, ¿hasta cuándo?, a llorar y a sufrir, una vez más, por la irresponsabilidad de su clase política.

(25 de octubre de 1988).

Para comprender a los indecisos

Diversas encuestas, de muy distinto origen, han constatado un hecho singular: en el tramo final de la campaña electoral ha venido creciendo el número de los que aún no han resuelto en favor de quien emitirán su voto. El porcentaje de los indecisos constituye, para sorpresa de muchos, la primera mayoría relativa del país: en sus manos reposa el fiel de la balanza que, el día de las elecciones, habrá de inclinarse hacia uno de los dos candidatos con reales posibilidades de triunfo.

El asunto reviste singular importancia y vale la pena detenerse unos minutos para meditar en torno a su significado. ¿Por qué se produce una situación que, en democracias ya consolidadas, representa una desconcertante anomalía? Hay varias razones, pero probablemente la más importante sea la ausencia de propuestas claras y distintas entre las cuales los votantes deban elegir. En la actual campaña presidencial abunda la retórica y escasean los proyectos. Por eso un sector muy significativo del pueblo ha preferido tomarse tiempo para ver, comparar y, finalmente, elegir.

Lo anterior sugiere dos reflexiones. Primero: ciertos personeros de la derecha autoritaria han recurrido a sus habituales sofismas para hacer aparecer a los indecisos como cuantificando la proporción de argentinos cansados y desilusionados por la democracia. Contrariamente a las opiniones de quienes viven de la siembra de la

desesperanza —y de los bienintencionados que en su inocencia les creen— el elevado porcentaje de indecisos no es para nada un síntoma que delate una grave debilidad de nuestra joven democracia. Revela, en cambio, la inestabilidad de los alineamientos políticos de la Argentina posterior al 30 de octubre de 1983, en donde se acabaron los ganadores “cantados” y los perdedores eternos que hacían imposible la alternancia política del régimen democrático. Por eso, lo que en las democracias maduras sería un dato inquietante no lo es para las que acaban de refundarse luego de largos años de dictadura. Pero también refleja la madurez de quien sabe que el 14 de mayo debe tomar una decisión de enorme trascendencia para el futuro del país y para sus propios proyectos personales. Por eso, la actitud reflexiva de quienes creen no tener todavía los elementos de juicio necesarios para adoptar una decisión racional difícilmente pueda ser interpretada como una anomalía. Un dato preocupante sería la conducta de quien, ante la elección política más trascendente de los últimos sesenta y un años, decida su voto sobre la base del fanatismo y el apasionamiento.

Segundo, es un hecho que los indecisos irán madurando su decisión serena y pausadamente. La gritería o el “apriete” no funcionan con esta categoría de electores. Por lo tanto, la iniciativa de la Fundación Conciencia para promover un debate televisado entre los candidatos de los dos partidos mayoritarios es muy saludable para nuestra vida democrática. Los ciudadanos tendríamos así la oportunidad de ver en acción a los candidatos, calibrar su claridad y precisión en el tratamiento de los temas, conocer cuáles son las prioridades en sus proyectos de gobierno, las soluciones concretas que piensan aplicar y, por último, su visión general del país y del sistema internacional. El debate los obligaría a plantear, precisa y categóricamente, sus propias ideas, y el pueblo podría sacar sus conclusiones. Sin embargo, todo indica que dicho debate no tendrá lugar dado que Carlos Menem ha declarado que solo asistiría en caso que también fueran invitados, aparte de Eduardo Angeloz, Álvaro Alsogaray y Néstor Vicente, transformando lo que debía ser un diálogo concreto

en un torneo relámpago de retórica, porque no habría tiempo para profundizar ningún tema. Salvo, claro está, que se organizara una larga serie de debates en donde cada candidato pudiera discutir, frente a frente, con cada uno de los demás, pero esto parece altamente impracticable.

La práctica usual en las democracias restringe el debate a los postulantes de los partidos mayoritarios. Es una pena que el candidato peronista pierda la oportunidad de precisar sus opiniones ante los indecisos, sin cuyo aporte no puede ganar, y a quienes la vertiginosa pendularidad de sus posturas ha sumido en el más profundo desconcierto. Es más, no son pocos los votantes peronistas a quienes también les gustaría escuchar, de labios de su candidato, que es lo que realmente piensa de temas, tales como la deuda externa, el “salariazó” y la inflación, la flexibilización del mercado laboral, el pacto social, las Malvinas, el asilo a Stroessner, los hechos de La Tablada, la relación entre periodismo y terrorismo, el papel de las Fuerzas Armadas y la cuestión del plebiscito en Chile. Carlos Menem se ha quejado reiteradamente del periodismo que, según él, estaría empeñado en desfigurar su imagen. Si aceptara la invitación de Conciencia tendría una excelente oportunidad de perfilarla definitivamente, y el pueblo le estaría agradecido por su contribución a la clarificación de sus interrogantes.

(22 de febrero de 1989).

¿Qué clase de democracia capitalista tendremos?

La próxima elección presidencial plantea una grave disyuntiva al electorado de izquierda que explica su alto nivel de indecisión. La democracia capitalista alimenta la ilusión de que existe una variada oferta de propuestas políticas. Extrapolando las características ideales del mercado competitivo, que como todos sabemos fue enterrado hace casi cien años con el advenimiento de los monopolios, la ideología dominante afirma que habría tantas alternativas políticas como candidatos presidenciales. Sin embargo, un análisis riguroso revela que nuestras opciones son más reducidas y decepcionantes. Nos guste o no, el espacio decisional en un sistema multipartidario pero bipolar como el que predomina aquí y ahora en la Argentina se constituye en torno a un dilema de hierro: radicalismo o peronismo. Todos sabemos que son estos los únicos partidos que tienen posibilidades de llegar al gobierno: desconocer esta realidad, por más desagradable que nos parezca, no puede sino agravar el desencuentro de la izquierda con la sociedad, postergando aún más el demorado surgimiento de una alternativa democrática y socialista con base de masas.

El electorado progresista debe saber que lo que se decide en las próximas elecciones es qué clase de democracia capitalista tendremos y qué estilo de dominación política habremos de soportar. Nadie puede desconocer que tanto los asesores de Menem y Angeloz

como las difusas propuestas económicas insinuadas por los candidatos representan variantes de un mismo proyecto de recomposición regresiva del decadente capitalismo argentino: por eso ambos coinciden en la necesidad de liquidar las pocas mediaciones político-estatales que se interponen al despotismo del mercado. Más allá de la retórica, el nuevo gobierno habrá de descargar los costos del reajuste económico sobre las capas y clases subalternas.

Olvidarnos de la común naturaleza de clase de ambas propuestas nos instalaría en la nebulosa de la política-ficción, y han ocurrido cosas demasiado graves en la Argentina como para que el electorado de izquierda se permita esa distracción. En consecuencia, las opciones electorales reales son dos, y ambas de derecha: una populista, personificada en el liderazgo de Menem; y otra de tinte liberal representada, representada por Angeloz. Dada su mínima gravitación electoral excluimos de este cuadro a la candidatura de la derecha conservadora, encarnada en Alsogaray. No olvidamos, además, la amenaza, siempre latente, de un nuevo golpe militar, aun cuando, por ahora, su ocurrencia puede ser descartada.

¿Qué hacer ante esta situación? Votar por un candidato presidencial de la izquierda puede reconfortar a nuestras atribuladas conciencias. Pero es un acto testimonial, carente de eficacia política y que nos autocondena a la inoperancia. Nos “lavamos las manos” y la noche del 14 de mayo dormiremos tranquilos habiendo ratificado nuestra fe inquebrantable en el socialismo. Claro está que esto implica confundir peligrosamente política y religión, con lo que el socialismo se convierte en un dogma del cual damos cuenta en la intimidad de nuestras conciencias y no en la praxis histórica. Este escapismo es incompatible tanto con la necesidad de proceder al clásico “análisis concreto de la situación concreta” como con la exigencia de utilizar a la teoría como “guía para la acción” y no como un conjunto de reseca abstracciones que nos liberan de nuestra responsabilidad ante la coyuntura actual. Este sector, además, parecería olvidar dos cosas: primero, que podremos votar por la izquierda para senadores, diputados y concejales. Segundo, que con el actual

sistema de partidos y dado nuestro régimen electoral, el voto principista en la elección presidencial significa votar por Menem.

Ante esta encrucijada algunos arguyen, coincidiendo con un personero de la reacción clerical-feudal como Cosme Beccar Varela, por ejemplo, la conveniencia de votar en blanco, pero esto echa agua al molino de los golpistas y remata en el absurdo de suponer que la restauración del totalitarismo militar puede ser beneficiosa para el país y los sectores progresistas. La teoría del “cuanto peor, mejor” está suficientemente refutada por la historia como para acudir a ella en esta coyuntura. Otros, chantajeados políticamente por el populismo, piensan que hay que votar a Menem porque “el pueblo está allí”. Las encuestas demuestran que esto no es tan claro y, además, aquel razonamiento transforma al “pueblo” en una entidad metafísica dotada con el don de la infalibilidad. Este seguidismo claudicante ha ocasionado demasiados perjuicios al pueblo y a la izquierda como para persistir en ese error. Si el pueblo, en su desesperación, es hábilmente manipulado para respaldar con su voto un proyecto burgués populista no veo razones para que la izquierda deba apoyarlo.

Es preciso reconocer que, en la Argentina, la izquierda solo tendrá futuro si se consolida la democracia. Entre socialismo y democracia existe una dialéctica de mutua complementariedad: sin la segunda el socialismo no puede crecer, acumular fuerzas y convertirse en un polo de agregación masiva de voluntades transformadoras. Pero la burguesía no resiste su propia legalidad y periódicamente arroja por la borda al régimen democrático. Por otra parte, sin una vigorosa presencia de la izquierda esta democracia argentina no se consolida. Ahora bien, ¿cuál de los dos proyectos de recomposición capitalista, el de Menem o el de Angeloz, ofrece mejores posibilidades para la estabilización de la democracia política y la paciente maduración de una propuesta socialista? Lamentablemente, la historia, que a veces avanza por el lado malo, nos obliga a elegir entre dos alternativas de derecha: un capitalismo corporativo, clerical, militarista pero capaz de suscitar un gran apoyo popular al cabalgar sobre la inercia histórica de un gran movimiento de masas como el peronismo u otro

liberal-individualista, igualmente antipopular desde el punto de vista de su proyecto económico y social, pero respaldado por un partido que, a pesar de sus graves desaciertos, encarceló a los comandantes del proceso y respetó las libertades públicas y el pluralismo político. En realidad, la historia nos impide elegir: simplemente tendremos que optar por lo menos malo.

(5 de abril de 1989).

Del frigorífico a la Sociedad Rural

Pocas cosas hay más reales en la política que las imágenes. Estas quedan impresas en las retinas de los hombres y logran momentáneamente detener, en sus conciencias, el vertiginoso movimiento de la historia. Con el correr del tiempo la imagen, nítida en sus comienzos, deviene una mera ilusión que se desvanece, o de súbito se hace añicos, cuando alguna nueva experiencia devela el verdadero carácter de las cosas. Entonces, nuevas imágenes ocupan el lugar de las que fueron refutadas por la historia y los hombres recuperan, por un tiempo, su visión de lo real.

Esto parecería estar ocurriendo actualmente con el peronismo. Surgido de la bronca que enardeció a los obreros del frigorífico, la chispa encendida en Berisso incendió la reseca pradera del Estado oligárquico. La Revolución Nacional de 1943 había hecho muy poco por aliviar la suerte de las clases populares, y el coronel Perón se hallaba cada vez más cercado por sus camaradas de armas y por la vieja oligarquía. El espontáneo y sorprendente protagonismo de la clase obrera liquidó en pocas horas a una revolución cuya minúscula dimensión contrastaba llamativamente con la presuntuosidad de su nombre. El 17 de octubre de 1945 abrió una nueva época histórica en la Argentina y el peronismo se convirtió en la expresión “natural” de la rebeldía popular: por eso la historia de los obreros en la calle liberando al coronel y conformando el más formidable movimiento

de masas de la historia argentina constituye su imagen fundante. Como sabemos, la dialéctica de la historia se encargaría, a medida que corrieran los años, de demostrar las sucesivas pequeñas y grandes claudicaciones del peronismo que lo llevarían a sus dos tristes finales de 1955 y 1976 y a la traumática derrota de 1983.

Que Carlos Saúl Menem haya elegido a la sede de la Sociedad Rural Argentina como el ámbito propicio para decirnos como saldremos de la crisis en la que se debate el capitalismo argentino es un gesto que entierra para siempre las viejas ilusiones forjadas al calor de las jornadas del 45. Para los sobrevivientes de entonces y para los muchos que, hasta ayer, conservaban ciertas esperanzas en el contenido popular del peronismo, en su compromiso con los pobres y con la justicia social, la peregrinación del gobernador riojano al hogar de la oligarquía no puede sino representar una imagen emblemática —y deprimente— del “peronismo realmente existente”. Una imagen, por cierto, totalmente incompatible con aquella del peronismo “clásico”, de los obreros de la carne luchando contra los dueños de las vacas; del que sancionara el Estatuto del Peón; del que invitaba a cortar las alambradas y saltar las tranqueras para votar en 1946; del que creía que en la Sociedad Rural se nucleaba el privilegio y el odio clasista de una oligarquía corrupta y decadente. ¿No fue acaso la oligarquía la gran enemiga del gobierno peronista?

¿Qué queda de esto? Como dice el poeta, “polvo de aquellos lodos”. Nada: símbolos mudos, retóricas embalsamadas, gestos vacíos. Altisonantes palabras que se pulverizan ante la violencia ultrajante de estas imágenes. ¿Será la Sociedad Rural Argentina el equivalente histórico de la Plaza de Mayo del 45? No lo creo. Pienso, eso sí, que la travesía de Berisso a Palermo certifica la derrota de un movimiento social, el peronismo, que durante décadas confió en unas estructuras sindicales y partidarias, el “aparato”, para hacer realidad sus sueños de justicia. Hoy solo un ciego puede dejar de percibir el divorcio entre el aparato y el pueblo; y que solo la desesperación y la comprensible necesidad de creer en algo hacen que nuestras clases y capas populares todavía se aferren, incrédula y resignadamente, al proyecto

justicialista. ¿Quién no sabe que el programa de gobierno de su candidato los condenará a seguir en este cruel e interminable tobogán económico que día a día los ofende, humilla y empobrece? ¿Quién no sabe que, en este país, los buenos negocios para los terratenientes significan encarecimiento del costo de vida de los sectores populares, por la sencilla razón que exportarnos lo mismo que comemos?

Al igual que sus competidores, el candidato peronista también se preocupó por elegir cuidadosamente a sus interlocutores en la sociedad civil. Como ellos, hizo buena parte de su campaña en las playas, de aquí y del Uruguay. Por eso se les habla en el Plaza Hotel o en la Sociedad Rural, porque allí se reúnen los capitanes de la industria, la patria financiera y los magnates del campo y la ciudad, es decir, la minoría que dispone de la riqueza de este país. Curioso consenso: en lugar de apoyarse en la soberanía popular los candidatos se han juramentado para reducir a los ciudadanos al papel de un melancólico coro, cuya única misión será la de determinar quién habrá de goberarnos en nombre del capital. No sé quién ganará estas elecciones; lo que sé, con total certeza, es quiénes son los perdedores. La visita a la Sociedad Rural confirma que, una vez más, el pueblo pagará con su miseria el enriquecimiento desenfrenado de unos pocos.

(7 de abril de 1989).

El retorno del “ser nacional”

Eduardo Angeloz propuso convocar a un plebiscito para decidir sobre el tema sindical. Ante esto el candidato peronista afirmó, en Gualeguaychú, que la destrucción del movimiento obrero resultante del pluralismo sindical rompería las “vallas de contención de todo aquello que significa el ser nacional y que hace a nuestro sentir y forma de pensar” (*La Nación*, 7 de abril de 1989, p. 15).

Conviene detenerse en esta respuesta porque la iniciativa del candidato radical podría haber sido cuestionada desde diversos ángulos. Lo preocupante es que, para refutarla, se haya recurrido al peor argumento posible: aquel que invoca la defensa del “ser nacional”, una concepción de la sociedad y la política sistemáticamente promovida por los gobiernos autoritarios que subyugaron a la Argentina a partir de 1930. Basta recordar la trascendencia que esa frase adquirió durante los años del Proceso para darnos cuenta de que ese lenguaje, esas ideas y la política que ellas inspiran son antagónicas a la democracia y a los intereses populares. No por azar el “ser nacional” ha sido recurrentemente esgrimido por militares reaccionarios, clérigos ultramontanos, populistas contumaces e izquierdistas confundidos o impacientes. Su reaparición es un triste presagio de lo que nos espera el día en que aquellos que se erigen como genuinos intérpretes del “ser nacional” asuman el control de nuestra vida pública. ¿Por qué?

El culto al “ser nacional” es un típico producto del pensamiento contrarrevolucionario europeo del siglo XIX, surgido para “defender” a las naciones que se sentían agredidas por el mensaje liberador de la Revolución francesa. El fascismo lo hizo suyo y lo exaltó después de la primera guerra mundial, atrayendo a los que maldecían a la herencia de la Ilustración y la modernidad. Entre nosotros ha sido permanente bandera del nacionalismo católico y, desgraciadamente, de amplios sectores del peronismo. Por su historia y su endeblez ideológica la concepción del “ser nacional” se define reactivamente: repudia a la democracia, al liberalismo, al socialismo, al comunismo y, en fin, a todas las “ideologías foráneas” que, arteramente, inoculan el veneno de la discordia en este país. En nuestro tiempo el “ser nacional” es la consigna por la que se reconocen los reaccionarios de todo el mundo: a su conjuro se dan la mano, siniestramente, los neonazis franceses de Le Pen con sus congéneres alemanes e ingleses, unidos por su racismo y su xenofobia.

La ideología del “ser nacional” suprime de raíz todas las contradicciones. En su lugar recrea míticamente una armoniosa comunidad nacional, recelosa de lo que ocurre afuera y obstinada en desconocer la diversidad de identidades, situaciones e intereses que caracterizan a la sociedad “realmente existente”. Imagina de este modo una sociedad sin conflictos de clase, en donde las injusticias, que son evidentes, son obra de “malos argentinos” o de un “mal patrón”, perversamente influidos por alguna “ideología foránea” que los ha extraviado. La naturaleza reaccionaria de esta construcción se ratifica plenamente en su lenguaje: las clases sociales se esfuman y su lugar lo asume la categoría amorfa de “pueblo”; en vez de capitalismo, se habla de economía; los partidos y otras formas de expresión de las contradicciones sociales se refunden en un único “movimiento nacional”.

La doctrina del “ser nacional” postula que la originalidad de la Argentina es tan grande que habría dado a luz a formas de pensar inéditas en los anales de la cultura universal. Esta ridícula pretensión fue reafirmada en innumerables ocasiones desde el peronismo,

al ensalzar a la “tercera posición” como un producto del genio nacional. Un análisis más sobrio demuestra que, en realidad, el justicialismo es una traducción casi literal de la doctrina social de la Iglesia. Es imposible desconocer este hecho, que, en parte, explica la estrecha alianza que la Iglesia argentina ha tenido desde siempre con el peronismo, considerado por la jerarquía como una eficaz barrera para impedir la conformación de una conciencia revolucionaria en nuestra clase obrera.

Dado que los discursos y las palabras se relacionan con —y a veces anticipan a— los hechos y las cosas, el retorno del “ser nacional” nos debiera servir como temprana advertencia. La concepción fundamentalista y mesiánica de la política típica de esta ideología afirma que la nación solo puede encarnarse en un movimiento; los partidos, por el contrario, son despreciados porque la dividen “artificialmente”. Por eso los celosos custodios de la nacionalidad se asumen como la superación de todos los faccionalismos. Al concebirse de esta manera, reclaman también el monopolio de la representación del conjunto: nuestras corporaciones —las Fuerzas Armadas, la Iglesia, el sindicalismo burocrático— han incurrido crónicamente en estos desatinos. El peronismo ha hecho lo propio y hasta el alfonismo, en un insólito delirio, coqueteó con la idea del “tercer movimiento histórico”. El problema con esta resignificación sacralizante de la nación es que culmina satanizando a los que disienten, que invariablemente son acusados de traidores o apóstatas. En estos casos, el pluralismo y la tolerancia se convierten en reprochables actitudes de connivencia con la traición o la apostasía. Es por eso que el General Menéndez pudo decir que él no le hizo daño a nadie, salvo a los comunistas.

Es importante que la izquierda tenga en claro lo que significa el resurgir de estas concepciones: la demonización de los disidentes remata en un “decreto de aniquilación” de aquel a quien el poder establecido execra como “enemigo de la patria”. Ya ha ocurrido una vez en este país y nada nos asegura que los mismos hombres no volverán a cometer las mismas barbaridades en un futuro próximo. Para la

doctrina del “ser nacional” los opositores no son simples adversarios sino emisarios del mal, con quienes cualquier contemplación equivale a traicionar los “supremos intereses de la nación”. No basta con haber vivido la experiencia; es preciso haberla asimilado para no facilitar su repetición. La gran pregunta es: ¿habremos aprendido la lección?

(8 de mayo de 1989).

¿Qué hacer?

A nadie se le escapa que las elecciones del próximo domingo tienen un significado muy especial. No son un simple y rutinario recambio presidencial, de esos que tienen lugar, metódicamente, en las democracias capitalistas, sino un acontecimiento extraordinario en la vida política argentina. Y esto por dos razones: por una parte, porque en este país, en donde la inestabilidad política y la violación a la constitución republicana han sido males crónicos, estamos a punto de culminar un período presidencial y asistir a la transmisión del mando de conformidad con lo estipulado por nuestras leyes. Segundo, porque esta situación se produce en medio de una gravísima crisis económica que ha desnudado la debilidad del Estado y la precariedad de nuestro orden democrático, mortalmente amenazados por la burguesía y sus aliados corporativos.

En estos años de democracia la izquierda ha podido actuar en un marco de inéditas libertades: pudo organizarse, debatir, difundir sus propuestas y hacer política sin temores, todo lo cual ha acrecentado su gravitación en el seno de la sociedad. El multitudinario acto de cierre de campaña de Izquierda Unida en el estadio de Huracán ratificó con elocuencia lo que se venía observando desde que se realizaron las “internas” más democráticas de nuestra historia. Los votos del próximo domingo, sobre todo los de diputados y senadores, seguramente confirmarán esa tendencia. La izquierda argentina parecería,

por fin, haber comenzado una larga marcha con el propósito de convertirse en una alternativa electoral válida y atractiva para las grandes mayorías nacionales. Sin embargo, para desilusión de algunos, este trayecto no es un ascenso rectilíneo que conduce sin sobresaltos ni contratiempos desde la secta ensimismada en virginales purezas doctrinarias al gran partido de masas que el país necesita. Tiene, por el contrario, sus vaivenes, avances y retrocesos. La construcción de una alternativa socialista en un país con una historia como la nuestra y con la desconfianza hacia todo lo que “huela” a socialismo que el peronismo inoculara tan profundamente en el seno de nuestras clases populares no es tarea apta para impacientes. Como ha ocurrido en otras circunstancias, algunas veces habrá que dar un paso atrás si es que después se quiere dar dos hacia adelante. La política es irreductible a la geometría, por eso la línea recta no necesariamente es el camino más corto entre dos puntos. Muchas veces el sendero más largo suele ser el más breve.

Esto nos conduce a la cuestión central que necesariamente tienen que enfrentar los numerosos votantes que quieren apuntalar con su esfuerzo el crecimiento de un polo de izquierda. Desde el punto de vista económico está suficientemente probado que las propuestas de los dos candidatos mayoritarios son la misma cosa: ambos han plagiado al capitán ingeniero, que ahora se ufana del éxito de sus ideas, pero que, por una de esas ironías de la historia, tiene que paladear el sabor amargo de no ser precisamente él quien las lleve a la práctica. A muchos les puede parecer una exageración, pero la comparencia de Angeloz y Menem en el Plaza Hotel y en la Sociedad Rural a decir lo que dijeron es de una elocuencia tal que solo una mente embotada por el fanatismo puede dejar de advertirlo. Ahora el capital pasó a la ofensiva y, dado que las capacidades mediadoras y reguladoras del Estado se encuentran completamente desmanteladas, no es aventurado predecir que los años que vienen habrán de ser durísimos. El “ajuste” capitalista irá acompañado por una lamentable involución política, ya claramente discernible, como el huevo de la serpiente, en los discursos de los candidatos. Marchamos hacia

una “democradura” en donde aparte de la violencia sistémica, difusa pero lacerante, de la pobreza extrema, el hambre, la ignorancia, la marginación, la enfermedad, los argentinos y las fuerzas reformistas tendrán que enfrentarse a la violencia represiva, directa y puntual, en contra de quienes salgan a protestar por las nuevas exacciones impuestas por las clases dominantes.

Ante esta situación, la cuestión de la preservación de un marco democrático-constitucional mínimo es de vital importancia para la sociedad en su conjunto y más particularmente para la izquierda. Solo así podrán las clases y capas subalternas defenderse de la opresión a la que serán sometidas. Hay un gran desafío por delante y la crisis económica es de tal magnitud que las medias tintas del peronismo o el radicalismo no harán sino agravarla. La salida a esta larga crisis del capitalismo es por la izquierda, pero esto requiere preservar el clima político de la democracia forjando alianzas con otras fuerzas políticas para impedir el resurgimiento del terrorismo de Estado, las patotas y los escuadrones parapoliciales. Si se fracasa en este empeño los proyectos de reforma y cambio social serían brutalmente abortados. Pero, a decir verdad, no solo fracasaría la izquierda: sería la nación argentina la que habría gravemente lesionado su viabilidad histórica como Estado nacional independiente.

Como se verá, estamos transitando por un territorio erizado de peligros: una burguesía de una voracidad sin límites, solo comparable a su inaudita estrechez de miras y dispuesta a sacrificar todo en el altar de la ganancia; una corporación militar que todavía no ha asumido con madurez su enorme cuota de responsabilidad en la gestación de la crisis nacional; una Iglesia que alberga y protege a energúmenos autoritarios y cuyo compromiso con la democracia parece apenas una concesión oportunista; un movimiento sindical bastardeado por una dirigencia que, por cálculos electoralistas, ha condenado a la indefensión a la clase obrera en el momento en que es víctima de un despojo salarial que no tiene precedentes en nuestra historia.

En estas condiciones, la elección presidencial nos coloca ante un incómodo dilema: ¿Menem o Angeloz? Allí la izquierda no puede equivocarse. Tiene que reconocer que si no ha crecido más en su inserción social no ha sido porque bandas parapoliciales organizadas y financiadas por altos funcionarios gubernamentales, como la Triple A, por ejemplo, se lo impidieran. Todos sabemos que la causa de la justicia no tiene demasiado peso en las propuestas de los dos candidatos mayoritarios; la diferencia está en que, en un caso, las probabilidades de resurrección de los viejos fantasmas del pasado son muy grandes, y que, en este momento, ni el país ni las fuerzas progresistas están en condiciones de soportarlos. Dada la gravedad del ajuste regresivo que habrá de implantarse la única protección de que disponen las clases subordinadas es su capacidad de autodefensa posibilitada por la vigencia de un mínimo marco legal que impida la privatización de la violencia. Tal vez esta elección nos obligue a dar un paso atrás, pero, a veces, si adelante hay un abismo, lo más sabio es retroceder. Intentar un avance suele ser, en muchos casos, una forma altruista, pero fatalmente equivocada, de suicidarse.

(8 de mayo de 1989).

Las claves de una derrota

El resultado electoral del domingo ratificó y acentuó la tendencia insinuada en las elecciones de 1987: la desintegración de la coalición alfonsinista que, en 1983, había proyectado a su líder a la presidencia de la república. El radicalismo ve esfumarse, de esta manera, una oportunidad histórica. Podría haber sido, si actuaba con firmeza, inteligencia y humildad, el gran partido hegemónico y policlasista que requería la prolongada —y aún inconclusa— transición democrática de la Argentina; para su desgracia, y la del país, estas expectativas se frustraron.

En 1987 la sociedad envió un clarísimo mensaje que los gobernantes se obstinaron en desoír.²² La UCR, que hacía tiempo había abdicado de sus responsabilidades dirigentes cautivada por el carisma de Alfonsín, no tuvo la fuerza ni la convicción necesarias como para rectificar el rumbo de una nave que marchaba atolondradamente hacia su propio naufragio. Para esto era esencial cambiar la orientación de una política económica que estaba agrediendo ferozmente a los sectores populares y a la propia base social del radicalismo. En lugar de ello, el presidente decidió seguir con la misma medicina, el partido convalidó con su apatía y desmovilización la errónea decisión gubernamental y ambos terminaron apabullados por la victoria

²² Se trata de la derrota electoral del radicalismo en las elecciones legislativas y de gobernadores de ese año.

de Menem. Porque por más que intentara “despegarse” del gobierno Angeloz era el candidato oficial, y compartiría con el gobierno las mieles de sus éxitos y el vinagre de sus fracasos. ¿Cómo podría triunfar el candidato de un gobierno que ha producido, en solo dos meses, la más catastrófica caída del salario real y el nivel de vida de las clases y capas populares jamás registrada bajo un régimen democrático desde 1916? Era imposible, y las cifras de los comicios se encargaron de demostrarlo con una contundencia ejemplar.

La filosofía política dice que hay dos criterios fundamentales para evaluar la acción de un gobierno: la libertad y la justicia que aquel garantiza a sus ciudadanos. El gobierno de Alfonsín ha hecho muchísimo por asegurar el goce irrestricto de la libertad y eso, a pesar de algunos tropiezos, es un logro importantísimo que todo el país le reconoce; la gran paradoja es que también se ha profundizado la injusticia que a todos nos agravia. Nuestra sociedad es hoy mucho más libre que en 1983, pero también más injusta y desigual, y esto repugna a la conciencia social de los argentinos tanto como a la propia tradición política del radicalismo. Las claves de la derrota se encuentran en este profundo desequilibrio entre libertad y equidad, en la contradicción de un gobierno que, al desconfiar del protagonismo popular, fue condenado a la pusilanimidad frente a los poderosos. Como producto de esta opción el gobierno se transformó, en la práctica, en un rehén de las clases dominantes. Hambreado y desesperado por la política económica, el pueblo votó en contra de la injusticia y por la esperanza. La inteligencia política del candidato justicialista consistió en haber sabido advertir, mejor que nadie, esta sorda demanda popular. Por eso pudo triunfar.

El partido radical volverá al llano. Es evidente que muchas cosas tendrán que discutirse y aclararse, pero sin una profunda autocrítica le será difícil reubicarse correctamente en la escena política. Ser la oposición del peronismo no será tarea fácil, pues tendrá que caminar por el estrecho sendero que apenas se abre entre un gorilismo estéril —y que la sociedad rechaza terminantemente— y un complaciente seguidismo parlamentario. Más importante aún: deberá

definir, de una vez por todas, su genuina vocación política: ¿será un partido reformista de centro izquierda, como lo quiere el discurso de Alfonsín, o se convertirá en un agrupamiento de la derecha neoliberal, como lo vaticinarían las alianzas establecidas con fuerzas de esa orientación y la adopción de sus postulados doctrinarios en la reciente campaña electoral? El debate sobre estos y muchos otros temas tendrá que ser profundo si quiere ser efectivo; además, hay muchas cuentas pendientes y dirimir la interna no será nada fácil. Angeloz ha demostrado una gran capacidad para enfrentarse a Menem en condiciones sumamente desfavorables. Su votación fue notable si se tiene en cuenta el desquicio económico en que estamos sumidos. Esto significa que, aún luego de la derrota, se proyecta como un referente nacional del radicalismo que seguramente habrá de disputar palmo a palmo la alicaída hegemonía del alfonsinismo dentro de la UCR. En efecto, este ha sido gravemente averiado en tres distritos cruciales para su predominio: la Capital Federal, Buenos Aires y Santa Fe, todo lo cual resta espacio de negociación a Alfonsín después del 10 de diciembre. Además, ante la sensible disminución de la derecha (la UCD de Álvaro Alsogaray obtuvo apenas el 7 % de los votos), es evidente que la figura de Angeloz sobresale como la de un líder político que, en medio de la crisis económica, fue capaz de construir un sólido piso electoral del 37 %. Dado el bipolarismo de la política argentina esto es un importante capital electoral, pues en futuras lides puede atraer hacia un radicalismo angelocista a los votantes de centro-derecha desilusionados con la irreconciliable enemistad entre todo lo que se apellide Alsogaray y la sociedad civil. Como Hamlet, la UCR debe resolver rápidamente los enigmas de su propia identidad política: ¿tras las huellas del yrigoyenismo reconstruirse como un partido “nacional-popular” y reformista o degradarse a la deslucida condición de ser la alternativa “prolija” del neoliberalismo? Pronto lo sabremos.

(16 de mayo de 1989).

Réquiem para el populismo

Al calor de los discursos y la “escenografía” de la campaña electoral muchos se ilusionaron pensando que con el triunfo del peronismo se produciría el regreso, en gloria y majestad, del populismo al poder. Los viejos laureles de los años cuarenta reverdecieron súbitamente: la integración de las masas al mercado, al Estado y a la sociedad promovida por un gobierno sensible a los reclamos del pueblo iría a poner fin a la humillante marginalización sufrida durante estos últimos años. Una agresiva política de redistribución de ingresos, popularizada con la consigna del “salariazó”, repartiría la riqueza en partes iguales: cincuenta por ciento para los trabajadores y otro tanto para el capital. Finalmente, después de muchos padecimientos, la Argentina “sumergida” se aprestaba a reencontrarse con lo mejor de su propia historia.

La integración del gabinete ministerial del presidente electo y el conjunto de designaciones que han sido dadas a conocer en los últimos días representan un descortés certificado de defunción para aquellas expectativas. Los hombres y las ideas que se instalarán, en muy poco tiempo más, en las alturas del Estado simbolizan el comienzo de algo nuevo, completamente distinto, y que nada tiene que ver con los anhelos de justicia social de vastos sectores de nuestra sociedad. Las designaciones “revelaron el secreto” de la revolución productiva: desde hoy gobernará el capital. Quienes celebraban gozosos

la resurrección de Miranda se encontraron con un frío y adusto ejecutivo de Bunge y Born; los que esperaban un nuevo Plan Quinquenal no salen de su asombro al enterarse de lo que les tiene reservado el Plan Cero; quienes suspiraban por una política de soberanía nacional tropiezan con el estatizador de la deuda externa privada al frente de la Cancillería. ¿Qué es esto?, se preguntan entre azorados y desconcertados.

Esto es nada menos que la refundación de la hegemonía burguesa, la cristalización de un nuevo y vigoroso pacto de dominación clasista. Por primera vez en muchas décadas existe una correspondencia tan perfecta entre poder económico y poder político, entre clase dominante y clase política, entre los que mandan en la economía y los que desde el Estado tienen la misión de gobernar en nombre de los intereses de toda la sociedad. Hasta esa fecha, en la Argentina oligárquica gobernaban los patrones; con el advenimiento del radicalismo en 1916 el régimen entró en crisis, pero supo recuperarse y sobrellevar el chubasco. Marcelo Torcuato de Alvear puso la “casa en orden”, pero la inesperada reelección de don Hipólito, plebiscitado en 1928 por una mayoría abrumadora del 57,4 % de los votos, profundizó la fisura que separaba el poder económico del político. Dos años después la derecha ponía fin a su gobierno e iniciaba el ciclo del pretorianismo militar, cuyas consecuencias sufrimos todavía hoy, casi sesenta años después. Restaurada la “normalidad” de las cosas, en los años de la “década infame” volvemos a asistir al gobierno directo de la oligarquía, pero sobre las precarias bases del fraude y la represión. El golpe de 1943 y el advenimiento del peronismo al poder habrían de liquidar definitivamente la hegemonía de la vieja clase dominante. Todos los gobiernos que surgieron desde entonces, aun los más furibundamente patronales y represivos, gozaron de un cierto margen de independencia frente a los dueños de la riqueza. Por eso siempre existían, en el conjunto de las clases dominantes, voces críticas que se quejaban de la “insensibilidad” gubernativa ante sus patrióticos reclamos.

Hoy esta situación se ha revertido significativamente: las clases dominantes se han reunificado tras un proyecto capitalista que cuenta con el abrumador apoyo de todas sus fracciones. Estas se esmeraron por limar las contradicciones secundarias que en el pasado las habían condenado a la esterilidad de los vetos recíprocos y el inmovilismo, obligándolas a delegar su dominio político en actores poco confiables: las Fuerzas Armadas o los partidos políticos. Habría que remontarse a la época de oro del Estado oligárquico para encontrar otro presidente que, como Menem, hubiera llegado al poder con la confianza del conjunto de la clase burguesa, aunque sin la legitimidad que ahora le ha conferido a dicho proyecto el voto popular.

Por primera vez, en casi medio siglo, las clases dominantes vuelven a ocupar, sin mediaciones de ningún tipo, los resortes fundamentales del Estado: sus hombres se trasladaron de los directorios de sus empresas a los salones ministeriales, sin pasar por los partidos e indiferentes ante el sentir popular. Llegan, además, con sus propias ideas y un impresionante apoyo financiero para viabilizar un programa concreto de gobierno. Claro está que este no es el del partido triunfante, sino el de un puñado de oligopolios que, con la complicidad del actual gobierno y nuestra clase política, se han adueñado por completo del país. La astucia de la razón, que siempre es dialéctica, quiso que la nueva hegemonía burguesa accediera al dominio político sobre los hombros del mayor movimiento popular de la historia argentina: el peronismo. Esto profundizará las contradicciones que han caracterizado a la coalición menemista, pero ya sabemos quiénes serán los “ganadores” de esta interna. La brecha abierta por la irrupción del yrigoyenismo en 1916 queda ahora cerrada; el vacío hegemónico dejado por la oligarquía, y sobre cuyos escombros se edificó ese prolongado paréntesis en donde coexistieron populismos frustrados, autoritarismos militares y democracias débiles ha sido llenado por una nueva hegemonía burguesa. La clase dominante ha reasumido el control directo de nuestra vida política y se prepara para organizar los solemnes funerales del populismo. El sueño de la

reconstrucción armónica y justa de la “comunidad organizada” se ha transformado en un sueño eterno. Que en paz descanse.

(13 de junio de 1989).

VI. Universidad

El legado igualitario de la reforma

En momentos en que arrecia la sutil campaña desatada en contra de la universidad pública resulta oportuno conmemorar este nuevo aniversario de la reforma universitaria con algunas reflexiones en torno al significado del movimiento de 1918. La rebelión de los jóvenes cordobeses fue la chispa que incendió las resacas estepas de la dominación oligárquica en la Argentina; su proyección latinoamericana se hizo sentir por todo el continente, desde Chile hasta México. Su lucha contra el escolasticismo y el oscurantismo prevaletentes en la educación superior y su apasionada defensa del laicismo, la excelencia académica y la democracia universitaria convirtieron a la reforma en una de las banderas más atractivas para quienes pugnaban por la democratización de las estructuras tradicionales del capitalismo oligárquico. Las consecuencias sociales de este movimiento fueron inmensas: no sería exagerado afirmar que, junto con el sufragio universal y el vigoroso surgimiento del movimiento obrero, la reforma contribuyó decisivamente al socavamiento del antiguo régimen. La supremacía oligárquica era incompatible con la democratización de la política y el saber; su dominio se fundaba en la exclusión de las grandes mayorías nacionales, en los privilegios exclusivistas de una clase y en la amenaza —muchas veces efectivizada— del empleo de la fuerza. La rebelión de los jóvenes universitarios demostró que detrás de su imponente fachada la sociedad gestada por la Generación

del Ochenta adolecía de vicios irreparables. La gran depresión de 1929 la hirió mortalmente y, en su desesperación, la respuesta del patriciado convertido en una plutocracia decadente fue terminante: liquidó al experimento democrático, desmanteló al movimiento obrero y devolvió las universidades a los sectores reaccionarios que la habían postergado. La herencia de esta crisis terminal de la oligarquía argentina fue medio siglo de golpismo militar. Su decadencia como clase la transfirió a la nación, y en lugar de optar por un buen morir la oligarquía arrastró al país a la degradación.

La reforma hizo posible, entre otras cosas, que la universidad se abriera a los nuevos grupos sociales que iban germinando en la vieja sociedad. La gratuidad de la enseñanza desde la escuela primaria fue un instrumento de capital importancia en la conformación de la Argentina moderna. Este país, de lejos el más igualitario de América Latina, es en gran medida fruto del espíritu reformista. Al garantizar el acceso a la universidad a quienes tenían el talento necesario, los rebeldes del 18 sentaron las bases para una sociedad más abierta y fluida, neutralizando la selectividad clasista que había postrado nuestra educación superior. Con el advenimiento y consolidación de la reforma la Argentina se encuentra con una universidad más amplia, abierta y democrática; también con una sociedad más justa, en donde las discriminaciones plutocráticas fueron —al menos en el terreno educacional— reemplazadas por los méritos intelectuales.

En tiempos de crisis la desesperación suele apoderarse de los cuadros dirigentes y, en su premura por hallar soluciones mágicas, muchas veces tiran por la borda prácticas sociales que son el resultado de una prolongada y sabia decantación histórica. La gratuidad de la educación no solo hizo posible una sociedad más abierta; también permitió, en otras épocas, que la investigación científica de más alto nivel se realizara en los institutos y laboratorios de la universidad y que sus académicos adquirieran renombre internacional por la seriedad de sus trabajos. Agobiados por la pertinaz propaganda ideológica privatizadora hay quienes hoy piensan que con el arancelamiento la universidad podrá resolver su crítica situación financiera.

Esta perniciosa ilusión se derrumba como un castillo de arena ni bien se repara que las universidades privadas norteamericanas difícilmente logran financiar un tercio de su presupuesto con los ingresos provenientes de las matrículas; en las grandes instituciones estatales —California, Texas, Michigan, North Carolina— la contribución derivada de los aranceles es todavía más pequeña. En suma: la educación superior requiere, inclusive en los países más privatistas del mundo, un grueso aporte del dinero público. En el mundo moderno, habida cuenta de los imperativos que plantea la investigación científica, no hay universidad que resista al margen del apoyo financiero del Estado.

Pero sin ir tan lejos, en la Argentina del Proceso también existió el arancelamiento, y nadie que esté en su sano juicio podrá decir que esa universidad —opulenta, por comparación a la actual— era mejor que esta que hoy tenemos. Por otra parte, en nuestro país las universidades privadas han venido funcionando desde hace más de treinta años y hasta ahora no parece existir una correlación entre sus elevados aranceles (para el medio local, naturalmente) y su productividad académica. En otras palabras, el legado político igualitario, tolerante y pluralista de la reforma conserva hoy toda su frescura. Cuando por doquier los procesos de reajuste y recomposición capitalista están produciendo sociedades más desiguales, injustas y cerradas, las banderas del 18 nos recuerdan que la universidad bien podría convertirse en el último reducto de la igualdad social. La educación es el bien máspreciado que tiene una comunidad, y su suerte no puede dejarse librada a un mezquino cálculo financiero. Convalidar una política que conduce a la destrucción de la universidad pública —y que transforma a la educación en una mercancía que se transa libremente en el mercado— no solo significa repudiar el luminoso legado de la reforma; también implica legitimar nuestra irreversible postración nacional.

(15 de junio de 1990).

El trueno en los claustros

La reforma universitaria marcó uno de los hitos culminantes en el proceso de descomposición de la vieja sociedad oligárquica. Fue, junto con la Revolución mexicana, como un trueno formidable que retumbó por toda la vasta geografía de una América Latina agobiada por la prolongada agonía del viejo orden. Bajo su influjo nuevas utopías y renovadas fuerzas políticas habrían de surgir por doquier: después de aquellos sucesos nuestro continente ya no podría seguir siendo el mismo, porque había adquirido una dolorosa conciencia de su identidad. Recién entonces los latinoamericanos pudimos escuchar la voz luminosa de Simón Bolívar y entender la profunda sabiduría de sus palabras.

En la Argentina, el expansivo capitalismo agrario resultante del proyecto de la Generación del 80 había generado un conjunto de pujantes sectores medios carentes de representación política y a los cuales el acceso a la educación superior les estaba severamente restringido. El sufragio universal y la reforma universitaria, unidas al impetuoso avance del movimiento obrero y la desorganización de la economía internacional producida durante la Primera Guerra Mundial, minaron irremediabilmente la viabilidad del modelo económico sobre el cual se asentaba la sociedad oligárquica. A partir de esta constatación, sus viejas clases dominantes, derrotadas inapelablemente en la política y en la sociedad, habrían vanamente de ensayar

diversas fórmulas de gobierno que las perpetuasen en el poder. Su triste itinerario —del “fraude patriótico” de los años 30 a los horrores del Proceso— jalona el sendero de nuestra decadencia como nación.

La reforma barrió con las arcaicas estructuras de poder que pre-
valecían en la universidad —un mediocre “mandarinato” oligárqui-
co que ejercía poderes despóticos— y permitió la gradual pero sos-
tenida apertura de la institución hacia las clases medias en ascenso.
La democratización de las viejas casas de estudios —importante, a
pesar de que seguían excluyendo a los hijos talentosos de las clases
y capas populares— coincidió con un vigoroso proceso de restructu-
ración y perfeccionamiento de los programas docentes que redundó,
a los pocos años, en un significativo mejoramiento de la excelencia
académica de nuestras universidades. Contrariamente a lo que sos-
tiene un lugar común muy frecuentado en estos últimos tiempos, la
democratización de la enseñanza hizo posible el acceso a altos ni-
veles de excelencia. Fue la universidad reformista argentina, al fin
de cuentas, la que nos honró con los únicos tres Premios Nobel de
ciencia con que —todavía hoy— cuenta América latina.

La relación entre universidad y sociedad es hoy bien diferente.
El ajuste “neoconservador” conduce al estancamiento global de la
economía y no al crecimiento: el empleo se precariza, los sectores
medios de pauperizan, los obreros se convierten en “trabajadores in-
formales” y los pobres se transforman en indigentes. Es evidente que
se trata de un modelo económico mucho más excluyente que el que
conociéramos entre 1880 y 1914. Antes atraíamos a millones de inmi-
grantes de todo el mundo; hoy somos un país que expulsa población.
Antes asistíamos al rápido crecimiento de las capas medias; ahora
atestiguamos su prolija eutanasia. Antes se expandía el empleo, aho-
ra cunde la desocupación bajo miles de formas y disfraces.

Antes había una difusa esperanza; ahora una sorda, pero intole-
rable frustración.

En este marco aparece otra importante diferencia: el capitalis-
mo oligárquico era compatible con una universidad esterilizada
por el predominio de concepciones oscurantistas y escolásticas. La

articulación entre el saber institucionalizado y la productividad de la economía era muy débil: las buenas cosechas y la calidad de la ganadería eran independientes de las bondades del sistema educacional. Pero no ocurre lo mismo en las actuales circunstancias, donde una fracción cada vez mayor de los costos productivos se destina al pago de un insumo vital e irremplazable: el conocimiento científico y técnico. Por consiguiente, sin un sistema educacional de excelencia, adecuadamente organizado y financiado, la capacidad competitiva de la economía en los mercados mundiales se resiente irreparablemente. La moderna producción industrial y el impresionante desarrollo de la economía de servicios son impensables al margen de un sistema científico que apoye mediante la generación y transferencia de conocimientos altamente especializados, es decir, mediante la investigación y la docencia a los esfuerzos realizados en el terreno de la economía. Esa es la clave fundamental que distingue la competitividad japonesa del rezago norteamericano. En última instancia, en una economía moderna que muchos ya denominan “cerebro-intensiva” quien tiene una población mejor educada habrá de ser quien, a la postre, triunfe en la carrera entablada en los marcos del nuevo paradigma tecnológico. Esta verdad elemental no parece haber sido comprendida por nuestros grupos dirigentes.

Pero hay algo más. En este sombrío mundo del “tardo-capitalismo”, signado por el establecimiento de un inédito *apartheid* económico y social, solo la educación aparece como una escapatoria para neutralizar las tendencias marginalizantes inherentes al mercado. Las esperanzas de antaño se han disipado: en una sociedad que condena a mayorías cada vez más numerosas a la marginalidad y la exclusión tanto aquí como en Estados Unidos y Europa solo la educación superior parecería estar en condiciones de ofrecer una oportunidad para compensar las inequidades sistémicas inherentes al nuevo modelo y sus efectos desestabilizadores.

(Julio de 1990).

¿Ignorancia o mala fe?

En su columna de *El Cronista Comercial* del 16 de mayo, Bernardo Neustadt se refería elípticamente a la Universidad de Buenos Aires y declaraba que no estaba dispuesto a “seguir bancando un sistema de ingresos y de vida universitaria que ha terminado con la ‘excelencia’ en la República”. Celebro entusiastamente que Neustadt se preocupe por tratar de restablecer la “excelencia” en este país. Para su tranquilidad, le informo que en pocos ámbitos encontrará partidarios más acérrimos de la misma que en la UBA, como bien lo saben quiénes observan con objetividad y mesura el acontecer universitario. Pero no es solo en la educación superior donde debemos preocuparnos por la seriedad y la rigurosidad; el periodismo también los necesita, sobre todo cuando se tiene a la vista la excepcional acumulación de falsedades y equívocos que Neustadt fue capaz de colocar en un artículo de apenas 51 líneas.

Primer error: en la Universidad de Buenos Aires no existe el “ingreso irrestricto” que tanto enoja al publicista neoconservador. Ojalá que todos los que tuvieran el talento necesario pudiesen acceder a la universidad. Sabemos que hay condicionantes económicos y sociales que impiden la materialización de esta aspiración elemental en cualquier sociedad abierta e igualitaria, y que a causa de ello este país desperdicia preciosos recursos humanos que jamás llegarán a madurar en plenitud. Pero aun ateniéndonos a las actuales

circunstancias, cualquier periodista mínimamente informado y medianamente objetivo sabe que en la UBA hay algo que se denomina el Ciclo Básico Común [CBC], al cual acceden libremente todos los egresados de los colegios secundarios y que excluye, por consiguiente, a mucha gente talentosa que la injusticia de esta sociedad condena a la ignorancia alejándola de las aulas desde la escuela primaria. En el CBC los estudiantes deben aprobar 6 o 7 materias —según las carreras por la que se opte— y recién cumplido este difícil trance los aspirantes ingresan a las facultades de su elección. Le hubiera bastado a nuestro periodista desplazarse a cualquiera de las sedes en donde se imparten los cursos del CBC y conversar con los estudiantes reales —de carne y hueso, y no con los personajes “de plástico” que suele exhibir en sus programas— para darse cuenta de que para aprobar las materias del CBC e ingresar a la UBA los aspirantes tienen que “matarse” estudiando. Lo que Neustadt imagina que ocurre: un verdadero festival demagógico en donde las autoridades universitarias reparten diplomas a granel, es un espejismo producido por su ofuscación ideológica. Si Neustadt hubiera solicitado a la UBA los datos oficiales sobre este tema podría haberse ahorrado un papelón que lo menoscaba ante los ojos de la opinión pública. Así se habría enterado que, por ejemplo, de los 45 111 aspirantes que procuraron entrar a la UBA en 1990 solo pudieron hacerlo 19 076, es decir el 42,28 %: ¿puede alguien que tanto se desvela por la “excelencia” seguir hablando de “ingreso irrestricto”? Es más, ¿es verosímil argüir que un periodista de la influencia y recursos de que dispone Neustadt puede desconocer cifras tan elementales y accesibles como estas?

Segundo error: el conductor de *Tiempo Nuevo* afirma que en la “última remesa ingresaron 15 882 alumnos para ser médicos. Y 130 para ser enfermeras o enfermeros”. Una vez más el autoproclamado guardián nacional de la “excelencia” demuestra su inveterada afición a lanzar afirmaciones carentes de fundamento empírico. En realidad, la cifra de aspirantes a ingresar a la Facultad de Medicina en el año 1991 —que no puede confundirse con la de aquellos que efectivamente habrán de ingresar, si aprueban el CBC, el año próximo— fue

de 9 015 y no los 15 882 mencionados en su artículo: de estos, 130 solicitaron su admisión a la escuela de enfermería (esta es la única cifra correcta de todo su artículo), 303 a la de obstetricia, 864 a la de nutrición, 1 255 a la de kinesiología, 641 a la de fonoaudiología y 5 822 a la de medicina. Pero solo el año que viene sabremos cuántos de estos aspirantes habrán sido admitidos a la facultad. Conjeturemos: en 1989 los aspirantes fueron 9 425, y de estos 2 768 fueron admitidos a la Facultad de Medicina, es decir un 29,37 %, cifra razonable para un área metropolitana de once millones de habitantes.

Tercer error: tenemos muchos médicos. Uno cada 360 habitantes. ¿Quién ignora que esa cifra nada nos dice acerca de la distribución real de los médicos en las diferentes regiones del país? ¿Sobran médicos en el conurbano bonaerense, o en Chaco, o en Jujuy? ¿Tendrán todos los argentinos la atención médica que supuestamente brinda a sus abonados una de las empresas que auspicia su programa televisivo? Me parece que no. Si Neustadt tuviera razón, ¿cómo explicar que, según un estudio del Banco Mundial, hacia finales de la década de los ochenta la tasa de mortalidad infantil de la Argentina era tres veces mayor que la de España, Israel, Italia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos, cuatro veces superior a la de Francia y Holanda, y unas seis veces mayor que la de Japón y Suecia? Quién estará en lo cierto: ¿los investigadores del BM o Neustadt? Si a nosotros nos sobran médicos —que hasta algunos se animan a proponer una planificada reducción de la oferta en profesionales de la salud— seguramente que en aquellos países el exceso de doctores debe ser escandaloso. En el año 1984 había en la Argentina —siempre a tenor de las cifras proporcionadas por el Banco Mundial— un médico por cada 370 habitantes. Pero en España había uno cada 320 —y seguían atrayendo médicos del exterior—, en Israel cada 350, en Bélgica 330, en Francia 320 y en Italia 230. En síntesis: estamos lejos de tener demasiados médicos, sobre todo si se tiene en cuenta que las condiciones de salud de nuestra población son incomparablemente más desfavorables que las que prevalecen en los países desarrollados. Necesitamos más médicos, no menos, y más presupuesto para nuestros hospitales.

En suma: errores gruesos, inaceptables en un periodista profesional y descalificatorios en el caso de alguien que se autoproclama custodio de la “excelencia”. ¿Dónde queda la responsabilidad pública de quien desinforma sistemáticamente a sus lectores? Para reclamar “excelencia” a instituciones como la UBA Neustadt debería comenzar por mirarse al espejo y ver la fenomenal viga que tiene clavada en su propio ojo. Será tal vez por esa falta de seriedad que su credibilidad —y su *rating*— se ha visto tan resentida. La UBA ha sido atacada con una saña pocas veces vista en los últimos tiempos, muchas veces al servicio de mezquinos intereses materiales. Por contraposición, el presidente de la Academia Norteamericana de Ciencias —prestigiosa institución que agrupa, entre otros, a la cincuentena de premios nobeles vivientes con que cuenta los Estados Unidos— le envió hace pocas semanas una carta al presidente Menem solicitándole tomara los recaudos presupuestarios conducentes a salvaguardar el sistema científico argentino, en el cual la Universidad de Buenos Aires —por su tradición de excelencia académica internacionalmente reconocida— desempeñaba un papel fundamental. Sus elogios a nuestros esfuerzos y realizaciones académicas no nos instala en la autocomplacencia ni debilita el impulso que nos lleva a tratar permanentemente de elevar la calidad de la universidad. Pero no podemos menos que comprobar con tristeza como la seriedad de las observaciones de la Academia Norteamericana de Ciencias contrasta dolorosamente con críticas que, en el mejor de los casos, revelan una profunda ignorancia o, si no, una abierta y enfermiza mala fe.

(21 de mayo de 1991).

La ecuación de la excelencia

En su columna del 21 de mayo de *El Cronista Comercial* Bernardo Neustadt advierte que quiere evitar que en el año 2000 seamos todos unos perfectos brutos. Propósito loable, si los hay. Su razonamiento se apoya en una variedad de datos, y desafía a que “alguien los desmienta”. Algunos datos son fácilmente desmentibles; otros son irrelevantes al argumento, y apenas unos pocos sobreviven al diluvio.

Veamos a los primeros. Se nos dice, por ejemplo, que “en el mundo ‘civilizado’ hay 7 médicos por cada 100 000 habitantes. Aquí 70”. Si dividimos 100 000 por 70 resulta que en la Argentina habría un médico cada 1 428 habitantes, una cifra notablemente inconsistente con la que el propio Neustadt aportó en su artículo de la semana anterior, donde afirmaba que “Hay 90 000 médicos en la Argentina. Uno cada 360 habitantes”. Una semana más tarde la relación cambia: ahora hay un médico cada 1 428 habitantes. ¿Cuál de las dos cifras es la verdadera? ¿Qué habrá ocurrido? O cerca del 75 % de los médicos del país cayó fulminado al leerlas, diezmando irremediablemente la profesión, o bien se produjo una súbita explosión demográfica que, en una semana, multiplicó la población argentina por cuatro. Como ambas cosas son altamente improbables es preciso concluir que los “datos” divulgados con tono tan desafiante están equivocados, son simples ficciones que no guardan ninguna relación con la realidad. Si, por otra parte, analizamos la cifra para los países “civilizados” el

resultado no es menos sorprendente, pues mediante las estadísticas utilizadas por Neustadt —siete médicos por 100 000 habitantes— aquellos pasarían a tener 14 285 habitantes por médico, cifra que, según las estadísticas del Banco Mundial, corresponde a un país como Angola y no al orgulloso club de las potencias desarrolladas de Occidente, que tienen en promedio unos cuatrocientos cincuenta habitantes por médico. En síntesis: los datos exhibidos para apuntalar su argumentación son falsos.

Segundo: Neustadt afirma que las universidades están calmas “porque los alumnos consiguen lo que quieren”. Se equivoca una vez más. Si hay calma es porque —a pesar de la asfixia financiera— funcionan adecuadamente las instituciones de autogobierno de la universidad y porque tanto los estudiantes como los profesores han actuado con madurez y responsabilidad. ¿O es que vamos a creer que solo hay “orden” cuando un uniformado impone el silencio por el terror? ¿Estaban en “calma” las universidades argentinas en los años del Proceso? ¿Se podía hablar de “excelencia académica”? Confundir la paz de los cementerios con el “orden” fue el argumento preferido de aquellos déspotas; cuidado con caer una vez más en esa falacia. Por otra parte, si los estudiantes “consiguen lo que quieren”, ¿por qué ingresan a la Facultad de Medicina menos de uno por cada tres aspirantes? ¿Los otros dos son masoquistas? Además, yo no sé de dónde ha sacado Neustadt la idea de que se suprimió matemática en el Ciclo Básico: estoy seguro de que muchos alumnos suspirarían aliviados si la noticia fuera cierta, pero es falsa.

Tercero: Neustadt sostiene en su artículo que ingresan por año a la Facultad de Medicina de la UBA 5 200 estudiantes. Las cifras oficiales, que manejan tanto el rectorado como las autoridades de la facultad, señalan que en 1990 (último año para el cual existe información completa) ingresaron a dicha facultad 2 768 estudiantes y no los 5 200 aludidos en su nota.

La excelencia académica es producto de una ecuación en la que se conjugan múltiples determinantes. Algunos suponen que lo único que cuenta es el número de estudiantes, pero dicha opinión no

es seriamente tomada en cuenta por ningún especialista en educación superior. Si así fuera la Universidad de Asunción en los años de Stroessner tendría que haber eclipsado a Harvard, y la de Puerto Príncipe, en el apogeo de la dictadura de Duvalier en Haití, haber hecho lo propio con la Universidad (estatal) de California. Nada de esto ha ocurrido, *ergo* el tamaño de la matrícula no puede ser el único factor determinante de la excelencia. Esto no significa que la calidad de la enseñanza sea por completo ajena al volumen del alumnado. Lo que se afirma, en cambio, es que aquella depende de varios factores: ¿tenemos buenos planes de estudio, que reflejen los adelantos científicos de las diversas disciplinas que se imparten en la universidad?; ¿contamos con el equipamiento adecuado —es decir, laboratorios, bibliotecas, hospitales, instrumentales para la investigación, recursos e instalaciones físicas, etc.— para garantizar la excelencia en la formación académica?; ¿disponemos de un plantel docente que por su calidad y volumen asegure el alto nivel de instrucción deseado?; ¿tenemos suficientes profesores con dedicación exclusiva?; ¿están nuestras remuneraciones alineadas con lo que es normal en el resto del mundo?; ¿hasta qué punto la organización de nuestras unidades administrativas y académicas se corresponde con las necesidades de una formación de alto nivel de excelencia? El tamaño de la matrícula es un elemento más, pero no es el único ni el más importante. Una universidad elitista, con planes de estudios atrasados, profesores mal formados y peor pagados y sin recursos para la investigación será de mala calidad, por más que su alumnado sea minúsculo.

(28 de mayo de 1991).

VII. Internacionales

Funerales en Berlín

Desde finales de la década de los setenta la política y la cultura de las sociedades capitalistas sufrió un acentuado proceso de derechización. Sus manifestaciones externas variaban en función de las especificidades nacionales, pero los contenidos profundos se repetían con obstinación. El auge neoconservador emblemático en las figuras de Margaret Thatcher y Ronald Reagan encontraba su natural contrapartida en las trágicas dictaduras militares que asolaban América Latina. Si la solidez de las instituciones democráticas en el mundo desarrollado pudo impedir una involución autoritaria, en América Latina, donde el capitalismo nunca pudo seriamente reconciliarse con la democracia, los resultados de esta derechización fueron catastróficos.

Un componente esencial del discurso de un Occidente atemorizado ante los “excesos” de la democracia ha sido la crisis de los “socialismos reales” y, por extensión, del marxismo en su doble dimensión: como teoría de la sociedad capitalista y como proyecto de transformación social. En este nuevo “clima ideológico” proliferaron toda una serie de ideas y teorías que, haciendo gala de una sorprendente arrogancia, se apresuraron a declarar la muerte del marxismo. No solo eso: contrariando los consejos de teóricos de la talla de Max Weber o Raymond Aron, ambos fervientes críticos del socialismo, los nuevos sofistas se declararon en posesión de las certezas de la época y saturaron el debate intelectual con sus temas favoritos: la muerte

del marxismo, el colapso de los “socialismos reales”, el agotamiento de las utopías, el fin del relato, el advenimiento de la sociedad posindustrial. Estupefactos latinoamericanos los escuchan cantar loas a una nebulosa “posmodernidad” que los habría mágicamente rescatado de las sórdidas condiciones del “capitalismo realmente existente” mientras, al mismo tiempo, sus casas se inundan, sus niños se mueren por haber tenido la ocurrencia de nacer en invierno y todos se debaten en la indignancia y el atraso.

Los acontecimientos recientes en Alemania Oriental vinieron aparentemente a ratificar los diagnósticos neoconservadores: tal como lo escribiera hace poco Francis Fukuyama, diligente funcionario del gobierno republicano, la historia ha terminado y consagró, de aquí a la eternidad, la supremacía del capitalismo y la democracia liberal. El derrumbe del muro de Berlín no es sino un síntoma más que se agrega a las conocidas novedades registradas en Polonia, Hungría y la propia Unión Soviética. ¿Ha muerto finalmente el socialismo en Berlín? ¿No son acaso las masas de Alemania Oriental las que están animando sus funerales, en lo que hasta hace apenas una semana era el bastión de la ortodoxia estalinista?

La respuesta es positiva: efectivamente la rebelión popular ha procedido a enterrar sin mayores escrúpulos a una serie de regímenes que se autoproclamaban socialistas y que los críticos neoconservadores, junto con los intelectuales “orgánicos” de aquellos gobiernos, insisten en considerar como genuinas expresiones del proyecto socialista. Para aquellos el muro de Berlín, el Gulag, la represión de Tiananmén y, en suma, el estalinismo como régimen social y político son componentes esenciales del legado de Marx; para los funcionarios de los regímenes difuntos —o en vías de extinción— estas eran necesidades prácticas impuestas por los “enemigos del socialismo” y, por lo tanto, al igual que sus críticos, coincidían en establecer la identidad entre esas aberraciones injustificables y el socialismo. Para ambos, neoconservadores capitalistas y complacientes intelectuales “socialistas”, la caída del muro de Berlín significa la muerte de algo: creen que lo que ha muerto es el socialismo, cuando en realidad lo que acaba de morir es el estalinismo.

Las excrecencias burocráticas y totalitarias son por completo ajenas al espíritu del socialismo, pero unos y otros creen que existe una identidad entre este y el régimen surgido de las durísimas condiciones imperantes en la Rusia posrevolucionaria. Se equivocan; lo que la insurgencia popular ha reconquistado en Europa Oriental y en la Unión Soviética son dos componentes esenciales del proyecto socialista y que habían sido cancelados por el estalinismo: la democracia y la libertad. Prácticamente la totalidad de los millones de estealemanes que el fin de semana pasado cruzaron la frontera regresaron a su país: lo que querían del otro lado del muro no era el capitalismo sino la democracia y la libertad. Al quebrar la inercia opresiva de su propio gobierno ya están seguros de que estos dos valores van a ser, junto con la igualdad, el trípode sobre el cual se producirá el relanzamiento de un nuevo ciclo de transformaciones dentro de los países socialistas. La democracia y la libertad harán posible una significativa renovación en la práctica de los “socialismos reales” no solo por sus contenidos intrínsecos, inescindibles del proyecto socialista, sino porque ellos constituyen al mismo tiempo instrumentos de extraordinaria eficacia para hacer posible la construcción de la nueva sociedad.

Por todo lo anterior creo que hay muy buenas razones para asociarnos a los festejos que actualmente conmueven a Alemania. La muerte del estalinismo en el muro de Berlín significa simultáneamente el renacimiento del proyecto socialista, libertario y democrático. Las llamas vuelven a brotar de lo que muchos pensaban eran cenizas moribundas. No se nos escapa que este desafío que ahora se plantea en los países de Europa Oriental —lanzados a la conquista de la democracia y a la profundización del socialismo— enfrentará enormes presiones que lo pueden hacer descarrilar y terminar siendo quien abra la puerta al humillante retorno del capitalismo a esos países. Pero en caso de que el proyecto de refundación socialista triunfara, entonces las perspectivas futuras de los países latinoamericanos podrían contemplarse desde una perspectiva bastante más optimista.

(19 de noviembre de 1989).

Eclipse en Nicaragua

La derrota electoral del sandinismo ha sido recibida como un maravilloso e inesperado presente por la derecha argentina. Apenas se habían divulgado los primeros cómputos cuando sus voceros se lanzaron como buitres para destrozar un proceso emancipador, libertario y pluralista que libró a América de una de sus más crueles y duraderas satrapías: la dictadura de Anastasio Somoza. La visceral animosidad de estos pseudo demócratas —que convalidaron a cuanto autócrata nos oprimiera— es comprensible: ni ellos ni sus amos le pueden perdonar al Frente Sandinista de Liberación Nacional [FSLN] haber puesto fin a la inmoralidad del somocismo; menos todavía haber desafiado y derrotado, en su momento, a la superpotencia. Esa revolución dirigida por un puñado de curas, poetas e intelectuales era un muy mal ejemplo y, para descalificarla, se echó mano a cualquier recurso, aun los más arteros y miserables: por eso el martes pasado uno de nuestros “formadores de opinión” la acusó de haber matado a Pedro Chamorro, cuando todo el mundo sabe que al entonces director de *La Prensa* de Managua lo asesinó la dictadura somocista.

Pero queda en pie una cuestión: ¿por qué perdió Ortega? La respuesta es sencilla: porque la gran mayoría de los nicaragüenses quería la paz y un mínimo de bienestar, y mientras estuvieran los sandinistas en el poder una alianza tan miope como perversa —el

gobierno norteamericano y los grupos asociados a la hegemonía oligárquica en Nicaragua— continuaría desangrando a la tierra de Sandino. Nada que hiciera el FSLN podía aplacar esta odiosa represalia: cada concesión efectuada era de inmediato abrumada con nuevas exigencias, porque en esta escalada luctuosa no se quería negociar sino destruir al gobierno sandinista.

La aritmética ofrece algunas claves interesantes para comprender a la política: en su apogeo la “contra” llegó a contar alrededor de unos veinticinco mil efectivos, armados y financiados por el gobierno norteamericano. Esto representaba aproximadamente el uno por ciento de la población total de Nicaragua, y cerca del treinta por ciento del tamaño del ejército popular sandinista. ¿Habría Washington conservado la libertad de prensa y permitido la libre expresión de todos los partidos opositores —como ocurrió en Nicaragua, donde desde la derecha fascista hasta la ultraizquierda delirante se reunieron en la UNO— si una parte de su territorio hubiese estado ocupada por un ejército de unos dos millones y medio de “contras”, pertrechados y pagados por los soviéticos? Parece improbable, porque durante la segunda guerra mundial —librada ciertamente bien lejos de los Estados Unidos— la censura de prensa y las restricciones a las libertades individuales ensombrecieron la vida política de ese país; más tarde, en la guerra fría, el macartismo desató persecuciones que se prolongaron hasta mediados de la década del cincuenta. Teniendo en cuenta estos antecedentes hay que reconocer que la atmósfera libertaria garantizada por el sandinismo fue una notable excepción a la regla.

El gobierno de Managua ha sido acusado de incompetencia y sectarismo. No dudo que algo de ello puede haber habido, pero como argentino no puedo dejar de pensar que en ambos terrenos nuestros gobiernos han establecido marcas difíciles de ser superadas. Es evidente que un pequeño país, obligado a librar una guerra prolongada —curiosamente llamada “de baja intensidad”— durante diez años, acabaría desquiciando su economía y perdiendo su amplísimo consenso inicial. Para los Estados Unidos la ayuda a los “contras” solo

representaba una partida infinitesimal de su gigantesco presupuesto, y sin arriesgar la vida de un solo ciudadano norteamericano. Por eso alguien definió esta guerra no declarada como una *splendid little war*; a los “nicas”, en cambio, la sobrehumana desproporción en su lucha contra el imperio les destruía la economía, consumía casi las dos terceras partes de sus recursos fiscales y cobraba preciosas vidas humanas que, lentamente, mellaron la voluntad combativa de la sociedad. ¿Qué gobierno puede funcionar exitosamente y ganar las elecciones bajo estas circunstancias?

(4 de marzo de 1990).

Transición democrática en el socialismo

Ha transcurrido ya un mes desde el momento en que la presión de las masas populares alemanas derrumbó el Muro de Berlín y es momento oportuno para comenzar a extraer ciertas conclusiones. Estas son, por definición, provisorias, por cuanto a nadie se le puede escapar un hecho elemental: estamos viviendo en la cresta de la ola revolucionaria llamada a producir una trascendental modificación en el mundo en que vivimos. Cualquier tentativa de querer establecer “conclusiones” demasiado definitivas corre muy serios riesgos, no menores de los que podrían haber extraviado la mente de alguien interesado en reflexionar sobre el curso de los acontecimientos estallados pocas semanas antes alrededor de La Bastilla, en París, o de los preocupados por desentrañar el significado de los sucesos igualmente dramáticos que habían tenido por escenario el Palacio de Invierno de los zares, en San Petersburgo.

Con esta precaución a cuestas es posible aventurar, sin embargo, algunas hipótesis que nos permitan por lo menos tratar de establecer que es lo que está ocurriendo, dado que optamos por adoptar una actitud muy cautelosa en relación con su significado final. Lo que está sucediendo en Europa Oriental es ni más ni menos que una revolución democrática, que en pocas semanas destruyó los baluartes aparentemente incommovibles de regímenes que muchos consideraban indestructibles. Maquiavelo decía que las frases altisonantes y

los excesos verborrágicos encubren la verdad efectiva de las cosas, y los acontecimientos del Este le dan una vez más la razón al padre fundador de la ciencia política moderna. Las palabras habían sepultado las cosas, y estas se tomaron su revancha. El Muro de Berlín era no solo una valla que obstruía el tránsito dentro de una ciudad; era, en realidad, un símbolo que graficaba la inexpugnabilidad de un régimen que, en bocas de su hoy encarcelado exlíder supremo, Erich Honecker, iría a durar cien años. Los argentinos sabemos de la insanable fragilidad de esas promesas, y al líder comunista de Alemania Oriental le habría beneficiado grandemente haber tomado nota de expresiones semejantes que embriagaron los cerebros de buena parte de nuestra dirigencia política en las jornadas inaugurales del “siglo radical”, hace apenas seis años.

Una revolución, en síntesis, que liquida una serie de regímenes políticos surgidos en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial y que llevaron a cabo una serie de transformaciones estructurales en nombre del socialismo. Lo interesante es comprobar que las demandas democráticas de la “sociedad civil” en Europa Oriental no incluyen –por lo menos hasta ahora– un nebuloso “retorno al capitalismo” sino más bien el establecimiento de un orden político genuinamente democrático, con autoridades elegidas mediante sufragio universal y con abierta competencia política y, finalmente, el imperio sin restricciones de la libertad. Las palabras que se escuchan en Praga y en Berlín, en Budapest y en Varsovia son precisamente esas: democracia y libertad; muy poco se oye hablar del mercado y de la propiedad privada de los medios de producción. Es que pese a las absurdas inhibiciones y censuras impuestas por los gobiernos de Europa Oriental, el común de la gente sabe que el mercado es una piadosa ilusión en una etapa histórica del capitalismo en donde imperan sin contrapesos los oligopolios. Esa gente estaba muy desinformada, aunque no tanto como los argentinos como para comprar esta verdadera patraña del mercado que requiere, como lo estableciera el propio Adam Smith (1776) hace más de dos siglos, un sinnúmero de productores anónimos compitiendo libremente en el

mercado. Saben que esa realidad ya no existe más sino en algunos pocos mercados marginales: en las ramas fundamentales de la producción y los servicios de todos los países capitalistas encontramos un puñado de grandes empresas que controlan a sus mercados y que administran los precios en función de acuerdos oligopólicos que les permiten maximizar su tasa de ganancia. Por eso tampoco hablan de una “vuelta al capitalismo”, porque saben muy bien que eso significa desempleo masivo, como el que flagela a la próspera Europa Occidental (¡con sus diecisiete millones de desocupados!), que la salud ya no será gratuita, que la educación se transformará en un lujo, que la vivienda devendrá en una mercancía más y que la alimentación será una cuestión librada al interés egoísta de productores y distribuidores. Su sabiduría los impulsa, por lo tanto, a perfeccionar los elementos positivos que ya existen en esas nuevas formaciones sociales, ni capitalistas ni socialistas en un sentido pleno, y no a regresar a un modo de producción cuyas grietas son a estas alturas inocultables. Es precisamente por esto que los gobiernos capitalistas han reaccionado con llamativa parsimonia ante los acontecimientos de Europa Oriental. Sus servicios de inteligencia les han informado sobre el Estado de la “opinión pública” y el Estado de ánimo de las masas. Es más, varios de sus más connotados voceros dejan traslucir una cierta preocupación por lo que está ocurriendo. Era más fácil persuadir a las sociedades occidentales de las ventajas del “capitalismo realmente existente” cuando este se confrontaba con aquellas caricaturas del socialismo que plagaron Europa Oriental desde la segunda posguerra que ahora, cuando las sociedades socialistas acceden a una forma de organización democrática sin renunciar al igualitarismo y a la integración sociales que las caracterizan. Y como la sociedad burguesa está plenamente mercantilizada, y esa es una de las raíces profundas de la crisis civilizacional que la desgarrará, todo esto se puede cuantificar en dinero: Lech Walesa fue a los Estados Unidos a pedir plata para ayudar a la reconstrucción de Polonia. Fue recibido con todos los honores, fue agasajado y homenajeado por políticos y empresarios, por sindicalistas y banqueros. Durante una semana fue

la “*big news*” de la sociedad norteamericana. Su máxima distinción le fue conferida nada menos que por el Congreso de los Estados Unidos, quien en sesión plenaria se reunió para escucharlo. En sus dos siglos de existencia solo dos personas que no fueran jefes de Estado gozaron de tamaña distinción: el Marqués de Lafayette, quien luchó heroicamente por la república en las Revoluciones francesa y americana, y ahora, el dirigente de Solidaridad. Walesa dijo que en el mundo de hoy había una sobreabundancia de apoyos morales y de retórica solidaria. Consciente de ello quería decir a los Estados Unidos que la demanda por tales productos estaba francamente deprimida, y que lo que la gente necesitaba era dinero, no grandes promesas. Sin embargo, su petición de 10 000 millones de dólares cayó en saco roto pues sus anfitriones le ofrecieron 300 millones y, luego de un durísimo intercambio de opiniones, obtuvo unos 700 millones de dólares, es decir, el 7 % de sus expectativas. ¿Qué significa esto? Nada más y nada menos que la medida de la credibilidad que la clase dirigente norteamericana tiene en el futuro capitalista de Polonia.

(10 de diciembre de 1989).

Confusos y desmemoriados

En apoyo a la decisión presidencial de enviar tropas argentinas al Golfo Pérsico se afirma que de esta manera la Argentina cierra un nefasto capítulo de desencuentros con los Estados Unidos y los países desarrollados, se “inserta” protagónicamente en la escena internacional, toma partido resueltamente por Occidente —desentendiéndose del pauperizado Tercer Mundo, cuya solidaridad había buscado con tanto ahínco a partir de la guerra de las Malvinas— y que a cambio de este gesto solidario con el Norte nuestro país será recompensado con magnanimidad. En otras palabras: el “alineamiento automático” con los Estados Unidos nos abrirá las puertas del progreso, hará que las inversiones extranjeras afluayan en tropel y que los centros metropolitanos “rescaten” a la Argentina de su desmedrada situación. En síntesis: un negocio redondo.

Lamentablemente, toda esta historia trasunta una inocultable mezcla de olvido y confusión, lo que no es de extrañar habida cuenta de la crónica falta de memoria de los argentinos. En efecto, ¿cómo olvidar que lo que ahora se presenta como una política exterior novedosa ya fue ensayada con creces por el Proceso, sobre todo a partir de Viola y —con más fuerza aún— por Galtieri? ¿No fueron acaso los comandantes quienes, para recomponer las relaciones con los Estados Unidos luego del triunfo de Reagan y la bancarrota de la política de derechos humanos de la Administración Carter, corrieron

presurosos detrás del nuevo presidente ofreciéndoles sus servicios para organizar y ejecutar la “guerra sucia” contra los sandinistas y la guerrilla salvadoreña? ¿No se decía, acaso, durante los primeros meses del gobierno de Galtieri, que las relaciones entre la Argentina y los Estados Unidos se encontraban en el mejor nivel de toda su historia, augurando un período de ininterrumpida cooperación que habría de reportar inmediatos beneficios para nuestro país?

¡Polvos de aquellos lodos! ¿Que quedó de toda esa retórica asfixiante y mentirosa? Nada: solo palabras horrendamente vacías. Se podrá objetar que los militares arruinaron este prometedor romance con su aventura malvinense. En parte es verdad: pero ¿qué pasó —y no solo en la Argentina sino en toda América Latina— con la restauración de la democracia en 1983? Nada: los países desarrollados nos siguieron tratando según los usos y costumbres tradicionales. Ni inversiones, ni ayuda al desarrollo, ni relajación de los durísimos criterios utilizados por la banca acreedora para el tratamiento de la deuda externa. Todo siguió como era entonces. ¿Qué razones existen para pensar que ahora la historia habrá de ser diferente?

Veamos algunos interrogantes. Si la incondicional adhesión a la política exterior norteamericana fuera suficiente para obtener la cooperación de la superpotencia para salir del atraso y el subdesarrollo: ¿por qué todos los países no imitan a la Argentina? ¿Serán masoquistas, amarán la miseria, los tugurios, la enfermedad? Segundo: ¿cómo explicar que gobiernos que fueron durante décadas meros “clientes” de los Estados Unidos sigan todavía sumidos en la pobreza? Honduras, por ejemplo, renunció abyectamente a su soberanía nacional para transformarse, en los años ochenta, en una gigantesca base militar desde donde Washington manejaba la campaña de los contras. ¿Qué recibió a cambio? Nada; Honduras está hoy mucho peor que antes: olvidada por sus antiguos amos y hundida en la pobreza. ¿Y el Panamá de Endara, el presidente “elegido” en una tienda de campaña del ejército que bombardeó una población civil indefensa en la capital de ese país? Nada, a tal extremo que el presidente panameño tuvo que recurrir a una huelga de hambre para implorar

a sus jefes que le hicieran llegar la ayuda que le habían prometido. ¿Cuál fue la respuesta de la superpotencia? Nada. Washington desprecia a sus incondicionales.

Y así, si seguimos revisando la experiencia de Asia y África nos encontraremos con más de lo mismo. Las relaciones internacionales nada tienen que ver con los lazos de amistad que puedan existir entre los gobernantes, por más que se tuteen, jueguen algún partido de tenis y se traten entre sí con mucho afecto. Los norteamericanos no se confunden: por eso dicen que entre los países no existen amistades permanentes sino intereses permanentes. Es sobre esta firme base donde se construye una política exterior: lo demás es ilusión, confusión, diletantismo. ¿Son nuestros intereses coincidentes con los de los países desarrollados? Veamos: objetivamente pertenecemos al Sur, y esto es independiente de nuestros deseos. Al igual que el resto de América Latina, somos un país endeudado hasta la médula, productor de materias primas y alimentos y marginado estructuralmente por un sistema internacional asimétrico y esencialmente injusto. Nuestros desacuerdos objetivos con el Norte —no solo con los Estados Unidos— tienen fundamentos profundos que el tiempo no hace sino agravar: ¿basta un gesto como el que acaba de adoptar el presidente para que todas esas molestas realidades se disuelvan en el aire y la Argentina acceda a ese nebuloso “destino de grandeza” que, algunos creen, Dios le tiene reservado?

(25 de septiembre de 1990).

El filósofo y la guerra

Las reflexiones de Jürgen Habermas a propósito de la Guerra del Golfo —y que *Página/12* publicara en su edición del 22 de febrero— plantean de modo paradigmático las contradicciones y ambigüedades de un amplio espectro político-ideológico de Occidente. Su tesis, en síntesis, es la siguiente: no hay guerra justa, puesto que esta argumentación solo tendría asidero en el cenagoso terreno de una metafísica teológica o política. Excluida esa posibilidad las guerras pueden ser justificables o no, y la difícil tarea del filósofo consiste en decidir qué es lo que corresponde en cada caso. En este en particular el veredicto es terminante: la guerra del Golfo, nos dice, está justificada.

Habermas se equivoca. En primer lugar, es inaceptable arrojar por la borda la cuestión de la guerra justa. Hay una larga tradición en la teoría política, que arranca con Tomás de Aquino y alcanza su esplendor en la obra del humanista, filósofo y jurista holandés Hugo Grocio —discípulo de Erasmo— que establece que una guerra es justa cuando responde a una agresión no provocada y busca exclusivamente el restablecimiento de la paz. La guerra de los pueblos que combatieron al nazismo o la de los vietnamitas en contra del agresor francés primero y norteamericano después son solo algunos de los ejemplos de las muchas guerras justas que hubo en la historia, y esto no tiene un gramo de metafísica.

Al prescindir de estos juicios éticos sobre la guerra y la paz, la vida y la muerte, Habermas se hunde en un relativismo irresponsable. Las grandes potencias pueden estar tranquilas: ya no habrá de faltarles quienes transformen su fuerza en derecho.

Segundo: el formalismo al que es tan adicta la “ética discursiva” de Habermas, Apel y muchos otros permite escamotear en la nebulosa de sus abstracciones las abismales diferencias que separan a Abel de Caín. La violencia del segundo no es análoga a la que inútilmente empleara el primero para defenderse de su asesino. Fuera del universo brumoso de ciertos sistemas filosóficos, la guerra es algo muy concreto y distinto para quien ataca y para quien se defiende. Las explosiones atómicas detonadas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945 —cuyo efecto intimidatorio se hubiera logrado exactamente igual si se arrojaban sobre un atolón desértico— significaron para los Estados Unidos algo muy diferente que para los civiles japoneses que por desgracia habitaban esas ciudades. Pensar a la guerra como si fuera una abstracción, disolviendo los juicios morales que distinguen el agresor y su víctima y olvidándose de sus consecuencias prácticas puede ser muy oportuno políticamente, pero es lamentable como filosofía.

Tercero, una cuestión central en el tema de la guerra: la proporcionalidad de las represalias. La agresión de Hussein a Kuwait fue intolerable e injustificable, aun cuando las reivindicaciones territoriales iraquíes pudieran ser válidas. Pero una causa potencialmente justa y valedera no transforma mágicamente a métodos reprobables en conductas moralmente aceptables. La respuesta norteamericana, por otra parte —aun cuando estuviera encubierta bajo la desprestigiada hoja de parra de las Naciones Unidas— fue no menos criminal que la que inspirara el iluminado de Bagdad. El bombardeo a mansalva de objetivos civiles en Irak —atestiguado irrefutablemente por Ramsay Clark, exfiscal general de los Estados Unidos— repugna a la conciencia de nuestro tiempo. Repite, casi medio siglo después, el genocidio practicado con los japoneses en nombre de los valores más altos de occidente. Pregunta: ¿por qué no se prosiguió con el bloqueo

militar y económico, que en poco tiempo más hubiera logrado lo mismo que se obtuvo cruentamente con la guerra?

A estas alturas el argumento de Habermas tropieza con dificultades insalvables: “Para decirlo por adelantado, considero justificada la intervención como tal”, nos dice en uno de sus pasajes, pero solo para agregar que “tengo serias dudas acerca de si la acción, tal y como discurre, pueda resistir un examen escrupuloso”. Hubiera sido ridículo esperar del rubicundo General Schwartzkopf una predisposición muy marcada a explorar las facetas éticas de la guerra, pero fuimos muchos los que esperábamos que Habermas produjese un “examen escrupuloso” del caso. Fue por eso que su artículo fue reproducido en casi todo el mundo. Claro está que un análisis riguroso solo es posible si se encara la cuestión en su lacerante concreción y no en su edulcorada abstracción. Como Habermas opta por la segunda línea culmina con un auténtico bizantinismo: “¿Las víctimas causadas hasta hoy por la guerra están en relación justificable al mal que se deseaba evitar?”. Estos males, recordémoslo, eran antes que nada la preservación de la existencia del Estado de Israel, la liberación de Kuwait, la destrucción de las armas atómicas, biológicas y químicas que supuestamente se hallaban en poder de Hussein y, eventualmente, el derrocamiento del dictador iraquí. Ante su pregunta Habermas decepciona a sus lectores al decir que “no tengo respuesta concluyente a eso”, agregando sin embargo que “pueden darse males peores que la guerra”. ¿Cuáles? Es más, ¿existen? No lo dice, pero uno puede sospechar que podría tratarse de los cuatro “males” que se deseaba evitar. Pero, ¿cuántos millones de vidas árabes serían necesarias para variar la tesitura del filósofo? Así planteada la pregunta pierde todo sentido.

Llegado a este punto Habermas queda ética y analíticamente desarmado, convertido —a pesar suyo— en un alambicado apologista de los nuevos gendarmes internacionales. Su repudio de Grocio y la tradición de la “guerra justa” lo deja inerme frente a los belicistas, cualquiera sea su signo. A partir de allí decidir qué partido tomar es un asunto de mera racionalidad instrumental, ajena a consideraciones

axiológicas. La filosofía —al menos, esta que representa Habermas— revela así su propia miseria: cierra los ojos a la injusticia y a la maldad, a la vida y la muerte, y se convierte en “eternizadora de los dioses del ocaso”, para decirlo con las bellas palabras de Silvio Rodríguez. Degenera en una ideología al servicio del *sheriff* a escala planetaria. En esta empresa Habermas llega a extremos que solo con una infinita benevolencia podrían dejar de ser considerados como torpes legitimaciones del dominio imperial: sugiere que los Estados Unidos y sus aliados podrían desempeñar un papel “neutral” como fuerza policial, aun cuando este arrebato altruista se escenifique —¡seguramente por casualidad!— sobre el territorio que encierra las mayores reservas petrolíferas del mundo. La recomendación que formula a las potencias occidentales para que separen su función policial de la búsqueda de sus propios intereses suena tan angelical que es difícil pensar que un adulto encarnado en este mundo pueda concebir tamaña quimera. La expectativa de que una intervención de este tipo pueda ser “el primer paso hacia un orden mundial efectivo” es no solo ilusoria sin incomprensible. En efecto, ¿qué quiere decir “efectivo”? ¿Que los Estados Unidos y sus aliados impongan sin contrapeso su voluntad sobre el resto del planeta? En ese caso podría hablarse de efectividad, pero se requiere mucho más que eso para poder hablar seriamente de un “orden mundial”: este supone consagrar el imperio efectivo de ciertas fórmulas de legitimación internacional —basadas en la justicia y la equidad— que trascienden con mucho la supuesta “efectividad” de las intervenciones policíacas de las grandes potencias. La filosofía de Habermas yace, también ella, sepultada en los escombros de Bagdad.

(26 de marzo de 1991).

Surprise!

La conducta internacional de una gran potencia como los Estados Unidos está muy fuertemente condicionada por la correlación interna de fuerzas sociales que definen, en función de sus intereses e ideologías, la agenda y las prioridades de su política exterior. Suponer que esta se fija en virtud de las simpatías despertadas al calor de un partido de tenis, en un desayuno en el Waldorf Astoria o en una amable conversación telefónica es una grave confusión. No menos desacertado es creer que porque se vota en contra de Cuba o se envían dos naves de guerra al Golfo Pérsico los Estados Unidos van a modificar su política en relación con un país como la Argentina. Podrán tal vez descubrirse gestos más amistosos, pero los intereses que bullen por detrás de las blanduras de la diplomacia son poco propensos a los sentimentalismos.

Estas consideraciones vienen al caso debido a la inesperada oferta norteamericana de vender, a precios subsidiados, 700 000 toneladas de trigo al Brasil. La noticia mereció una nota de tapa en *La Nación* de ayer, y en ella el subsecretario de Agricultura, Ganadería y Pesca declaró: “Tengo una terrible indignación contra el gobierno de los Estados Unidos. El ofrecimiento significa una agresión grave a la Argentina, porque Brasil es una plaza tradicional para nuestros granos”. En síntesis: la Administración Bush —con quien supuestamente tenemos una relación extraordinariamente cooperativa— estaría

por adoptar una decisión claramente lesiva para la Argentina y que, de concretarse, significaría también un grave traspié en la marcha del proceso de integración del Mercosur.

La iniciativa de Washington plantea crudamente las limitaciones de una política exterior que supone que las contradicciones objetivas de intereses —que por mucho tiempo han hecho tan conflictivas las relaciones entre nuestro país y los Estados Unidos— habrán de desvanecerse en el aire gracias al torrente de simpatía que liga a los presidentes Menem y Bush. Si la superpotencia tiene gravísimos conflictos comerciales con Europa y Japón, ¿por qué no habría de tenerlos con la Argentina, con quien compite en terceros mercados más allá de las acaloradas declaraciones de mutuo afecto que hemos escuchado en los últimos tiempos? En reiteradas ocasiones se nos ha dicho que con los Estados Unidos no solo es preciso ser amigos, sino que también debemos tener “relaciones carnales”. Tamaño apasionamiento es inquietante aun cuando sea comprensible. Pero la necesidad de que estas sean de carácter masoquista suena mucho menos convincente.

(2 de mayo de 1991).

La ruta al Primer Mundo

La justificación oficial para el envío de dos navíos de guerra al Golfo Pérsico ha sido terminante: mediante este expediente la Argentina paga su cuota de ingreso al “nuevo orden internacional” surgido de las cenizas del viejo sistema que había imperado desde 1945. Estaremos en la “tribuna de los ganadores”; la guerra “beneficiará a la Argentina”; “ni somos neutrales ni estamos en guerra”, se nos repite incansablemente y muchas veces violentando esa venerable tradición fundada por Descartes que nos exige presentar nuestras ideas de manera “clara y distinta”. El error del pasado quedarnos “pegados” a indeseables perdedores no volverá a ocurrir. Convendría, sin embargo, adoptar una actitud un poco más prudente y dejar de lado la retórica facilista, que nunca es buena guía para encarar los asuntos del Estado.

En primer lugar, hay un hecho irrefutable. No existe el tan mentado “nuevo orden internacional”: es una ficción o, para decirlo con más benevolencia, una expresión de deseos de algunos líderes del primer mundo y de ciertos académicos deseosos de congraciarse con ellos. El derrumbe del orden internacional de posguerra, articulado en torno a la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, no ha dado todavía lugar al surgimiento de un nuevo patrón estabilizado de relaciones internacionales. La creación de un nuevo orden mundial no sigue automáticamente al derrumbe del anterior.

Todo lo contrario: la historia demuestra que esos desplazamientos de la hegemonía internacional suelen ocasionar guerras bastante prolongadas y el estallido de una serie de fenómenos aberrantes, impensables bajo otras condiciones. Las protestas en Tiananmen, el derrumbe de los “socialismos realmente existentes” en Europa Oriental, la invasión norteamericana de Panamá y la represión soviética de la protesta lituana hace poco más de una semana son otras tantas muestras del altísimo grado de volatilidad de este pretendido “nuevo orden” que, en realidad, no es otra cosa que la imagen que proyecta el viejo esquema internacional en su fase de irreversible descomposición. La deplorable aventura de Hussein se inserta pues en este cuadro.

Segundo: si lo anterior es cierto, y la evidencia parece confirmarlo día a día, surgen una serie de preguntas inquietantes. ¿Cómo es que la Argentina se embarca tan resueltamente en la guerra mientras que los alemanes y japoneses, que hasta donde sabemos tienen muchos más intereses puestos en la preservación de este supuesto “nuevo orden internacional” que nosotros, no han enviado siquiera un *boy scout*? ¿Será por falta de sagacidad de sus dirigentes? No me parece: creo más bien que se trata de una errónea decisión de nuestras autoridades y no de un desliz de los gobernantes de dos de las mayores potencias económicas del planeta. ¿Cómo explicar la flemática respuesta de otros países europeos, salvo Francia y Gran Bretaña, al conflicto? ¿Y la de países como México, Brasil y Venezuela?

Si lo que se desea es ganar en credibilidad y seriedad en el primer mundo hay cosas mucho más sencillas que se pueden hacer, sin exponer la vida de más de trescientos argentinos, someternos a las represalias terroristas que seguramente se van a producir por doquier y debilitar el ineludible proceso de integración latinoamericana que necesitamos afianzar cuanto antes para sobrevivir en un mundo crecientemente dominado por unidades económicas supranacionales. Una lista parcial incluiría, entre otras cosas, las siguientes: (a) el escrupuloso respeto a la Constitución, hábito no muy difundido en estas bárbaras latitudes, pero altamente apreciado en el mundo al

cual pretendemos integrarnos. Esto significa, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo se resigna, aunque sea de mala gana, a aceptar que el artículo 67 de la Constitución lo obliga a obtener la aprobación parlamentaria para cualquier expedición de nuestras Fuerzas Armadas al exterior, aunque se diga que van a entonar villancicos navideños al Estrecho de Omán; (b) el respeto igualmente meticuloso de la justicia, convalidando las sentencias dictadas por los jueces competentes en todas sus instancias y absteniéndose el gobierno de utilizar el recurso del indulto como una forma “superior” de hacer justicia; (c) el cuidadoso manejo del erario público y de la gestión de la administración estatal, virtudes estas igualmente valoradas en el primer mundo y que hace que muchos de los corruptos del Norte industrializado, que, por supuesto, allá también existen, terminen sus días entre rejas, mientras que los periodistas que denunciaron esos episodios no tienen que preocuparse de las iras gubernamentales.

Si el gobierno hiciera cosas tan elementales como estas, suscitara el respeto de los países del primer mundo, sin necesidad de gestos tan ampulosos como inefectivos. El embajador Todman no dejó de escribir su famosa carta por el hecho de que dos naves argentinas estuvieran cooperando con su gobierno en el Golfo Pérsico. Es razonable conjeturar que no la habría escrito en caso de que hubiera percibido entre nosotros el irrestricto imperio de la Constitución, el respeto absoluto a la autonomía del Poder Judicial y el decidido propósito de combatir la corrupción. De esa manera hubiéramos dado muestras concretas de seriedad y previsibilidad, algo que no se obtiene con fuegos de artificio.

(23 de enero de 1991).

Ayudas que matan

Mucho se habla en estos días, cuando se cumple el primer aniversario de la “Iniciativa de las Américas”, de las grandes posibilidades que dicho programa ofrece para el desarrollo de los países latinoamericanos. Pero la exuberancia del discurso no logra disimular la parquedad de los hechos. En la Argentina todavía hay mucha gente que, dentro y fuera del gobierno, se hace ilusiones acerca de las perspectivas abiertas por el anuncio del presidente Bush; también son muchos quienes olvidaron el triste destino que le cupo a proyectos igualmente promisorios, como la Alianza para el Progreso. Por eso parece oportuno examinar cuidadosamente la nueva propuesta, evaluando costos y beneficios. Aun cuando esto reiterare verdades amargas, un realismo descarnado es siempre preferible a un irresponsable idealismo.

Tal como lo expresara George Bush, la “iniciativa” se propone “crear incentivos para reforzar el creciente reconocimiento latinoamericano de que las reformas de libre mercado son la llave para el crecimiento sostenido y la estabilidad política” (Comunicado de la Casa Blanca, 27 de julio de 1990). El objetivo está nítidamente recordado: fortalecer las reformas económicas que apuntalen la consolidación de una economía de “libre mercado”. Estos estímulos se organizan bajo tres rubros: comercio, inversiones y deuda. En lo relativo al primero se promete cooperar con los países que adopten políticas

“aperturistas” —se habla de eventuales “acuerdos de libre comercio”—, pero sin que los Estados Unidos se comprometan a efectuar sustanciales revisiones en la compleja maraña arancelaria y no arancelaria que discrimina en contra de las exportaciones latinoamericanas. En relación a la inversión se contempla promover, a través del Banco Interamericano de Desarrollo [BID], un nuevo programa de financiamiento para los países que supriman los “obstáculos” que se interponen a la inversión extranjera. En este sentido se recomienda crear un fondo, manejado por el BID, de hasta trescientos millones de dólares anuales: Bush prometió el aporte inicial de cien millones con cargo al gobierno norteamericano; ofreció asimismo sus buenos oficios para lograr que Europa y Japón contribuyeran con otro tanto. En materia de deuda externa, la “Iniciativa” pretende aumentar los recursos disponibles por el FMI, el Banco Mundial y el BID para financiar las operaciones de reducción de la deuda encaradas por los países latinoamericanos, en la medida en que aquellas se vinculen directamente con privatizaciones, capitalizaciones y toda la parafernalia neoliberal. Por último, postula reducir y reestructurar la deuda de nuestros países con los organismos oficiales norteamericanos, siempre y cuando la filosofía económica imperante en estas latitudes sea compatible con el dogma liberal.

A cambio de “razonables concesiones”, tales como abrir unilateralmente sus economías, facilitar la remesa de las ganancias producidas por las transnacionales, obtener el aval del FMI, el BM y el BID —que certifique el celo “reformista” de los gobiernos— y renegociar su deuda con la banca privada, América Latina podría obtener una generosa reducción de la deuda existente con los organismos públicos norteamericanos y una “ayuda” de unos trescientos millones de dólares anuales para impulsar nuestro desarrollo. Claro está que la “iniciativa” mantiene un conspicuo silencio sobre ciertas “niedades” que caracterizan la escena latinoamericana: nada se dice sobre la pobreza extrema y la creciente exclusión social; tampoco del inédito proceso de descomposición que está destruyendo a nuestras sociedades, ni de la necesidad de instaurar un modelo económico

que reconcilie crecimiento con equidad. No hace falta ser un mal pensado para concluir que la propuesta es bastante leonina: cedemos casi todo y a cambio obtenemos migajas. Pero, ¿se trata de migajas o la palabra es producto de una grave ofuscación ideológica?

Veamos: cumpliendo aquellas durísimas condiciones nuestra región resolvería, en el mejor de los casos, su deuda con las agencias oficiales de los Estados Unidos. Pero esto representa apenas el 3 % del total de la deuda externa de América Latina, una cifra estadísticamente insignificante y, a la vez, desproporcionada, porque a cambio de ella renunciamos a buena parte de nuestra soberanía económica. Y en cuanto a los aportes anuales, la ayuda de trescientos millones de dólares está lejos de ser un exceso de generosidad. Desde que estalló la crisis de la deuda, en 1982, América Latina transfirió a los centros más de 210 000 millones de dólares. Solo en 1989, según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], nuestra región remitió a los países industrializados casi 30 000 millones de dólares, es decir, cien veces más que la cifra con la que supuestamente intentan ayudarnos. Por otra parte, si recordamos que la región alberga más de cuatrocientos millones de habitantes resulta que la cooperación contemplada por la "iniciativa" destinaría algo así como unos setenta y cinco centavos de dólar anuales per cápita para erradicar la plaga del atraso y el subdesarrollo, cifra a tal grado ridícula que no hace falta ser un melancólico incurable para dudar de su eficacia y de sus efectos multiplicadores. Por contraposición, las autoridades germano-occidentales decidieron invertir unos 12 500 dólares per cápita en los próximos cinco años para financiar la reconstrucción económica de las cinco provincias de la ex-RDA. No hace falta ser un genio para poder pronosticar quiénes van a estar mejor y quiénes peor a fines de siglo. Por favor, ¡no nos ayuden tanto!

(2 de julio de 1991).

VIII. Notas sueltas

La izquierda y el fin de siglo

Diversos medios de prensa han recogido en las últimas semanas algunas reflexiones conjeturales sobre las perspectivas de la izquierda en nuestro país. Mi propósito era enfrentar con realismo las posibilidades abiertas a las fuerzas interesadas en una transformación profunda de la sociedad actual. También deseaba evitar que la crudeza del diagnóstico tuviese efectos desmoralizadores, que ahondase aún más el desarme ideológico de aquellos a los cuales esta sociedad ha condenado a vivir en la pobreza y el sufrimiento. Por eso quisiera abundar en torno a las razones que me movieron a formular aquellas apreciaciones.

El viejo Engels, ese a quien Marx considerara el hombre más culto de Europa, decía que no había que hacer de nuestra impaciencia un argumento teórico (Hunt, 2011). Si esta recomendación es siempre importante, su utilidad es tanto más pertinente en épocas de reflujo, en tiempos de derrota como los nuestros, cuando la silueta del Palacio de Invierno ni siquiera se dibuja en el horizonte. Pero la cruda advertencia engelsiana no hizo mella en el voluntarismo que se enseñoreó de las diversas fuerzas del campo popular a partir del Cordobazo. Esto revela nuestra inmadurez ideológica y también delata la dosis desmesurada de narcicismo de los personajes empeñados en que la historia apresure su marcha para que coincida con su fugaz paso por este mundo.

A partir de ello conviene interrogarnos sobre las alternativas de la izquierda en la Argentina. Esto supone desmontar el argumento falso y paralizante de que la política que se está haciendo es la única que se puede hacer. La impostura del posibilismo oculta que hay una opción, que fue elegida en lugar de otras y que con esa decisión se decretó quiénes serían los ganadores y quiénes los perdedores. Como de costumbre, *post festum* se procedió a legitimar a la favorita con el argumento del saber tecnocrático.

La convocatoria mortificante del posibilismo reduce la política a una mera fatalidad: ante ella las libertades que tanto dicen cuidar algunas buenas almas democráticas se trastocan en simple resignación. Rota esa trampa, una somera mirada a la escena política argentina, y a su correspondiente trasfondo estructural, revela la magnitud del corrimiento hacia la derecha experimentado a lo largo de estos años de transición democrática. Ocurrió en nuestro país lo que en el Brasil, en Uruguay, en Ecuador y en Bolivia: la reinstauración de la democracia se efectuó adoptando políticas que reforzaron las inequidades existentes, consolidando aún más los privilegios del capital financiero y la burguesía contratista. Estas, actuando de consuno con sus contrapartes metropolitanas, fueron las grandes ganadoras de esta primera etapa de las redemocratizaciones de nuestro continente: la Argentina representa un caso paradigmático en este terreno.

Aquel desplazamiento se expresó en la capitulación de los proyectos reformistas enarbolados en los inicios de la transición y en el auge tardío de un neoliberalismo ya fracasado en los capitalismo avanzados. Pero, en este país, con esta historia y esta memoria, la frustración generada por una etapa en que la inclusión de los hombres como ciudadanos de un Estado democrático era negada por su exclusión económica demora la construcción de una alternativa de izquierda. El desengaño popular ante la insensibilidad económica y social del gobierno carcome implacablemente las posibilidades electorales del radicalismo, pero esto no significa que el peronismo, cualquiera que sea su candidato, vaya a intentar en las durísimas

condiciones actuales lo que no hizo en tiempos más propicios: la transformación profunda del capitalismo argentino. Si despejamos la retórica (un hábito muy recomendable para entender la política argentina) las diferencias entre las propuestas económicas de los partidos mayoritarios se reducen a una insignificancia. Ambos creen que el capitalismo es un régimen esencialmente justo, aun cuando se admita la necesidad de introducir algunos retoques para “humanizarlo”. Sus divergencias se establecen en este plano: el de las pequeñas reformas necesarias para estabilizarlo como sistema. Es por eso que se desviven por coquetear con las fuerzas conservadoras: no hace falta recordar nombres ni revisar antecedentes para constatar esta acelerada derechización.

Ante esto, ¿qué pueden hacer las fuerzas de la izquierda? Primero: revisar y discutir nuestros múltiples errores; preguntarnos por qué no hemos dejado de ser pequeños cenáculos sectarios sin influencia en el seno de las masas. Aquí deberíamos investigar la relación entre el estancamiento práctico y nuestra parálisis teórica, promoviendo una renovación doctrinaria que rompa la clásica dicotomía del liquidacionismo: el realismo resignado y el entrismo nacional-populista. Segundo: revisar críticamente la historia argentina contemporánea, convertida en un laboratorio excepcional, para reconocer nuestros errores e identificar las formas como la burguesía argentina ha consolidado su dominación de clase más allá de los cambios de régimen político. Hemos pasado del populismo al terrorismo de Estado y de allí a la democracia constitucional sin que el bloque dominante haya visto afectada la normalidad de sus negocios. Tercero: es preciso que nuestra izquierda estudie con detenimiento la evolución de la política y la economía mundiales, a fin de combatir un ombliguismo que nos condena a nuevas derrotas. Cuarto: discutir una nueva propuesta para la Argentina de finales de siglo, horrorizada ante los crímenes de la alianza militar-burguesa y fatigada de los desaciertos y las improvisaciones de las fuerzas mayoritarias. Esta propuesta tiene que ser enriquecida por numerosos aportes incompatibles con toda forma de sectarismo; y tiene que hacerse carne en nuestros

compatriotas, narcotizados por un “sentido común” elaborado por una burguesía decadente y propagado por (casi todos) los medios de comunicación de masas. Esto nos permitirá acumular fuerzas, organizarnos, clarificar nuestras propuestas y emerger con una alternativa democrática y socialista en el momento en que las condiciones objetivas la tornen posible.

Nuestra relación con la historia es difícil y compleja: a los argentinos nos cuesta tomar nota de sus lecciones. Algo hemos ido aprendiendo, pero falta todavía despejar viejas ilusiones para que un proyecto democrático y socialista se arraigue firmemente en nuestro suelo. El próximo recambio presidencial desnudará los límites de una falsa opción, lo cual permitirá ponernos en marcha en un plazo relativamente breve y constituirnos en una real alternativa electoral hacia fines de siglo. Y para esto, dada la inmensidad de las tareas que quedan por hacer, no falta casi nada.

(18 de junio de 1988).

Democratizando la izquierda

La autoconvocatoria materializada el pasado sábado en Unione e Benevolenza tuvo una acogida pública que —por su entusiasmo y cantidad— desbordó las previsiones más optimistas. Pese al escepticismo y desencanto que domina nuestra vida política, y del que no escapan las diversas expresiones del progresismo, unas setecientas personas se reunieron para fijar las orientaciones generales que habrán de guiar la constitución de una alternativa unitaria y aglutinadora del complejo archipiélago de la izquierda.

Es indudable que un hecho político como este refleja cristalina-mente la hendidura que divide la “izquierda social” de la “izquierda política”. Mientras la primera crece, porque el ajuste neoconservador pauperiza sin piedad y destruye las ilusiones fomentadas por el peronismo desde el llano, la segunda se debate en la esterilidad de sus cristalizaciones burocráticas o en la impotencia de sellos de goma que carecen de eficacia convocante.

El divorcio entre ambas izquierdas ha tenido un precio muy elevado, no solo para las organizaciones políticas que dicen ser sus representantes sino también para el país. Aquellas fueron condenadas a la irrelevancia electoral, traduciendo muy pobremente en el terreno de la política la real gravitación que la “izquierda social” tiene en la sociedad y la cultura argentinas. La falta de respuesta ciudadana ante propuestas anquilosadas y métodos oligárquicos de

organización y control exacerbó las tendencias fraccionalistas, el divisionismo permanente y la proliferación de organizaciones que pretendían vanamente validarse gracias a la suprema misión histórica que creían estar llamadas a cumplir. Los partidos se transformaron en sectas esotéricas, con códigos propios y lenguajes extraños al sentir cotidiano de la gente, que ni siquiera los miraba o lo hacía con indiferencia. Esas organizaciones hoy se enfrentan a una paradoja decisiva: justo cuando el país necesita más que nunca una real alternativa de izquierda, superadora de los estragos causados por el capitalismo salvaje, sus expresiones políticas tradicionales parecen todavía instaladas en un mundo ficcional, barajando candidaturas a espaldas del pueblo y sin proponer seria y responsablemente un programa de acción política que nos permita enfrentar a la crisis. Ensimismadas, discuten en la cubierta del Titanic sobre minucias mientras el barco se hunde y los pasajeros les piden que hagan algo.

Una oleada democrática conmueve a nuestra época: dictaduras capitalistas se han desplomado por doquier y los socialismos burocráticos, ¡horrenda contradicción!, sucumben arrollados por el impulso participativo. En esta nueva era, en donde el despertar democrático se combina con la persistente crisis del capitalismo, la gente no está dispuesta a convalidar estructuras, propuestas y estilos de hacer política que menoscaben el protagonismo popular: por eso castiga a quienes la desoyen con la indiferencia o el repudio.

El desencuentro de la “izquierda política” con la “izquierda social” ha limitado el rango de alternativas políticas disponibles para la Argentina. Agotados los modelos de recomposición capitalista de inspiración liberal y sepultados definitivamente los sueños de una restauración populista, más pronto que tarde llegará la hora de la izquierda. ¿Estaremos preparados? Si recorremos las páginas de la historia veremos que aquélla algunas veces tomó el poder, pero en otros casos “se lo arrojaron” cuando los representantes de la burguesía asumieron su propia impotencia. La historia desgraciada de la república de Weimar es aleccionadora, y convendría que los argentinos meditásemos muy seriamente sobre sus enseñanzas. La izquierda alemana no

estaba pronta para esa tarea y su fracaso abrió las puertas al ascenso legal de Hitler al poder. Alfonsín tuvo que “resignar” la presidencia antes de tiempo, transfiriéndole el mando a Menem: pero, ¿a quién se lo traspasará este, si es que los cuatro larguísimos años que todavía le quedan demuestran ser intransitables bajo su liderazgo? No a la derecha liberal, porque ella es parte integral e inseparable de este gobierno y se verá arrastrada al abismo con su fracaso. ¿Quiénes quedan? Descartada la alternativa militar, inaceptable —al menos por ahora— para Washington, vemos perfilarse dos fuerzas: por un lado, la reencarnación plebiscitaria del Proceso, y ya se visualizan en ciertas provincias varios pequeños Hitler, cuya popularidad se acrecienta al amparo de la frustración generada por una democracia insensible. Por el otro, una alternativa que articule en un vasto frente político las diversas expresiones del “progresismo”. Tenemos que prepararnos. No habrá futuro democrático para la Argentina si fracasamos en el empeño de construir una alternativa creíble y responsable que nos permita resolver esta crisis. Pero para esto es preciso, antes que nada, democratizar a la propia izquierda. Y hoy ello solo es posible a través de un proceso transparente y participativo de internas abiertas en las que sea la propia izquierda “social” la que decida sobre sus precandidaturas, sin digitaciones ni componendas cupulares. De lo contrario persistirá el divorcio entre las dos izquierdas, la “política” y la “social”, que tanto le ha costado a este país.

(8 de abril de 1991).

Inmoral, ineficaz y peligrosa

La decisión gubernamental de proponer la adopción de la pena de muerte para los narcotraficantes implica una gravísima amenaza para el futuro de la libertad y la democracia en la Argentina. Es de esperar que los gobernantes y los legisladores recapaciten y que, en función de una reflexión más profunda y serena, rectifiquen esa política.

En primer lugar, no creo que sea ocioso señalar que la conciencia moral de la humanidad rechaza una medida de esa naturaleza. Nadie puede invocar la razón, el derecho o los valores cristianos, tan socorridos en estos días, para arrogarse la facultad de quitar la vida al prójimo. Segundo, es preciso insistir en algo que es imposible desconocer: el efecto disuasivo de la pena de muerte ha probado ser por completo irrelevante. La sanción de una legislación de ese tipo en algunos estados de la Unión Americana no detuvo el aumento de la criminalidad. En algunos casos el efecto fue exactamente el contrario. Por lo tanto, la pena de muerte no sirvió para prevenir los delitos vinculados al narcotráfico en los Estados Unidos. Tampoco lo hará en la Argentina. En consecuencia, como política no solo es inmoral, sino que también inefectiva.

Tercero: en un país como este, en donde la vida humana vale tan poco que puede ser tronchada por nimiedades y sin que la sociedad disponga de ningún instrumento eficaz para sancionar a los

responsables, otorgarle al Estado el derecho de disponer de nuestras vidas equivale poco menos que a un suicidio colectivo. Basta con recordar lo ocurrido en Budge —reiterado muchas veces antes y después— para darnos cuenta de que pocos gestos pueden ser más imprudentes y desaconsejables que sancionar la pena de muerte. Si la Argentina tuviese una larga e ininterrumpida historia democrática y de respeto a los derechos humanos y civiles; si nuestra tradición constitucionalista y jurídica fuese fuerte y estuviese avalada por un poder judicial realmente independiente, bien equipado para realizar sus labores y dotado de la suficiente autonomía como para oponerse a los avasallamientos de los otros poderes del Estado, entonces la pena de muerte seguiría siendo inmoral e ineficaz pero al menos no sería tan nociva para el cuerpo político. Pero sabemos que nuestro sistema jurídico no protege adecuadamente los derechos y garantías que la constitución ha establecido para todos los habitantes de este país.

Si se aprobase la pena de muerte es fácil pronosticar que, ante la inevitable intensificación de los antagonismos sociales que ya está comenzando a producir la política de ajuste actualmente en curso, los activistas y líderes sociales de distinto signo comenzarán a aparecer ante los ojos de algunos celosos funcionarios como “contumaces narcotraficantes” para quienes la pena de muerte es un castigo merecido. La irresponsabilidad con que se han manejado estos asuntos en la Argentina es proverbial y se ha reiterado permanentemente a lo largo de nuestra historia. ¿Hará falta recordar acaso el alarmante atropello en que incurrió el gobierno de Alfonsín cuando produjo la captura de los supuestos líderes de los saqueos y que culminaron con la detención, en plena Casa Rosada y ante la prensa internacional, de la dirección del Partido Obrero? ¿O las desprolijidades cometidas por el actual gobierno en ocasión de dar a conocer las listas de los beneficiados con el indulto, en donde se incluían personas que jamás habían estado sometidas a proceso alguno, otras que habían sido sobreseídas y otras que ya habían muerto? Un Estado que es capaz de hacer cosas como estas —que nos humillan ante la opinión pública

mundial— no puede pretender que se le extienda un certificado que lo habilite para disponer de la vida de cualquier ciudadano acusado de ser “narcotraficante”. La Argentina está lentamente tratando de recomponerse luego de un período, el del Proceso, en donde la pena de muerte estuvo de facto vigente. Solo sirvió para enlutarnos y destruirnos como comunidad política. No la queremos nunca más.

(29 de octubre de 1989).

Pensar y cambiar a la Argentina

Lejos de aplacarse, la crisis golpea cada vez con más fuerza. El tiempo pasa, y el duro ajuste anterior queda mágicamente idealizado ante la nueva vuelta de tuerca que impone la fría aplicación del programa neoconservador. El sacrificio ya realizado de nada sirvió, pues la medicina no surtió efecto; pero para el cuerpo enfermo de la República democrática solo existe esa receta. Sus médicos de cabecera, ciegos como todos los dogmáticos, solamente conocen esa fórmula infalible que la está matando: siguen los tarifazos, los impuestazos y las alzas de precios. En su obcecación creen que si todavía la paciente no se ha curado es porque no ha tomado la dosis que prescribe la ortodoxia. Consecuentemente, recomiendan la aplicación de cantidades cada vez más letales.

Los neoconservadores insisten en que esto que estamos haciendo es lo único que se puede hacer. Miren al resto del mundo, nos dicen: ¿No ven qué todos hacen lo mismo? Si nuestros dirigentes se quitaran las anteojeras ideológicas y reflexionaran seriamente sobre el tema verían que las políticas “thatcherianas” o “reaganistas” han fracasado rotundamente; que lejos de resolver los problemas del Reino Unido o los Estados Unidos lo que han hecho fue agravarlos. Más de diez años de escrupulosa aplicación no alcanzaron para que esos dos países pudieran recuperar la competitividad internacional en ciertas ramas “de punta” de la producción industrial, el adelanto tecnológico

o el equilibrio de las variables macroeconómicas. En cambio, en ese lapso Estados Unidos dejó de ser el principal acreedor del sistema financiero internacional para convertirse en el mayor deudor mundial, toda una “hazaña” que habla por sí sola del desacierto insanable de esas políticas. Para colmo, los costos sociales del “ajuste ortodoxo” fueron inmensos: distribución regresiva del ingreso, aumento en el número de pobres absolutos y caída en los niveles generales de educación, salud y alimentación de la población. Al igual que en la Argentina, todo el sacrificio ha sido en vano.

Es preciso abandonar estas políticas suicidas, que nos condenan a la postración y a la disolución nacional. Pero para eso tenemos que contar con algo más que valores superiores a los del egoísmo desenfrenado del mercado; necesitamos también propuestas de reemplazo que sean a la vez concretas y operativas. El gobierno ha reiterado hasta el cansancio que no se apartará de su línea: al igual que su antecesor prefiere que la crisis causada por los ricos —en colusión con el Estado que los representa, naturalmente— la paguen los pobres, a fin de acrecentar el poderío económico y político de los primeros. ¿Por qué no pensar en que, esta vez, sean los ricos quienes paguen el costo de la crisis —habida cuenta de las superganancias que han embolsado durante largos quince años— y se aproveche esta oportunidad para reorientar el rumbo de nuestro desarrollo?

Ante la ausencia de genuinas alternativas políticas de recambio, la izquierda tiene una ocasión propicia para impulsar una discusión profunda y descarnada sobre lo que se puede hacer con la Argentina. Este es el sentido de la autoconvocatoria para “pensar y cambiar las cosas” que un grupo de intelectuales ha fijado para el 8 de septiembre en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, a fin de lanzar un debate sincero e implacable sobre los problemas que afligen a nuestro país y las estrategias para superarlos. Se trata de una iniciativa eminentemente individual —al margen de “aparatos”, “superestructuras” o pretensiones hegemónicas— que nos invita a repensar sin ataduras un país que tanto nos duele. El propósito es someter todo a discusión: la economía, la política, las relaciones internacionales,

la ciencia y la técnica, el arte y la literatura, los medios de comunicación, los problemas sociales de la juventud, la salud, la educación, la vivienda, la justicia, la mujer, las minorías, examinando todo este universo de problemas abiertamente, sin dogmas ni prejuicios, con los ojos abiertos para alumbrar una salida progresista a la crisis actual y demostrar que existen otras soluciones para nuestros males.

Vivimos en el filo de una época histórica. El inminente derrumbe de los mitos neoconservadores hace necesario no solo fijar las nuevas prioridades nacionales —desagregadas por metas parciales y sectoriales— sino también tener la capacidad para diseñar los instrumentos más adecuados para su efectiva conquista e implementación. Si la respuesta a esta convocatoria amplia y pluralista es acogida por la militancia de izquierda y nuestros intelectuales y si de su diálogo comienzan a perfilarse las nuevas propuestas, entonces habremos andado un largo trecho. Es imprescindible librar una batalla contra el cinismo, el desencanto, la melancolía y la desesperación ínsitas en el proyecto neoconservador. No estamos condenados a la decadencia; hay otras salidas. Se trata nada más y nada menos que de construirlas.

(6 de septiembre de 1990).

Bibliografía

A la voz de Aura. (1989, 13 de agosto). *Página/12*, pp. 2 y 3.

Alsogaray, A. (1991, 2 de febrero). Ante un nuevo fracaso. *La Nación*.

Apremiante llamado de la Iglesia a fortalecer el tejido social. (1990, 22 de marzo). *El Cronista Comercial*, p. 5.

Brzezinski, Z. (1998). *El Gran Tablero Mundial*. Buenos Aires: Paidós.

Carlos Menem en continuado. (1990, 18 de mayo). *Página/12*, p. 2.

Con el Pacto Federal se inició la peregrinación hacia la reforma. (1990, 25 de mayo). *Página/12*, p. 2.

De la Torre, R. (1990). *El Trimestre Económico*, 57(227), 3.

Drucker, P. (1986). The changed world economy. *Foreign Affairs*.

El nazi espera a Interpol. (1988, 9 de diciembre). *Página/12*, p. 6.

Entendamos: el país entró en la era de los golpes de mercado en lugar de los antiguos golpes de Estado que hacían los militares. (1989, 15 de diciembre). *Ámbito financiero*, p. 1.

Foucault, M. (1975). *Vigilar y Castigar*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Fukuyama, F. (1989). The end of History? *The National Interest*, (16).

Granovsky, M. y Ciancaglini, S. (1986). *Crónicas del Apocalipsis*. Buenos Aires: Contrapunto.

Hobsbawm, E. (2003). *Años interesantes*. Buenos Aires: Crítica.

- Hunt, T. (2011). *El gentleman comunista*. Buenos Aires: Anagrama.
- Identidad peronista y perestroika. (1989, 27 de junio). *Página/12*, p. 9
- Keynes, J. M. (1926). El fin del *laissez-faire*.
- Keynes, J. M. (1936). *Teoría General de la Ocupación, el interés y el dinero*.
La Nación. (1991, 1 de mayo).
- La reforma del veranito. (1990, 20 de mayo). *Página/12*, p. 3.
- Los que le pintaron la cara a una virgen. (1988, 11 de diciembre). *Página/12*, p. 2.
- Lugones, L. (1924). Discurso de Leopoldo Lugones en el centenario de la batalla de Ayacucho.
- Maquiavelo, N. (1513). *El príncipe*.
- Martínez de Hoz, J. (1991). *Quince años después*. Buenos Aires: Emecé.
- Menem estrenó su diccionario. (1988, 18 de octubre). *Página/12*, p. 4.
- Menem reiteró acusaciones contra su oponente radical. (1989, 7 de abril).
La Nación, p. 15.
- Movilización de apoyo a la reforma estatal (1990, 7 de abril). *La Nación*, p. 1
- Paz, O. (1978). Aclaraciones y reiteraciones. *Revista Proceso*, (61), 20.
Página/12. (1991, 22 de febrero).
- Platón (1986). *La República*. Buenos Aires: EUDEBA.
- Platón (s. f.) *Diálogos*.
- Rousseau (1762). *El contrato social*.
- Lipset, S. (1963). *Basic Books*. [Tesis desarrollada en *The First New Nation*].
- Smith, A. (1776). *La Riqueza de las Naciones* (1776).
- Verbitsky, H. (1991, 6 de enero). Todo un estilo. *Página/12*.
- Versiones sobre un mismo galpón. (1989, 27 de octubre). *Página/12*, p. 8.
- Weber, M. (1919). La Política como vocación.

Este libro recoge los artículos escritos por Atilio Boron para el periódico *Página/12* entre 1988 y 1992. Sus páginas aportan una radiografía viviente de la época y reúnen análisis destinados a revelar distintas facetas de la traumática imposición del capitalismo salvaje en Argentina. Una lectura crítica de ellos servirá no solo para arrojar luz sobre lo ocurrido sino, sobre todo, para extraer lecciones útiles para comprender la dinámica que desatan los proyectos neoliberales y diseñar estrategias y tácticas apropiadas para frustrar su reaparición.